

AÑO:2023

EXPEDIENTE: 17189/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA; ASÍ COMO LA C. MARÍA DEL REFUGIO RAMÍREZ CANIZALES

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

PRESENTE. –

El suscrito Diputado Luis Alberto Susarrey Flores y el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV, y se adicionan las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX y XX al artículo 10 de la Ley Para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Los árboles tienen una amplia variedad de funciones y beneficios. Producen oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, los árboles absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno al aire, requieren una fuente vital de oxígeno para los seres vivos, absorben dióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Al almacenamiento de carbono en su biomasa, los árboles ayudan a reducir los impactos del calentamiento global, refugio adecuado, alimento y sitios de reproducción para una amplia variedad de especies animales y vegetales. Los bosques y los árboles actúan como ecosistemas complejos que albergan una diversidad biológica significativa, las raíces de los árboles ayudan a estabilizar el suelo, previniendo la erosión y la pérdida de

nutrientes, actúan como cortavientos naturales, reducen la erosión causada por el viento, desempeñan un papel crucial en el ciclo del agua, sus raíces absorben agua y ayudan a recargar los acuíferos subterráneos, reduce la escorrentía superficial y la erosión del suelo, mejora la calidad del agua y previniendo inundaciones, proporciona sombra, además de ayudar a regular la temperatura en su entorno.

Es cierto que en algunos casos los árboles pueden dañar las banquetas (aceras) debido al crecimiento de sus raíces. Esto puede ocurrir cuando las raíces se expanden en busca de espacio y, al hacerlo, pueden levantar el pavimento de las banquetas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficios de los árboles superan los posibles problemas que puedan causar en las banquetas. Al plantar árboles adecuadamente y proporcionarles el espacio suficiente para crecer, se pueden minimizar los daños a las infraestructuras urbanas. Es importante que las autoridades municipales y los profesionales encargados del diseño urbano consideren estos aspectos al planificar la plantación de árboles y la construcción de banquetas, con el objetivo de equilibrar los beneficios ambientales de los árboles con la infraestructura urbana adecuada.

Hay que mencionar que es importante que el crecimiento de los árboles dañan la mayoría de las veces las viviendas de los vecinos, al igual que las banquetas, sin embargo, no por ello debemos o podemos cortarlos sin darle un seguimiento, es importante reubicarlos en alguna zona cercana para que pueda seguir creciendo y no afectar su raíz.

Actualmente con las condiciones climáticas extremas, podemos notar que al ubicarnos debajo de un árbol hay una diferencia en la sombra que brinda (obteniendo hasta 13 grados centígrados menos caliente) a comparación de un área donde el sol ilumina de manera directa.

Los árboles purifican el aire, disminuyen las condiciones extremas de calor y con ello mejoran la calidad de vida de las personas, por lo que debemos seguir impulsando su crecimiento y cuidado.

Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma la fracción XIV y XV y se adicionan las fracciones XVI, XVII y XVII para quedar como sigue:

Artículo 10.- Corresponde a los Municipios, a través del Ayuntamiento, o de la unidad administrativa correspondiente:

I – XIII. ...

XIV.- Promover campañas para arborizar las áreas urbanas que carezcan de árboles suficientes para el adecuado equilibrio ecológico de las mismas conforme a los estudios pertinentes;

XV.- Garantizar que las banquetas cuenten con árboles suficientes para mitigar los efectos causados por temperaturas extremas;

XVI.- Reubicar aquellos árboles, cuyas raíces hayan dañado las banquetas o la infraestructura urbana y sustituirlos por especies nativas e idóneas de la región y el espacio;

XVII.- Transparentar proceso de reubicación de los árboles a los ciudadanos;

XVIII.- Promover que cada unidad de vivienda unifamiliar cuente con al menos un árbol;

XIX.- Implementar programas para que los camellones centrales estén arborizados;


XX.- Las demás que conforme a la presente Ley y el Reglamento Municipal les correspondan.

TRANSITORIO

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

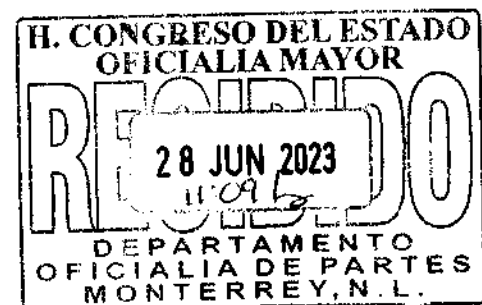
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 28 DE JUNIO DE 2023

ATENTAMENTE


LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
C. DIPUTADO LOCAL


MARIA DEL REFUGIO RAMIREZ
CANIZALES

CIUDADANA



Año: 2023

Expediente: 17195/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN CAPÍTULO XI BIS DENOMINADO "DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS" EL CUAL CONSTA DE LOS ARTÍCULOS 74 BIS 74 TER, 74 QUÁTER Y 74 QUINQUIES, TODOS DE LAS LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO APÍCOLA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): FOMENTO AL CAMPO, ENERGIA Y DESARROLLO RURAL

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
Presente.



La suscrita Diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, perteneciente al Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudo ante esta Soberanía a presentar **Iniciativa de reforma por adición de un capítulo XI Bis denominado "DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS"** el cual consta de los artículos 74 bis, 74 ter, 74 Quáter y 74 Quinquies, todos de la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Nuevo León, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las abejas son uno de los animales con mayor relevancia en el planeta, ya que sin ellas le sería imposible subsistir a la especie humana, derivado de la importante labor que realizan, depende de ellas más de un cuarto de millón de especies de plantas florales además de muchos otros vegetales incluidos árboles frutales y otros cultivos que comemos a diario. Llegaron al Planeta Tierra desde hace más de 60 millones de años, y el consumo de la miel que producen, data desde hace más de 8000 años.¹

Las abejas y otros polinizadores, como las mariposas, los murciélagos y los colibríes, están, cada vez más, amenazados por los efectos de la actividad humana. Están en peligro de extinción casi el 35 % de los polinizadores invertebrados en particular las abejas y las mariposas; y alrededor del 17% de los polinizadores vertebrados como los murciélagos. Disminuyen de manera alarmante debido principalmente a prácticas agrícolas intensivas, cambios en el uso de la tierra, plaguicidas, especies exóticas invasoras, enfermedades, plagas y el cambio climático.²

Las abejas, además, son los animales responsables de la producción de miel, alimento de un considerable valor energético, ya que está se caracteriza por poseer un mayor poder endulzante que la sacarosa y la miel no es un alimento refinado. Cuando se combina con alimentos ricos en proteínas o en grasas ayuda a su digestión y también es beneficiosa en algunos cuadros respiratorios agudos ya que posee efecto antitusígeno y balsámico; Posee propiedades bactericidas, contra el

¹ Cánovas, F. (2005). ¡Más que abejas... compañeras! Eubacteria. No. 15, 9-12. Obtenido de https://www.um.es/eubacteria/eu15/M%C15_QUE_ABEJAS.pdf

² https://www.ecoticias.com/naturaleza/209900_polinizadores-abejas-mariposas-murcielagos-colibríes-biodiversidad

Streptococcus mutans, responsable de la producción de caries, y frente al *Helicobacter pylori* a quien se responsabiliza de producir úlcera gástrica.³

La apicultura tiene gran importancia socioeconómica y ecológica, ya que es considerada como una de las principales actividades pecuarias generadora de divisas y parte fundamental de la economía social. Generalmente esta actividad se asocia únicamente como producción de miel, polen, jalea real y propóleos, sin embargo, las abejas son fundamentales para un equilibrio del ambiente, ya que obtener el alimento de las flores fomenta en las plantas la capacidad de fecundarse.

México se ha consolidado entre los principales productores y exportadores de miel a escala mundial y cuenta con cinco regiones muy definidas: norte, la costa del Pacífico, la del Golfo, la del Altiplano y la sureste. Cada una produce una clase de miel diferente.

Se estima que cerca de setenta y tres por ciento de las especies vegetales cultivadas en el mundo y más del setenta y cinco por ciento de la vegetación mundial son polinizadas por abejas. Entre los cultivos importantes en México que requieren polinizadores están el chile, el tomate y el jitomate, las calabacitas, las ciruelas, los mangos, las manzanas, el café, el cacao para producir chocolate, la vainilla, el almendro, etc. Además, cultivos como la alfalfa, del que depende mucha de la producción de carne, necesitan polinizadores para producir semillas.⁴

La polinización es el proceso por el cual se favorece la reproducción de plantas, así como la producción de frutos y semillas que son indispensables para la regeneración de ecosistemas y que constituyen un alto porcentaje de la alimentación de personas y animales por tal motivo es nuestro deber proteger a los agentes polinizadores ya que tienen el potencial para acabar con el hambre.⁵

Cabe destacar que las abejas son los agentes polinizadores más conocidos, especialmente las abejas melíferas, junto con otras especies son los principales encargados de la polinización cruzada. Siendo éste el proceso de transferencia de polen del estambre de una flor al estigma de otra flor de la misma planta o de otra.

Con la polinización cruzada, las plantas generan el oxígeno suficiente para la vida, y además, aumentan el rendimiento en los cultivos, lo que favorece un incremento en alimentos de origen vegetal, materia prima textil e insumos agropecuarios. En resumen, la apicultura es una de las actividades económicas y sociales más importantes a escala mundial.

³ Fattori, S. B. (2004). La miel: propiedades composición y análisis físico-químico. Buenos Aires: Apimondia. Obtenido de https://www.apiservices.biz/documents/articulos/la_miel_propiedades_composicion_y_analisis_fisico-quimico.pdf

⁴ <https://www.gob.mx/senasica/prensa/promueven-cuidado-de-los-polinizadores-para-proteger-produccion-y-biodiversidad?state=published>

⁵ <https://alimentaods.org/recursos/la-importancia-de-cuidar-a-las-abejas/>

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), estableció que si bien no todas las plantas requieren de los animales para su polinización, de las poco más de 100 especies de cultivos que proporcionan el noventa por ciento del suministro de alimentos para 146 países, 71 son polinizadas por abejas.⁶

En diversos medios de comunicación se ha informado que nuestro país, se situaba como el tercer exportador de miel en todo el mundo, ubicado solamente por debajo de China y Argentina, y al mismo tiempo informó que la miel mexicana se comercializa en Europa, Estados Unidos, Arabia Saudita y Japón, habiendo en el país unos 40 mil apicultores que trabajan 1.9 millones de colmenas, de las cuales 150 mil se utilizan para la polinización de cultivos frutales y agrícolas.

A pesar de la relevancia de las abejas en la producción de la miel y sus derivados y de lo importante que resulta para la humanidad el proceso de polinización que llevan a cabo, y de la derrama económica que supone la actividad apícola, México y el mundo afronta un grave problema ante la reducción alarmante de esta especie.

Así pues, la Organización No Gubernamental Greenpeace, documentó desde el año 2013, que: En Estados Unidos se relacionó la pérdida desde 2006 de entre el 30% y el 40% de las colonias manejadas de abejas melíferas con el “colapso de colonias”, un síndrome caracterizado por la desaparición de abejas.

La disminución en el número de poblaciones y de especies de polinizadores a nivel mundial ha generado una creciente preocupación, ya que al haber menos polinizadores se prevé que las plantas que dependen de estos insectos produzcan menos frutos. Esta disminución de polinizadores, principalmente de las abejas silvestres y de la abeja europea o abeja común (*Apis mellifera*), ha llegado a conocerse como “la crisis de los polinizadores”.

Esta crisis puede ocasionar un grave problema ecológico, ya que disminuye la producción de semillas y esto a su vez ocasiona la reducción de las poblaciones de plantas que dependen de los polinizadores. Asimismo, esta reducción podría tener un efecto drástico en la producción de alimentos.

En Nuevo León rescatar las colonias silvestres de abejas es un oficio casi extinto, así como la población de las productoras de miel, que se reduce cada vez más a causa de la destrucción de su hábitat, sin importar que son de las principales polinizadoras de nuestro ecosistema.

⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (27 de febrero de 2020). Protección a los polinizadores. Obtenido de FAO: <http://www.fao.org/ag/esp/revista/pdf/0512-1.pdf>

Es por los motivos antes mencionados que es primordial que las Unidades de Protección Civil y Bomberos cambien sus protocolos de actuación ante un reporte de una colmena o enjambre en área urbana y conurbada, ya que regularmente este proceso consiste en la destrucción del panal y el exterminio de las abejas, por un protocolo que evite más pérdidas de esta especie, rescatando el enjambre mediante la reubicación y la conservación de las abejas.

En la actualidad tres Estados dentro de sus legislaciones contemplan el cuidado y la preservación de las abejas como son Jalisco, Zacatecas y Guanajuato. En Nuevo León se regula la actividad apícola pero esta normatividad no contempla la protección de la especie, por lo que con base en lo antes mencionado ocurro a promover esta reforma a la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Nuevo León, lo cual puede apreciarse en el siguiente cuadro comparativo:

NO EXISTEN CORRELATIVOS	CAPITULO XI Bis DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS
	<p>Artículo 74 bis.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá signar con Asociaciones Apícolas o Instituciones Educativas convenios de colaboración para elaborar un plan de capacitación para las áreas municipales de protección civil o las dependencias que ejerzan facultades en materia ecológica, con la finalidad de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro de enjambres de abejas de sus respectivas circunscripciones y la importancia de salvaguardar la integridad de este ecosistema.</p> <p>Artículo 74 Ter.- Los Ayuntamientos en sus áreas municipales de protección civil o la dependencia que ejerza facultades en materia ecológica, deberán contar con personal capacitado para el retiro de enjambres, salvaguardando en todo momento la supervivencia de la comunidad de abejas, o en su caso, dar aviso a los apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro de los enjambres y su reubicación.</p>

Artículo 74 Quáter.- Queda prohibida la manipulación inapropiada del enjambre y el uso de técnicas exterminadoras para el retiro de enjambres de abejas, sin que medie un dictamen de la autoridad municipal responsable del manejo de enjambres, en el que se fundamente y motive dicha decisión.

Artículo 74 Quinquies.- Las áreas de protección civil o ecología, deberán realizar campañas de concientización ciudadana acerca del cuidado y preservación de las abejas.

Es necesario que en el Poder Legislativo fomentemos y promovamos el cuidado de esta especie, siendo conscientes del papel tan relevante que tienen, por ello debemos generar acciones que nos permitan conservar y multiplicar esta especie, a fin de lograr, que todo el territorio apicultor cuente con todos los medios y herramientas que permitan impulsar a la especie.

Es por lo anteriormente expuesto que se propone la aprobación del siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO. Se adiciona un **Capítulo XI Bis** denominado “**Del cuidado y retiro de enjambres en Zonas Urbanas y Conurbadas**” de la **Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

CAPITULO XI Bis DEL CUIDADO Y RETIRO DE ENJAMBRES EN ZONAS URBANAS Y CONURBADAS

Artículo 74 bis.- La Secretaría de Desarrollo Agropecuario deberá signar con Asociaciones Apícolas o Instituciones Educativas convenios de colaboración para elaborar un plan de capacitación para las áreas municipales de protección civil o las dependencias que ejerzan facultades en materia ecológica, con la finalidad de instruirlos para el cuidado, preservación y retiro de enjambres de abejas de sus respectivas circunscripciones y la importancia de salvaguardar la integridad de este ecosistema.

Artículo 74 Ter.- Los Ayuntamientos en sus áreas municipales de protección civil o la dependencia que ejerza facultades en materia ecológica, deberán contar con personal capacitado para el retiro de enjambres, salvaguardando en todo momento la supervivencia de la comunidad de abejas, o en su caso, dar aviso a los apicultores o asociaciones apícolas, con la finalidad de apoyar en el retiro de los enjambres y su reubicación.

Artículo 74 Quáter.- Queda prohibida la manipulación inapropiada del enjambre y el uso de técnicas exterminadoras para el retiro de enjambres de abejas, sin que medie un dictamen de la autoridad municipal responsable del manejo de enjambres, en el que se fundamente y motive dicha decisión.

Artículo 74 Quinquies.- Las áreas de protección civil o ecología, deberán realizar campañas de concientización ciudadana acerca del cuidado y preservación de las abejas.

TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación.

MONTERREY NUEVO LEÓN A 29 DE JUNIO DEL AÑO 2023

ATENTAMENTE:



**DIP. JESSICA ELODÍA MARTINEZ MARTINEZ
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been named in the proceedings. The names are listed in alphabetical order of the last name. The names are: [illegible]

Año: 2023

Expediente: 17196/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 6, 7, 8, 25 BIS Y 31 DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

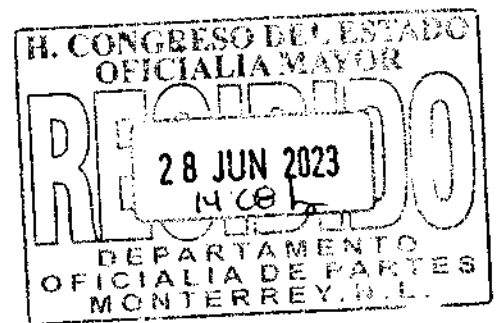
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .



La suscrita Diputada Ana Isabel González González integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 87 y 88, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presenta ante esta Soberanía, Iniciativa con proyecto de Decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), señala que las olas de calor son un fenómeno natural peligroso que cada vez requiere más atención. Esta problemática, se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos 50 años, a causa del cambio climático, por lo que su intensidad y alcance podrían aumentar a corto plazo.

Hoy en día, existen pruebas abrumadoras de que los seres humanos estamos afectando al clima mundial, y destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana.

Algunas de las repercusiones sanitarias del cambio climático se manifiestan ante el aumento de defunciones por olas de calor, variaciones de la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores y alteraciones de la distribución de las afectaciones climatológicas, que van desde alergias, hasta deshidratación, problemas en las glándulas sudoríparas, así como problemas del corazón.

Cabe señalar que uno de los factores principales de las olas de calor, es la deforestación extrema, la cual contribuye al cambio climático y a que los gases de efecto invernadero cada vez estén afectando la salud de las personas, por lo que es urgente que gobierno municipal y estatal pugnen por ciudades más verdes y

reforestadas, pues cada año el fenómeno del niño golpea con ondas de calor cada vez más intensas y se requiere todos los esfuerzos necesarios para poder contrarrestarlos.

Para dimensionar la gravedad de esta situación, cabe mencionar que de acuerdo con algunos estudios realizados por la Universidad de Hawaii (Manoa, EEUU) y publicado en la revista *Nature Climate Change*, actualmente el 30 por ciento de la población mundial está expuesta a sufrir un calor potencialmente mortal durante 20 días al año o más y, de no reducirse las emisiones de CO₂ drásticamente, este riesgo seguirá creciendo.

Actualmente la temperatura superficial media de nuestro planeta ha aumentado 1.8° desde finales del siglo XIX, un cambio provocado principalmente por las emisiones de dióxido de carbono y el incremento de la contaminación.

Si bien las olas de calor no son tan destructivas como otras amenazas naturales, tales como los huracanes e inundaciones repentinas, pueden causar mortalidad y morbilidad que no son evidentes de forma inmediata debido a varias causas, incluida la falta de sistemas de vigilancia para enfermedades crónicas.

Cabe señalar que los impactos negativos de las olas de calor son predecibles y prevenibles a través de acciones de salud pública y de protección al medio ambiente. Por lo tanto, la OPS/OMS insta a los países de la Región de las Américas a:

1. Fortalecer las capacidades del sector salud, mediante el desarrollo de planes de acción contra las olas de calor que incluyan mejoras en los preparativos y la respuesta frente a esta amenaza, y por medio de ello, reducir el exceso de enfermedades, muertes y trastornos sociales ocasionados por las olas de calor; y
2. Fortalecer las capacidades de los servicios meteorológicos para generar proyecciones y predicciones relevantes para el bienestar humano, y para promover una estrecha coordinación entre estos servicios y el sector de

salud, de modo que la información meteorológica sea usada para la toma de decisiones, antes, durante y después de una ola de calor.

Es por ello que las olas de calor son un fenómeno natural peligroso que cada vez requiere más atención, pues el calor excesivo puede causar desde deshidratación, insolación y mareo hasta problemas cardiovasculares y trombosis. Además, que también ejercen mayor presión sobre las infraestructuras de energía, agua y transporte, en este tenor nosotros hemos sido testigos de que las altas temperaturas pueden generar problemas de

Por otro lado, es importante advertir que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que se presentarían en el país altas temperaturas que podrían superar los 40 grados Celsius, debido a un sistema de alta presión atmosférica y especialmente en los estados del norte del país.

Ante este panorama, resulta necesario que la población tome las medidas preventivas como hidratarse y no exponerse al sol durante tiempos prolongados, así como atender avisos y recomendaciones que emitan el SMN y las autoridades del sector salud y protección civil, tanto a nivel nacional, estatal y como municipal.

Pues la salud constituye un derecho fundamental para la protección y bienestar de la población, además de ser uno de los componentes indispensables del capital humano que contribuye a garantizar la calidad de vida de las personas.

Por lo que es necesario que exista un plan para hacer frente a estas problemáticas que se presentan, que abarque tanto la salud como la meteorología ya que este no solo debe incluir la vigilancia meteorológica, con la declaratoria de emergencia por ola de calor, sino también la vigilancia de los signos y síntomas asociados con el calor y la mortalidad debido a los problemas de salud existentes. Es importante determinar conjuntamente los umbrales meteorológicos que activan una alerta o advertencia, así como la duración de la ola de calor según la información local, y las actividades de respuesta.

Es por lo anterior que la respuesta a las olas de calor exige un enfoque integrado, que incluya la elaboración de planes de acción contra el calor con una perspectiva de múltiples amenazas, el fortalecimiento del sistema de alerta temprana, la caracterización de las amenazas, la definición de los procedimientos de activación y desactivación, el refuerzo de la capacidad de salud pública, la coordinación institucional y el fortalecimiento de los servicios de salud.

Por lo que el énfasis que se ponga en la participación y la preparación, de las autoridades locales, con la implicación de todos los sectores, será fundamental para contrarrestar las problemáticas presentadas a raíz de un fenómeno natural como el que actualmente estamos viviendo.

Es por ello que la presente reforma pretende garantizar el que en el Estado al momento en que se emita una declaratoria de alerta climatológicas por olas de calor, se cuente con un plan de contingencia que incluya acciones y medidas para mitigar los efectos a la salud y bienestar de la población, así como la atención y reacción ante apagones eléctricos o falta de agua derivado al calor, ya que actualmente no se contemplan medidas necesarias para la reacción ante dichas problemáticas presentadas, lo que representa un gran riesgo a la salud de los ciudadanos a los que representamos.

Una servidora considera que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y esperar a que la federación resuelva, resulta imperante que tanto el Gobierno Estatal como Municipal, existan planes de contingencia para mitigar las altas temperaturas que se presentan en nuestra entidad.

En este tenor la Ley cambio climático del Estado de Nuevo León contempla un Fondo Estatal, el cual se creó para la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, dicho fondo debe de ser utilizado para situaciones como las que se presentan el día de hoy en nuestro Estado, derivado a las altas temperaturas que se han estado presentando.

Por lo que considero necesario reformar nuestros marcos normativos en materia de cambio climático y dejar establecido que por ley nuestras autoridades competentes trabajen en la elaboración de planes de acción ante una declaratoria alerta climatológicas por olas de calor para hacer frente a las altas temperaturas presentadas en nuestra entidad.

Para ejemplificar mi propuesta me permito plasmar el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Texto Actual	Texto Propuesto
<p>Artículo 6.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las siguientes atribuciones y obligaciones:</p> <p>I a V. ...</p> <p>VI. Las demás atribuciones que le otorgue la presente Ley u otros ordenamientos aplicables en la materia.</p>	<p>Artículo 6.- ...</p> <p>I a V. ...</p> <p>VI. Cuando se presenten altas temperaturas fuera de lo normal en nuestro Estado, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, deberá emitir una declaratoria de emergencia ante olas de calor extremo.</p> <p>VII. Al ser emitida una declaratoria de emergencia ante olas de calor extremo, deberá coordinar en conjunto con los Presidentes Municipales, un plan de contingencia que incluya acciones de prevención y reacción ante problemáticas generadas por dicho fenómeno, el cual deberá incluir al menos lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Habilitar puntos de hidratación en cada uno de los Municipios del Estado, a fin de que las personas cuenten con agua potable en casos de cortes del suministro de agua; b) Abrir espacios públicos de gobierno del Estado, como centros de convenciones, museos, teatros, polivalentes o algún otro espacio para permitir la entrada al público en general

	<p>para que las familias puedan acceder a áreas climatizadas, en caso de apagones de electricidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Información por parte del sector salud para evitar enfermedades derivadas de las altas temperaturas. d) Difundir información respecto a recomendaciones a la exposición ante las altas temperaturas. e) Las demás que consideren necesarias para mitigar los efectos generados ante las olas de calor. <p>VIII. Fortalecer las capacidades del sector salud, mediante el desarrollo de planes de acción contra las olas de calor que incluyan mejoras en los preparativos y la respuesta frente a esta amenaza, y por medio de ello, reducir el exceso de enfermedades, muertes y trastornos sociales ocasionados por las olas de calor.</p> <p>IX. Fortalecer las capacidades de la Secretaría de Medio Ambiente para generar proyecciones y predicciones medio ambientales relevantes para el bienestar humano, para promover una estrecha coordinación entre estos servicios y el sector de salud, de modo que la información meteorológica sea usada para la toma de decisiones, antes, durante y después de una ola de calor.</p> <p>X. Promover la reforestación y arborización en zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado.</p> <p>XI. Las demás atribuciones que le otorgue la presente Ley u otros ordenamientos aplicables en la materia.</p>
<p>Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría, las siguientes atribuciones:</p>	<p>Artículo 7.- ...</p>

<p>I a XXXV ...</p> <p>...</p>	<p>I a XXXV ...</p> <p>...</p> <p>XXXVI. Implementar un sistema de clasificación de calor extremo en todo el estado. Esto incluiría definir como las olas de calor podrían afectar la salud y clasificar datos meteorológicos a fin de que, como las temperaturas máximas y mínimas, así como la duración previsible de las olas de calor extremo.</p> <p>XXXVII. Contemplar dentro del plan estatal de medio ambiente, políticas publicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo.</p> <p>XXXVIII. Genera un diagnostico que permita identificar las zonas prioritarias por Municipio, para aplicar un plan de reforestación y arborización en zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado y dar a conocer dicha información para que los Municipios puedan llevar a cabo un plan de acción en este sentido.</p>
<p>Artículo 8.- Corresponde a los Municipios, las siguientes atribuciones</p> <p>XVII. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.</p>	<p>Artículo 8.- ...</p> <p>XVII. Implementar las acciones establecidas en el plan de contingencia que establezca el Ejecutivo y la Secretaria de Medio Ambiente, ante la declaratoria de calor extremo en la entidad.</p> <p>XVIII. Reforestar y arborizar zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado.</p>

	XIX. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.
<p>Artículo 25 Bis.- El programa deberá de incluir como mínimo:</p> <p>I a V. ...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 25 Bis.- ...</p> <p>I a V. ...</p> <p>VI. Políticas publicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo, así como acciones que prevengan y atiendan impactos negativos ante olas de calor en nuestro estado.</p> <p>...</p>
<p>Artículo 31.- Para determinar cómo se van a asignar los recursos, será el Consejo Técnico el que se encargue con el apoyo de la Secretaría, de elaborar una lista de proyectos prioritarios, y será facultad de la Comisión, de determinar a cuáles de los proyectos enlistados se aplicaran los recursos del Fondo:</p> <p>I a VI. ...</p>	<p>Art. 31.- ...</p> <p>I a VI ...</p> <p>VII. Diseñar e implementar Políticas publicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo, así como acciones que prevengan y atiendan impactos negativos ante olas de calor en nuestro estado.</p>

En virtud de los hechos y razonamientos antes citados, es que presento ante este Pleno el siguiente Proyecto de:

DECRETO

UNICO. - Se reforma por adición de diversas fracciones de los artículos 6, 7, 8, 25 Bis y 31 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 6.- ...

I a V. ...

VI. Cuando se presenten altas temperaturas fuera de lo normal en nuestro Estado, en conjunto con la Dirección de Protección Civil, deberá emitir una declaratoria de emergencia ante olas de calor extremo.

VII. Al ser emitida una declaratoria de emergencia ante olas de calor extremo, deberá coordinar en conjunto con los Presidentes Municipales, un plan de contingencia que incluya acciones de prevención y reacción ante problemáticas generadas por dicho fenómeno, el cual deberá incluir al menos lo siguiente:

- a) Habilitar puntos de hidratación en cada uno de los Municipios del Estado, a fin de que las personas cuenten con agua potable en casos de cortes del suministro de agua;**
- b) Abrir espacios públicos de gobierno del Estado, como centros de convenciones, museos, teatros, polivalentes o algún otro espacio para permitir la entrada al público en general para que las familias puedan acceder a áreas climatizadas, en caso de apagones de electricidad.**
- c) Información por parte del sector salud para evitar enfermedades derivadas de las altas temperaturas.**
- d) Difundir información respecto a recomendaciones a la exposición ante las altas temperaturas.**
- e) Las demás que consideren necesarias para mitigar los efectos generados ante las olas de calor.**

VIII. Fortalecer las capacidades del sector salud, mediante el desarrollo de planes de acción contra las olas de calor que incluyan mejoras en los preparativos y la respuesta frente a esta amenaza, y por medio de ello, reducir el exceso de enfermedades, muertes y trastornos sociales ocasionados por las olas de calor.

IX. Fortalecer las capacidades de la Secretaría de Medio Ambiente para generar proyecciones y predicciones medio ambientales relevantes para el bienestar humano, para promover una estrecha coordinación entre estos servicios y el sector de salud, de modo que la información meteorológica sea usada para la toma de decisiones, antes, durante y después de una ola de calor.

X. Promover la reforestación y arborización en zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado.

XI. Las demás atribuciones que le otorgue la presente Ley u otros ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 7.- ...

I a XXXV ...

...

XXXVI. Implementar un sistema de clasificación de calor extremo en todo el estado. Esto incluiría definir como las olas de calor podrían afectar la salud y clasificar datos meteorológicos a fin de que, como las temperaturas máximas y mínimas, así como la duración previsible de las olas de calor extremo.

XXXVII. Contemplar dentro del plan estatal de medio ambiente, políticas públicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo.

XXXVIII. Genera un diagnostico que permita identificar las zonas prioritarias por Municipio, para aplicar un plan de reforestación y arborización en zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado y dar a conocer dicha información para que los Municipios puedan llevar a cabo un plan de acción en este sentido.

Artículo 8.- ...

XVII. Implementar las acciones establecidas en el plan de contingencia que establezca el Ejecutivo y la Secretaría de Medio Ambiente, ante la declaratoria de calor extremo en la entidad.

XVIII. Reforestar y arborizar zonas prioritarias para el control y mitigación de ondas de calor, presentadas en el Estado.

XIX. Las demás que señale la presente Ley y las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 25 Bis.- ...

I a V. ...

VI. Políticas públicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo, así como acciones que prevengan y atiendan impactos negativos ante olas de calor en nuestro estado.

...

Art. 31.- ...

I a VI ...

VII. Diseñar e implementar Políticas públicas específicas para reducir el impacto de las olas de calor, especialmente en las comunidades vulnerables y las más susceptibles al calor extremo, así como acciones que prevengan y atiendan impactos negativos ante olas de calor en nuestro estado.

TRANSITORIOS:

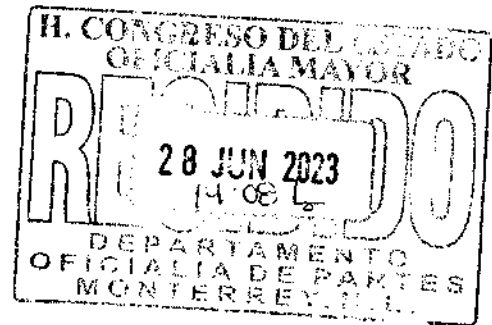
PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO: La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, cada año preverá en el proyecto de Presupuesto de Egresos que envíe el Ejecutivo del Estado a la Legislatura para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, las previsiones necesarias para la operación del Fondo Estatal para el Cambio Climático, con el propósito de llevar a cabo las acciones preventivas o atender oportunamente lo establecido en la Ley de Cambio Climático del Estado de Nuevo León.

Monterrey, NL., a 28 de Junio de 2023

ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ

**DIPUTADA DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL**



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 38, 53 Y 133 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



**DIP. MAURO GUERRA VILLAREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**

La que suscribe **Diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, las **Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor**, **Dip. Norma Edith Benítez Rivera**, **Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, **Dip. Tabita Ortiz Hernández**, **Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas**, **Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras**, **Dip. Eduardo Gaona Domínguez**, **Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez**, **Dip. Roberto Carlos Fariás García** y **Dip. Héctor García García**, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar **PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad pública y el incremento de la violencia en nuestro Estado son preocupaciones constantes que afectan vida cotidiana de la ciudadanía al poner en riesgo el desarrollo y bienestar de la sociedad. Para comprender la magnitud de estas problemáticas, es necesario analizar datos estadísticos y estudios que evidencien los problemas que enfrentamos.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Nuevo León experimentó un incremento en los índices delictivos en los últimos años. Por ejemplo, en el periodo de enero a diciembre del año pasado, se registraron un total de 79,641 delitos del fuero común en el estado. Esta cifra representa un aumento del 8.7% en comparación con el año anterior.

En esta tesitura, uno de los delitos que presentó un alza significativa en Nuevo León es el homicidio doloso. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 se registraron 1,427 homicidios dolosos en el ámbito local, lo que significa un incremento del 13% en comparación con el año anterior. Estas cifras alarmantes reflejan la gravedad de la violencia que azota a la región.

Del mismo modo, diversos estudios académicos respaldan la existencia de una relación entre la inseguridad y diversos factores sociales y económicos. El Observatorio Ciudadano de Seguridad y Convivencia de Nuevo León señala que la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades y la presencia de grupos delincuenciales son factores que contribuyen al incremento de la violencia en la entidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2021 el 80.6% de los habitantes de Nuevo León se sintió inseguro en su ciudad, lo que representa una cifra significativamente alta que demuestra el temor y la desconfianza que prevalecen en la sociedad.

Esta no es la primera vez que la violencia y la alta criminalidad azotan al Estado, una década aproximadamente, que Nuevo León se vio envuelto en una ola creciente de violencia que afectó a todo el país. En respuesta, las autoridades federales optaron por una estrategia de seguridad militarizada que trajo consigo consecuencias significantes como lo son:

1. **Violaciones a los derechos humanos:** Se han documentado numerosos casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar en tareas de seguridad pública. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2006 y 2018 se recibieron más de 3,000 quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México.
2. **Incremento de la violencia:** A pesar de la presencia militar en las calles, los índices de violencia no han disminuido. Estudios como el realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República señalan que la militarización de la seguridad pública no logró reducir la incidencia delictiva ni disminuir los niveles de violencia en el país.
3. **Impunidad:** La participación de militares en tareas de seguridad pública generó un problema de impunidad. Según la organización México Evalúa, menos del 1% de los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares termina en una sentencia condenatoria; lo que da lugar a una falta de rendición de cuentas y perpetúa la impunidad en casos de abusos y violaciones.

4. Ausencia de enfoque preventivo: La estrategia militarizada se ha centra principalmente en la persecución y captura de delincuentes, pero descuida la prevención del delito. Estudios como el Índice de Paz México 2020 del “Instituto para la Economía y la Paz” destacan la importancia de implementar políticas de prevención integral que aborden las causas estructurales de la violencia y promuevan el desarrollo social.
5. Dependencia de las fuerzas armadas: La militarización de la seguridad pública generó una dependencia excesiva de las fuerzas armadas en tareas que deberán ser competencia de instituciones civiles; lo que debilita las capacidades de las policías locales y dificulta la construcción de instituciones de seguridad profesional y confiables.

Lamentablemente, los escenarios antes mencionados representan un efecto de círculo vicioso, pues la ausencia de un enfoque preventivo provoca una dependencia a la presencia de fuerzas armadas como elementos de seguridad; pero en contra parte, incrementan la violencia y afectan los proyectos de inversión en las policías locales.

En esta condición resulta, es fundamental implementar estrategias de seguridad pública efectivas y coordinadas que aborden las causas estructurales de la violencia. Para ellos es necesario fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, dotándolas de recursos humanos, tecnológicos y financieros adecuados. Además, es imprescindible promover la participación ciudadana y generar políticas públicas que fomenten la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social.

La importancia de la construcción de una estrategia de seguridad en Nuevo León, como uno de los estados más importantes de México en términos económicos y demográficos es primordial para continuar en la ruta trazada por el Gobernador Samuel García para el crecimiento exponencial del Estado. No negamos las problemáticas sociales; por el contrario, les hacemos frente, Estamos convencidos que solo reconociendo el incremento en los índices delictivos, y que se está generando una sensación de inseguridad, podemos atender la exigencia de la ciudadanía a una mejoría tangible en las condiciones de seguridad.

Una de las debilidades para cumplir este objetivo, radica en la falta de una estrategia integral que involucre de manera activa a los municipios en la prevención y combate del delito. Los gobiernos locales y municipales cuentan con un conocimiento más

cercano de las necesidades y particularidades de cada comunidad, lo cual les otorga una posición privilegiada para implementar políticas públicas efectivas y promover la participación ciudadana en materia de seguridad.

Por ello es por lo que la presente iniciativa tiene como objetivo principal establecer una estrategia de seguridad pública con enfoque municipal. La idea es fortalecer las capacidades de los municipios para enfrentar la problemática del delito y promover la colaboración interinstitucional.

Para lograrlo, proponemos los siguientes objetivos específicos:

1. Fortalecer la capacidad operativa de las policías municipales: Se busca dotar a los municipios de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios para contar con policías locales eficientes y capacitadas, capaces de prevenir y atender los delitos de manera oportuna;
2. Fomentar la participación ciudadana en la seguridad pública: Es fundamental promover la corresponsabilidad de los ciudadanos en la prevención del delito y fortalecer la confianza entre la comunidad y las autoridades locales. Para ello impulsarán programas de proximidad social y participación ciudadana que promuevan la colaboración activa en la vigilancia y denuncia de actividades ilícitas; y
3. Mejorar la coordinación interinstitucional: Se establecerán mecanismos de coordinación efectiva entre los diferentes niveles de gobierno, promoviendo la colaboración entre autoridades estatales, municipales y federales. Esto permitirá una actuación conjunta y eficiente en la prevención y combate del delito, así como en su investigación y persecución.

En conclusión, los problemas de seguridad pública y el incremento de la violencia en el estado de Nuevo León son una realidad que no podemos ignorar. Los datos estadísticos y estudios reconocidos respaldan esta preocupante situación. En estas condiciones necesario que las autoridades y la sociedad en su conjunto trabajen de manera coordinada para implementar medidas que contribuyan a garantizar la seguridad, la paz y el bienestar de todos los habitantes de Nuevo León. Solo de esta manera podremos construir un estado seguro y próspero para las generaciones presentes y futuras. Por lo antes expuesto someto a la consideración la siguiente

REFORMA A LA Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León que se visualiza siguiente cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 38.- El Consejo de Coordinación tendrá las siguientes atribuciones:	Artículo 38. ...
I. a XIX. ...	I. a XIX. ...
Recorriéndose lo subsecuentes	XX. Coordinar a las autoridades municipales y estatales para discutir y establecer estrategias de prevención, persecución y sanción del delito de manera regional para potencializar los esfuerzos gubernamentales con base en los niveles de incidencia regional. Asimismo, podrá invitar a especialistas, instituciones educativas y miembros en la sociedad civil dedicada a temas de seguridad pública.
XX. Proponer fórmulas para la distribución de los fondos federales, estatales o municipales destinados a la seguridad pública;	XXI. Proponer fórmulas para la distribución de los fondos federales, estatales o municipales destinados a la seguridad pública;
XXI. La celebración de acuerdos y convenios de carácter vinculatorio entre el Estado y los Municipios con el objeto de garantizar la ejecución coordinada de acciones;	XXII. La celebración de acuerdos y convenios de carácter vinculatorio entre el Estado y los Municipios con el objeto de garantizar la ejecución coordinada de acciones;
XXII. Establecer políticas de incentivos salariales y económicos para los agentes de policía estatales y municipales; y	XXIII. Establecer políticas de incentivos salariales y económicos para los agentes de policía estatales y municipales; y
XXIII. Las demás que determinen las Leyes.	XXIV. Las demás que determinen las Leyes.

Artículo 57 Bis 3. La estadística delictiva geográfica tiene como propósito:	Artículo 57 Bis 3...
I. a VI. ...	I. a VI. ...
VII. Focalizar la aplicación de programas de prevención del delito;	VII. Focalizar la aplicación de programas de prevención del delito con base en la incidencia delictiva regional.
VIII. a X. ...	VIII. a X. ...
Sin correlativo	Artículo 64 Bis. La información estadística del Registro será utilizada por los gobiernos estatal y municipal para establecer estrategias de persecución y sanción del delito de manera regional, con el fin de que se puedan potencializar los esfuerzos gubernamentales.
Artículo 133.- La Universidad deberá incorporar en los programas de formación, capacitación, actualización, promoción, desarrollo, especialización y alto mando, para los integrantes de las Instituciones Policiales, los principios de organización y funcionamiento previstos en el Artículo 132 de esta Ley.	Artículo 133.- La Universidad estará a cargo de los planes de formación, capacitación, actualización, promoción, desarrollo, especialización y alto mando para los integrantes de las Instituciones Policiales.
Sin correlativo	Los planes de capacitación se realizarán en observancia de los principios de organización y funcionamiento previstos en el artículo anterior, y deberán cubrir, por lo menos, los siguientes contenidos:
Sin correlativo	I. Funciones de primer respondientes y de proximidad;

Sin correlativo	II. Atención a víctimas y manejo de emociones;
Sin correlativo	III. Recopilar los datos necesarios para las denuncias por la posible Comisión de delitos, para facilitar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos. Para ello deberá de llenar un formato preestablecido en coordinación con los ministerios públicos.
Sin correlativo	IV. Patrullaje y recopilación de información para la construcción de inteligencia policial;
Sin correlativo	V. Generación de programas de combate a los delitos de mayor incidencia, basados en los datos que se recopilen para combatir de manera frontal y especializada el delito por regiones.
Sin correlativo	VI. Justicia Cotidiana y resolución de conflictos.
Sin correlativo	VII. Cadena de custodia y manejo de evidencia;
Sin correlativo	VIII. Recopilación de datos y llenado de los formularios de informe homologado y del Registro Nacional de Detenciones.
Sin correlativo	IX. Disciplina policial;
Sin correlativo	X. Derecho Penal, proceso penal para efectos de su intervención en el mismo, y debido proceso;
Sin correlativo	XI. Tácticas de interrogatorio;
Sin correlativo	XII. Uso de la fuerza y uso correcto del equipamiento; y,
Sin correlativo	XIII. Aquellos que resulten necesarios para el desarrollo legal de sus funciones.

Es por lo aquí expuesto y fundado que sometemos a consideración de esta H. Congreso el siguiente:

DECRETO:

ÚNICO. - Se reforma por modificación el artículo 53 fracción VII y el primer párrafo del artículo 133; y se adiciona una fracción XX al artículo 38, recorriendo los restantes y un segundo párrafo y la fracción I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI al artículo 133; todos de la ley de Seguridad pública para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 133. ...

Los planes de capacitación se realizarán en observancia de los principios de organización y funcionamiento previstos en el artículo anterior, y deberán cubrir, por lo menos, los siguientes contenidos:

- I. Funciones de primer respondientes y de proximidad;
- II. Atención a víctimas y manejo de emociones;
- III. Recopilar los datos necesarios para las denuncias por la posible comisión de delitos, para facilitar el acceso a la justicia de las y los ciudadanos. Para ello deberá de llenar un formato preestablecido en coordinación con los ministerios públicos.
- IV. Patrullaje y recopilación de información para la construcción de inteligencia policial;
- V. Generación de programa de combate a los delitos de mayor incidencia, basados en los datos que se recopilen para combatir de manera frontal y especializada el delito por regiones.
- VI. Justicia Cotidiana y resolución de conflictos.
- VII. Cadena de custodia y manejo de evidencia;

VIII. Recopilación de datos y llenado de los formularios de informe homologado y del Registro Nacional de Detenciones.

IX. Disciplina policial.

X. Derecho Penal, proceso penal para efectos de su intervención en el mismo, y debido proceso;

XI. Tácticas de interrogatorio;

XII. Uso de la fuerza y uso correcto del equipamiento; y,

XIII. Aquellas que resulten necesarias para el desarrollo legal de sus funciones.

Artículo 53 Bis 3...

I. a VI. ...

VII. Focalizar la aplicación de programas de prevención del delito con base en la incidencia delictiva regional.

Artículo 64 Bis. La información estadística del Registro será utilizada por los gobiernos estatal y municipal para establecer estrategias de persecución y sanción del delito de manera regional, de tal suerte que se puedan potencializar los esfuerzos gubernamentales.

Artículo 38. ...

I. a XIX. ...

XX. Coordinar a las autoridades municipales y estatales para discutir y establecer estrategias de prevención, persecución y sanción del delito de manera regional para potencializar los esfuerzos gubernamentales con base en los niveles de incidencia regionales. Asimismo, podrá invitar a especialistas, instituciones educativas y miembros en la sociedad civil dedicada a temas de seguridad pública.

XXI. a XXIV. ...

TRANSITORIOS:

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Los Gobiernos Estatal y Municipal deberán garantizar el presupuesto suficiente para que las instituciones policiales cuenten con el material necesario para cumplir sus funciones.

TERCERO. - El plan de estudios a que se refiere el presente Decreto deberá de ser presentado por parte de la Universidad ante el Consejo Coordinador para garantizar la debida atención a los problemas regionales y comunitarios.

Para la elaboración de dicho plan de estudios, la Universidad contará con 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para su presentación, y un periodo de implementación de un año, estableciéndose revisiones periódicas.

CUARTO. - Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado y aprobado en el paquete fiscal correspondiente. En caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los entes ejecutores, ésta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones al presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes como resultado de la publicación de esta Ley.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Iris Virginia Reyes de la Torre



Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Tabita Ortiz Hernández


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

**Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras**

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 30 BIS 1 Y 36; ASÍ COMO UN CAPÍTULO V BIS A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN AL ESTABLECIMIENTO DE ZONAS DE RECICLAJE Y SEPARACIÓN DE BASURA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Irais Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que reforma por adición de una fracción VII al artículo 30 Bis 1; una fracción IX al artículo 36, así como un Capítulo V Bis a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuevo León es uno de los estados más industrializados de México, y es el cuarto estado con mayores desechos solo considerando la basura de las calles y cuenta con iniciativas de reciclaje y programas de gestión de residuos. Como son:

El Programa de Reciclaje Estatal: El cual tiene como objetivo fomentar la separación de residuos y promover el reciclaje en la región. Este programa busca reducir la cantidad de residuos que se envían a los rellenos sanitarios y promover una cultura de reciclaje en la población.

- **Recolección selectiva:** En algunas áreas de Nuevo León, se implementa la recolección selectiva de residuos. Esto implica que se recogen los materiales reciclables, como papel, cartón, plástico y vidrio, de forma separada de los residuos orgánicos. La recolección selectiva permite facilitar el proceso de reciclaje al separar los materiales que pueden ser reutilizados o transformados en nuevos productos.
- **Plantas de reciclaje:** También existen varias plantas de reciclaje que procesan los materiales reciclables recolectados. Estas plantas se encargan de clasificar, limpiar y procesar los materiales para su posterior venta o reutilización. Algunas de estas plantas se dedican al reciclaje de plásticos, cartón, papel, vidrio y otros materiales.

El reciclaje es una práctica en crecimiento que busca reducir el impacto ambiental de los residuos sólidos y ha ido en aumento a lo largo de los años, pero que no se ha fortalecido a su máximo esplendor.

No debemos olvidar que en 2018, Nuevo León fue la segunda entidad del país con mayor tasa de recuperación de PET, con una capacidad de 50 por ciento, esto conforme a las cifras de ECOCA, una asociación ambiental sin

finés de lucro creada por las empresas refresqueras y el sector alimentario del país. También aplica con otros materiales, tales como el polietileno (garrafón lechero y los envases de suavizantes), cuya tasa oscila en 48 por ciento, el aluminio un 95% en todo el país, y que se traduce en recuperación de energía, materia prima y beneficios ambientales.

Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Nacional de la Industria Química, únicamente el 6% del plástico que se produce, se reutiliza. Durante 2021, las empresas fabricantes de resinas plásticas evitaron que 41 mil 400 toneladas de residuos plásticos se depositaran en rellenos sanitarios, pero solo el 6.3% de su producción es de materia prima reciclable, de hecho, el 94% de las resinas que se hacen al año provienen de plásticos nuevos.

El rápido crecimiento de la población, el desarrollo industrial y el cambio en los patrones de consumo han llevado a un aumento significativo en la generación de residuos, especialmente de plásticos y otros materiales no biodegradables. Esto ha resultado en una presión ambiental considerable, afectando la calidad del aire, el agua y el suelo, así como la salud de los ciudadanos y la vida silvestre.

El reciclaje y la separación de basura son prácticas fundamentales para minimizar los impactos negativos de los residuos en el medio ambiente. Sin embargo, en nuestra entidad, la infraestructura y los programas de reciclaje son insuficientes y no se han implementado de manera efectiva.

Por lo tanto, es necesario realizar las modificaciones legislativas que obliguen y promuevan que el gobierno estatal y municipal establezcan zonas de reciclaje y separación de basura, para poder garantizar diversos beneficios y objetivos que nos favorezcan, pero sobre todo que favorezcan a las futuras generaciones, porque la falta de seguridad hídrica, las altas temperaturas y la contaminación del aire son una combinación que no queremos seguir padeciendo. Por ello debemos fomentar:

1. Protección del medio ambiente: Las zonas de reciclaje y separación de basura permitirán evitar la contaminación del suelo y las fuentes de agua. Además, se podrán recuperar materiales valiosos y recursos naturales.
2. Promoción de la economía circular: La implementación de estos centros generará nuevas oportunidades económicas al impulsar la industria del reciclaje. Esto fomentará una economía circular en la cual los materiales se reciclan y se utilizan nuevamente, reduciendo la dependencia de recursos no renovables.
3. Educación y concienciación ciudadana: La separación de basura en origen y el uso de zonas de reciclaje requieren de la participación activa de la ciudadanía. Esta iniciativa brindará la oportunidad de educar y concienciar a la población sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, creando una cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad.
4. Cumplimiento de normativas internacionales: La implementación de zonas de reciclaje y separación de basura es una medida necesaria para cumplir con los compromisos internacionales en materia de protección ambiental y gestión de residuos sólidos, como los

establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

5. Mejora de la calidad de vida: Un mejor manejo de los residuos contribuirá a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos al reducir los riesgos para la salud y mejorar la estética de los entornos urbanos y naturales.

Por ello, esta iniciativa busca establecer la obligación para el gobierno del estado y los municipios de implementar zonas de reciclaje y separación de basura. La presente propuesta surge de la necesidad imperante de hacer frente al problema creciente de la contaminación que genera la basura, por lo que la implementación de zonas de reciclaje y separación de basura se erige como una necesidad imperante para nuestra entidad, tanto desde una perspectiva ambiental como social y económica.

Desde Movimiento Ciudadano, invitamos a las y los diputados de los demás Grupos Legislativos a asumir el compromiso de construir un futuro más sostenible y responsable con nuestro entorno y las generaciones futuras y resarcir el daño que han creado en Nuevo León por la total ausencia de políticas verdes en años anteriores.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por adición de una fracción VII al artículo 30 Bis 1; una fracción IX al artículo 36, así como un Capítulo V Bis a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 30 Bis 1.- ...

I. a VI. ...

VII. Que establezcan zonas de reciclaje y separación de residuos sólidos.

Artículo 36.- ...

I. a VIII. ...

IX. El señalamiento de terrenos o zonas adecuadas para el establecimiento de zonas de reciclaje y separación de residuos que sean suficientes para atender a los habitantes del municipio.

Capítulo V Bis

Del Establecimiento de Zonas de Reciclaje y Separación de Basura.

Artículo 181 Ter. Las zonas de reciclaje son los puntos destinado a la recepción y clasificación de residuos reciclables de acuerdo con su naturaleza, y así facilitar su tratamiento y reciclaje.

Artículo 181 Ter I. Para la creación de dichas zonas, se podrán celebrar convenios de coordinación con el sector privado, así como establecer las zonas y permisos correspondientes, y la posibilidad de suscribir acuerdos y políticas de reciclaje con el sector privado.

Artículo 181 Ter II. Serán obligaciones de los gobiernos municipales:

- I. Deberán establecer por lo menos una zona de reciclaje en cada municipio.**
- II. Promover la separación de basura en origen, implementando programas de educación y concienciación ciudadana.**
- III. Establecer las zonas de recepción selectiva de residuos en lugares estratégicos como centros comerciales, escuelas y espacios públicos, facilitando así la separación adecuada por parte de los ciudadanos.**

Artículo 181 Ter III. Son obligaciones del Gobierno del Estado:

- I. Coordinar la política de reciclaje y separación de residuos.**
- II. Proporcionar el apoyo técnico y financiero a los municipios para la implementación y operación de zonas de reciclaje.**
- III. Establecer los parámetros de evaluación y seguimiento al cumplimiento así como los beneficios que las zonas de reciclaje representan para el medio ambiente.**
- IV. Elaborar informes periódicos sobre el progreso y los resultados obtenidos en materia de reciclaje y separación de basura. Y**

V. Asegurar la recolección periódica de los residuos separados en las zonas de recolección y su posterior envío a los centros de reciclaje para su procesamiento y transformación.

TRANSITORIOS

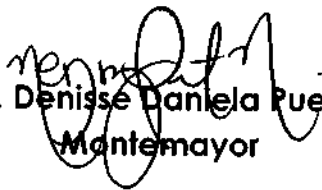
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales de manera coordinada deberán establecer, dentro del plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor de este Decreto, al menos una zona de reciclaje en cada municipio.

TERCERO. El Gobierno Estatal, a través de la Secretaría del Medio Ambiente deberá expedir los lineamientos necesarios para el funcionamiento y operación de las zonas de reciclaje, así como para establecer los requisitos de obtención, actualización y evaluación de las concesiones correspondientes.

CUARTO. Las erogaciones en que se incurra por la implementación de lo previsto en el presente Decreto correrán a costa de la disponibilidad presupuestal asignado a las autoridades responsables.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 03 de julio de 2023


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Héctor García García
Contreras

Dip. María Del Consuelo Gálvez

Dip. Roberto Carlos Farias García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma por adición de una fracción VII al artículo 30 Bis 1; una fracción IX al artículo 36, así como un Capítulo V Bis a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León.



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. PEDRO MORENO ALDAY

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE REFORME EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA DEJAR ESTABLECIDO QUE EL VOTO DEJE SER SECRETO.

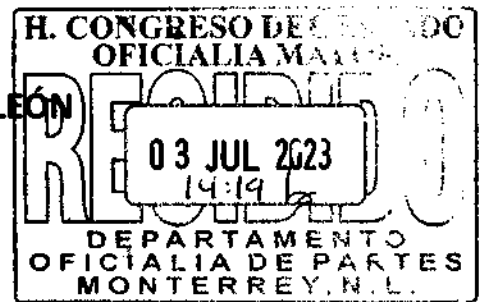
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGESIMA LEGISLATURA LXXVI.
PRESENTE.-



Pedro Moreno Alday [REDACTED]

[REDACTED] Ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito solicito se REFORME el artículo 4 en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León y se quede establecido que el voto deja de ser SECRETO. Lo anterior para el efecto de que al conteo de los votos se pueda comprobar que no se altero el voto del ciudadano.

Se mande atento oficio a la Comisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, para que recabe la firma y nombre completo de los votantes en el sufragio del voto para que el mismo tenga validez ante los Tribunales del Electorales del Estado.

Además de que se impida a los partidos políticos la postulación de miembros del gabinete de gobierno en turno de participar de nuevo como candidatos para alcaldías, síndicos, regidores y diputados locales. Ya que peligra nuestro sistema democrático y restringe la participación ciudadana a cargos de elección popular.

Lo anterior con fundamento en el artículo 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Monterrey, Nuevo León a 3 de julio de 2023.

[REDACTED]
Lic. Pedro Moreno Alday. [REDACTED]

C.C.P. Comisión de Puntos Constitucionales.

C.C.P. Presidente de Pleno del Congreso.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGESIMA LEGISLATURA LXXVI.
PRESENTE.-



Pedro Moreno Alday, [REDACTED]

[REDACTED] Ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito solicito se REFORME el artículo 4 en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León y se quede establecido que el voto deja de ser SECRETO. Lo anterior para el efecto de que al conteo de los votos se pueda comprobar que no se altero el voto del ciudadano.

Se mande atento oficio a la Comisión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, para que recabe la firma y nombre completo de los votantes en el sufragio del voto para que el mismo tenga validez ante los Tribunales del Electorales del Estado.

Además de que se impida a los partidos políticos la postulación de miembros del gabinete de gobierno en turno de participar de nuevo como candidatos para alcaldías, síndicos, regidores y diputados locales. Ya que peligra nuestro sistema democrático y restringe la participación ciudadana a cargos de elección popular.

Lo anterior con fundamento en el artículo 1 y 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Monterrey, Nuevo León a 3 de julio de 2023.

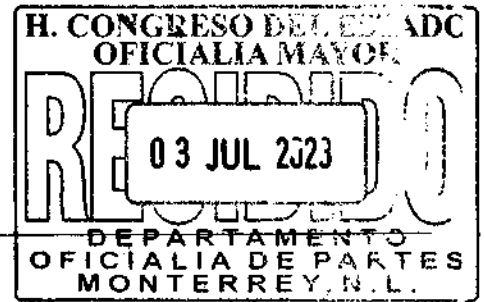
[REDACTED]
Lic. Pedro Moreno Alday. [REDACTED]

C.C.P. Comisión de Puntos Constitucionales.

C.C.P. Presidente de Pleno del Congreso



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☐

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: Núm. Ext. Núm. Int.

Colonia: Municipio

Teléfono(s): Estado: C.P.

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

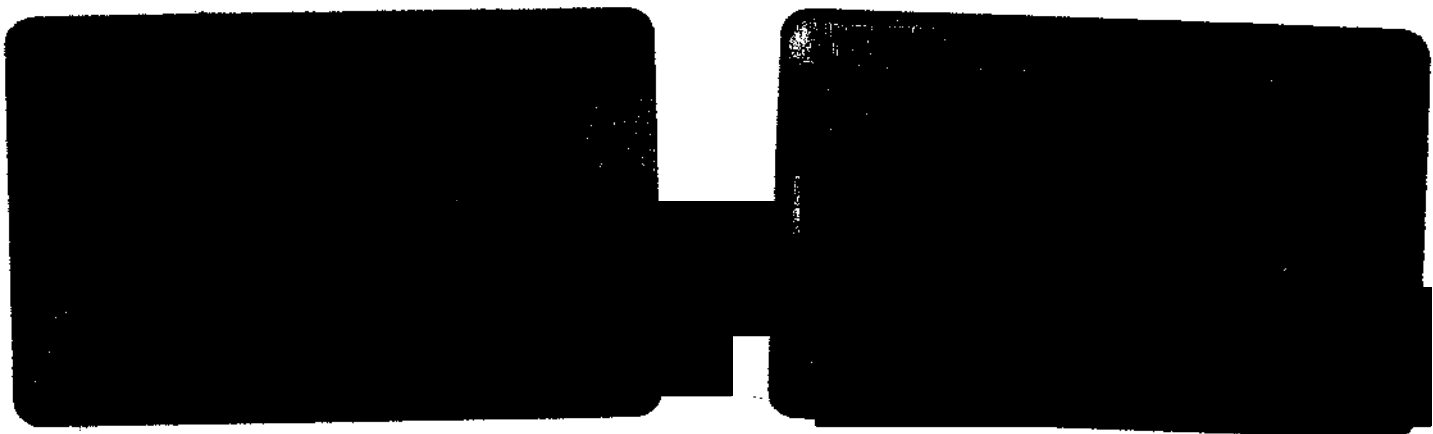
Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo:

Pedro Moreno Aiday

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO



H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
03 JUL 2023
14:19
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE CONTEMPLAR UNA EXCEPCIÓN DEL EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

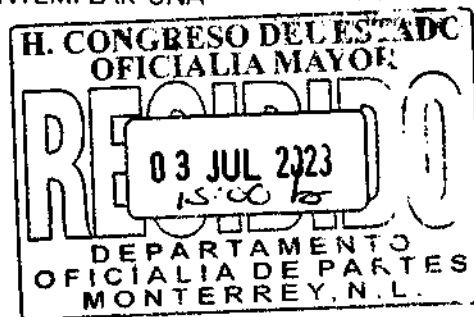
SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE CONTEMPLAR UNA EXCEPCIÓN DEL EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA.

De acuerdo con el artículo 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, presentamos de nueva cuenta la presente iniciativa para su estudio, análisis y dictamen, misma que fue dada de baja sin el estudio correspondiente con fundamento en el artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, dentro del expediente 15434/LXXVI.

Continuando, la iniciativa se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de género sigue siendo una realidad en todas las latitudes del planeta. En América Latina, no es la excepción y tiene algunas de las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres en 2020, 4.7 por cada 100.000 mujeres en

Honduras, 2.4 en República Dominicana y 2.1 El Salvador ¹ en México, para el año 2021, el número de feminicidios ascendió a 871 casos². Para ese mismo año, de acuerdo con datos del INEGI, 20% de mujeres de 18 años o más reportó sentirse insegura en casa y del total de las defunciones por homicidio de mujeres, 23.2% ocurrieron dentro del hogar.³

Ante la violencia estructural que enfrentan las mujeres, una situación recurrente son los encarcelamientos y con sentencias excesivas para ellas por haber actuado en defensa propia ante un ataque. Al respecto, los marcos jurídicos internacionales y la normativa nacional han ajustado sus recomendaciones y prácticas para juzgar a las mujeres que hieran o acaben con la vida de su agresor, bajo una perspectiva de género. Asimismo, las organizaciones gubernamentales nacionales han destacado la importancia de incorporar la perspectiva de género en todo momento del proceso penal.

En este sentido, los contingentes de mujeres han exigido en marchas que la legítima defensa sea tomada en cuenta en casos de agresiones; piden no ser castigadas por defenderse: "*Mi único delito fue defenderme del hombre que me violó*". Muchas feministas abogan en favor de la legítima defensa en México en donde diariamente se cometen al menos dos feminicidios. El caso de Yakiri Rubí Rubio, sentó un precedente en Derechos Humanos para incluir en su defensa una perspectiva de género, pues se le acusaba de homicidio doloso al haberse defendido en un secuestro y violación.⁴

En el ámbito internacional, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, también conocida como la Convención de Belem do Para, afirma que la violencia contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos y que limita de forma parcial o total, el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos para las mujeres.; define la violencia como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

¹ <https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio>

² https://drive.google.com/file/d/1vHc8nNLMAKSKSsgBBbG_gid0vRvZLEoC/view

³ https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_Elimviolmujer21.pdf

⁴ <https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2014/02/yakiri.pdf>

El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (MESECVI), también conocido como el CEVI, es el órgano técnico del Mecanismo y es por ello responsable del análisis y evaluación del proceso de implementación de la Convención en los Estados Parte. En el ejercicio de estas funciones, el CEVI ha reconocido que la violencia contra las mujeres en la región continúa siendo una realidad. Esto es particularmente visible en lo que respecta al feminicidio y especialmente, aunque no exclusivamente, a la violencia cometida por parejas o exparejas sentimentales en contra de las mujeres.

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido enfática en que las mujeres que sufren violencia doméstica y enfrentan cargos penales por haber agredido a sus agresores deben ser juzgadas con perspectiva de género. "Esta nueva forma de concebir el derecho fue incorporada al ámbito jurisdiccional nacional a través de las sentencias de la SCJN pues la perspectiva de género como una forma de garantizar a las personas, especialmente a las mujeres y niñas, el acceso a la justicia de manera efectiva e igualitaria"⁵

Para ello, la SCJN justifica la introducción del enfoque reconociendo que el género produce impactos diferenciados en la vida de las personas que deben ser tomados en consideración:

*"al momento de apreciar los hechos, valorar las pruebas e interpretar y aplicar las normas jurídicas, pues sólo así podrían remediarse los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas, principalmente de las mujeres, niñas y minorías sexuales."*⁶

Por su parte la Convención de Belem do Para, menciona en el artículo 4, el derecho de las mujeres a que se respete su vida, su integridad física, psíquica y moral, así como su derecho a la "*igualdad de protección ante de la ley y de la ley*". Asimismo,

⁵ <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf>

⁶ *ídem*

en su artículo 7 menciona la obligación de los Estados Parte de tomar todas las medidas necesarias para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra la mujer, así como la obligación de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contras las mujeres. Asimismo, en repetidas ocasiones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha delineado la obligación de análisis de pruebas con perspectiva de género.⁷

El CEVI enfatiza que la legítima defensa supone una reacción a una agresión ilegítima que ponga en riesgo un bien jurídico protegido, como son la vida y la integridad personal. Asimismo, el CEVI, analiza las obligaciones internacionales de los Estados Parte para asegurar el acceso de las mujeres a la argumentación de la legítima defensa en aquellos casos en los que, como respuesta a la situación de violencia vivida, hayan incurrido en dicha conducta. Para ello, primeramente, se analizarán los requisitos para la configuración de legítima defensa de acuerdo a la teoría del derecho penal, desde el derecho comparado, tomando en cuenta resoluciones emitidas por tribunales nacionales en la región, así como a la luz de los estándares de la Convención. También bajo esta perspectiva, deberá hacerse énfasis en la valoración de la prueba con perspectiva de género.

Sostener que el comportamiento de la mujer es el que origina la agresión ilegítima desnaturaliza la legítima defensa y refuerza estereotipos negativos de género, e ignora el prólogo de la Convención que menciona como la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres, así como *"una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres"*, por lo que no es provocada bajo ninguna circunstancia⁸.

Con el fin de evitar la aplicación de estereotipos de género dañinos para las mujeres y que perpetúan la subordinación de estas. La comprensión de la violencia de género como estructural y por la cual las mujeres no deben ser responsabilizadas bajo ninguna circunstancia, permite el juzgamiento con perspectiva de género en estos casos y por lo tanto, el acceso a la justicia para las mujeres.⁹

⁷ <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html>

⁸ Ídem

⁹ <https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/RecomendacionLegitimaDefensa-ES.pdf>

En términos de la doctrina de la legítima defensa, se codificó en el primer Código Penal de Canadá (1892), incluyendo una serie de disposiciones, como el uso proporcional de la fuerza para defenderse de un ataque repentino e ilegal. Sin embargo, fue hasta 2013 que se introdujeron un número de factores contextuales importantes con el fin de guiar al jurado y a los jueces a aplicar la doctrina de la legítima defensa.

La Sección 34 (1) del Código Penal canadiense dispone actualmente que:

"34 (1) Una persona no es culpable de un delito si (a) cree en base a fundamentos razonables que una fuerza está siendo empleada en su contra o en contra de otra persona o que una amenaza de uso de fuerza está siendo hecha en su contra o en contra de otra persona; (b) el acto que constituye el delito es cometido con el objetivo de defenderse o protegerse a sí mismos u otra persona de ese uso o amenaza de uso de la fuerza en su contra; (c) el acto cometido es razonable dadas las circunstancias.

Factores

(2) En la determinación de si el acto cometido es razonable en las circunstancias, la corte deberá considerar las circunstancias relevantes de la persona, las otras partes y del acto, incluyendo, pero no limitándose a los siguientes factores:

(a) la naturaleza de la fuerza o amenaza; (b) la medida en la que el uso de la fuerza era inminente y si había otros medios disponibles para responder al posible uso de la fuerza; (c) el rol de la persona en el incidente; (d) si alguna de las partes del incidente usó o amenazó con usar un arma; (e) la talla, edad, género y capacidades físicas de las partes en el incidente; (f) la naturaleza, duración e historia de algún tipo de relación entre las partes del incidente, incluyendo el previo uso de fuerza o amenaza de uso de fuerza y la naturaleza de la fuerza o amenaza; (f.1) cualquier historia de interacción o comunicación entre las partes del incidente; (g) la naturaleza y proporcionalidad de la respuesta de la persona al uso de la fuerza o a la amenaza del uso de la fuerza; (h) si el acto cometido fue en respuesta al uso o amenaza de uso de fuerza que la persona sabía que era lícito; No procedencia de la defensa (3) La subsección (1) no se aplica si la fuerza es usada o es amenazada por otra persona con el propósito de hacer algo que la ley requiere o autoriza a hacer

en la administración o en la aplicación de la ley, a menos que la persona que cometa el acto que constituye el delito cree en base a fundamentos razonables que la otra persona está actuando ilegalmente.”

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una Jurisprudencia relacionada a la legítima defensa:

“LEGÍTIMA DEFENSA. INEVITABILIDAD DE LA AGRESIÓN.

Doctrinalmente se ha establecido que para que la excluyente de legítima defensa pueda surtir efectos es menester que concurren, entre otros requisitos, el inherente a que la agresión, además de ilegítima y actual, debe ser inevitable.”¹⁰

En este mismo tenor, también toma relevancia el siguiente criterio de la SCJN, en los siguientes términos:

“LEGÍTIMA DEFENSA CONTRA EL EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA.

En contraste a la legítima defensa, el exceso en la misma es antijurídico; y aún cuando la legítima defensa no puede darse contra la legítima defensa, se reconoce en cambio, frente al exceso en la legítima defensa. Sólo cuando el autor se ha excedido en los límites de la legítima defensa, en estado de perturbación, miedo o terror, reconoce la ley el efecto como causa, de que la acción no se considere ya como expresión jurídicamente desaprobada de la personalidad del que actúa. Así es punible el llamado exceso extensivo, “pretexto de legítima defensa, esto es, una lesión en estado de perturbación, miedo o terror cuando objetivamente no existe, o no existe ya una situación de legítima defensa”, como ocurre en el caso de la lesión causada al que huye después de consumado el ataque. Ahora bien, conforme a la legislación mexicana, se considera que hay exceso en la defensa y el mal que se causa, se convierte

¹⁰<https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/202313>

*en delito de culpa, para los efectos de la penalidad aplicable:
1o. Cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa; y 2o.*

Cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa. Dicho exceso es grave o leve, y para calificarlo deberá tomarse en consideración, no sólo el hecho material, sino también el grado de agitación y de sobresalto del agredido; la hora, sitio y lugar de la agresión; la edad, sexo, constitución física y demás circunstancias del agresor y del agredido; el número de los que atacaron y de los que se defendieron, y las armas empleadas en el ataque y en la defensa. Esto no quiere decir, que por el hecho de que el homicidio perpetrado en exceso en la legítima defensa deba punirse con arreglo a la penalidad que corresponde al delito por imprudencia, que el homicidio habido participe de los elementos del delito culposos, sino sólo que el legislador hizo reenvío a éste, sólo por la levedad de la pena. El exceso en la defensa, puede ser excusable o culpable. El que se ha excedido de los límites impuestos por la ley, o por la necesidad, es responsable del hecho con la disminución establecida en la legislación positiva. El exceso doloso o culpable, descarta la defensa legítima, y el hecho debe reputarse como intencional y no como de culpa. El exceso excusable, comprende el cálculo negligente, la imprudencia, etcétera. El exceso doloso comprende la venganza, la ira. Así para considerarse la defensa como delito de culpa y estimarse si hubo o no necesidad racional del medio empleado, debe atenderse el estado de ánimo del agente por consideraciones de psicología social y psicología individual; es necesario que se ejecute el hecho seguido de un acto de provocación, y que la provocación sea injusta."¹¹

¹¹ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/293243>

Por todo lo anterior, consideramos llevar a cabo la presente propuesta con la finalidad de modificar el artículo 20 del Código Penal del Estado, para contemplar un caso de excepción en el exceso de la legítima defensa, en el supuesto que la mujer sea víctima y al momento de repeler la agresión, se encuentre en un estado de terror, miedo, confusión y con esto se afecte su capacidad de respuesta, llegando a una racionalidad de los métodos empleados, evitando así sea acusada de cualquier tipo de delito. En esta tesitura se propone que se fortalezca la figura de la legítima defensa con un enfoque pro víctima y con perspectiva de género.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se Adiciona un segundo párrafo al Artículo 20 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:


ARTICULO 20.- ...


EN EL CASO QUE LA MUJER SEA VÍCTIMA DE VIOLENCIA Y AL MOMENTO DE REPELER LA AGRESIÓN, SE ENCUENTRE EN UN ESTADO DE TERROR, MIEDO, CONFUSIÓN, EL CUAL LLEGUE A AFECTAR SU CAPACIDAD DE RESPUESTA, SIN PODER DETERMINAR UN LIMITE PROPORCIONAL O UNA CORRECTA RACIONALIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS, NO SE CONSIDERARÁ EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA.

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 03 días del mes de Julio de 2023.


Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 20 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON EL OBJETO DE
CONTEMPLAR UNA EXCEPCIÓN DEL EXCESO EN LA LEGÍTIMA DEFENSA.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

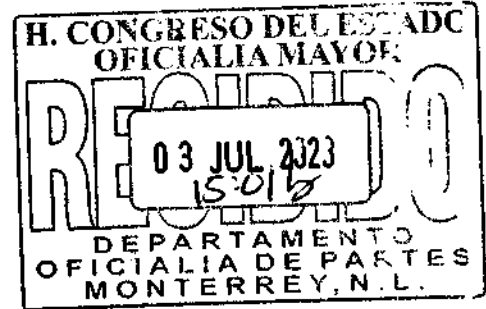
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): INFRAESTRUCUTRA Y DESARROLLO URBANO

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los problemas al que nos enfrentamos a nivel mundial es el deterioro del medio ambiente y el cambio climático, entre los retos principales que existen para lograr el desarrollo sostenible de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas es el proteger los recursos naturales y buscar mejores procesos en

la construcción e industrialización en lugares como la zona metropolitana de Monterrey.¹

Si bien es cierto que, la industria de la construcción es un sector que genera alrededor del 12.3% del valor de producción en nuestro estado, también lo es que estas actividades son uno de los mayores factores de contaminantes ambientales.²

Se estima que a nivel mundial la industria de la construcción es uno de los sectores que aportan más residuos y contaminantes, según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el 50% de las emisiones contaminantes en el mundo son atribuibles a esta actividad.³

El sector de la industria de la construcción en nuestro estado ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, en lo que va de este 2023 el crecimiento ha sido del 17% comparado con el anterior, además, se prevé que, con la llegada de nuevas inversiones al estado, el crecimiento tanto de obras privadas como públicas aumentarán hasta un 30%.⁴

Con base en lo anterior, consideramos que es necesario buscar mejoras en las técnicas aplicables para el manejo de residuos y materiales reutilizables en la

¹ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>

² https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/enec/enec2023_04.pdf

³ <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2011/CD000933.pdf>

⁴ <https://www.elhorizonte.mx/finanzas/construccion-en-nuevo-leon-extiende-buena-racha-y-asciende/v/1469910>

industria de la construcción con la finalidad de garantizar y proteger el derecho humano al medio ambiente a la par del crecimiento industrial, demográfico y poblacional de nuestro estado.

En países como el Reino Unido, Bélgica, Austria, Holanda y Alemania la normatividad respecto a los residuos de construcción ha resultado en el mejoramiento de procesos y reutilización de productos reciclados; en estos países se utiliza concreto reciclado para construcciones de obra pública, como ejemplo de ello podemos mencionar la construcción de los recintos para los juegos olímpicos de Londres de 2012 en donde también se aplicaron técnicas de recuperación de desperdicios de construcción.⁵

Otro ejemplo de reciclaje en la industria de la construcción lo tenemos en los Países Bajos en donde existe una planta de reciclaje de residuos de demolición de materiales como el poliestireno expandido que es un material que se usa como aislante en edificios, esta planta es capaz de reciclar 3.300 toneladas al año de residuos de demolición de poliestireno procedentes de la construcción reduciendo con ello gran porcentaje de impacto ambiental en nuevas edificaciones.⁶

En el mismo sentido, se ha demostrado que una vez demolidos los materiales de construcciones viejas o en desuso estos pueden ser utilizados nuevamente para

⁵ <https://expansion.mx/mundo/2010/02/18/eu-japon-y-europa-reciclan-los-desperdicios-del-concreto#:~:text=En%20Estados%20Unidos%2C%20Alemania%2C%20Australia,recuperaci%20de%20desperdicios%20de%20construcci%20n.>

⁶ <https://www.interempresas.net/Plastico/Articulos/354182-Inaugurada-Paises-Bajos-innovadora-planta-reciclar-residuos-demolicion-poliestireno.html>

realizar bases hidráulicas, calles y carreteras. Estos materiales reciclados pueden implementarse para rellenar cimentaciones, utilizarlos para base en banquetas y en cualquier obra de infraestructura de obra pública, especialistas mencionan que plantas en Suiza y Francia utilizan estos residuos que se encuentran procesados dentro del concreto.⁷

Para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano reconocido en el artículo 4 de nuestra Constitución Política y cumplir con las responsabilidades jurídicas que se derivan de los tratados internacionales y convenios en la materia, es necesario que sigamos implementando las vías adecuadas para tener un desarrollo sostenible cumpliendo con los criterios del derecho ambiental.

En materia de medio ambiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se debe considerar y reconocer el principio de prevención del medio ambiente en los marcos normativos de obras públicas tal como se expresa en la siguiente jurisprudencia:

***“PRINCIPIO DE PREVENCIÓN EN MATERIA AMBIENTAL. SU RELACIÓN
Y ALCANCE CON EL DEBER DE CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
REGULADO POR EL MARCO NORMATIVO CONVENCIONAL DE LA
MATERIA.***

⁷ <https://obras.expansion.mx/construccion/2023/04/20/construccion-sustentable-asi-se-trabajan-los-residuos-de-las-obras#:~:text=Los%20residuos%20que%20pueden%20surgir,son%20tierra%2C%20rocas%20y%20piedras.>

Hechos: Dos personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron diversos actos y omisiones destinadas a autorizar y realizar el proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz, aduciendo que las autoridades responsables no garantizaron el derecho humano a un medio ambiente sano, pues no evaluaron de manera integral diferentes aspectos relacionados con el impacto ambiental que podría ocasionar el desarrollo de dicho proyecto y su modificación en el Área Natural Protegida con carácter de Parque Marino Nacional denominado "Sistema Arrecifal Veracruzano". El Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al considerar que las quejas no tenían interés legítimo, en contra de esta resolución se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la definición y el entendimiento del principio de prevención en materia ambiental en relación con el deber de cuidar el medio ambiente regulado por el marco normativo convencional, permite una adecuada protección al medio ambiente, pues tiene como finalidad evitar que se causen daños al mismo.

Justificación: El principio de prevención se define como el conjunto de medidas destinadas a evitar que el daño ambiental se verifique. De ahí que entre este principio y el deber de cuidar el medio ambiente, se advierte un punto de conexión y una relación estrecha, por lo que se considera que la prevención es el fundamento de tres de las concreciones prácticas que originan el deber de cuidar el medio ambiente: a) contar con un sistema de evaluación de impacto ambiental y el deber de someter a éste los proyectos que ocasionan efectos significativamente adversos contra el medio ambiente; b) crear normas de calidad y emisión ambientales y el deber de respetarlas; y, c) contar con un régimen de responsabilidad ambiental y de sancionar las conductas que atenten contra él, así como de perseguir la reparación del entorno en los



causantes de daños, y su respectivo correlativo de soportar las sanciones y el deber de reparar el daño causado. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, toda vez que frecuentemente no es posible restaurar la situación existente antes de la ocurrencia de un daño ambiental, la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente. Por ello, se ha pronunciado en torno al ámbito de aplicación de la obligación de prevención, en el sentido de que si bien el principio de prevención se consagró en materia ambiental en el marco de las relaciones interestatales, lo cierto es que atendiendo a la similitud de sus obligaciones con el deber general de prevenir violaciones de derechos humanos, la obligación de prevención se aplica para daños que puedan ocurrir dentro o fuera del territorio del Estado de origen. En cuanto al tipo de daño que se debe prevenir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben tomar medidas para prevenir el daño significativo al medio ambiente y que su existencia debe determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. Asimismo, ha considerado que la obligación de prevención en derecho ambiental significa que los Estados están obligados a usar todos los medios a su alcance con el fin de evitar que las actividades que se lleven a cabo bajo su jurisdicción, causen daños significativos al medio ambiente. Además de que no se pueden detallar todas las medidas a adoptar para cumplir con la obligación de prevención; sin embargo, se han precisado ciertas obligaciones mínimas que los Estados deben adoptar para prevenir violaciones de los derechos humanos como consecuencia de daños ambientales, dentro de las cuales se encuentran los deberes de: 1) regular; 2) supervisar y fiscalizar; 3) requerir y aprobar estudios de impacto ambiental; 4) establecer un plan de contingencia; y 5) mitigar en casos de ocurrencia de daño ambiental.”⁸

⁸ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2024395>

De esta tesis se destaca la importancia de crear normas de calidad y emisión ambientales y el deber de respetarlas para prevenir daños al medio ambiente y reducir el impacto ambiental; como parte de nuestra facultad legislativa consideramos necesario que en la Ley de obras públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León se establezcan dentro de los criterios de la obra pública llevadas a cabo por estos entes el principio de prevención ambiental como parte de los criterios rectores contenidos en el artículo 6o de dicha ley, esto con el propósito de que se establezcan las directrices adecuadas para lograr el respeto irrestricto del derecho humano al medio ambiente humano.

En el mismo sentido y para cumplir con la mejora e implementación de procesos de construcción que estén encaminados a reducir el impacto ambiental proponemos que la obra pública utilice nuevos modelos de construcción donde por lo menos el 20% de material usado sea producto de materiales reciclados.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ÚNICO.- Se Reforma el Primer Párrafo del Artículo 6o y se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 6o, recorriéndose el subsecuente, a la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTICULO 6o.- La obra pública a cargo del Estado y de los Municipios deberá realizarse con criterios de transparencia, economía, prevención ambiental, imparcialidad, eficiencia, eficacia y honradez, a fin de poder contar con las mejores opciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los Municipios.

Así mismo, en las obras a cargo del Estado y de los Municipios se deberán emplear por lo menos un 20% de materiales con agregados o totalmente reciclados, con la finalidad de reutilizar los recursos naturales de forma eficiente y llevar a cabo un correcto manejo de los residuos de material de construcción.

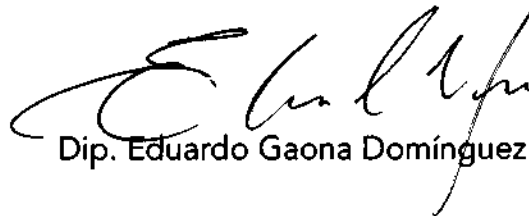
El Estado y en su caso los Municipios, deberán establecer las medidas indispensables para que los responsables de ejecutar las obras, garanticen que éstas, una vez entregadas, sean funcionales y seguras; aporten un beneficio general a sus usuarios, a quienes transiten por las vialidades circundantes, y a quienes residan en las zonas inmediatas; y a la vez, no ocasionen un deterioro a la infraestructura existente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, deberán realizar las modificaciones necesarias a sus reglamentos y a las normas jurídicas que correspondan, dentro de un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 03 días del mes de julio de 2023.



Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 23 Y 24 DE LA LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

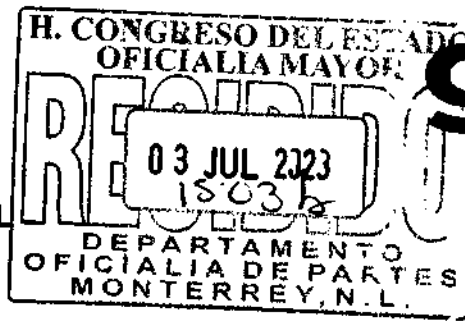
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE. –



glpri

La suscrita Diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, perteneciente al Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, reformada en octubre del año 2022, así como los numerales 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudo ante esta Soberanía a presentar iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por adición de un segundo párrafo, recorriéndose los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 24, ambos de la Ley para Prevenir, Atender, y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, esto con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La rama de la Psicología como la conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en el país de Alemania desde el año 1832 cuando en la Universidad de Leipzig se crea el primer laboratorio de Psicología Experimental, hecho que marca el surgimiento de esta actividad, pero ya apartada de la Filosofía, pues antes de esto, el estudio del comportamiento humano estuvo basado en las teorías de pensadores como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, David Hume, entre otros. A ciento noventa años de distancia, es menester observar como esto ha coadyuvado al desarrollo de la sociedad, en la parte que corresponde a la Salud Mental.

En ese sentido tenemos que, durante esos años que han transcurrido, se han podido reforzar los procesos y capacidades cognitivas en los seres humanos, se ha ayudado a mejorar las capacidades emocionales para enfrentar obstáculos, ha fortalecido las habilidades sociales y cívicas de convivencia, mejoró las capacidades para establecer vínculos interpersonales que ayudan a construir relaciones sanas, así como el provenir de los valores y el respeto a las normas de comportamiento que permiten una interacción sana, para la tolerancia y la comprensión entre las distintas formas de pensamiento, de idiomas y de fronteras.

Ahora bien, una de las etapas más significativas para la vida de todo ser humano, es aquella que corresponde a las infancias, por lo que, en ese sentido, me permito indicar que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido como la (UNICEF) muestra un significado para estas y las define como el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta, refiriéndose al estado integral y la condición de la vida de las y los niños. Además, que, en la convención general de las Naciones Unidas en 1989, se estableció una nueva definición de infancias la cual se encuentra ya sustentada en el reconocimiento pleno y garante de sus derechos humanos.

De esos fundamentos vigentes para los países miembros de esa Organización Internacional, y aunque todos y cada uno de ellos son sumamente importantes, deseo resaltar, no sin antes mencionar que esto no tiene como objetivo alguno, el hecho de ponderar a ninguno de estos con menor o mayor importancia, por lo cual cito que las infancias cuentan con el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, a no ser discriminadas, a vivir una vida libre de violencia a la integridad personal, a la libertad de condiciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura, así como al derecho a la educación.

Con base en este último resalto que también la ONU ha valorado a esta, como un derecho básico de todos los niños, niñas y adolescentes, para que se les proporcione habilidades y conocimientos necesarios para desarrollarse como adultos y además les de herramientas para conocer y ejercer sus otros derechos, razón por la cual es de menester contar con todos aquellos recursos que procuren el objetivo de llegar a la prestación de una educación de calidad. Expuestos los temas de la importancia de la Psicología y de los Derechos fundamentales de las y los niños me parece necesario que como Diputadas y Diputados trabajemos en la tarea que las y los ciudadanas y ciudadanos de Nuevo León nos han encomendado para conformar esta LXXVI Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León.

En ese orden de ideas, he observado que en la Ley de Educación vigente en nuestro Estado tenemos que las y los Psicólogos únicamente se encuentran enunciados en el artículo 50, cuando se describe a la educación especial, sin embargo, en lo que corresponde a los numerales 7, fracción XII, 20 bis I, 67 bis, 68 fracción II y 93 fracción V; encontramos que estos tienen como propósito, prestar en la práctica educativa, el apoyo para el desarrollo educativo de las infancias, basados en su bienestar psicológico, sin embargo, en ninguna de las partes que conforman ese ordenamiento, se tiene que profesionales ni practicantes de esta tengan como tarea el atender a las y los alumnos de las escuelas de educación básica.

Datos de la revista de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ejemplar del año 23, número 101 para los meses de mayo 2020 muestran que la violencia escolar es un problema socioeducativo que perjudica gravemente el proceso de enseñanza-aprendizaje y las relaciones sociales en el aula entre compañeras alumnas y alumnos y profesoras y profesores. En México, y según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la violencia en adolescentes de edades comprendidas entre los 10 y los 19 años se incrementó significativamente, cabe destacar que 53.6% sufrió agresión física, 34.6%, agresiones verbales y 11.8% corresponde a agresiones sexuales, sofocación, ahogamiento, estrangulación y otros tipos de agresión.

Nuestro panorama es grave, sin embargo, en la Guía para la detección temprana y Protocolo de Actuación en casos de Violencia escolar, que deriva del Programa Nacional de Convivencia Escolar, expone que Nuevo León requiere generar ambientes escolares de paz, confianza y respeto los derechos humanos, así como contar con comunidades escolares capaces de promover la cohesión social, limitar e inhibir las conductas violentas, donde la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones sea erradicada. La violación de derechos humanos y delitos cometidos contra niñas,

niños y adolescentes dañan la dignidad humana, por ello, deben evitarse o en su caso identificarse, detenerse y repararse integralmente, a través de la atención que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales en la materia.

Considero que para que los planes o los programas de capacitación que deben desarrollar las instituciones educativas al inicio de cada ciclo escolar para la prevención de la violencia, deben permitir buscar una mejor calidad en la educación de manera integral, por lo tanto se requieren hacer reformas a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, puesto que esta establece que, para la elaboración de los protocolos, estos deben elaborarse por las o los psicólogos y/o las y los trabajadores sociales que para el efecto deban contar los planteles educativos.

Sin embargo, hemos conocido por declaraciones que han hecho a través de diversos medios de comunicación las y los titulares de la Secretaría de Educación Pública que han estado al frente de ese encargo durante las últimas dos administraciones estatales anteriores, sus quejas por la falta de recursos para la contratación de esas y esos profesionistas, por lo que sus argumentos versan en el sentido de que no pueden contar con un profesional del área en cada uno de los

planteles educativos. Por tal razón también la presente iniciativa busca que si bien, eso que exponen las y los ex funcionarios, para la problemática de la contratación de profesionistas psicólogos, si se pueda contar con personas practicantes, para que estos presten sus prácticas profesionales y sean ayuden a las personas ya tituladas.

Es fundamental indicar que en el capítulo VIII bis de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León se establece en su artículo 40 bis I) que las instituciones educativas promoverán los mecanismos necesarios con los sectores público y privado, con el fin de que sus estudiantes o egresados adquieran aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, por lo que con esto, encontramos una concatenación para que las personas practicantes puedan colaborar con las personas que si cuentan con título y cédula profesional, y se pueda así crear una sinergia que ayude a la educación integral de las y los educandos, por ello presento el siguiente cuadro descriptivo en el que expongo mi propuesta de reforma para una mejor ilustración:

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL AGOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>Artículo 23. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la Secretaría el programa de capacitación en la materia, para los estudiantes, elaborado con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual deberá incluirse como mínimo una actividad académica mensual, en la que participarán obligatoriamente todos los alumnos. Dicha capacitación será impartida por profesionales de la psicología y/o pedagogía asignados al plantel.</p> <p>No existe texto de referencia</p> <p>En el programa de capacitación a los estudiantes se deberá incluir, la fecha de las actividades académicas sobre el tema.</p> <p>Dicho programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al inicio del ciclo escolar y se les recordará por escrito con cinco días de anticipación a la celebración de la actividad académica, para que, en su caso, asistan en compañía de sus hijos.</p>	<p>Artículo 23 ...</p> <p>Así mismo se contará, para el apoyo para esos profesionistas, con personas que efectúen sus prácticas profesionales de las carreras de psicología y pedagogía, quienes coadyuvarán de manera auxiliar en la elaboración del programa.</p>
<p>Artículo 24. Las instituciones educativas al inicio del ciclo escolar presentarán a la Secretaría n programa de capacitación en la materia, para los Padres de Familia, elaborado con el apoyo del psicólogo y/o trabajador social, en el cual se</p>	<p>Artículo 24 ...</p>

LEY PARA PREVENIR, ATENDER Y ERRADICAR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA DE REFORMA
<p>deberá incluir como mínimo una actividad académica trimestral obligatoria, y será impartida por profesionales de la psicología y/o pedagogía asignados al plantel.</p> <p>No existe texto de referencia</p> <p>En el programa de capacitación a los padres de familia se deberá incluir, la fecha de la actividad académica y el tema.</p> <p>El programa de capacitación deberá ser entregado a los padres de familia al inicio del ciclo escolar y se les deberá recordar por escrito con cinco días de anticipación a la celebración de la actividad académica, para que asistan a la misma.</p>	<p>Así mismo se contará con el apoyo a estos profesionistas, con personas que efectúen sus prácticas profesionales de las carreras de psicología y trabajo social, quienes coadyuvarán de manera auxiliar en la elaboración del programa.</p>

Expuesta que ha sido mi propuesta de manera ejecutiva, creo conveniente citar que aún muchas opiniones a favor o en contra se presentan por la participación o no de las personas que realizan sus prácticas profesionales en lo correspondiente al sistema educativo estatal, sin embargo, creo también conveniente precisar que en este Congreso de Nuevo León, ya hemos aprobado reformas enfocadas a que las y los practicantes presenten sus servicios, como sucedió día 18 de mayo del año 2022, cuando dimos luz verde a la reforma por modificación de la redacción del primer párrafo y anexión de un segundo al artículo 20, de la Ley para Prevenir la Obesidad y el Sobrepeso en el Estado y Municipios de Nuevo León.

Con el fondo de esos cambios ahora tendremos que los planteles educativos tomarán en consideración la participación de estudiantes de las licenciaturas en Educación Física, en Ciencias del Ejercicio o similares mediante la promoción de Convenios con Universidades públicas y privadas que impartan dichas licenciaturas con el fin de que presten sus servicios, así mismo y no menos importante, es que

debemos recordar que en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, publicado por el actual gobierno del Estado de Nuevo León tenemos que, en su página 29 cita que como parte fundamental para la atención de la primera infancia, una de las prioridades para el "nuevo" Gobierno de Nuevo León, es garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos en la primera infancia, fundada en una educación inicial adecuada.

Como he precisado en el cuerpo del presente documento es necesario que apoyemos a todas aquellas acciones que tengan como fin ayudar en el desarrollo de las herramientas que procuren una mejor educación de las infancias de nuestro Estado, pues esta etapa de la vida, se vuelve piedra angular en el integral de las personas que son el futuro de Nuevo León y de México, razón por la cual me permito someter a la consideración del Pleno del Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, el siguiente proyecto de.

DECRETO

UNICO. Se reforman por adición de un segundo párrafo, recorriéndose los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 23, así mismo se reforma por adición de un segundo párrafo para recorrer los actuales párrafos segundo y tercero del artículo 24, ambos de la Ley para Prevenir, Atender, y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 23 ...

Así mismo se contará, para el apoyo para esos profesionistas, con personas que efectúen sus prácticas profesionales de las carreras de psicología y pedagogía, quienes coadyuvarán de manera auxiliar en la elaboración del programa.

...

...

Artículo 24. ...

Así mismo se contará con el apoyo a estos profesionistas, con personas que efectúen sus prácticas profesionales de las carreras de psicología y trabajo social, quienes coadyuvarán de manera auxiliar en la elaboración del programa.

...

...

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

UNICO- La presente Decreto, entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

MONTERREY NUEVO LEÓN A JULIO DEL AÑO 2023


DIP JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

**INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE LA LXXVI LEGISLAURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

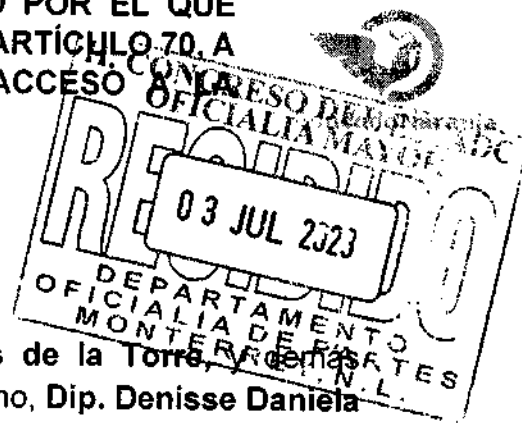
SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLVIII BIS AL ARTÍCULO 70, A
LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA,**

**DIP. MAURO GUERRA VILLAREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



La que suscribe **Diputada Irais Virginia Reyes de la Torre**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, **Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor**, **Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, **Dip. Tabita Ortiz Hernández**, **Dip. Norma Edith Benítez Rivera**, **Dip. María Guadalupe Guidi Kawas**, **Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras**, **Dip. Eduardo Gaona Domínguez**, **Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez**, **Dip. Roberto Carlos Farías García** y **Dip. Héctor García, García**, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS FRACCIONES XLVII Y XLVIII POR ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN XLIV AL ARTÍCULO 70, A LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En algunas partes del mundo, han surgido desde distintos contextos sociales y políticos, intereses por regular un fenómeno de larga data, que sin embargo, se ha puesto en los ojos del escrutinio público sobre todo en las últimas dos décadas. En este caso me refiero al cabildeo de relaciones públicas, mejor conocido como "lobbying" por su origen del vocablo anglosajón.

De Acuerdo con información de la Organización para el Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entidad precursora en cuanto al tema se refiere, se ha desarrollado un definición de término *Lobbying* entendiéndose como cualquier comunicación, oral o escrita, frente a funcionarios públicos con el objetivo de influir en la promulgación de legislación o en las decisiones administrativas o de políticas públicas.¹ En términos propios el *loobyng* se refiere a las acciones que emprenden individuos o empresas, para comunicar a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno una postura determinada con el fin último de posicionar sus objetivos e intereses en la agenda pública. No obstante, la propia ambigüedad del término, poca

¹ "Lobbyists, Government and Public Trust. Volume 1. Increase Transparency Through Legislation". OCDE, 2009. Pag. 9 y 18. Disponible en línea < https://read.oecd-ilibrary.org/governance/lobbyists-governments-and-public-trust-volume-1_9789264073371-en#page4 >

claridad de sus alcances y la manera en que el *Lobbying* se lleva a cabo en distintos países, son algunas de las razones por las que su regulación es un tema complejo, que involucra diversas aristas y perspectivas, exhaustivos estudios y discusiones entre los actores de una sociedad involucrados en actividades afines.

El *lobbying* ha sido visto como una profesión en la sociedad e incluso, como una necesidad para empresas, sociedad civil, colectivos, sindicatos, entre otros actores. Esta actividad no es para nada nueva, y hasta podemos decir que es un oficio común, en prácticamente todas las democracias del mundo. Ciertamente es que pocos profesionales llegaron a presentarse como “gestores”, pero utilizan otros términos como “experto en relaciones públicas”, “abogado”, “experto gubernamental”, entre otros.²

Ahora bien, las preguntas medulares que pretendemos responder y resolver a través de esta iniciativa, son ¿por qué regular el *loobyng*? ¿Qué aspectos del *loobyng* es necesario regular, así como la información que deberá comprender la regulación? ¿Qué actores estarían sujetos al cumplimiento de obligaciones relacionadas con este tema? y ¿Qué autoridad y/o que mecanismos estarían disponibles para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones?

Centrándonos en la razón por la cual es necesario regular el *loobyng*, podríamos referirnos a tres aspectos principales. Primero, la regulación del *loobyng* busca crear arenas o escenarios de debate e incidencia de la política pública que sean parejos para todos los actores involucrados en determinado tema; mejorar la percepción de la sociedad en cuanto a las actividades del gobierno y eliminar puertas que dan cabida a actos de corrupción; por último, establece mecanismos de transparencia gubernamental más apropiados para garantizar el estado de derecho en una democracia.

Sobre el primer aspecto referido, no es ajeno o desconocido que existen diversos actores que, al intentar posicionar sus intereses en la agenda pública, se acercan a funcionarios de gobierno, para buscar realizar un “cabildeo” y gestionar la implementación de política pública, legislación o convencer sobre una determinación judicial en un sentido u otro. Esta práctica no deberíamos considerarla como “mala” en sí misma. Todos hacemos un tipo de *loobyng* en nuestra vida diaria, personal y profesional. Es normal dentro de la naturaleza de un ser social como lo es el humano, en buscar posicionar y convencer a los demás

² Ibid. Pag. 129.

sobre sus intereses. Aquí el problema radica en la incidencia que tiene una decisión sobre todos los gobernados u otros actores, a diferencia de otros contextos. Precisamente, en los temas de gobernabilidad y política pública, nos encontramos frente a una pluralidad de actores que tienen miras y perspectivas distintas de un mismo tema, por lo que garantizar que todos los actores relevantes tengan un espacio parejo para expresar sus ideas frente a la autoridad, con el fin de que esta tome la decisión más acertada, es una acción que deben tomar quienes se encuentran con el poder de llevar a cabo el manejo de la política pública.

Tiende a existir una percepción negativa de la sociedad, sobre las actividades relacionadas con el *lobbying*, en cuanto a que es una puerta para la corrupción -que lo es en algunos casos-, propicia la comisión de delitos como el tráfico de influencias, genera una desconfianza de la ciudadanía frente a los gobernantes y en general, se le ha visto como una forma de negociación que deja atrás los deseos de la población general y que busca dar ventajas a ciertos grupos.³ En este sentido, si se establecen reglas claras, sanciones, mecanismos de regulación y se determinan de forma previa los alcances de esta actividad, es que se podría revertir esta percepción generalizada y consecuentemente, se mejoran aspectos de gobernabilidad.

Por último, destacamos que, a través de la regulación de esta actividad, resultan beneficios muy concretos en cuanto al tema de transparencia gubernamental se refiere. Se podrían hacer públicas las agendas laborales de servidores públicos determinados, lo que permitiría observar con quienes se reúnen y por tanto, quienes podrán influir en determinada política pública; se han establecido padrones de “gestores”, lo que suma a saber quiénes están detrás de determinada política pública y evita que terceros influyan en decisiones gubernamentales sin antes haber estado acreditados para desempeñar dichas funciones u obtener beneficios personales. En resumen, tocar aspectos como el que se trata, solo suma a fortalecer los mecanismos de acceso a información pública, propicia la participación de la población en las políticas públicas gubernamental para lograr una más inclusiva y adecuada con las necesidades de la ciudadanía y fortalece en general el Estado de Derecho.

La regulación del *lobbying* gubernamental es un tema novedoso en la mayoría de las naciones del mundo. Sin embargo, existen importantes precursores y antecedentes de este tema, siendo los Estados Unidos de América el primer país

³ Ibid. Pág. 9.

que promulgó legislación de este tipo con más de un siglo de anticipación, antes de que otros Estados como Australia, Canadá y Alemania lo hicieran en la década de los 90's.⁴

No obstante, y como hemos mencionado con anterioridad, esta actividad es tan peculiar, que no se manifiesta de la misma manera en todas las culturas y naciones, ya que tiene rasgos muy característicos de cada nación que la desarrolla, precisando que todas lo hacen, pero a su manera. Por ejemplo, en unos países es establecen disposiciones que obligan a organizaciones de la sociedad a participar en procesos deliberativos, en otras, existen registro de cabilderos y en otras, incluso se prohíbe la participación en diversos procesos, por ejemplo, legislativos, a quienes hayan desempeñado una función pública.

En algunos países de Norte América, Asia y Europa, se ha impulsado legislación que fortaleciera la transparencia gubernamental en torno al *lobbying*. Así, para ejemplificar algunos casos concretos, procederemos a mencionar el caso de Polonia y Texas.

En Polonia existía una muy mala percepción de la actividad del *lobbying* gubernamental. Era referida como una red de conexiones informales a través de las cuales se lograban entrelazar intereses privados y la política de élite bajo el argumento de un servicio mutuo de reciprocidad. Así, de acuerdo con datos del Banco Mundial, se observan tendencias estructurales de como a través del *lobbying* se lograban beneficios financieros con el objetivo de bloquear o modificar provisiones de la ley.⁵ Esta inconformidad generalizada resultó a un largo proceso legislativo que desembocó en la promulgación de "*The new Act on Legislative and Regulatory Lobbying*". Este cuerpo normativo busca crear padrones de "Cabilderos" quienes estarán sujetos al cumplimiento de ciertas obligaciones y la creación de mecanismos para garantizar que las disposiciones de esa ley se cumplieran.⁶

En cuanto al caso de Texas se refiere, de acuerdo con información de la oficina del fiscal general, se encuentra vigente la "Open Meetings Act", que fue promulgada con el propósito de lograr que los procesos de decisiones gubernamentales sean accesibles al público, incluyendo, que las reuniones de órganos políticos sean

⁴ Ibid. Pag. 42.

⁵ Ibid. Pag. 143.

⁶ Ver también: "*Lobbying regulation framework in Poland*", Parlamento Europeo, diciembre 2016. Disponible en línea <

[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595848/EPRS_BRI\(2016\)595848_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/595848/EPRS_BRI(2016)595848_EN.pdf)>

abiertas, con excepciones de aquellas que por alguna razón particular, debieran ser a puerta cerrada. Esta obligación también supone la publicación de la agenda de estos órganos con anticipación, incluyendo la fecha, hora, lugar y tema a tratar en la reunión. Cabe destacar que esta legislación se encuentra vigente desde el año de 1973. De esta manera, se logra un mayor escrutinio público, en cuanto a quienes intervienen en la formulación de política pública y en la toma de decisiones del gobierno.⁷

Tomando en cuenta este contexto, y en aras de coadyubar en resolver este tema, relacionado con la regulación de *lobbying* gubernamental, no ha pasado desapercibido por miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico la importancia que reviste esta temática. Así, este organismo internacional llevó a cabo un gran proceso de consulta en diversos países miembros y sometió a aprobación a través de los mecanismos internos de la organización una serie de lineamientos y recomendaciones derivados del proceso de consulta mencionada. Así, resultaron “*The 10 Principles for Transparency and Integrity in Lobbying*”, como un instrumento de *soft law* que tiene por propósito apoyar a los estados miembros de la organización, a delinear política pública congruente y efectiva que logre denotar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gobierno hacia los ciudadanos.

Cabe destacar entre los principios emanados del seno de la OCDE, el 1ro, 5to y 6to, los cuales determinan en ese mismo orden, que los Estados deben de proporcionar un área de participación adecuada y nivelada a todos los actores relevantes, garantizando un justo y equitativo acceso al desarrollo e implementación de política pública; que los Estados deben propiciar un adecuado nivel de transparencia en las actividades propias del gobierno, para garantizar que funcionarios públicos, ciudadanos y empresas, puedan obtener información relevante y suficiente sobre el cabildeo de política pública; y que los Estados deben permitir que los actores relevantes fiscalizar y observar toda actividad de cabildeo gubernamental.⁸

⁷ “*Open Meetings Act*” Handbook 2022. Ken Paxton, Attorney General of Texas. Disponible en línea < https://www.texasattorneygeneral.gov/sites/default/files/files/divisions/open-government/openmeetings_hb.pdf >

⁸ “*The 10 Principles for Transparency and Integrity in Lobbying*”, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 2013. Disponible en línea < <https://www.oecd.org/corruption/ethics/Lobbying-Brochure.pdf> >

Ahora bien, pasando a contestar la interrogante sobre el segundo aspecto del *loobying* gubernamental que habría de regularse, reiteramos la postura de que esta pregunta habría de contestarse observando el caso particular de cada nación y población, tomando en cuenta sus particularidades culturales y sociales entre otros aspectos.

Esta es sin duda, una de las partes medulares que circundan este tema, los alcances de una política pública encaminada a regular que información habría de estar disponible y abierta al escrutinio público y que datos no. Es necesario identificar de forma clara el alcance de la política en cuestión, incluyendo que actores habrán de incluirse como obligados y poner descripciones adecuadas de exclusiones de información.

Ilustrando lo anterior, resultaría congruente que no se obligue a publicar en alguna base de datos gubernamental, comunicaciones o eventos que se encuentren disponibles en otra fuente de acceso público, lo contrario se traduciría en una obligación adicional y de duplicidad de transparencia para los sujetos obligados;⁹ esta situación podría compararse con las sesiones del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, las cuales pueden presenciarse en línea y se encuentran disponibles para consulta por cualquier ciudadano con internet, por lo que no sería necesario determinar una obligación adicional en este sentido.

En otras palabras, resulta imperativo que, en la implementación de una política pública de esta naturaleza, habría de establecerse exclusiones legítimas en cuanto al tipo de información que tendría que estar disponible al escrutinio público.

En el citado ejemplo de la legislación polaca, la ley aprobada establece puntualmente que información estarían obligados a difundir los legisladores, secretarios y otros altos funcionarios del gobierno, incluyendo el nombre, fecha de nacimiento, empleos pasados y fuentes de ingresos de sus colaboradores más cercanos.¹⁰ Resultando la legislación polaca en un ejemplo práctico de la implementación de una política de esta índole que enumera puntualmente los aspectos de información que habrán de estar sujetos a un escrutinio público.

Pasando al tercer punto que busca dar contestación esta iniciativa, el cual trata sobre identificar a los sujetos que deberán dar cumplimiento a esta nueva

⁹ Ver No. 1. Pag. 25.

¹⁰ Ibid. Pag. 149.

obligación. Así, haciendo un análisis de los ejemplos mencionados con anterioridad -Polonia, Texas, Estados Unidos, Canadá y Alemania-, cabe hacer el comentario de que no existe uniformidad en cuanto a la selección de sujetos obligados, si no que cada Estado, al momento de establecer disposiciones específicas de este tema, determina a los sujetos que habrían de considerarse como “obligados”. Vemos así, como panorama general, que en algunas naciones se imponen obligaciones a funcionarios públicos, en otras a quienes materialmente desempeñen alguna función de “cabildero”, y en otras a entidades privadas tales como empresas y asociaciones civiles. Es decir, no existe una fórmula inequívoca para implementar legislación relacionada con la temática de *lobbying* gubernamental.

Habiendo hablado de los motivos, objeto y sujeto de la iniciativa toca el lugar a ahondar en el cuarto aspecto modular de la iniciativa, es decir, el mecanismo que buscará hacer viva la implementación de la misma.

De acuerdo con información de la OCDE, existen dos tipos de aproximaciones, una recae en el “gestor”, estableciendo por ejemplo un registro público de quienes realizan funciones como esta. La otra aproximación revira hacia el funcionario público, imponiendo la obligación de publicar la información de sus reuniones con gestores u otros actores (lo cual sucede en Estados como Chile, Perú, Lituania y Eslovenia), estableciendo mecanismos de “Agenda Abierta” (como sucede en Lituania, España, Reino Unido y los Estados Unidos) o requiriéndoles a ciertos funcionarios que divulguen la información de reuniones con cabilderos o gestores con sus superiores jerárquicos (como sucede en Hungría, Latvia, Lituania y Eslovenia).¹¹

El mecanismo de “Agenda Abierta” se refiere a información relacionada con las reuniones de trabajo de un funcionario público, fechas, actores involucrados y el propósito de la reunión. Cabe destacar, como menciona la OCDE, que en países donde se combinan mecanismos como “registros de gestores” y “agendas abiertas” (Como Reino Unido y Rumania), hacer una revisión cruzada de las agendas y los gestores registrados, resulta en un fuerte mecanismo que permite analizar quien busca influenciar una determinada política. Otro ejemplo, como continúa mencionando la OCDE, se refiere a la solicitud del contenido de las agendas de trabajo de altos funcionarios, a través de mecanismos como lo sería el equivalente

¹¹ “*Lobbying in the 21st Century : Transparency, Integrity and Access*” Chapter 2. Transparency. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Disponible en línea <<https://www.oecd-ilibrary.org/sites/cc47798f-en/index.html?itemId=/content/component/cc47798f-en#boxsection-d1e2443>>

de transparencia y acceso a la información en México; este mecanismo que se señala es aplicado en Noruega, donde en ciertas circunstancias, es posible dar acceso a la agenda personal de funcionarios de alto nivel.¹²

Sumando a estos ejemplos de política de "agenda abierta", nos referiremos a dos casos concretos, el caso de España y Reino Unido.

En lo que respecta a España, desde al año 2012, se encuentra disponible en línea la agenda personal de ciertos funcionarios públicos. Estas agendas incluyen un listado de visitas y reuniones en las que participan los funcionarios del gobierno y que incluyen por lo menos

1. El cargo del funcionario,
2. La fecha y hora de las reuniones y
3. La organización/entidad que reciben o visitan.

Así también, el mes de octubre del año 2020, se adoptó en este mismo país un código de conducta para los miembros del Congreso y del Senado, que impone la obligación a cargo de los legisladores, de publicar sus agendas profesionales.¹³

Sobre Reino Unido, menciona la OCDE que el Código Ministerial del gabinete del gobierno, impone la obligación a ciertos funcionarios de publicar sus agendas y un departamento específico lleva a cabo su publicación de forma regular y constante, al menos de forma quincenal. La información publicada incluye los detalles de las reuniones, tales como actores involucrados y el propósito de esta. Así mismo, existe una dependencia de gobierno que realiza una revisión cruzada sobre los actores que participan en reuniones con funcionarios de gobierno y el registro de "cabilderos" o "gestores", para garantizar el debido cumplimiento de la ley denominada "The Transparency of Lobbying Act".¹⁴

Destacamos este mecanismo en la presente iniciativa, ya que consideramos que podría adecuarse a las realidades políticas del Estado de Nuevo León, además de ya existir organismos a los que se les podría encomendar la función de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones, como lo estableceremos más adelante.

¹² Ibid.

¹³ Ibid. Box 2.1.

¹⁴ Ibid. Ver también, "Minsiterial Code", Artículo 8.14. Reino Unido. Disponible en línea <
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/826920/August-2019-MINISTERIAL-CODE-FINAL-FORMATTED-2.pdf>

Habiendo detallado diversos aspectos que debe de cubrir un instrumento normativo como el que se propone, llegamos por último al órgano de supervisión de cumplimiento. En los ejemplos que hemos ido describiendo, se han implementado diversos mecanismos de seguimiento y cumplimiento, cada uno con sus respectivas características.

Consideramos que, en el caso concreto de Nuevo León, podríamos hablar por ejemplo, de la Oficialía Mayor como organismo que tenga la obligación de hacer públicas las agendas de los diputados locales. Si fueran funcionarios del Poder Judicial, esta podría realizarse a través del Consejo de la Judicatura y si fuera del Poder Ejecutivo, podría ser la Secretaría General de Gobierno.

No obstante, resaltamos que existe en la entidad la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información, como órgano autónomo encargado de la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y cuyas funciones son en esencia garantizar el cumplimiento de legislación de transparencia gubernamental. Así, este órgano estaría encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones que esta iniciativa pretende abanderar.

Por último, nos enfocamos en describir el caso concreto de México y la propuesta de iniciativa, tomando en cuenta los elementos y ejemplos que han quedado descritos con anterioridad.

Nos es necesario hacer énfasis en la situación actual de nuestro país, en cuanto a transparencia gubernamental se refiere y la confianza de los ciudadanos frente a las autoridades. La corrupción en México es un cáncer que ha llegado a todos los niveles de gobierno y que engloba prácticamente todos los sectores sociales. Se oyen constantemente escándalos de corrupción que derivan en contratos multimillonarios a favor de ciertas personas y el tráfico de influencias como medio para garantizar el beneficio de unos cuantos que detentan el poder.

Basta observar los datos disponibles en este respecto. De acuerdo con datos de *World Justice Project*¹⁵ en el último reporte del año 2021, México ocupó el lugar 49 de 139 países analizados, en lo que respecta al rubro "gobierno abierto". En cambio,

¹⁵ *World Justice Project* es una organización independiente y multidisciplinaria que tiene como objeto la propagación de contenido, conocimiento, estadísticas y demás datos, que permitan avanzar mundialmente en una verdadera implementación del Estado de Derecho.

en lo que respecta a corrupción, México quedo en el lugar 135 de 139 países, solo debajo de Uganda, Camerún, Camboya y la Rep. Democrática del Congo.

Si bien, estos datos sirven para dar sustento al grave problema de corrupción y la falta de transparencia gubernamental que vivimos, esto no es un fenómeno nuevo. Al grado que podemos concluir que la corrupción y la opacidad gubernamental son tristemente un componente del funcionamiento -erróneo- de la sociedad mexicana. En aras de voltear la atención a esta problemática, con esta iniciativa se busca al menos crear un flanco para atacar la corrupción y opacidad gubernamental, a través de la regulación de un aspecto del *lobbying*, término que ha quedado definido claramente en este documento, en cuanto a su significado, alcances y componentes.

Así, tenemos que plantear:

1. Qué información habrá de sujetarse al escrutinio público;
2. Quienes estarán sujetos al cumplimiento de estas disposiciones;
3. Qué mecanismo será el idóneo para implementar una política cuyo objeto sea la regulación de un aspecto del *lobbying* gubernamental; y
4. Qué órgano estará a cargo de velar por el cumplimiento de estas disposiciones.

En concreto, la propuesta estriba en reformar la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el objeto de establecer la obligación a cargo de los funcionarios de alto rango para que a través de un mecanismo de "Agenda Abierta", se encuentren obligados a hacer pública su agenda de trabajo, detallando, así como el ejemplo de España y Reino Unido, por lo menos:

1. El cargo del funcionario,
2. La fecha, hora y lugar de las reuniones y
3. La organización o entidad que reciben o visitan.

Estableciendo claramente que solo tendrán obligación de hacer públicas aquellas actividades de índole meramente profesional, excluyendo claro está, reuniones familiares o personales que no tengan por objeto tratar algún asunto o tema relacionado con el gobierno o sus funciones como servidores públicos. Adicionalmente, tomando en cuenta el ejemplo de Reino Unido, Por último, para la obligación de velar por el debido cumplimiento de esta disposición, se establecen las sanciones por su inobservancia.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLVIII BIS AL ARTÍCULO 70, A LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

La implementación de una obligación de esta índole requeriría también, previo análisis sobre su compatibilidad con las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos. Por lo anterior, resulta adecuado hacer uso del “Test de Proporcionalidad en sentido amplio” utilizado por el alto tribunal constitucional, para definir esta compatibilidad.¹⁶

Recordemos que, en diversos precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado las características de esta técnica, que engloban el fin legítimo, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Observando que lo que se busca plantear con la presente iniciativa, en cuanto a que altos funcionarios estatales tengan la obligación de hacer públicas sus agendas de trabajo, como un mecanismo para prevenir la opacidad gubernamental y fomentar la transparencia, en aras de buscar la regulación del *lobbying*, “cabildeo” o “gestión” de las relaciones públicas gubernamentales, al ser esta una actividad de suma relevancia en democracias funcionales, como lo ha señalada la OCDE. Esto para garantizar que todos los actores relevantes tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones y en la creación de política pública, en un escenario de equidad e igualdad frente a otros con intereses y perspectivas diferentes sobre una misma temática. Con este contexto resumido de las razones de la iniciativa, resulta el siguiente análisis de proporcionalidad.

1. En cuanto al *Fin Legítimo* que habría de perseguir esta iniciativa, sobre un fin constitucional y convencionalmente válido; recordemos que el objetivo principal de esta iniciativa, resulta en evitar nichos de corrupción, fomentar una mayor transparencia gubernamental, impulsar una rendición de cuentas veraz y apropiada en cuanto a las actividades de quienes tienen en sus manos la toma de decisiones de política pública, además de procurar la confianza de la población en las actividades de los servidores públicos y que consecuentemente se desarrollen mayores índices de participación ciudadana.
2. En cuanto a la *idoneidad* de la medida, es decir, si es apta para alcanzar la finalidad referida; observemos que ha sido por un lado probado en otras latitudes, que un mecanismo de esta índole ha resultado apto para lograr los fines señalados. A través de un mecanismo de “Agenda Abierta”, la

¹⁶ “El test de proporcionalidad en la Suprema Corte”, Suprema Corte de Justicia de la Nación – Centro de Estudios Constitucionales. Diana Beatriz González Carvallo, Rubén Sánchez Gil. Abril 2021. Pag. XVII,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLVIII BIS AL ARTÍCULO 70, A LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

ciudadanía podrá fiscalizar quienes son los actores que se reúnen con los tomadores de decisiones para impulsar una decisión gubernamental en un sentido u otro, por lo que sería de público conocimiento quienes son los que impulsan la agenda pública o la toma de decisiones en un sentido u otro.

3. Sobre la *necesidad* de la medida, en cuanto a la suficiencia para alcanzar la finalidad legítima y analizar si existen alternativas menos lesivas para lograr el fin que se persigue; En este caso, se lleva a cabo una limitación al derecho a la privacidad que corresponde a los funcionarios públicos, contrapuesto frente al derecho de acceso a la información, a la rendición de cuentas y a la participación en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. La medida impuesta, *per se* se refiere en estricto sentido a las actividades profesionales que desempeñan los funcionarios de alto rango federal, habiendo un sinfín de medidas que podrían adoptarse, resulta claro que ya se encuentran vigentes obligaciones análogas de publicidad a cargo de los funcionarios a que se refiere el citado artículo, tales como la publicación en internet de audiencias del poder judicial y sesiones del pleno del Congreso Federal, agendas de los asuntos que habrán de discutirse por el tribunal electoral, entre otros; por lo que es evidente que las actividades de los funcionarios referidos tienen una naturaleza preponderantemente pública. Así que la publicación de la agenda de trabajo de dichos funcionarios a todas luces no resulta como una que sea más lesiva a otras obligaciones vigentes.¹⁷ Además, en análisis de esta etapa, podría realizarse a través de un estudio de derecho comparado, como el que se ha realizado en esta iniciativa, para regular el mismo fenómeno y determinar la idoneidad de la medida.¹⁸
4. Finalmente, en lo que corresponde a la *razonabilidad* de la medida, es imperativo analizar el peso o jerarquía del fin legítimo, frente al límite de la garantía individual que nos ocupa. Observando en una balanza, que los funcionarios a que refiere el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, tienen funciones críticas y fundamentales en el proceso de toma de decisiones que afectan a la ciudadanía, que el proceso de selección de estos obedece ya sea a procedimientos electorales o designaciones que se realizan en conjunto por más de uno de los poderes,

¹⁷ TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA, Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 36, noviembre de 2016, t. II, tesis 1a. CCLXX/2016 (10a.), p. 914.

¹⁸ Ibid.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLVIII BIS AL ARTÍCULO 70, A LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,

ejecutivo, legislativo y judicial, dada la importancia que revisten sus cargos, que en México se vive un constante clima de opacidad gubernamental que propicia actos de corrupción y tráfico de influencias y que la ciudadanía tiene el derecho a la rendición de cuentas, a la transparencia en la actividad del gobierno y participar activamente en la toma de decisiones; todo lo anterior frente al derecho a la privacidad que en si se encuentra ya restringido por la propia naturaleza de los funcionarios señalados. Resulta evidente que la medida legislativa propuesta, supera a todas luces la etapa de razonabilidad.

La presente iniciativa fue dada de baja de conformidad con el artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León. En consecuencia, quienes suscriben la presente iniciativa la presente a esta soberanía para su dictaminación.

Por todo lo anterior, es que señalamos que la medida legislativa propuesta, supera el "Test de Proporcionalidad" además, representa un avance legislativo importante para todo el país, que propiciará combatir la corrupción y aumentar la confianza de la ciudadanía hacia el gobierno. Por lo que se somete a su consideración la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.-Se reforma el artículo 70 de la Ley General de Transparencia por adición de una fracción XLVII, para quedar como sigue:

Artículo 70. ...

1 a la XLVII...

XLVII BIS. La persona titular del poder ejecutivo de la República, las Diputaciones y Senadurías del Congreso de la Unión, las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las Consejeras y Consejeros de la Judicatura Federal, las personas titulares de las Secretarías de Despacho, las persona titular de la Fiscalía General de la República, las Magistraturas de Circuito y Jueces y Juezas de Distrito, la Consejera o Consejero Presidente, las Consejeras o Consejeros electorales y la persona titular de la Secretariado ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, las magistrados y magistrados del Tribunal Electoral, las y los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, las direcciones generales y sus equivalentes de los organismos

**INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XLVIII BIS AL ARTÍCULO 70, A
LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA,**

descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos; deberán poner a disposición del público y mantener actualizada quincenalmente vía internet, la información correspondiente a sus agendas de trabajo del mes inmediato posterior, incluyendo por lo menos la siguiente información:

- a) La fecha, hora y lugar de las reuniones y/o actividades;
- b) Nombre de la persona que reciben o visitan, la organización, entidad o institución pública o privada que representan, y el cargo que tienen en dicha institución;
- c) Los temas por tratar en dichas reuniones o actividades;

Se entenderán como excepciones a la obligación antes descritas, la publicación de la siguiente información las actividades o reuniones de su agenda de índole meramente personal y aquella información que, por su naturaleza, sea reservada y/o confidencial, de acuerdo con la legislación aplicable, situación que deberán fundar y motivar previamente; y

XLIV...

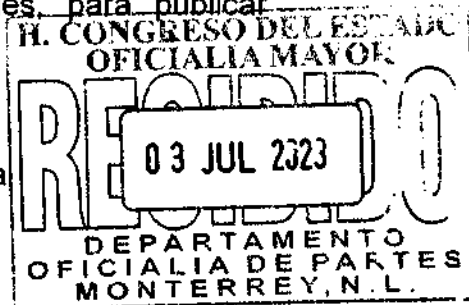
TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días naturales siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Las y los funcionarios públicos a que se refiere el presente Decreto, deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes en los sitios de internet de las dependencias a su cargo o sus páginas personales, para publicar quincenalmente sus agendas de trabajo.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Irais Virginia Reyes de la Torre



16:09 h

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Tabita Ortiz Hernández

**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

**Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras**

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la Iniciativa Proyecto de Decreto por el que se modifica el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información por adición de una fracción XLVII BIS.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES Y DIP. AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA, INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MOVILIDAD

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
DE NUEVO LEÓN**

PRESENTE. -

El suscrito Diputado **Luis Alberto Susarrey Flores** y los Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar **Iniciativa de reforma que adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 20 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Si hablamos de movilidad, es imposible no reconocer la importancia del peatón, en la jerarquía de la movilidad urbana incluso se ubica en la punta de la pirámide al peatón, seguido de los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y al final las motos y autos y en general los vehículos particulares motorizados.

Una vez entendido que el peatón debe ser el centro ante cualquier política pública de movilidad, los municipios, tienen la obligación de beneficiar principalmente a quienes caminan por las calles de una ciudad, haciendo las banquetas con accesibilidad universal, amplias, arboladas, etc. En ese sentido, muchas veces los ayuntamientos optan por instalar pasos peatonales y en otros casos, puentes peatonales. Sin embargo, estos no suelen ser bien planeados, con estudios de factibilidad que te indiquen que en esa zona en particular la ciudadanía lo usaría, eso sin mencionar que suelen ser poco accesibles para personas con

alguna discapacidad, en mal estado, sucios, y que en algunas ocasiones sirven más como panorámicos que para verdaderamente beneficiar al peatón.

Por ello, esta iniciativa plantea la obligatoriedad de que dichos puentes peatonales cumplan con los estándares internacionales y nacionales en cuanto a accesibilidad universal. Lo anterior con el objetivo de que estos sean más accesibles y empáticos y que más ciudadanos puedan hacer uso de los mismos. Sin embargo, muchas veces quienes autorizan y/o quienes realizan la obra pública, hacen caso omiso a estos estándares y especificaciones, afectando así, directamente a las personas con discapacidad e incluso, poniendo en riesgo sus vidas, pues al tener un puente peatonal en mal estado y poco accesible, se orilla al ciudadano a utilizar la calle, es decir, cruzar la avenida, y muchas veces estas son de alta velocidad.

En este sentido, existen ejemplos de distintas ciudades del mundo que si han seguido estos manuales de operación internacionales y que hoy en día cuentan con puentes peatonales de primer mundo como lo es Londres o Singapur, donde además de la modernidad en cuanto a infraestructura, cumplen con los principios de accesibilidad universal, lo cual, en perspectiva comparada, quedamos exhibidos en cuanto a la mala calidad de nuestros puentes peatonales, otro elemento más que se suma a el déficit de banquetas accesibles, ciclovías mal hechas, el aumento acelerado del parque vehicular, el deficiente transporte público, entre otros, que nos tienen hoy sumergidos en la peor crisis de movilidad de nuestro estado.

Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional propone reformar la Ley de Movilidad y Accesibilidad vigente en la entidad para que los Municipios sean los responsables solidarios en accidentes que se ocasionen en avenidas que no cuenten con banquetas, cruces y/o puentes peatonales seguros. Además, se busca otorgarles un plazo máximo de 2 años para que estos adecuen, o en su caso, retiren aquellos puentes peatonales que no cumplan con los estándares internacionales y nacionales en cuanto a accesibilidad universal.

Es por lo anteriormente expuesto que la bancada del Partido Acción Nacional somete a su consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se **ADICIONA** un segundo y tercer párrafo al artículo 20 de la **Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

Artículo 20. La construcción, mejoramiento y adaptación de las vías, aceras, pasos peatonales será facultad de los municipios, los cuales podrán celebrar convenios con la Administración Pública Estatal y el Instituto a fin de realizar infraestructura para la movilidad dentro del ámbito de su competencia.

Respecto a la construcción, mejoramiento y adaptación de pasos y puentes peatonales, los municipios observarán en todo momento el principio de accesibilidad universal y se basarán en los estudios correspondientes que para tal efecto se realicen.

Los Municipios serán responsables solidarios en accidentes que se ocasionen en avenidas que no cuenten con banquetas, cruces y/o puentes peatonales seguros.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

SEGUNDO.- Se concede un plazo de dos años para que los municipios adecuen, o en su caso, retiren aquellos puentes peatonales que no cumplan con los estándares internacionales y nacionales en cuanto a accesibilidad universal.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 04 DE JULIO DE 2023

A T E N T A M E N T E

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

MAURO GUERRA VILLARREAL
C. DIPUTADO LOCAL

LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA
C. DIPUTADO LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
C. DIPUTADA LOCAL

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
C. DIPUTADA LOCAL

FÉLIX ROCHA ESQUIVEL
C. DIPUTADO LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL
C. DIPUTADO LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA
C. DIPUTADA LOCAL

DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA
C. DIPUTADA LOCAL

GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ REYES
C. DIPUTADO LOCAL

FERNANDO ADAME DORIA
C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ
C. DIPUTADA LOCAL




AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA
C. DIPUTADA LOCAL



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL

ESTADO DE NUEVO LEÓN

P R E S E N T E .



El Diputado **Heriberto Treviño Cantú** y los Diputados Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 87 y 88, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

México, cada año es impactado por diversas emergencias o desastres tales como sismos, huracanes, inundaciones, incendios forestales, heladas, sequías, erupciones volcánicas, por mencionar algunos; afectando a millones de personas y dejando perdidas tanto de bienes y servicios, e impactando en la población de manera física emocional o psicológica.

Si bien, las personas que se enfrentan a un accidente o un evento catastrófico logran su recuperación de manera gradual; en algunas ocasiones, se requieren de una primera atención de apoyo psicológico inmediatamente al haberse suscitado el evento. Ante este tipo de situaciones, la mejor opción para atender al segundo grupo de personas, es la atención psicológica de primer contacto, ya que es la herramienta de aproximación que debe ser de uso más general y de mayor difusión.

Ante dichas situaciones de emergencia, desastres o accidentes; una de las primeras autoridades y quienes llega a tener el primer contacto con las personas que vivieron dichos eventos en el país, son los elementos de Protección Civil, quienes deben intervenir para rescatar a las víctimas de un terremoto, una inundación, un deslave o un accidente vial.

Por lo que, en aras de salvaguardar la integridad física de las personas y brindarles mayores herramientas a los agentes de protección civil es necesario que cuenten con conocimientos en atención psicológica; para que puedan brindar un apoyo adecuado a las víctimas y a sus familias, y a su vez cuidar de su propia salud mental. Ya que la atención psicológica oportuna puede ayudar a reducir el estrés, el trauma y el duelo, y a fortalecer la resiliencia y la recuperación de las comunidades.

Además, que cuenten con herramientas como la atención psicología puede beneficiar tanto a las víctimas como a los agentes de campo de protección civil, ya sea para:

- Identificar y manejar sus emociones, pensamientos y conductas ante las situaciones críticas.
- Desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo.
- Fortalecer su autoestima, autoeficacia y resiliencia.
- Prevenir el estrés postraumático, el agotamiento y el síndrome de desgaste profesional.
- Apoyar a las víctimas y a sus familias con empatía, respeto y asertividad.
- Buscar ayuda profesional cuando sea necesario.

Por lo que la presente reforma tiene como principal objetivo que las autoridades estatales y municipales, busquen que se propicie la capacitación en atención psicológica de primer contacto al personal operativo de protección civil, pues son ellos quienes tiene el primer contacto con las víctimas de hechos catastróficos, y quienes pueden brindarles empatía seguridad ante la situación que vivieron y están viviendo.

Para esto, es necesario que las autoridades estatales y municipales realicen convenios con dependencias públicas o privadas, para que se establezcan las líneas de acción mínimas que se deben brindar para la atención psicológica de primer contacto cuando se realicen las acciones de auxilio por parte de Protección Civil, permitiendo esto que se otorgue una ayuda psicológica temprana que pueda disminuir el daño psicológico que podrían sufrir las personas ante tales eventos.

Las modificaciones que se proponen se aprecian en el siguiente cuadro comparativo:

Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León	
DICE	DEBE DECIR
<p>Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:</p> <p>I. a III. ...</p> <p>IV a XIV. ...</p>	<p>Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:</p> <p>I. a III. ...</p> <p>III Bis. Atención psicológica de Primer Contacto. - es una aproximación enfocada en el contacto empático y seguridad de los afectados. Asume la existencia de una resiliencia natural en las personas y comunidades, que funge como motor de recuperación en todos los ámbitos, y describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está en sufrimiento y que puede necesitar ayuda.</p> <p>IV a XIV. ...</p>
(SIN CORRELATIVO)	<p>Artículo 6 Bis.- Las autoridades estatales y municipales a través de convenios con dependencias públicas o privadas propiciarán la capacitación en atención psicológica de primer contacto a todo el personal operativo de protección civil, tanto del sistema Estatal, como de los sistemas municipales de protección civil.</p>
<p>Artículo 57.- El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención.</p>	<p>Artículo 57.- El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física o psicológica de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención.</p>
<p>Artículo 58.- El Subprograma de Auxilio contendrá entre otros, los siguientes criterios:</p> <p>I. Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado;</p> <p>II. Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado; y</p> <p>III. Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios.</p> <p>(SIN CORRELATIVO)</p>	<p>Artículo 58.- El Subprograma de Auxilio contendrá entre otros, los siguientes criterios:</p> <p>I. Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la Administración Pública del Estado;</p> <p>II. Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado;</p> <p>III. Las líneas de acción mínimas para brindar la atención psicológica de primer contacto; y</p> <p>IV. Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios.</p>

Por lo anteriormente expuesto, es que propongo a someter a consideración del Pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. –Se reforma el artículo 57 y las fracciones I y III del artículo 58; se adicionan una fracción III Bis al artículo 2, un artículo 6 Bis y una fracción IV al artículo 58 todos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I. a III. ...

III Bis. Atención psicológica de Primer Contacto. - es una aproximación enfocada en el contacto empático y seguridad de los afectados. Asume la existencia de una resiliencia natural en las personas y comunidades, que funge como motor de recuperación en todos los ámbitos, y describe una respuesta humana de apoyo a otro ser humano que está en sufrimiento y que puede necesitar ayuda.

IV a XIV. ...

Artículo 6 Bis.- Las autoridades estatales y municipales a través de convenios con dependencias públicas o privadas propiciarán la capacitación en atención psicológica de primer contacto a todo el personal operativo de protección civil, tanto del sistema Estatal, como de los sistemas municipales de protección civil.

Artículo 57.- El Subprograma de Auxilio, integrará las acciones previstas a fin de rescatar y salvaguardar, en caso de alto riesgo, emergencia o desastre, la integridad física o psicológica de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Para realizar las acciones de auxilio se establecerán las bases regionales que se requieran, atendiendo a los riesgos detectados en las acciones de prevención.

Artículo 58.- El Subprograma de Auxilio contendrá entre otros, los siguientes criterios:

I. Los establecidos o estipulados en acciones que desarrollen las dependencias y organismos de la Administración **Pública** del Estado;

II. Los establecidos en mecanismos de concentración y coordinación con los sectores social y privado;

III. Las líneas de acción mínimas para brindar la atención psicológica de primer contacto; y

IV. Los establecidos en coordinación con los grupos voluntarios.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, NL., a junio del 2023


DIP. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



Año: 2023

Expediente: 17212/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. ING. OMAR SALINAS CAVAZOS.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE LEY PARA LA SUBROGACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A ESCUELAS PARTICULARES POR MERITO ACADÉMICO.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA DE LEY

= Anexa impresión de credencial de elector en 2-los folios simples

**H. Congreso del Estado de Nuevo León
SEPTUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA**



PROMOVENTE: Ing Omar Salinas Cavazos
CONSIDERANDO:

- Que el acceso a la educación de calidad es un derecho fundamental de todos los niños y jóvenes de nuestro país;
- Que es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto garantizar dicho acceso y generar las condiciones que permitan su realización plena;
- Que la educación puede y debe ser un medio para alcanzar una mayor equidad social y desarrollo económico;
- Que las empresas tienen un papel importante que desempeñar en este proceso, y pueden contribuir de manera significativa a la realización del derecho a la educación;
- Que existen beneficios tanto para las empresas como para los trabajadores y sus familias, y para la sociedad en su conjunto, cuando las empresas asumen un papel activo en la promoción de la educación;

POR LO TANTO, propongo la siguiente:

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS EMPRESAS

Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer un marco normativo que promueva la creación de espacios educativos dentro de las empresas para los hijos de los trabajadores.

Artículo 2. Las empresas que participen en este programa:

Serán reconocidas como empresas socialmente responsables (ESR), y serán elegibles para recibir beneficios gubernamentales, tales como exenciones fiscales, facilidades de trámites en los Municipios donde se encuentren ubicadas, y acceso a programas de capacitación gratuitos a través de la Secretaría del Trabajo Estatal.

Además podrán participar en el programa de guarderías en empresas promovido por la delegación del IMSS en el Estado a través de sus programas de subrogación del servicio o la devolución de cuotas relacionadas a los servicios de guarderías para la primera infancia.

Artículo 3. Los trabajadores beneficiarios de este programa podrán:

- a) Mejorar su economía familiar gracias a la provisión de una educación de calidad en las instalaciones de la empresa.
- b) Reducir su movilidad y gastos de transporte al tener los espacios educativos en el lugar de trabajo.
- c) Mejorar la relación familiar al disminuir el estrés asociado con el transporte y la logística de la educación de sus hijos.

Artículo 4. Los hijos de los trabajadores beneficiarios de este programa:

- a) Recibirán una educación de calidad en instalaciones adecuadas.
- b) Fortalecerán sus hábitos de estudio gracias a la consistencia del espacio y la proximidad a sus padres durante la jornada laboral.
- c) Tendrán la oportunidad de participar en actividades extracurriculares para complementar su educación.

Artículo 5. Esta ley contribuirá al medio ambiente al:

- a) Mejorar la movilidad y reducir la congestión del tráfico al minimizar los desplazamientos necesarios para llevar a los niños a la escuela.
- b) Reducir la contaminación asociada con el transporte escolar.

Artículo 6. El Estado se beneficiará al:

- a) Ahorrar recursos sustanciales al no requerir la construcción de nuevas aulas, permitiendo utilizar estos recursos para mejorar las existentes.
- b) Mejorar la movilidad en las ciudades al reducir la necesidad de transporte escolar.
- c) Incrementar el nivel educativo con el uso de programas de Inteligencia Artificial personalizados.

Artículo 7. Se deberá promulgar la reglamentación necesaria para la aplicación de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación.

Artículo 8. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, le solicito respetuosamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen.

a los 18 días del mes Julio del 2023



Atentamente,

Ing Omar Salinas Cavazos
Instituto Educare.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALINAS
CAVAZOS
OMAR
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA

ELECCIONES / COLECCIONES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B0055-46

EDMUNDO ROBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. JOSÉ DANIEL BORREGO GÓMEZ Y FRANCISCO GERARDO MARTÍNEZ MALO

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

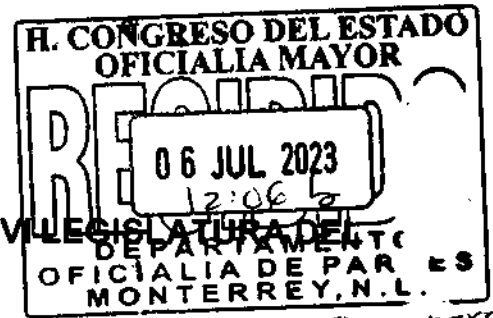
SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVII LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**



P R E S E N T E.-

Los suscritos ciudadanos **José Daniel Borrego Gómez y Francisco Gerardo Martínez Malo**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 58 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, presentamos **iniciativa de reforma por modificación la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad de expresión es considerada por múltiples teóricos como un elemento fundamental de toda democracia. En ese sentido hay múltiples organismos que buscan protegerla y fomentarla, como lo son por ejemplo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Unidos Americanos, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité Europeo de Derechos Sociales, solo por citar algunos.

Lamentablemente, hoy en día se ha abierto una brecha que en muchos casos puede limitar esta libertad de expresión más allá de lo razonable, se han ido aprobando una serie de reformas a diversas leyes que inhiben la crítica ciudadana contra funcionarios públicos, incluso cuando esta es legítima.

Esto es por sí mismo es un elemento que mina la democracia y restringe la libertad ciudadana de exigirle a sus gobernantes, los cuales bajo el ideal del contrato social, deben estar dispuestos a ser escrutados, evaluados y criticados por quienes gobiernan, entendiéndose esto por la vocación que debe implicar el servicio público.

Actualmente en nuestro país existen debates jurídicos, e incluso ordenamientos legales sobre hasta dónde debe limitarse la libertad de expresión, es por ello que es preciso revisar que dice la literatura de diversas organizaciones y latitudes, para poder construir una serie de ideas al respecto.

Para ampliar sobre el tema en comento podemos remitirnos a la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 19 a la letra indica:

2 Sin anexos

*"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."*¹

También podemos remitirnos a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su declaración de principios establece que:

"La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática"

"Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información."²

Podemos mencionar también lo que mencionan las directrices de la Unión Europea sobre la libertad de expresión Online y Offline: ³

"En Derecho internacional no existe una definición de "incitación al odio" universalmente aceptada. El término se utiliza habitualmente para hacer referencia a expresiones abusivas, insultantes, intimidatorias o acosadoras, o que incitan a la violencia, el odio o la discriminación contra personas o grupos que se caracterizan por una serie específica de factores. Según el Derecho internacional, solamente se exige a los Estados prohibir las formas más graves de incitación al odio, como abogar por el odio nacional, racial o religioso constitutivo de incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (artículo 20, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 4 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). Los gobiernos no deben abusar de la legislación sobre incitación al odio para desalentar a los ciudadanos a la hora de participar en debates democráticos legítimos de interés general."

"La libertad de opinión y de expresión abarca además el derecho a expresar y difundir información e ideas de toda índole que puedan transmitirse a otros,

¹ <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Art%C3%ADculo%2019,por%20cualquier%20medio%20de%20expresi%C3%B3n.>

² <https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm>

³ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/09_dh_directrices_expresion_es_.pdf

en cualquiera de sus formas, e independientemente del medio de comunicación. **Quedan también incluidas la información o ideas que las autoridades o una mayoría de la población pueden considerar críticas o controvertidas, inclusive las ideas u opiniones que “chocan, inquietan u ofenden”**

“Todo Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y deberá garantizar que este derecho queda recogido en la legislación nacional. La aplicación de toda legislación que restrinja el derecho a la libertad de expresión incumbirá a un órgano independiente de cualquier influencia indebida de tipo político, comercial u otro tipo de influencia, de manera que no haya arbitrariedad ni discriminación y que existan las debidas salvaguardias contra el abuso, incluida la posibilidad de impugnación y recurso contra su aplicación abusiva”

“Toda restricción de la libertad de expresión debe establecerse en la legislación, imponerse únicamente por los motivos que contempla el Derecho internacional sobre derechos humanos y debe atenerse a las pruebas estrictas de su necesidad y proporcionalidad.

Puede (pero no debe) aplicarse inconsistente y abusivamente la legislación para censurar las críticas y el debate sobre temas públicos, así como para fomentar un clima de miedo y de autocensura a los actores de los medios de comunicación y al público en general”

De todo lo anterior se puede resumir que:

- La libertad de expresión es un derecho universal
- La libertad de expresión es indispensable para la democracia
- Los funcionarios públicos pueden ser sujetos a mayor escrutinio y las leyes que penalizan las expresiones ofensivas contra ellos atentan contra la libertad de expresión
- Las limitaciones universalmente aceptadas a la libertad de expresión son aquellas que fomentan el genocidio, el odio racial o religioso, y la incitación directa a la violencia o el asesinato.
- Los gobiernos no deben abusar de la legislación que restringe la libertad de expresión para minar el debate democrático
- La libertad de expresión puede incluir expresiones que a algunos puedan resultarles ofensivas o chocantes (siempre y cuando no inciten al racismo, al odio, al asesinato o a la violencia

- No debe aplicarse la legislación para censurar las críticas hacia funcionarios públicos.

Habiendo revisado y resumido la literatura anterior, ahora es preciso hablar del contexto nacional y estatal en lo que refiere a legislaciones que pueden atentar contra la libertad de expresión, en este caso enfocándonos en aquella que llega a denominarse **"violencia política de género"**

En primer lugar hay que plasmar la definición del término anterior, la cual de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consiste en:

*"toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, **el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.**"*

"Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella."

De la definición anterior es para destacar lo que refiere a cuando algo "se dirija a una mujer por su condición de mujer"

Se refiere que esta violencia puede expresarse entre otras cuando alguien incurre en la siguiente conducta:

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

También se establece la siguiente conducta, la cual en su redacción deja abiertas un montón de interrogantes debido a la subjetividad de la misma

"Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio

de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales”

Posteriormente también se define el concepto de Violencia Mediática la cual se ejerce cuando se incurra en:

“Cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad”

De todo lo anterior puede verse que las mujeres, debido a su condición de desventaja histórica frente a los hombres en materia política, gozan de una serie de protecciones encaminadas a proteger sus derechos.

Todo esto es válido y valioso, sin embargo la redacción y la aplicación en la vida real de la ley, hacen que esto a veces pueda ser subjetivo. Se entiende que este estrictamente prohibido decir algo como “Esa mujer no sabe hacer nada, un hombre tiene que guiarla” o algo como “Pobrecita no tiene capacidad por ser mujer”

Sin embargo y específicamente en el caso de las servidoras públicas, ¿Qué pasa si se dice algo como “no tiene capacidad” sin hacer alusión a su condición de mujer?

Lo ambiguo de las redacciones plasmadas anteriormente, hacen que la afirmación quede peligrosamente en el apartado de violencia política de género, a pesar de que no se está haciendo alusión a una condición de mujer, y se está haciendo por citar un ejemplo una crítica a su función como servidor público y no como mujer”

En el pasado se han utilizado incluso etimologías inexistentes, para sancionar por violencia política de género a ciudadanos que estaban efectivamente criticando una labor no como mujer sino como funcionaria pública.

Si alguien dice algo como “este hombre no tiene capacidad para ser diputado” no hay ninguna sanción, pero si alguien dice “esta mujer (porque la persona sea una mujer y se identifique como mujer y entonces debe llamársele mujer) no tiene capacidad para ser diputada” si puede haber sanción, a pesar de que la única razón de que en la oración aparezca la palabra mujer en este caso, es porque la persona en cuestión es una mujer.

Bajo esa premisa si una funcionaria no supera elementos de transparencia, o no acredita conocimientos sobre la materia a su cargo, o experiencia sobre

la misma, ¿Ya no se le puede desacreditar no por ser mujer sino por su falta de capacidad?

Eso es a todas luces algo que mina la libertad de expresión y peor aún el derecho de los ciudadanos de exigir a sus gobernantes.

Es por ello que la presente iniciativa busca proponer que se reforme la fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para agregar una salvedad específica a lo que se debe considerar como violencia política de género en el caso de las servidoras públicas.

A continuación se plasma dicha salvedad

“En materia de violencia política de género, no se considerara como tal o como calumnia, difamación, injuria o daño a la dignidad o al autoestima, las expresiones que sean relativas o relacionadas al trabajo que una mujer ejerce en su función pública, y que no incluyan de manera explícita una situación donde se establezca que un hombre es superior a una mujer, garantizando así la libertad ciudadana de expresarse sobre el desempeño de quienes les gobiernan

Al agregar esta salvedad se seguirá respetando que no deban de permitirse frases que fomenten los estereotipos de género, pero que los ciudadanos si puedan hacer expresiones de crítica, siempre y cuando lleven de por medio una relación directa con el desempeño de la mujer en cualquier cargo de servidora pública o representante popular.

Esto porque quien aspira a ser servidor público o en este caso servidora pública, debe entender que es algo que se hace por vocación, y que es un tipo de trabajo en el que la naturaleza misma de la democracia hace que estén sujetos a escrutinio y a evaluación y crítica por parte de la ciudadanía.

La presente iniciativa no altera ninguna otra de las conductas tipificadas, y lo único que busca es que las personas puedan emitir críticas aunque estas sean de manera fuerte pero con ciertas limitaciones a los servidores públicos

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma por modificación la fracción VI del artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I al VI...

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

A - U...

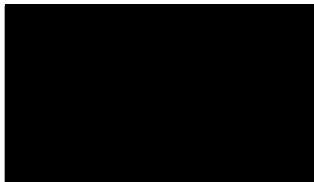
En materia de violencia política de género, no se considerara como tal o como calumnia, difamación, injuria o daño a la dignidad o al autoestima, las expresiones que sean relativas o relacionadas al trabajo que una mujer ejerce en su función pública, y que no incluyan de manera explícita una situación donde se establezca que un hombre es superior a una mujer, garantizando así la libertad ciudadana de expresarse sobre el desempeño de quienes les gobiernan, ejercen cargos de representación popular o laboran en la función pública.

La violencia política contra las mujeres en razón de género se sancionará en los términos establecidos en la legislación electoral, penal y de responsabilidades administrativas.

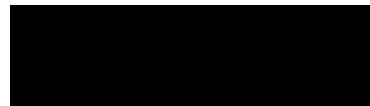
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE



Francisco Gerardo Martínez Malo



José Daniel Borrego Gómez

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 6 DE JULIO DEL 2023





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☐

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono(s):

Núm. Ext.

Núm. Int.

Municipio:

Estado:

C.P.

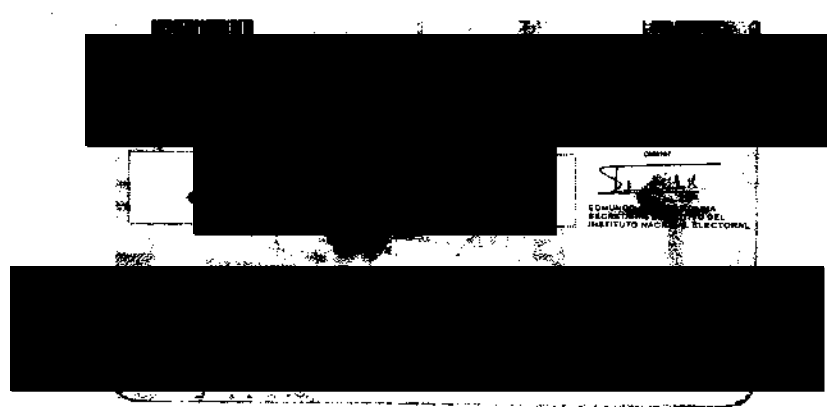
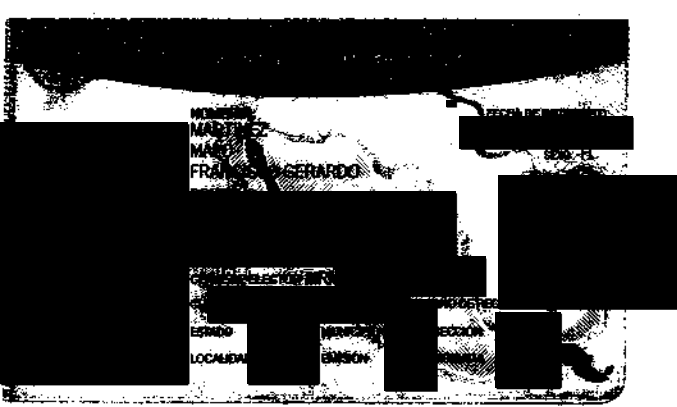
Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo:

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO



H. CONGRESO DEL ESTADO
OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 JUL 2023
DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARLAMENTARIOS
MONTERREY, N.L.

Año: 2023

Expediente: 17214/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. JOSÉ DANIEL BORREGO GÓMEZ Y FRANCISCO GERARDO MARTÍNEZ MALO

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 20 DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXV LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-



Los suscritos ciudadanos **José Daniel Borrego Gómez y Francisco Gerardo Martínez Malo**, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 58 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, presentamos **iniciativa de reforma por modificación al artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La libertad de expresión es considerada por múltiples teóricos como un elemento fundamental de toda democracia. En ese sentido hay múltiples organismos que buscan protegerla y fomentarla, como lo son por ejemplo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Unidos Americanos, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité Europeo de Derechos Sociales, solo por citar algunos.

Lamentablemente, hoy en día se ha abierto una brecha que en muchos casos puede limitar esta libertad de expresión más allá de lo razonable, se han ido aprobando una serie de reformas a diversas leyes que inhiben la crítica ciudadana contra funcionarios públicos, incluso cuando esta es legítima.

Esto es por sí mismo es un elemento que mina la democracia y restringe la libertad ciudadana de exigirle a sus gobernantes, los cuales bajo el ideal del contrato social, deben estar dispuestos a ser escrutados, evaluados y criticados por quienes gobiernan, entendiéndose esto por la vocación que debe implicar el servicio público.

Actualmente en nuestro país existen debates jurídicos, e incluso ordenamientos legales sobre hasta dónde debe limitarse la libertad de expresión, es por ello que es preciso revisar que dice la literatura de diversas organizaciones y latitudes, para poder construir una serie de ideas al respecto.

Para ampliar sobre el tema en comento podemos remitirnos a la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 19 a la letra indica:

*"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión."*¹

También podemos remitirnos a lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su declaración de principios establece que:

"La libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática"

"Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información."²

Podemos mencionar también lo que mencionan las directrices de la Unión Europea sobre la libertad de expresión Online y Offline: ³

"En Derecho internacional no existe una definición de "incitación al odio" universalmente aceptada. El término se utiliza habitualmente para hacer referencia a expresiones abusivas, insultantes, intimidatorias o acosadoras, o que incitan a la violencia, el odio o la discriminación contra personas o grupos que se caracterizan por una serie específica de factores. Según el Derecho internacional, solamente se exige a los Estados prohibir las formas más graves de incitación al odio, como abogar por el odio nacional, racial o religioso constitutivo de incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia (artículo 20, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 4 del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial). Los gobiernos no deben abusar de la legislación sobre incitación al odio para desalentar a los ciudadanos a la hora de participar en debates democráticos legítimos de interés general."

"La libertad de opinión y de expresión abarca además el derecho a expresar y difundir información e ideas de toda índole que puedan transmitirse a otros,

¹ <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights#:~:text=Art%C3%ADculo%2019,por%20cualquier%20medio%20de%20expresi%C3%B3n.>

² <https://www.cidh.oas.org/basicos/declaracion.htm>

³ https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/09_dh_directrices_expresion_es_.pdf

en cualquiera de sus formas, e independientemente del medio de comunicación. **Quedan también incluidas la información o ideas que las autoridades o una mayoría de la población pueden considerar críticas o controvertidas, inclusive las ideas u opiniones que “chocan, inquietan u ofenden”**

*“Todo Estado tiene la obligación de respetar el derecho a la libertad de opinión y de expresión, y deberá garantizar que este derecho queda recogido en la legislación nacional. **La aplicación de toda legislación que restrinja el derecho a la libertad de expresión incumbirá a un órgano independiente de cualquier influencia indebida de tipo político, comercial u otro tipo de influencia, de manera que no haya arbitrariedad ni discriminación y que existan las debidas salvaguardias contra el abuso, incluida la posibilidad de impugnación y recurso contra su aplicación abusiva”***

“Toda restricción de la libertad de expresión debe establecerse en la legislación, imponerse únicamente por los motivos que contempla el Derecho internacional sobre derechos humanos y debe atenerse a las pruebas estrictas de su necesidad y proporcionalidad.

Puede (pero no debe) aplicarse inconsistente y abusivamente la legislación para censurar las críticas y el debate sobre temas públicos, así como para fomentar un clima de miedo y de autocensura a los actores de los medios de comunicación y al público en general”

De todo lo anterior se puede resumir que:

- La libertad de expresión es un derecho universal
- La libertad de expresión es indispensable para la democracia
- Los funcionarios públicos pueden ser sujetos a mayor escrutinio y las leyes que penalizan las expresiones ofensivas contra ellos atentan contra la libertad de expresión
- Las limitaciones universalmente aceptadas a la libertad de expresión son aquellas que fomentan el genocidio, el odio racial o religioso, y la incitación directa a la violencia o el asesinato.
- Los gobiernos no deben abusar de la legislación que restringe la libertad de expresión para minar el debate democrático
- La libertad de expresión puede incluir expresiones que a algunos puedan resultarles ofensivas o chocantes (siempre y cuando no inciten al racismo, al odio, al asesinato o a la violencia

- No debe aplicarse la legislación para censurar las críticas hacia funcionarios públicos.

Habiendo revisado y resumido la literatura anterior, ahora es preciso hablar del contexto nacional y estatal en lo que refiere a legislaciones que pueden atentar contra la libertad de expresión, en este caso enfocándonos en aquella que llega a denominarse **"violencia política de género"**

En primer lugar hay que plasmar la definición del término anterior, la cual de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia consiste en:

*"toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, **el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.**"*

"Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella."

De la definición anterior es para destacar lo que refiere a cuando algo "se dirija a una mujer por su condición de mujer"

Se refiere que esta violencia puede expresarse entre otras cuando alguien incurre en la siguiente conducta:

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus derechos;

También se establece la siguiente conducta, la cual en su redacción deja abiertas un montón de interrogantes debido a la subjetividad de la misma

"Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio

de un cargo político, público, de poder o de decisión, que afecte sus derechos políticos electorales”

Posteriormente también se define el concepto de Violencia Mediática la cual se ejerce cuando se incurra en:

“Cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atentan contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas, que impide su desarrollo y que atenta contra la igualdad”

De todo lo anterior puede verse que las mujeres, debido a su condición de desventaja histórica frente a los hombres en materia política, gozan de una serie de protecciones encaminadas a proteger sus derechos.

Todo esto es válido y valioso, sin embargo la redacción y la aplicación en la vida real de la ley, hacen que esto a veces pueda ser subjetivo. Se entiende que este estrictamente prohibido decir algo como “Esa mujer no sabe hacer nada, un hombre tiene que guiarla” o algo como “Pobrecita no tiene capacidad por ser mujer”

Sin embargo y específicamente en el caso de las servidoras públicas, ¿Qué pasa si se dice algo como “no tiene capacidad” sin hacer alusión a su condición de mujer?

Lo ambiguo de las redacciones plasmadas anteriormente, hacen que la afirmación quede peligrosamente en el apartado de violencia política de género, a pesar de que no se está haciendo alusión a una condición de mujer, y se está haciendo por citar un ejemplo una crítica a su función como servidor público y no como mujer”

En el pasado se han utilizado incluso etimologías inexistentes, para sancionar por violencia política de género a ciudadanos que estaban efectivamente criticando una labor no como mujer sino como funcionaria pública.

Si alguien dice algo como “este hombre no tiene capacidad para ser diputado” no hay ninguna sanción, pero si alguien dice “esta mujer (porque la persona sea una mujer y se identifique como mujer y entonces debe llamársele mujer) no tiene capacidad para ser diputada” si puede haber sanción, a pesar de que la única razón de que en la oración aparezca la palabra mujer en este caso, es porque la persona en cuestión es una mujer.

Bajo esa premisa si una funcionaria no supera elementos de transparencia, o no acredita conocimientos sobre la materia a su cargo, o experiencia sobre

la misma, ¿Ya no se le puede desacreditar no por ser mujer sino por su falta de capacidad?

Eso es a todas luces algo que mina la libertad de expresión y peor aún el derecho de los ciudadanos de exigir a sus gobernantes.

Es por ello que la presente iniciativa busca proponer que se reforme la fracción VI de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para agregar una salvedad específica a lo que se debe considerar como violencia política de género en el caso de las servidoras públicas.

A continuación se plasma dicha salvedad

“En materia de violencia política de género, no se considerara como tal o como calumnia, difamación, injuria o daño a la dignidad o al autoestima, las expresiones que sean relativas o relacionadas al trabajo que una mujer ejerce en su función pública, y que no incluyan de manera explícita una situación donde se establezca que un hombre es superior a una mujer, garantizando así la libertad ciudadana de expresarse sobre el desempeño de quienes les gobiernan

Al agregar esta salvedad se seguirá respetando que no deban de permitirse frases que fomenten los estereotipos de género, pero que los ciudadanos si puedan hacer expresiones de crítica, siempre y cuando lleven de por medio una relación directa con el desempeño de la mujer en cualquier cargo de servidora pública o representante popular.

Esto porque quien aspira a ser servidor público o en este caso servidora pública, debe entender que es algo que se hace por vocación, y que es un tipo de trabajo en el que la naturaleza misma de la democracia hace que estén sujetos a escrutinio y a evaluación y crítica por parte de la ciudadanía.

La presente iniciativa no altera ninguna otra de las conductas tipificadas, y lo único que busca es que las personas puedan emitir críticas aunque estas sean de manera fuerte pero con ciertas limitaciones a los servidores públicos

Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma por modificación el artículo 20 ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue:

ARTÍCULO 20 Ter.- La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas:

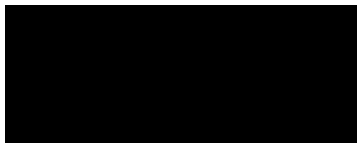
I a la XXII...

En materia de violencia política de género, no se considerara como tal o como calumnia, difamación, injuria o daño a la dignidad o al autoestima, las expresiones que sean relativas o relacionadas al trabajo que una mujer ejerce en su función pública, y que no incluyan de manera explícita una situación donde se establezca que un hombre es superior a una mujer, garantizando así la libertad ciudadana de expresarse sobre el desempeño de quienes les gobiernan, ejercen cargos de representación popular o laboran en la función pública.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial en el Diario Oficial de la Federación.

ATENTAMENTE



Francisco Gerardo Martínez Malo



José Daniel Borrego Gómez

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 6 DE JULIO DEL 2023



~Sin anexos~



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono(s):

Núm. Ext.:

Núm. Int.:

Municipio:

Estado:

C.:

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

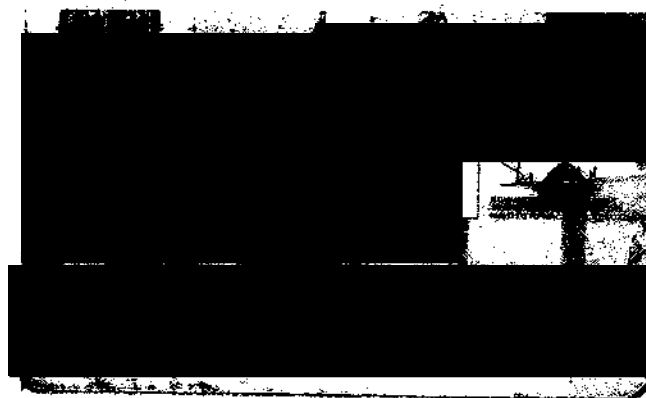
Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo:

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL INTERESADO

Francisco Gerardo Martínez Melo



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE Y DIP. SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTIZ, INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 28, 38 Y 40 DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

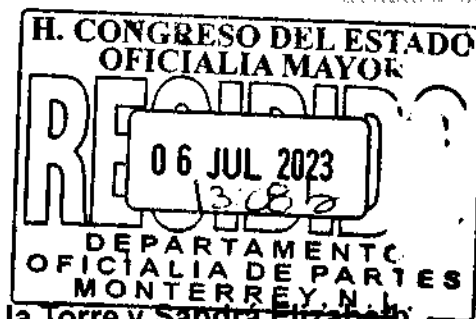
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIP. MAURO GUERRA VILLAREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las que suscriben **Diputadas Irais Virginia Reyes de la Torre y Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, las **Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Dip. Norma Edith Benítez Rivera, Dip. Tabita Ortiz Hernández, Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas, Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras, Dip. Eduardo Gaona Domínguez, Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Dip. Roberto Carlos Farías García y Dip. Héctor García, García**, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA POR MODIFICACIÓN EL ARTÍCULO 28 SEGUNDO PÁRRAFO Y 40; Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI Y VII Y UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 38, RECORRIÉNDOSE LOS ACTUALES; TODOS DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En el Estado de Nuevo León han ocurrido, más de una vez, afectaciones provocadas por la crisis climática a nivel mundial. Al respecto, podemos mencionar algunos ejemplos: el incendio de la Sierra de Santiago en el 2021 que consumió alrededor de 21 mil hectáreas; la crisis de agua potable que afectó a todas las familias del Estado; así como la reciente ola de calor con temperaturas de hasta 45° Centígrados.

Cabe destacar que la actual crisis climática se origina, entre otras, por las siguientes causas: la emisión de gases contaminantes como el Dióxido de Carbono, Óxido Nitroso u Óxidos de Azufre; la quema de combustibles fósiles destinada a la fabricación de cemento, hierro, acero y componentes electrónicos; la tala de árboles causando deforestación y el consumo de energías provenientes de fuentes no renovables.

Si bien es cierto que la responsabilidad de la actual condición ambiental no deviene únicamente de las actividades que se realizan en el Estado, también lo es que no

se puede ignorar que en nuestra entidad también se han cometido acciones perjudiciales para las condiciones climatológicas.

Algunos ejemplos de estas actividades dañinas al medio ambiente son la emisión de contaminantes provenientes de fuentes fijas, vehículos automotores y fabricas de la entidad, desperdicio y mal cuidado del agua potable y la deforestación causada por la invasión de las edificaciones a los hábitats naturales.

Con respecto a las edificaciones y proyectos urbanísticos, diversos medios de comunicación han dado a conocer que en reiteradas ocasiones se aprueban y desarrollan proyectos de este tipo sin contar con las medidas previstas por la normatividad aplicable que garanticen su sustentabilidad y cuidado medio ambiental.

En ese tenor, el sector de la construcción contribuye a 23% de la contaminación atmosférica, 40% de la contaminación del agua potable y 50% de residuos de vertedero según datos del World Watch Institute. Este sector, de acuerdo con la misma fuente, consume 40% del uso mundial de piedras brutas, grava y arena y 25% de la madera virgen por año. A ello se agrega los contaminantes propios para la obtención de estos recursos. Del mismo modo, es responsable de 39% de emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía y los procesos, así como la emisión de otros contaminantes como las partículas PM10 dispersa en la atmósfera, que resultan del cemento, la madera y la piedra.¹

En virtud de lo anterior, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) considera que las edificaciones eficientes en el consumo de energía representan una de las formas más rápidas y baratas para reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y así mitigar los efectos de la crisis climática.

En su cuarto informe de evaluación, el PICC señaló que alrededor de 30% de las emisiones mundiales previstas de gases de efecto invernadero en el sector de la edificación se podrán evitar para el 2030 con un beneficio económico neto. Según el citado informe, estas acciones también mejorarán la calidad del aire en interiores

¹ Archdesk (2021) *¿Cómo afecta la construcción al medio ambiente?* Obtenido de: <https://archdesk.com/es/blog/como-afecta-la-construccion-al-medio-ambiente/>

y exteriores lo que favorecerá el bienestar social, la calidad de vida y la seguridad energética de las zonas urbanas.²

Cabe mencionar que ya desde el 2013 el Gobierno Federal emitió la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-164-SCFI-2013, en la que reglamenta lo pertinente a las edificaciones sostenibles.

Entre las especificaciones que se mencionan en la referida Norma se establece que las edificaciones sustentables no deben estar ubicadas en la zona núcleo de Áreas Naturales Protegidas, Zonas de Riesgo, sobre formas geológicas y topográficas y en zonas de riesgo que puedan afectar acuíferos, zonas indudables, sobre manglares y humedales, Zonas Federales, entre otras condiciones³.

En ese sentido, el Estado de Nuevo León ha creado diversas normativas con el objetivo de garantizar que las edificaciones que se realicen en la entidad mantengan siempre la salvaguarda al medio ambiente de su localidad.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones existe suficiente evidencia que la actual legislación no es suficiente para garantizar la plena protección al medio ambiente. Ejemplos de ello son algunas edificaciones de particulares que incumplen con un Dictamen de Factibilidad de Agua, lo que provoca que la población aledaña al edificio presente carencias en el acceso al vital líquido.

Igualmente, las obras conocidas como Vía Zócalo, en el Barrio Antiguo de la ciudad, y San Jemo 360, en el Cerro de las Águilas, demuestran que aún queda pendiente trabajar sobre los procesos para la autorización de las edificaciones en el Estado pues ambas incumplen con los permisos que les son correspondientes, la primera de ellas provoca un daño a la zona cultural del Centro de Monterrey y la segunda representa un mal irreparable para la flora y fauna que se encuentra en las zonas naturales al interior de la Ciudad capital.

Del mismo modo, parte de esta responsabilidad normativa se les cede a las autoridades municipales las cuales tienen por responsabilidad reglamentar con

² Comisión para la Cooperación Ambiental (2023) *Edificación Sustentable en América del Norte*, Obtenido de: <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/31004/2335-green-building-in-north-america-opportunities-and-challenges-es.pdf>

³ Gobierno de México (2013) *NMX-AA-164-SCFI-2013*, Obtenido de: <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO3156.pdf>

respecto a la protección del medio ambiente al momento de autorizar las edificaciones dentro de su territorio. No obstante, la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León carece de estandarizar las condiciones mínimas, por las que podrán ser aprobadas las autorizaciones para las referidas obras.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa tiene por objeto reformar dicha ley para subsanar este vacío. Para ello, proponemos establecer criterios mínimos, que deberán observarse en los estudios de impacto ambiental. La reforma que proponemos se visualiza en el siguiente cuadro comparativo:

DICE	DEBE DECIR
<p>Artículo 38.- La evaluación del impacto ambiental se realizará mediante los estudios que al efecto presenten los interesados en llevar a cabo alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo anterior. Dichos estudios tendrán las modalidades del informe preventivo o manifestación de impacto ambiental.</p> <p>El Reglamento de esta Ley determinará los contenidos y características que deberán contener dichas modalidades. Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en los ordenamientos referidos a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban sujetarse al</p>	<p>Artículo 38.- ...</p> <p>El Reglamento de esta Ley determinará los contenidos y características que deberán contener dichas modalidades contemplando al menos los siguientes:</p>

<p>procedimiento de evaluación del impacto ambiental.</p>	<p>I. Ubicación georreferenciada del asentamiento</p> <p>II. Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente, que incluya la caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos poblacionales; las características socioeconómicas del asentamiento; su antigüedad promedio; la zonificación actual del suelo ocupado; el grado de consolidación; características de la infraestructura urbana; situación jurídica de la tenencia del suelo; características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial; captura de carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales, con otros asentamientos humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación;</p> <p>III. Delimitación física y superficie del polígono a ordenar, que incluya un levantamiento topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se especifiquen las manzanas, lotes, vías, caminos, derechos de paso y afectaciones, con la referencia de cada propietario o poseedor, así como la estructura vial que se propone;</p>
---	---

<p>Para los efectos a los que se refiere la fracción XI del Artículo anterior, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que se someta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la obra o actividad que corresponda, explicando las</p>	<p>IV. Identificación y descripción de impactos ambientales;</p> <p>V. Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto ambiental provocado;</p> <p>VI. Propuesta de abastecimiento servicios públicos procurando el uso tecnologías alternativas y que estos se instalen de forma subterránea, y</p> <p>VII. Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial.</p> <p>Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en los ordenamientos referidos a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.</p> <p>Para los efectos a los que se refiere la fracción XI del Artículo anterior, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que se someta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la obra o actividad que corresponda, explicando las</p>
---	--

razones que lo justifiquen con el propósito de que aquellos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 10-diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación.

Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a 20-veinte días hábiles, comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, el interesado deberá formular una nueva petición, y en caso de que la Secretaría no emita su respuesta a dicha solicitud, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Artículo 40.- Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 37 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación de impacto ambiental la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieren ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto

razones que lo justifiquen con el propósito de que aquellos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 10-diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación.

Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a 20-veinte días hábiles, comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, el interesado deberá formular una nueva petición, y en caso de que la Secretaría no emita su respuesta a dicha solicitud, dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Artículo 40.- Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 37 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación de impacto ambiental la cual deberá contener, **además de lo establecido en el artículo 38 de esta Ley**, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieren ser

de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.	afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.
--	--

Es por lo aquí expuesto que sometemos a consideración de esta Asamblea el siguiente:

DECRETO:

ÚNICO: Se reforma por modificación el artículo 28 segundo párrafo y 40; y se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII, y un tercer párrafo al artículo 38, recorriéndose los actuales; todos de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 38.- La evaluación del impacto ambiental se realizará mediante los estudios que al efecto presenten los interesados en llevar a cabo alguna de las obras o actividades señaladas en el artículo anterior. Dichos estudios tendrán las modalidades del informe preventivo o manifestación de impacto ambiental.

El Reglamento de esta Ley determinará los contenidos y características que deberán contener dichas modalidades contemplando al menos los siguientes:

I. Ubicación georreferenciada del asentamiento

II. Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente, que incluya la caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos poblacionales; las características socioeconómicas del asentamiento; su antigüedad promedio; la zonificación actual del suelo ocupado; el grado de consolidación; características de la infraestructura urbana; situación jurídica de la tenencia del suelo; características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua pluvial; captura de carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales, con otros asentamientos humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación;

III. Delimitación física y superficie del polígono a ordenar, que incluya un levantamiento topográfico en plano a escala 1:2500, en el que se especifiquen las manzanas, lotes, vías, caminos, derechos de paso y afectaciones, con la referencia de cada propietario o poseedor, así como la estructura vial que se propone;

IV. Identificación y descripción de impactos ambientales;

V. Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto ambiental provocado;

VI. Propuesta de abastecimiento servicios públicos procurando el uso tecnologías alternativas y que estos se instalen de forma subterránea, y

VII. Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial.

Asimismo, determinará las obras o actividades, que por su ubicación, dimensiones, características o alcances no produzcan impactos ambientales significativos, ni rebasen los límites y condiciones establecidas en los ordenamientos referidos a la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al ambiente en el Estado, y que por lo tanto no deban sujetarse al procedimiento de evaluación del impacto ambiental.

Para los efectos a los que se refiere la fracción XI del Artículo anterior, la Secretaría notificará a los interesados su determinación para que se someta al procedimiento de evaluación del impacto ambiental, la obra o actividad que corresponda, explicando las razones que lo justifiquen con el propósito de que aquellos presenten los informes, dictámenes y consideraciones que juzguen convenientes, en un plazo no mayor a 10-diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos dicha notificación.

Una vez recibida la documentación de los interesados, la Secretaría, en un plazo no mayor a 20-veinte días hábiles, comunicará si procede o no la presentación de una manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y el plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la Secretaría emita la comunicación correspondiente, el interesado deberá formular una nueva petición, y en caso de que la Secretaría no emita su respuesta a dicha solicitud, dentro de un plazo no

mayor a diez días hábiles, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación de impacto ambiental.

Artículo 40.- Para obtener la autorización a que se refiere el Artículo 37 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría, una manifestación de impacto ambiental la cual deberá contener, además de lo establecido en el artículo 38 de esta Ley, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieren ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

TRANSITORIOS:

PRIMERO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Iris Virginia Reyes de la Torre


Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

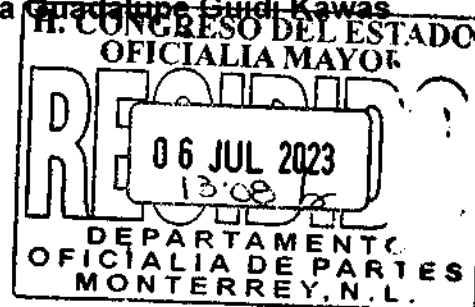
Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras

Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi-Kawas



Dip. Héctor García García

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): DESARROLLO SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INDÍGENAS

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GOMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por modificación el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social Para el Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con el Banco Mundial, el desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer lugar a las personas" en los procesos de desarrollo. La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la exposición a la violencia¹

El fin del desarrollo social va ligado a su concepto, el cual no es otro que promover la inclusión social de todas las personas, sin importar su condición social, su poder adquisitivo, su estado de salud, su origen étnico o su grupo etario.

En ese sentido existen multitud de esfuerzos internacionales, nacionales, estatales y municipales para generar este desarrollo. Se aplican a lo largo y

¹ <https://www.bancomundial.org/es/topic/socialdevelopment/overview>

ancho del globo toda una serie de políticas públicas, México no es la excepción.

Para profundizar un poco en los principios del desarrollo social en nuestro país, basta con remitirnos a las leyes al respecto. En el caso de la Ley General de Desarrollo Social, podemos encontrar que dicho tema se sustenta en 11 principios, los cuales son: libertad, justicia, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación, transparencia, perspectiva de género, e interés superior de la niñez.

De esos principios surgen los objetivos de la política nacional, los cuales son:

- Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y la exclusión social;
- Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución;
- Fortalecer el desarrollo regional equilibrado;
- Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social, y
- Promover el desarrollo sostenible y sustentable en el ejercicio de los derechos sociales

Finalmente, la ley declara como interés público los programas de educación obligatoria, de prevención de enfermedades transmisibles y de atención médica, programas dirigidos a personas en vulnerabilidad, alimentación infantil, abasto social de productos básicos, de vivienda digna, de generación de empleo y de infraestructura básica.

Ahora bien, antes de profundizar en lo que pretende la presente iniciativa, es importante revisar el marco legal estatal en materia de desarrollo social, en lo que refiere a principios, la ley estatal es una calca de la federal.

En lo que se refiere a objetivos se busca generar las condiciones para que las personas y la sociedad, en su conjunto, puedan satisfacer sus

necesidades humanas y sociales para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías políticas, económicas, sociales y culturales.

Además de buscar orientar los recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas y sociales para evitar la transmisión generacional de las condiciones de pobreza entre las personas, grupos sociales y comunidades mediante líneas de acción y programas particularmente orientados a desarrollar y aprovechar sus capacidades, a ampliar el acceso a un patrimonio físico, a la atención y seguridad de las instituciones del Estado, al acceso a redes sociales y comunitarias, y particularmente a la creación de mayores oportunidades de empleo y financiamiento para actividades productivas.

De todo lo que se ha mencionado a nivel estatal y nivel nacional es para destacar que en lo federal se toma en cuenta el combate a las enfermedades, pero en una connotación orientada a aquellas que tienen consecuencias en la salud física.

También se toma en cuenta en ambas leyes el que las personas en situación de vulnerabilidad reciban apoyo, y en fomentar políticas que permitan a todas las personas acercarse a una igualdad de oportunidades para su desarrollo individual. Sin embargo, ninguna de las dos leyes toma en cuenta de manera explícita el apartado de la salud mental.

La Organización mundial de la salud define a la salud mental como el estado de bienestar en que el individuo es consciente de sus propias capacidades, en donde puede afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a su comunidad.²

Cuando un individuo empieza a ver minada su salud en el rubro psicológico o psiquiátrico, sus capacidades para funcionar de manera integrada en su comunidad disminuyen, por lo que cuando esto ocurre en un grupo numeroso de personas, se vuelve un obstáculo para el desarrollo social comunitario³

²<http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/106111/Articulo%20salud%20mental.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

³ <https://academic.oup.com/heapol/article/30/2/163/620182>

Si consideramos que los problemas de salud mental van al alza en México, y que ello ayuda a incrementar los suicidios, los cuales también han registrado importantes aumentos, nos encontramos con un problema que inevitablemente se convierte en una situación que:

1. Reduce la igualdad de oportunidades
2. Impacta en el desarrollo económico de las comunidades
3. Merma la calidad de los núcleos familiares
4. Genera estigmas y discriminación

Todo esto va totalmente en contra de los principios que la Ley General de Desarrollo Social establece como pautas rectoras, por lo cual el no atender la salud mental, es permitir que se genere una situación que afecta el crecimiento de las personas, lo cual termina por impactar en las comunidades.

Para abonar a esto es preciso mencionar que las personas en situación de vulnerabilidad, reciben tratamiento de salud mental en menor cantidad y calidad que las personas con ingresos más altos, por lo cual estos individuos no solo tienen que lidiar con las dificultades de su clase social, sino con la problemática de la dificultad de acceder a tratamientos que ayuden a mitigar enfermedades que contribuyen a abrir la brecha entre los individuos.⁴

Además, está demostrado que en comunidades marginadas de África, Asia y América Latina, la depresión es mucho más frecuente que en comunidades de estratos altos, por lo que se puede ver una estrecha relación entre la vulnerabilidad y el riesgo de padecimientos de salud mental.⁵

La Organización mundial de la salud también ha destacado muchos vínculos causales bidireccionales plausibles entre la pobreza y la enfermedad mental. Los pobres son desproporcionadamente más vulnerables a las perturbaciones naturales y a los riesgos económicos, sociales, políticos y

⁴ Saraceno B Itzhak L Kohn -The public mental health significance of research on socio-economic factors in schizophrenia and major depression *World Psychiatry* 2005 vol. 4 (pg. 181)

⁵ Araya R, Rojas G Fritsch , R Acuna -Common mental disorders in Santiago, Chile: prevalence and socio-demographic correlates *British Journal of Psychiatry* 2001

sanitarios. Las personas pobres tienen más probabilidades de enfrentar eventos de vida amenazantes, humillantes y atrapantes.⁶

Es por todo ello que resulta apremiante que las políticas de desarrollo social, vayan encaminadas a la protección de la salud mental, sobre todo en sectores vulnerables.

Al revisar la ley estatal, se puede notar que algunas de las últimas reformas en la ley han buscado definir apartados específicos para los programas sociales, como pueden ser por ejemplo los encaminados a la creación de estancias infantiles, o la inclusión en tecnología a personas en situación de vulnerabilidad

Por ello es que consideramos que la misma ley debería tener más especificación en lo que refiere a la salud mental, garantizando así que los programas sociales que buscan mitigar la vulnerabilidad, se enfoquen en un tema que los estudios han demostrado tiene un impacto profundo en la marginación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma por modificación el artículo 7 de la Ley de Desarrollo Social Para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 7º. Para el cumplimiento de esta Ley, el Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría, deberá:

I al XI...

XII. Implementar programas sociales para garantizar la atención y tratamiento en problemas de salud mental entre las personas en situación de vulnerabilidad.

⁶ WHO *Mental Health and Development: Targeting People with Mental Health Conditions as a Vulnerable Group*

XIII. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 6 DE JULIO DEL 2023


Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: LA C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

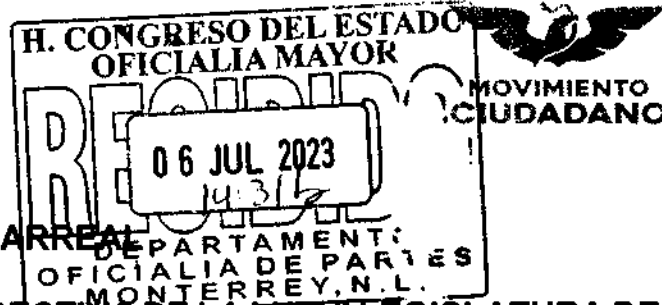
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 6,8 Y 70 ASÍ COMO POR ADICIÓN DE UN CAPÍTULO X BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GOMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por modificación de los artículos 6, 8 y 70, así como por adición de un capítulo X Bis, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, el Ministerio Público constituye una institución única e indivisible que ejerce sus atribuciones con respeto a las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.

Además tiene como fin dirigir la investigación de los delitos y brindar la debida atención y protección a las víctimas; perseguir a los posibles responsables de los mismos; ejercer ante los tribunales la acción penal y exigir la reparación de los daños y perjuicios; intervenir en asuntos del orden civil, familiar, penal y de adolescentes, en los casos en que señalen las leyes; efectuar las intervenciones

que le correspondan en materia de extinción de dominio y realizar las demás funciones que los ordenamientos jurídicos establezcan.¹

Se establece además que se organizará en una Fiscalía General que ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público, respeto a los derechos humanos y sus servidores públicos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez.

De los postulados anteriores, son para destacar que la institución debe investigar los delitos, apegarse a los derechos humanos y operar entre otros siguiendo el principio de eficiencia y profesionalismo.

Antes de profundizar respecto al párrafo anterior, es importante mencionar algunas estadísticas para robustecer los argumentos que motivaron la presente iniciativa.

Al revisar las cifras oficiales publicadas en el apartado de estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, es para destacar que hubo un incremento en la incidencia delictiva, en 8 de 9 delitos que refleja la numeralia.

Se presenta un resumen de la incidencia de delitos en comparación entre el 2020 y el 2022.

Delito	2020	2022	% de incremento
Robo a Casa	2527	4245	67.98
Robo a Persona	1625	2042	25.66
Robo de Vehículo	2549	3632	42.48
Cristalazo	144	213	47.91
Violencia Familiar	17940	22480	25.30
Lesiones	3848	5490	42.67
Violaciones	779	1027	31.83
Homicidio Doloso	914	1430	56.45

Ahora bien es también relevante mencionar el aumento poblacional que ha vivido Nuevo León en los últimos años, el cual del censo del 2010 al del 2020 registró un incremento de habitantes al pasar de 4 millones 653 mil 458 persona, a 5 millones 784 mil 442 personas, lo cual representa un aumento de 24.30%²

Asimismo, la tasa de crecimiento anual poblacional de acuerdo al mismo INEGI se ubica en un 2.3% anual, lo cual significa que cada año el estado aumenta su población en 115,668.

¹https://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_organica_de_la_fiscalia_general_de_justicia_del_estado_de_nuevo_leon/

² <https://datamexico.org/es/profile/geo/nuevo-leon-nl#:~:text=En%202020%2C%20la%20poblaci%C3%B3n%20en,19.8%25%20respecto%20al%20a%C3%B1o%20anterior.>

Al analizar las cifras anteriores, es más que evidente que Nuevo León enfrenta situaciones complejas, la primera es el aumento en las denuncias de casi todos los delitos, y el segundo es un fuerte y sostenido aumento de población.

Ante esta situación sería entendible que el número de elementos para atender e investigar las denuncias, debería también incrementarse de la mayor manera posible, esto si se quiere operar bajo los criterios de eficiencia y profesionalismo que establece la propia Ley Orgánica de la Fiscalía, sin embargo, existen fuertes indicios para considerar que esto no ha sido así. En primer lugar, al revisar el historial de convocatorias para los agentes investigadores en su momento solo se pudo hallar dos en los últimos 6 años, y al momento de la elaboración del presente texto, la página con el historial de las mismas de la fiscalía se encuentra caída.

← ↻ 🔒 fiscalianl.gob.mx/category/convocatorias/

★ Bookmarks 🔍 Snow - ZPac & Red... N <!-- appFC=URLIm... 📊 Estadísticas de la E... 🔄 Vimi

Server Error in '/' Application.

Runtime Error

Description: An application error occurred on the server. The current custom error settings for this application prevent the details of

Details: To enable the details of this specific error message to be viewable on remote machines please create a <customErrors> tag

```
<!-- Web.Config Configuration File -->
```

```
<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="Off"/>
  </system.web>
</configuration>
```

Notes: The current error page you are seeing can be replaced by a custom error page by modifying the "defaultRedirect" attribute of

```
<!-- Web.Config Configuration File -->
```

```
<configuration>
  <system.web>
    <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/>
  </system.web>
</configuration>
```

Por otra parte, al entrevistar a diversos integrantes de la propia Fiscalía estos han referido una serie de situaciones que se enumerarán a continuación y que relatan

una situación que compromete de manera grave la operación de la fiscalía y sus diversas unidades.

- El personal investigador tiene que adquirir sus propias municiones, a los agentes solo se les proporciona la primera caja y después corre por su cuenta.
- Los turnos de operación son excesivos llegando a superar las 16 horas en muchos casos, lo cual sin duda merma la capacidad operativa del individuo. Además, no se pagan horas extras.
- Las unidades de investigación tienen entre 8 y 15 agentes para atender los casos de todo el estado de Nuevo León, incluyendo el rezago, lo cual hace muy difícil que se pueda hacer un buen trabajo.
- Los trabajadores describen gastos innecesarios ajenos al de contratar y mantener personal como lo son remodelaciones innecesarias o prestaciones que no están contempladas en la ley.

Al revisar toda esta información, observar un incremento poblacional, un incremento de delitos para investigar y una falta de gasto operativo en las Fiscalías, se hace evidente que, para mejorar el trabajo de resolución de delitos, es fundamental que se garantice el presupuesto adecuado.

Ahora bien, es importante mencionar que al hacer un análisis breve de la entrega de presupuesto a la fiscalía destaca que, de acuerdo con lo plasmado en la Ley de Egresos de los últimos dos años, se puede observar un importante incremento de presupuesto al haber pasado de 3 mil 747 millones del 2022 a 3 mil 947 millones para el 2023.

Esto puede sonar muy positivo, sin embargo, al revisar la misma Ley Orgánica de la Fiscalía, se puede identificar que no hay ningún criterio que delimite el gasto a la adecuada operatividad de la institución. La Ley a la letra indica:

“ARTÍCULO 8. La Fiscalía General, es un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.”

“Contará con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto, determinar su organización interna y funcionamiento mediante el Reglamento Interno que emita. Podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que deberán ser suficientes para la atención de las funciones y adecuado cumplimiento de éstas conforme a lo establecido en esta Ley. El presupuesto de gasto corriente de la Fiscalía General no podrá reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. Sin

embargo, Congreso del Estado podrá modificar, por causa justificada, el monto presupuestado para el gasto de inversión. Su ejecución seguirá los principios de transparencia y rendición de cuentas”

Al leer el artículo se puede entender que el Fiscal General y los Fiscales anticorrupción y de delitos electorales tendrán total libertad para decidir el gasto, permitiendo así que quizá se gaste dinero en cosas que no son de la más alta urgencia o importancia. Es por ello que se necesitan establecer mecanismos que, sin violar la autonomía de la Fiscalía, al menos generen un cumulo de información y un contrapeso, que permita entender cómo se está gastando el siempre creciente presupuesto de la fiscalía.

Es por ello que en aras de mejorar la capacidad operativa de la fiscalía y entender de mejor manera el gasto de la misma que la presente iniciativa propone lo siguiente:

- Se incluye entre los criterios de la fiscalía, que el ejercicio del presupuesto **garantice la suficiencia de personal** en lo referente a agentes del ministerio público orientadores y agentes del ministerio público investigadores.
- Se crea un capítulo denominado **“Del informe sobre la suficiencia de personal de Agentes del Ministerio Público Orientadores e Investigadores”**, el cual establecerá la obligación de que la Fiscalía genere un informe anual en el que indique indiquen la cantidad de agentes del ministerio público orientadores e investigadores con los que disponen las unidades administrativas que dependan de ellos. El informe deberá presentarse desglosado por unidades. Además, deberá emitir un desglose en el que indique que monto de presupuesto se usa para contratar y mantener personal operativo.
- El informe también deberá contener además del número de agentes, el criterio que se usa para operar con dicho número.
- Una vez que se remita el informe, la comisión de justicia del Congreso del Estado, y el pleno del mismo, deberán emitir una opinión favorable o desfavorable respecto a la cantidad de agentes.
- Al recibir el informe del Congreso en caso de que la opinión sea negativa, la fiscalía deberá contestar un informe que indique los obstáculos para incrementar el nivel de personal y las medidas que se tomarán para combatir la insuficiencia presupuestal.
- También se deberá **garantizar que los turnos de los agentes sean en respeto a la Ley Federal del Trabajo**, se respete el pago de horas extras y que se

brinden las municiones y chalecos antibalas que requieran los agentes de manera permanente.

Estos mecanismos fomentaran la transparencia, para que la ciudadanía conozca en que se gasta el dinero de la fiscalía, además de que se generará un contrapeso que buscará asegurar que exista el suficiente personal operativo para que la investigación de denuncias opere con un verdadero enfoque profesional.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma por modificación de los artículos 6, 8 y 70, así como por adición de un capítulo X Bis, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

ARTÍCULO 6. La Institución del Ministerio Público en el Estado de Nuevo León, es indivisible y se organizará en una Fiscalía General que ejercerá sus facultades respondiendo a la satisfacción del interés público, respeto a los derechos humanos y sus servidores públicos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, **garantizando además la suficiencia de personal para cumplir con sus obligaciones.**

ARTÍCULO 8. La Fiscalía General, es un organismo autónomo del Estado, dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Contará con capacidad para decidir sobre la ejecución de su presupuesto, determinar su organización interna y funcionamiento mediante el Reglamento Interno que emita, **garantizando la suficiencia de personal para cumplir adecuadamente sus funciones.** Podrá definir y ejercer en forma autónoma sus partidas presupuestales conforme al presupuesto aprobado, que deberán ser suficientes para la atención de las funciones y adecuado cumplimiento de éstas conforme a lo establecido en esta Ley. El presupuesto de gasto corriente de la Fiscalía General no podrá reducirse en términos reales al aprobado en el ejercicio inmediato anterior. Sin embargo, Congreso del Estado podrá modificar, por causa justificada, el monto presupuestado para el gasto de inversión. Su ejecución seguirá los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Estará a cargo del Fiscal General, quien será el encargado de su conducción y desempeño, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normatividad aplicable.

Capítulo X Bis.

Del informe sobre la suficiencia de personal de Agentes del Ministerio Público Orientadores e Investigadores.

Artículo 60 Bis. El Fiscal General y los Fiscales especializados en Combate a la Corrupción y Delitos Electorales tendrán la obligación de remitir al Congreso del Estado, un informe anual en el que indiquen la cantidad de agentes del ministerio público orientadores e investigadores con los que disponen las unidades administrativas que dependan de ellos. El informe deberá presentarse desglosado por unidades.

Artículo 60 Bis I. El informe deberá contener además de la cantidad de agentes, el criterio bajo el que se ha determinado que se opere con dicho número de elementos, y qué porcentaje del presupuesto total que recibe la Fiscalía se utiliza para la contratación y mantenimiento del personal referido en el artículo anterior.

Artículo 60 Bis II. Una vez recibido el informe, el Congreso del Estado de Nuevo León deberá emitir y turnar al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción y al Fiscal Especializado en Delitos Electorales, en un plazo máximo de 60 días, opinión sobre si considera que el número de personal referido en este capítulo es suficiente para la operación de las fiscalía.

La opinión se generará mediante un dictamen que elaborará la comisión de Justicia, el cual tendrá que ser aprobado por el Pleno del Congreso del Estado.

Artículo 60 Bis III. En caso de que la opinión del Congreso del Estado sea negativa respecto a las suficiencias de personal, los fiscales referidos en el artículo anterior deberán en un plazo de 30 días a partir de la recepción de la opinión del poder legislativo, emitir un informe en el que indiquen los obstáculos para incrementar el nivel de personal y las medidas que tomarán para abatir la insuficiencia.

ARTÍCULO 70. Los servidores públicos de la Fiscalía General, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, tendrán los siguientes derechos:

I al VIII...

IX. Recibir permanentemente el equipo de trabajo sin costo alguno; especialmente en lo que refiere a municiones y chalecos antibalas.

X...

XI. Operar en turnos laborales que se apeguen a la Ley Federal del Trabajo y que respeten la dignidad humana, con absoluto apego al pago de horas extras cuando así lo indique la ley.

XII. Las demás que se determinen en esta Ley, el Reglamento Interno de la Fiscalía General y otras disposiciones normativas aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

MONTERREY, NUEVO LEÓN A JUEVES 6 DE JULIO DEL 2023



Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

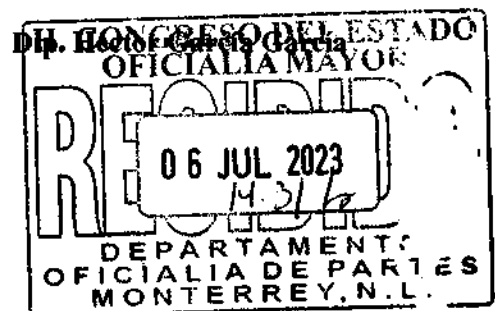
Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Fariás García



Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): PUNTOS CONSTITUCIONALES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .**



El suscrito **Diputado Héctor García García** e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 88 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a **presentar iniciativa en donde se reforma el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León**, al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), quienes realizan actividad física gozan de mejor salud y tienen menor riesgo de padecer enfermedades, en comparación con las personas inactivas.

Nuevo León ocupa el lugar 7 a nivel nacional por su número de habitantes contando con 5,784,442, donde 2,893,492 son mujeres, 2,890,950 son hombres y 806,079 persona cuentan con alguna discapacidad.

Las personas, en su mayoría, alguna vez en su vida han realizado actividades físicas o ejercicio de manera profesional, durante su tiempo libre o en los desplazamientos, por ejemplo, en paseos de pie o en bicicleta y mediante actividades ocupacionales, en tareas domésticas, en el contexto de las actividades diarias, recreativas, familiares y comunitarias.

Ahora bien, en México el derecho a acceder a la cultura física y deporte está respaldado por diferentes leyes y normativas que promueven la participación y el fomento de la actividad física y el deporte en la población.

Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce en el artículo 4 de la Constitución, el derecho de todas las personas a la cultura física y al deporte, promoviendo su práctica y fomentando la educación física en el sistema educativo.

Además, la Ley General de Cultura Física y Deporte, establece las bases y normas para el fomento, desarrollo y regulación de la cultura física y el deporte en México. Garantiza el acceso equitativo y la participación de todas las personas, independientemente de su edad, género, condición física o situación socioeconómica.

Al respecto, Ley General de Educación, establece la obligatoriedad de la educación física en el sistema educativo mexicano, tanto en escuelas públicas como privadas. Se busca que todos los estudiantes tengan acceso a una educación física de calidad como parte integral de su formación.

También contamos con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, es una herramienta de política pública que tiene como objetivo promover y desarrollar la cultura física y el deporte en el país. Busca garantizar la accesibilidad, inclusión y calidad en la oferta de programas y servicios deportivos para la población.

Es así como podemos afirmar que corresponde al Estado implementar programas y acciones para promocionar, fomentar y estimular la cultura física y el deporte en todas sus modalidades, es decir, individual o colectivo, de alto rendimiento, así como, el acceso al deporte a las personas con discapacidad, para promover la inclusión y el desarrollo integral.

Lo anterior tomando en consideración los múltiples beneficios que aportan cada uno de ellos, como lo son los deportes individuales, en donde los atletas compite por sí mismo, sin depender de un equipo, permitiendo a los deportistas enfocarse en su propio rendimiento y mejorar sus habilidades técnicas y tácticas de manera individual.

Así bien, los deportes colectivos donde los jugadores forman parte de un equipo y trabajan juntos para lograr un objetivo común, promoviendo la cooperación, la comunicación y el trabajo en equipo, además de desarrollar habilidades específicas de cada deporte.

El deporte de alto rendimiento, donde los deportistas van un paso más allá y convierten el deporte en su profesión ya que presentan un rendimiento excepcional, desarrollando habilidades como la actitud positiva y entusiasta, de organización y preparación, empatía, liderazgo y la capacidad de gestionar sus emociones.

En cuanto al acceso al deporte para personas con discapacidad, es fundamental garantizar la igualdad de oportunidades y eliminación de barreras que pueden limitar su participación, permitiéndoles disfrutar de los beneficios físicos y sociales del deporte.

De tal manera, resulta trascendental contemplar la creación de infraestructuras deportivas en espacios públicos, que no solo benefician a la salud física y mental de las personas, sino que también fortalezca las comunidades, promueva la inclusión social y fomente la conciencia ambiental, creando entornos más saludables para todos.

Así como también, la promoción de estilos de vida activos y saludables que ofrezcan beneficios importantes para el rendimiento físico y emocional de las personas, el estímulo de la participación comunitaria en actividades físicas y deportivas, así como brindar oportunidades de participación a las personas con discapacidad en modalidades adaptadas, promoviendo la inclusión y la igualdad en el ámbito deportivo

La práctica de alguna disciplina deportiva, sin duda, de manera positiva en toda la población al garantizar la inclusión, accesibilidad, promoción, fomento y estímulo de la actividad física y el deporte, tanto en el ámbito comunitario como educativo.

Lo anterior implica, el fomento a la práctica del deporte en todos los niveles educativos, a través de instalaciones y la infraestructura deportiva adecuadas, que desempeñan un papel crucial en el desarrollo y la promoción del deporte, fomentando la participación, mejorando el rendimiento y garantizando seguridad de los estudiantes.

En efecto, las instalaciones deportivas en las escuelas promueven la actividad física, el desarrollo de habilidades motoras, el rendimiento académico, los valores y habilidades sociales, las oportunidades de competición y recreación, así como la prevención y canalización de violencia, contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes y fomentar un ambiente escolar saludable y enriquecedor.

Así pues, el caso que nos ocupa, si las infraestructuras instaladas en los planteles educativos son apropiadas y amigables con el medio ambiente, además de promover la actividad física y el deporte en los estudiantes, fomentaran entre ellos la sustentabilidad, el respeto con el entorno, la eficiencia energética, el uso adecuado de los recursos naturales, entre otras.

Es decir, crear instalaciones deportivas en las escuelas que, no solo faciliten la práctica deportiva, sino que también contribuyan a la protección del medio ambiente y promuevan la responsabilidad ambiental entre los miembros de la comunidad educativa.

Para mayor comprensión de la iniciativa propuesta, es que agregamos el siguiente cuadro comparativo:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN

Texto vigente

Artículo 40.- Todas las personas tiene derecho a acceder a la cultura física, así como a la práctica del deporte a través de gimnasios y parques equipados adecuadamente. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

La educación, en sus diferentes niveles, deberá fomentar la práctica del deporte.

Propuesta

Artículo 40.- Todas las personas tienen derecho a acceder a la cultura física, así como a la práctica del deporte a través de **espacios públicos**, gimnasios y parques equipados adecuadamente. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo **al deporte individual o colectivo, de alto rendimiento y el acceso al deporte a las personas con discapacidad**, conforme a las leyes en la materia.

La educación, en sus diferentes niveles deberá fomentar la práctica del deporte **con instalaciones e infraestructura apropiadas y amigables con el medio ambiente**.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Artículo 40.- Todas las personas tienen derecho a acceder a la cultura física, así como a la práctica del deporte a través de **espacios públicos**, gimnasios y parques equipados adecuadamente. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo **al deporte individual o colectivo, de alto rendimiento y el acceso al deporte a las personas con discapacidad**, conforme a las leyes en la materia.

La educación, en sus diferentes niveles, deberá fomentar la práctica del deporte con **instalaciones e infraestructura apropiadas y amigables con el medio ambiente**.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, NL., a Julio de 2023



DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Año: 2023

Expediente: 17224/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 77 Y 82 DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL ARTÍCULO 276 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

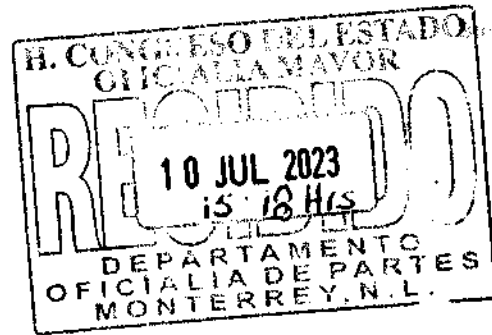
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MOVILIDAD Y A LA PRESUPUESTO

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**

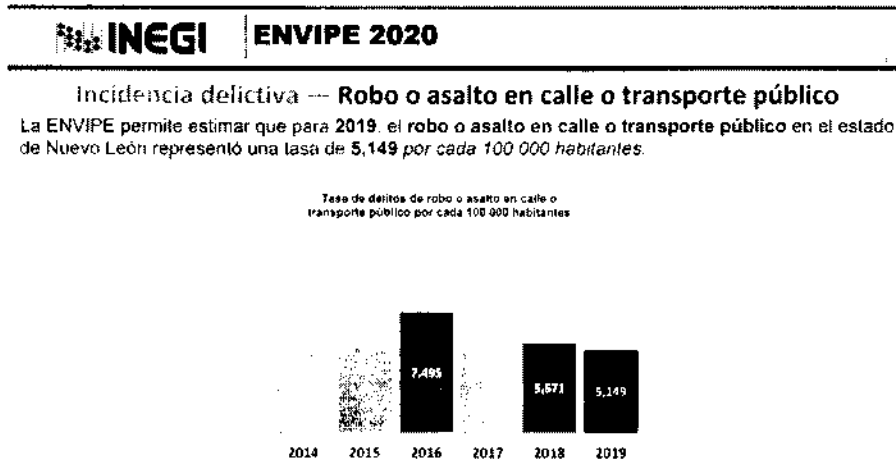


Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa de reforma por adición a los artículos 77 y 82 de Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y al artículo 276 párrafo segundo fracción I, por adición de un inciso c) a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

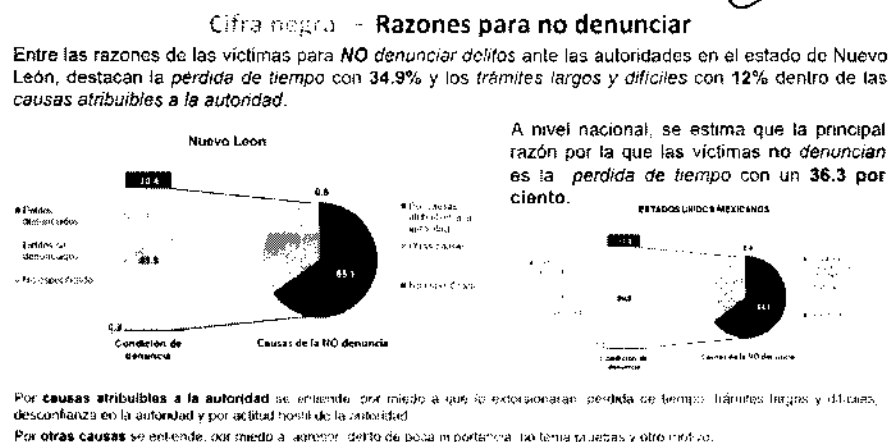
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde hace algunos años en nuestro Estado y particularmente en la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey, se ha dado una práctica reiterada de permisionarios y concesionarios del servicio de transporte público en su modalidad de taxis, sin decir con esto que las otras modalidades de prestación de este servicio escapen a la práctica reiterada de conductas irregulares, estas irregularidades, muchas veces terminan en hechos tipificados como delitos que afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos y que afecta patrimonial y moralmente a las víctimas. Según el informe rendido en la Encuesta Nacional

de Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) que realizó el INEGI en el año 2020, Nuevo León, tenía una tasa de incidencia delictiva de 5,149 por cada 100,000 habitantes, según se muestra en la siguiente estadística.



Otro dato relevante de esta incidencia delictiva es que, sin contar las irregularidades administrativas realizadas por los operadores del transporte público a la que someten a los usuarios, resulta que casi el 48% de los afectados no denunciaron porque consideran que es una pérdida de tiempo o por que los tramites son largos y difíciles. Se muestra estadística en detalles para su mayor comprensión.



Si bien, la anterior información que se muestra se refiere a delitos, la percepción de seguridad y la apatía de los ciudadanos por denunciar, son un fiel reflejo de lo que acontece en la voluntad del pueblo, lo cual se traslada proporcionalmente a las irregularidades en el transporte público. Ahora bien, lo anterior sirve de marco de referencia para abordar la problemática que acontece en el transporte público, particularmente nos referimos a los abusos cometidos por algunos trabajadores del volante, que en fechas de alta demanda de transporte, suelen incrementarse tales irregularidades, nos referimos al cobro de la tarifa por viaje en forma discrecional, es decir, el cobro de las tarifas de transporte, sin sujetarse a los dispositivos electrónicos que la ley les ordena tener a bordo de sus vehículos para realizar el cobro autorizado, dejando a los usuarios en un total estado de indefensión ante esta mala práctica en la prestación del servicio.

Los usuarios ante esta situación y por lo complicado que implica levantar una denuncia ante la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de estas obligaciones, opta por no denunciar y así fortalecer, sin quererlo, la cultura de la impunidad que tan arraigada se encuentra en la población. Ahora bien, no obstante que mencionamos una de las tantas irregularidades que se presentan en el transporte público, la propuesta que se presenta a través esta iniciativa pretende combatir también las irregularidades de choferes alcoholizados o que no tienen autorizado conducir el vehículo, que no regresan el cambio del pasaje que se cobra, que no respeta las señales de tránsito o los límites de velocidad y otras muchas más.

Con la propuesta de la reforma se dotará al usuario de una herramienta tecnológica eficiente y eficaz, que en tiempo real le permita obtener información de su interés en el momento de su viaje, que además le brinde la posibilidad de presentar, en unos cuantos clics, una denuncia por irregularidades en la prestación del servicio y adicionalmente que le brinde seguridad de que en caso de emergencia por salir de la ruta establecida o por algún ataque a su integridad física, tendrá a su alcance la posibilidad de que las autoridades lo rastren satelitalmente y lo ubiquen para prestarle el auxilio requerido en ese momento.

Paralelamente, en los términos de la normatividad aplicable en materia de mejora regulatoria, consecuentemente con el hecho de que la puesta en marcha de la presente iniciativa representará erogaciones patrimoniales no contempladas en el presupuesto de egresos, es necesario proveer de recursos a la Hacienda Pública Estatal a fin de llevar a cabo lo contemplado en la presente iniciativa, por lo que se propone una reforma a la Ley de Hacienda del Estado del Estado de Nuevo León para facultar el cobro de cinco cuotas, cantidad similar a la de obtención de constancias de registro vehicular, para la expedición de la constancia a que se refiere el Decreto objeto de la presente reforma.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. – Se reforma por adición de una fracción VI y un párrafo final al artículo 77 y adición de los párrafos tercero y cuarto del artículo 82 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 77. Los prestadores del SETRA garantizarán que sus vehículos cuenten por lo menos con:

- I. Antigüedad no mayor a diez años; con excepción de que los vehículos empleen energías limpias, para lo cual la Junta de Gobierno podrá otorgar una antigüedad mayor considerando la dictaminación que haga el Comité Técnico basado en el costo de la unidad y la vida útil de la misma;
- II. Placa de circulación vigente de vehículo particular;
- III. Tarjeta de circulación vigente de vehículo particular;
- IV. Póliza Vigente de seguro de vehículo con cobertura amplia que cubra a cada uno de los pasajeros que transporte, así como daños a terceros; y
- V. Verificación vehicular anual en los términos que les señale el Instituto.
- VI. Portar en lugar visible en el frente del vehículo y en las plazas traseras del mismo una o varias cédulas de identificación oficial que le será proporcionada**

por la autoridad competente, que permita al usuario acceder a ella fácilmente, misma que cuando menos tendrá la siguiente información a la vista de los usuarios.

- a).- Fotografía del Conductor.**
- b).- Número de identificación oficial proporcionado por el Instituto.**
- c).- Número de placas de circulación del vehículo.**
- d).- Características generales del vehículo, marca, modelo.**
- e).- Número telefónico para realizar reportes a través de las aplicaciones de teléfonos celulares.**
- f).- Código QR que identifique al conductor y al vehículo.**

El Instituto realizará las acciones necesarias para que el código QR tenga la funcionalidad de conectar al usuario a la plataforma del Instituto para que verifique la información contenida en la cedula que se muestra dentro del vehículo que aborda, permitiéndole al usuario levantar de una forma sencilla un reporte de irregularidades en la prestación del servicio. Además, la aplicación deberá contar con un botón de pánico para enlazar automáticamente el celular del usuario con las autoridades competentes, proporcionando la geolocalización del mismo en tiempo real.

Artículo 82. Los prestadores del Servicio de Taxis en el Área Metropolitana deberán contar con taxímetro o con sistemas gps o plataformas digitales que autorice el Instituto para el efecto del cálculo de los kilómetros recorridos, el tiempo y en consecuencia de la tarifa a pagar por parte del usuario.

El Instituto requerirá que los sistemas tecnológicos o plataformas digitales deban ser públicos y accesibles a través de aplicaciones móviles o de páginas de internet, mediante los cuales el usuario pueda identificar al conductor, el cálculo de su tarifa, la velocidad, la ruta a seguir y cualquier otro aspecto que de seguridad al usuario.

Adicionalmente el Instituto podrá implementar tecnologías que permitan el control de velocidad e itinerarios de los prestadores de servicio de taxis.

Además de los requisitos anteriores, los vehículos deberán portar en lugar visible en el frente del vehículo y en las plazas traseras del mismo una o varias cédulas de identificación oficial que le será proporcionada por la autoridad competente, que le permita al usuario acceder a ella fácilmente, misma que cuando menos tendrá la siguiente información a la vista de los usuarios.

- a).- Fotografía del Conductor.**
- b).- Número de identificación oficial proporcionado por el Instituto.**
- c).- Número de placas de circulación del vehículo.**
- d).- Características generales del vehículo, marca, modelo.**
- e).- Número telefónico para realizar reportes a través de las aplicaciones de teléfonos celulares.**
- f).- Código QR que identifique al conductor y al vehículo.**

El Instituto realizará las acciones necesarias para que el código QR tenga la funcionalidad de conectar al usuario a la plataforma del Instituto para que verifique la información contenida en la cédula que se muestra dentro del vehículo que aborda, permitiéndole al usuario levantar de una forma sencilla un reporte de irregularidades en la prestación del servicio. Además, la aplicación deberá contar con un botón de pánico para enlazar automáticamente el celular

del usuario con las autoridades competentes, proporcionando la geolocalización del mismo en tiempo real.

SEGUNDO.- Se reforma la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en su artículo 276, párrafo segundo, fracción I por adición de un inciso c) para quedar como sigue:

ARTÍCULO 276.- Se establecen los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el Instituto de Control Vehicular y el Instituto Registral y Catastral del Estado a través de la Dirección de Catastro:

Por los servicios prestados por el Instituto de Control Vehicular, se causarán los siguientes derechos:

I.- Por servicios de control vehicular, que se prestan:

a) ...

b) ...

c) Por la expedición de la cédula de identificación a que se refiere el artículo 77 fracción VI de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.....
5 cuotas

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- El Instituto de Control Vehicular tendrá un plazo de 90-noventa días naturales para proveer lo necesario para la observancia del presente Decreto.

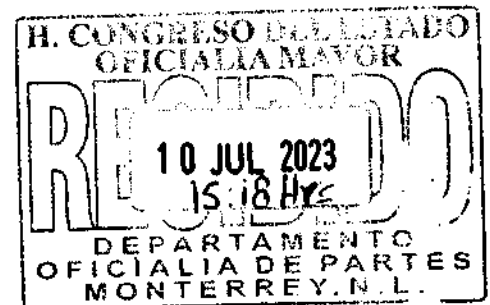
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por adición a los artículos 77 y 82 de Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y al artículo 276 párrafo segundo fracción I, por adición de un inciso c) a la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17225/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

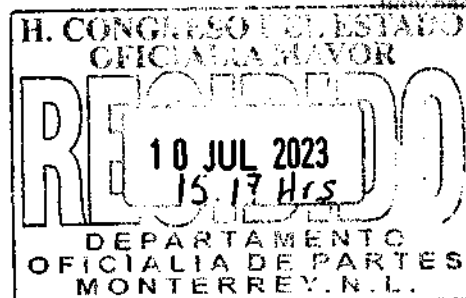
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Diputada Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa de reforma por modificación del artículo 26 y adición de tres párrafos a la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Registro Civil es una Institución de suma importancia para la sociedad, pues en el se deja constancia de los aspectos más importantes de las personas en sociedad, aspectos como el nacimiento, el matrimonio y la muerte se encuentran registrados ahí, como consecuencia de la trascendencia de esta información es que resulta fundamental otorgar certeza jurídica de la información ahí contenida, además de lo anterior, en el quehacer diario, frecuentemente se debe acreditar de forma fehaciente las condiciones de la capacidad y el entorno familiar de las personas tales como, edad, estado civil o la capacidad para ser sujetos de derechos y obligaciones.

Dicha información es muy valiosa tanto para los interesados, para las personas que bajo ciertas circunstancias interactúan con ellos y para el propio Estado.

Por tal razón el Estado debe brindar la certeza jurídica a la sociedad de que la información contenida en el Registro Civil es absolutamente confiable y se encuentra debidamente resguardada.

De esta forma, el registro civil se constituye como el ente de gobierno que tiene por finalidad dar publicidad a los hechos y actos que afectan al estado civil de los ciudadanos, participar en la celebración de ciertos actos y proporcionar títulos de legitimación del estado civil. Hechos tan importantes como el nacimiento; reconocimiento de hijos; adopción; matrimonio; ~~divorcio~~; defunción; inscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, la tutela, la pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar bienes; y actos del estado civil celebrados por mexicanos en el extranjero.

Por lo tanto, el Registro Civil es la institución pública en donde se inscriben de manera particular los hechos fundamentales relativos al ser humano, mediante la inscripción de los hechos vitales, se crea hasta su extinción, la persona jurídica individual con todos los actos, que en alguna forma modifican su "status social".

Ahora bien, es un hecho sabido que cada vez son más frecuente los casos de documentos del registro civil apócrifos, que se utilizan para cometer actos ilegales, documentos que en ocasiones aparentan ser impresos en papelería

oficial autentica, pero el contenido no corresponde con los registros respectivos o con hechos reales, es justo aquí en donde se deben establecer mecanismos de seguridad que disuadan a los delincuentes o a quienes hagan mal uso de la documentación oficial de realizar actos irregulares.

Muchos de estos actos irregulares de sustracción indebida de documentación oficial del registro público se deben a la falta de controles estrictos que permita identificar plenamente al servidor público responsable del resguardo de los documentos, de tal suerte que éste pueda ser identificado y sujeto a un procedimiento de responsabilidad o lo que resulte. En la actualidad, la documentación del registro público no tiene un registro confiable en el que se determine la cadena de custodia de los documentos, este control laxo estimula la practica de venta de documentos oficiales y daña la imagen de fiabilidad de esta Institución.

Es por lo que en aras de fortalecer esta noble institución se propone establecer métodos estrictos de control y asignación de responsabilidades para que los servidores públicos asuman las responsabilidades respecto de ellos y de su personal subordinado y actúen en consecuencia cuando adviertan una irregularidad en el manejo de la documentación oficial.

Se inserta tabla para mayor comprensión de la reforma:

Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León	
Vigente	Iniciativa
<p>Artículo 26.- Las actas del estado civil se asentarán por triplicado en formatos con características especiales denominados formas del registro civil, cuyo contenido estará determinado como lo señale el Código Civil, y el formato de la misma como lo establezca la Dirección.</p> <p>Sin correlativo</p>	<p>Artículo 26.- Las actas del estado civil se asentarán por triplicado en formatos con características especiales denominados formas del registro civil, cuyo contenido estará determinado como lo señale el Código Civil, y el formato de la misma como lo establezca la Dirección, los formatos deberán contener un código alfa numérico irrepetible para identificar al responsable de la custodia y el fin para lo cual fue utilizado.</p> <p>La Dirección General, a través de la unidad administrativa que designe, realizará los procesos correspondientes para registrar la custodia y control de los formatos codificados; para tal efecto la información deberá estar registrada en una base de datos que deberá contener, cuando menos, la siguiente información:</p> <p>a.- Nombre de la persona que recibe los formatos y el cargo que desempeña como servidor público.</p> <p>b.- Datos de Identificación y fecha de entrega de la documentación.</p> <p>c.- Número de formatos que recibe, especificando los números de códigos que le fueron conferidos.</p>

Sin correlativo	<p>d.- Consumo, uso y destino de los formatos, esta información se obtendrá de los informes que mensualmente rendirán todas las Oficialías en el Estado a la unidad administrativa designada.</p>
Sin correlativo	<p>El manejo y resguardo de los formatos codificados queda bajo la estricta responsabilidad del oficial del registro civil.</p>
Sin correlativo	<p>En caso de extravío o destrucción total o parcial de los formatos, el oficial del registro civil o quien lo sustituya en sus funciones, deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de los tres días hábiles siguientes al en que tenga conocimiento del hecho. En caso de inutilización total o parcial de los formatos codificados, así como en el supuesto anterior, en el mismo plazo, deberá presentar un aviso a la Dirección del Registro Civil.</p>
Las actas del estado civil asentadas en un formato no autorizado por la Dirección serán nulas, independientemente de las responsabilidades en que incurra el Oficial.	<p>Las actas del estado civil asentadas en un formato no autorizado por la Dirección serán nulas, independientemente de las responsabilidades en que incurra el Oficial.</p>

Por lo antes manifestado es que se propone a través de esta iniciativa de reforma, modificar el artículo 26 de la Ley del Registro Civil a fin de establecer métodos de resguardo, control y supervisión de documentación oficial.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se Reforma por modificación del párrafo primero; y por adición de los párrafos segundo, tercero y cuarto, recorriéndose el párrafo restante del artículo 26 de la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Las actas del estado civil se asentarán por triplicado en formatos con características especiales denominados formas del registro civil, cuyo contenido estará determinado como lo señale el Código Civil, y el formato de la misma como lo establezca la Dirección, **los formatos deberán contener un código alfa numérico irrepetible para identificar al responsable de la custodia y el fin para lo cual fue utilizado.**

La Dirección General, a través de la unidad administrativa que designe, realizará los procesos correspondientes para registrar la custodia y control de los formatos codificados; para tal efecto la información deberá estar registrada en una base de datos que deberá contener, cuando menos, la siguiente información:

a.- Nombre de la persona que recibe los formatos y el cargo que desempeña como servidor público.

b.- Datos de Identificación y fecha de entrega de la documentación.

c.- Número de formatos que recibe, especificando los números de códigos que le fueron conferidos.

d.- Consumo, uso y destino de los formatos, esta información se obtendrá de los informes que mensualmente rendirán todas las Oficialías en el Estado a la unidad administrativa designada.

El manejo y resguardo de los formatos codificados queda bajo la estricta responsabilidad del oficial del registro civil.

En caso de extravío o destrucción total o parcial de los formatos, el oficial del registro civil o quien lo sustituya en sus funciones, deberá presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público dentro de los tres días hábiles siguientes al en que tenga conocimiento del hecho. En caso de inutilización total o parcial de los formatos codificados, así como en el supuesto anterior, en el mismo plazo, deberá presentar un aviso a la Dirección del Registro Civil.

Las actas del estado civil asentadas en un formato no autorizado por la Dirección serán nulas, independientemente de las responsabilidades en que incurra el Oficial.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio del 2023.

Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro

Dip. Denisse Daniela Puente
Monterrey

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por modificación del artículo 26 y adición de tres párrafos a la Ley del Registro Civil para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17226/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN

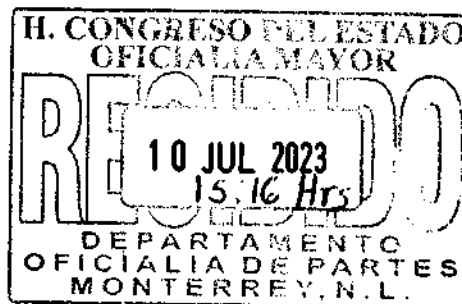
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa de reforma por adición a los Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La palabra seguridad proviene de la palabra latina, la cual deriva del adjetivo (de segura) que significa estar seguros de algo y libres de cuidados. El Estado, como máximo exponente del poder público y primer regulador de las relaciones en sociedad, no solo establece (o debe establecer) las disposiciones legales a seguir, sino que en un sentido más amplio tiene la obligación de crear un ámbito general de "seguridad jurídica" al ejercer el poder político, jurídico y legislativo.

La seguridad jurídica es, en el fondo, la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que, si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de aquellos. En resumen, la seguridad jurídica es la *certeza del derecho*, que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados.

En el año 2013 se promulgó la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, cuyo objeto es la seguridad jurídica a particulares afectados en su patrimonio por una actuación administrativa irregular de los Gobiernos Estatal o Municipal. Dicho ordenamiento encuentra su origen en el último párrafo del artículo 109 de la Constitución Política Federal que establece: "...la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes,"

Al efecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, artículo 15, último párrafo señala que: "cuando el Estado o sus Municipios, con de su actividad administrativa pública, causen un daño o perjuicio en los bienes de los particulares o afecten sus derechos, su responsabilidad será objetiva y directa, por lo que la persona afectada tendrá derecho a recibir una

indemnización, la cual se establecerá conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes"

Con la promulgación de la citada Ley, se regularon hechos que se suscitaban cotidianamente cuyas consecuencias no se encontraban expresamente reguladas en el marco jurídico del Estado. La responsabilidad administrativa tiene una doble función, pues además de erigirse como garantía a favor del particular para lograr el resarcimiento del perjuicio causado por el Estado, también se muestra como un "autocontrol" de la propia Administración Pública, ya que se entiende que el Estado actuará de la mejor manera posible para no incurrir en ningún tipo de responsabilidad.

Ahora bien, aunque la promulgación de la referida Ley ofreció un gran avance, consideramos que adolece de una falta de definición de conceptos básicos para brindar precisión y por ende mejor seguridad jurídica tanto a los particulares como a las Autoridades responsables.

En este punto es importante precisar que la Ley debe ser lo más clara posible, de modo que su interpretación sea sencilla, evitando lagunas legales o ambigüedades que pudieran resultar en interpretaciones tendenciosas que devengan nugatorio su objetivo; por lo tanto, la presente iniciativa redundará en seguridad jurídica para el gobernado al determinar los alcances y efectos de lo establecido en la norma.

La seguridad jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido, que se basa en la certeza del derecho, tanto en el ámbito de su publicidad como en su aplicación, y significa la seguridad conocer lo previsto como prohibido, ordenado o permitido por el poder público.

Derivado de lo anterior y a fin de subsanar lo que consideramos como una deficiencia de la Ley, es que se propone incorporar un glosario con las definiciones y alcances de los términos más importantes de esta materia, a fin de brindar seguridad jurídica en esta materia a las partes involucradas.

Enseguida se inserta una tabla comparativa para mayor comprensión de la propuesta de reforma.

Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León

Texto Ley vigente	Texto de Iniciativa
<p>Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por Estado, a los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado, los Tribunales Administrativos Estatales, organismos descentralizados y los organismos constitucionales autónomos.</p> <p>Sin correlativo</p>	<p>Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:</p> <p>I. Actividad administrativa irregular: Aquella que cause daño real y directo a los bienes y derechos de los particulares, que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento o causa legal de justificación para</p>

	legitimar el daño de que se trate y siempre que sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios públicos, que no se haya cumplido con los estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que se trate y que exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa irregular imputable a los entes públicos;
Sin correlativo	II. Caso fortuito: Todo acontecimiento natural previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual se pierde total o parcialmente el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación;
Sin correlativo	III. Daño emergente: Es la pérdida o menoscabo real y directa en los bienes o derechos de los particulares, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes Público;
Sin correlativo	IV. Daño patrimonial: Los daños reales y directos que se generan a los bienes o derechos de los particulares como consecuencia de la actividad administrativa irregular y que se traduce en daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral;
Sin correlativo	V. Documentación comprobatoria de gasto: Los documentos que acrediten una erogación y reúnan los requisitos previstos por las leyes fiscales ;

Sin correlativo	VI. Entes públicos: Son los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado, los organismos públicos autónomos, las dependencias, las entidades de la Administración Pública del Estado, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas en las que participen de forma mayoritaria el Poder Ejecutivo del Estado, así como cualquier otro Ente Público de carácter Estatal o Municipal;
Sin correlativo	VII. Incapacidad parcial permanente: Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar;
Sin correlativo	VIII. Incapacidad total permanente: Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida;
Sin correlativo	IX. Incapacidad parcial o total temporal: La pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo;
Sin correlativo	X. Municipio: El Ayuntamiento, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los Tribunales Administrativos Municipales y cualquier otro ente público de carácter Municipal;
Sin correlativo	XI. Perjuicio: La privación de cualquier ganancia lícita que habría obtenido la persona de no haberse

	realizado el hecho considerado como fuente de la responsabilidad;
Sin correlativo	XII. Indemnización: Es la reparación que en dinero o en especie hacen los entes públicos, por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada como consecuencia de su actividad administrativa irregular;
Sin correlativo	XIII. Lucro cesante: Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el particular, de no haber ocurrido el daño producido por la actividad administrativa irregular de los entes Públicos;
Sin correlativo	XIV. Órganos Autónomos: Aquellos órganos o entes a los que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, reconozca su autonomía;
Sin correlativo	XV. Perjuicio: La privación de cualquier ganancia lícita que habría obtenido la persona de no haberse realizado el hecho considerado como fuente de la responsabilidad;
Sin correlativo	XVI. Reparación: Resarcimiento que comprende daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral;
Sin correlativo	XVII. Responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos: Es aquella obligación de indemnización a cargo de los entes públicos que surge como consecuencia de su actividad administrativa irregular y que causa un daño real y directo en

	los bienes y derechos de los particulares;
Sin correlativo	XVIII. UMA: Unidad de Medida y Actualización.
No quedan comprendidos en ellos, los fedatarios públicos, los concesionarios, permisionarios o cualquier otra persona física o moral que en ejercicio de alguna patente, permiso o concesión, preste un servicio público.	(...)
Por Municipio se entenderá, el Ayuntamiento, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los Tribunales Administrativos Municipales y cualquier otro ente público de carácter Municipal.	Derogado

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO. Se Reforma por modificación el primer párrafo del artículo 3; se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII al artículo 3, recorriéndose el párrafo subsecuente; se deroga el último párrafo del artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

- I. **Actividad administrativa irregular:** Aquella que cause daño real y directo a los bienes y derechos de los particulares, que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento o causa legal de justificación para legitimar el daño de que se trate y siempre que sea consecuencia del funcionamiento irregular de la actividad o servicios públicos, que no se haya cumplido con los estándares promedio de funcionamiento de la actividad o servicio público de que se trate y que exista la relación causa efecto entre el daño ocasionado y la acción administrativa irregular imputable a los entes públicos;
- II. **Caso fortuito:** Todo acontecimiento natural previsible o imprevisible, pero inevitable, por virtud del cual se pierde total o parcialmente el bien o se imposibilite el cumplimiento de la obligación
- III. **Daño emergente:** Es la pérdida o menoscabo real y directa en los bienes o derechos de los particulares, como consecuencia de la actividad administrativa irregular de los Entes Públicos

- IV. **Daño patrimonial:** Los daños reales y directos que se generan a los bienes o derechos de los particulares como consecuencia de la actividad administrativa irregular y que se traduce en daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral;
- V. **Documentación comprobatoria de gasto:** Los documentos que acrediten una erogación y reúnan los requisitos previstos por las leyes fiscales.
- VI. **Entes públicos:** Son los Poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo del Estado, los organismos públicos autónomos, las dependencias, las entidades de la Administración Pública del Estado, los Ayuntamientos, los organismos descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas en las que participen de forma mayoritaria el Poder Ejecutivo del Estado, así como cualquier otro Ente Público de carácter Estatal o Municipal;
- VII. **Incapacidad parcial permanente:** Es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar.
- VIII. **Incapacidad total permanente:** Es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilitan para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.
- IX. **Incapacidad parcial o total temporal:** La pérdida de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.
- X. **Municipio:** El Ayuntamiento, las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, los Tribunales Administrativos Municipales y cualquier otro ente público de carácter Municipal.
- XI. **Perjuicio:** La privación de cualquier ganancia lícita que habría obtenido la persona de no haberse realizado el hecho considerado como fuente de la responsabilidad

- XII. **Indemnización:** Es la reparación que en dinero o en especie hacen los entes públicos, por la lesión a la esfera jurídica-patrimonial de la persona afectada como consecuencia de su actividad administrativa irregular;
- XIII. **Lucro cesante:** Es la privación de cualquier ganancia lícita que debiera haberse obtenido por el particular, de no haber ocurrido el daño producido por la actividad administrativa irregular de los entes Públicos;
- XIV. **Órganos Autónomos:** Aquellos órganos o entes a los que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León reconozca su autonomía.
- XV. **Perjuicio:** La privación de cualquier ganancia lícita que habría obtenido la persona de no haberse realizado el hecho considerado como fuente de la responsabilidad.
- XVI. **Reparación:** Resarcimiento que comprende daño emergente, lucro cesante, daño personal y daño moral, y;
- XVII. **Responsabilidad patrimonial de los Entes Públicos:** Es aquella obligación de indemnización a cargo de los entes públicos que surge como consecuencia de su actividad administrativa irregular y que causa un daño real y directo en los bienes y derechos de los particulares
- XVIII. **UMA:** Unidad de Medida y Actualización.

(...)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- El Instituto de Control Vehicular tendrá un plazo de 90-noventa días naturales para proveer lo necesario para la observancia del presente Decreto.

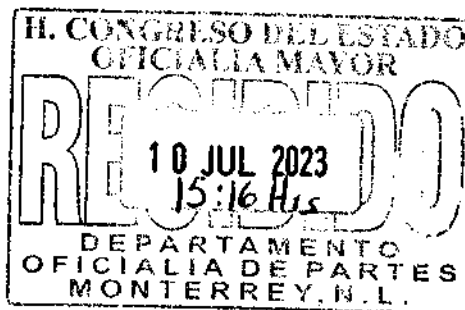
TERCERO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por adición a los Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17227/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 414 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y AL ARTÍCULO 1076 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

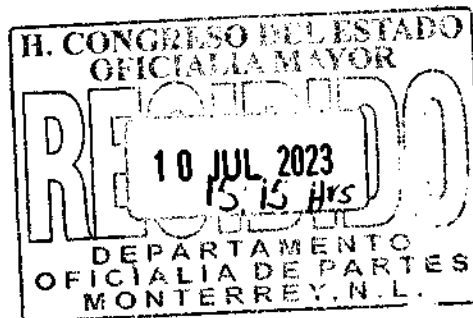
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa por la que se reforman por modificación del párrafo primero del artículo 414 BIS del Código Civil para el Estado de Nuevo León y fracción I del artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En nuestro país no existe uniformidad jurídica en cuanto a los criterios para la determinación del cónyuge responsable de la guarda y custodia de los menores en caso de divorcio o separación de los padres, están previstos en los códigos civiles y de procedimientos de cada una de las Entidades Federativas, en la mayoría de las veces se le da preferencia a la madre con respecto al padre respecto a los menores de diez años, salvo casos muy puntuales, cuando se considere que esto sea prejudicial para el menor.

Las legislaciones locales dan preferencia a la madre, atribuyéndole *a prior* la presunción de mayor aptitud para el cuidado de los hijos, no obstante que la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional de derechos humanos de carácter sectorial, del cual México es parte, establece como un derecho fundamental del niño la convivencia plena e ilimitada con ambos progenitores así como el derecho a que su opinión sea tomada en cuenta en todo proceso judicial en que el menor se vea involucrado; asimismo establece el interés superior del menor como principio rector en todas las decisiones judiciales, lo cual, evidentemente no es tomado en cuenta en los textos legales de la materia.

Sobre este tema es importante analizar los términos guarda y custodia referidos en nuestro ordenamiento civil y familiar; en su conjunto tiene un sentido reiterativo que expresa con énfasis y claridad el especial interés del legislador en salvaguardar al menor a efecto de lograr su sano desarrollo, buscando las mejores condiciones posibles para que éste se dé en forma armónica e integral.

Quien ejerce la guarda y custodia de un menor tiene a su cargo, por ende, la obligación de brindarle todos los cuidados, buen ejemplo y atenciones necesarios para su sano desarrollo, formación y educación, en un ambiente de respeto, cariño, seguridad, salud, libre de violencia, donde existan las mejores condiciones para ello, con el objeto de que en un momento dado y de manera paulatina pueda lograr su autosuficiencia e independencia, lo cual debe ser garantizado por la autoridad, conforme a lo dispuesto en las constituciones federal y local, el ordenamiento secundario y los tratados internacionales aplicables.

Originalmente figura jurídica de la guarda y custodia surge como una consecuencia necesaria de la filiación, componente de la patria potestad, que bajo condiciones ordinarias se ejerce de manera conjunta por ambos padres, al cohabitar bajo el mismo techo, conviviendo de manera directa y cotidiana con ellos.

Contrariamente, cuando los progenitores no están unidos en matrimonio o concubinato, o en general no hay cohabitación entre ellos, deberán convenir respecto de quien de los dos ejercerá la guarda y custodia del menor, si estos no lo hicieren, el juez de lo familiar resolverá lo más conveniente, debiendo fundar y motivar su resolución en el interés superior del menor.

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer tratado internacional de derechos humanos de carácter sectorial jurídicamente vinculante para el Estado Mexicano, su promulgación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; este instrumento jurídico incorpora toda una gama de derechos humanos de los niños.

Los principios fundamentales de la Convención son: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, el respeto por los puntos de vista del niño y su participación en la vida familiar y social. Todos estos derechos previstos en la Convención procuran el desarrollo armónico de los niños, respetando su dignidad humana y buscando en todo momento su bienestar físico y psicológico. Por su parte, el artículo 18 de la referida Convención claramente establece que ambos padres tienen

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y desarrollo del niño, textualmente señala:

"...Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres... la responsabilidad primordial de la crianza y desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño..."

En este mismo contexto, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, previene entre otras cosas lo siguiente:

"... La familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad..."

El artículo 9 establece que los Estados Parte velarán porque el niño no sea separado de sus padres en contra de la voluntad de éstos, con excepción de aquellos casos que sean justificados legalmente, conforme a las leyes aplicables al caso y previo el procedimiento respectivo, es decir, cuando ello sea estrictamente necesario, y siempre en interés del menor.

La finalidad teleológica de estos principios es que el menor tiene el derecho de convivir de manera plena e ilimitada con ambos progenitores, es decir, tanto con el padre como con la madre por igual, por lo tanto, no debe haber una

limitación injustificada para tal convivencia, ni en el texto legal ni en su aplicación individualizada.

En el Código Civil de Nuevo León se establece que: "Art. 414 BIS.- **La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijas o hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años**, a menos que hubiese sido sentenciada por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos."

Por su parte el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece en la fracción I del artículo 1076 que: "...**La custodia de las niñas, niños y adolescentes respecto de quienes ejercen la patria potestad; en este supuesto, cuando haya menores de doce años, éstos preferentemente deberán permanecer bajo custodia de la madre**, salvo los casos de excepción contemplados por el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes conforme a su edad y madurez..."

Dichos preceptos claramente discriminan al padre, únicamente por el hecho de ser varón, lo que nos parece violatorio del principio de igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer, consagrado en artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, al señalar que "...El varón y la mujer son iguales ante la ley..."

En el año 2012, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el sentido de que **no debe presumirse que la madre sea la más apta y capacitada para el otorgamiento de la guarda y custodia de los menores hijos, ni tampoco debe tomarse la decisión judicial de fijar la guarda y custodia basándose en prejuicios de género**, sino que el juzgador debe valorar en cada caso la dinámica familiar, el reparto de las funciones y roles entre el padre y la madre en el seno de la familia, dicha dinámica debe de tener un reflejo directo en la decisión del juzgador.

Quizá un argumento por el que se justifique dicha distinción entre hombres y mujeres sea el que anteriormente era la madre quien se dedicaba a cuidar y atender a los hijos, y sólo en raras ocasiones realizaba alguna otra actividad fuera del hogar, situación que hoy en día la situación ha cambiado: la familia ha evolucionado de tal manera que la mujer, al igual que el varón, se reparten las diversas actividades familiares, entre éstas la atención y el cuidado de los hijos, prueba de ello es que en la actualidad existe cada vez mayor presencia de las mujeres en la mayoría de las actividades fuera del hogar, universidades, oficinas, fabricas, hospitales y servicios, ya sean actividades remuneradas, lo cual es reconocido estadísticamente, en especial en nuestro Estado.

Por lo anterior, resulta inadmisibile que se tome una decisión judicial en base a prejuicios de género, discriminando al hombre sólo por ser varón, pues ello contradice el principio de igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, pilar fundamental del sistema democrático. En seguida se inserta, para mayor comprensión, un cuadro comparativo con las reformas propuestas al Código Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.

Código Civil para el Estado de Nuevo León	
Texto vigente	Iniciativa
Art. 414 BIS.- La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijas o hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren menores de doce años, a menos que hubiese sido sentenciada por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos.	Art. 414 BIS.- El juez ponderará cuál de los progenitores es el más apto para ejercer la custodia de los hijos menores de doce años, a menos que alguno o ambos de los progenitores hubiese sido sentenciado por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos.
...	...

**Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León**

Texto vigente	Iniciativa
<p>Artículo 1076.- ...</p> <p>I.- La custodia de las niñas, niños y adolescentes respecto de quienes ejercen la patria potestad; en este supuesto, cuando haya menores de doce años, éstos preferentemente deberán permanecer bajo custodia de la madre, salvo los casos de excepción contemplados por el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes conforme a su edad y madurez.</p> <p>II.- ...</p> <p>III.-...</p> <p>IV.- ...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 1076.- ...</p> <p>I.- La custodia de las niñas, niños y adolescentes respecto de quienes ejercen la patria potestad; en este supuesto, cuando haya menores de doce años, el juez ponderará cuál de los progenitores es el más apto para ejercer la custodia, debiéndose observar los casos de excepción contemplados por el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes conforme a su edad y madurez.</p> <p>II.- ...</p> <p>III.-...</p> <p>IV.- ...</p> <p>...</p>

Compañeros legisladores, desde ésta tribuna hemos visto, con profundo agrado, el avance jurídico en pro de la igualdad total entre hombres y mujeres, considerándolo un avance reivindicatorio, justo es, que paralelamente con dicha evolución, evolucione nuestro Ordenamiento, en especial, en atención al superior interés del menor, mandato constitucional y de orden social insalvable que nos obliga a reconsiderar la dinámica judicial en la determinación de la guardia y custodia de los menores.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.– Se reforman por modificación del párrafo primero del artículo 414 BIS del Código Civil para el Estado de Nuevo León y fracción I del artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Del Código Civil para el Estado de Nuevo León.

Artículo 414 BIS.- **El juez ponderará cuál de los progenitores es el más apto para ejercer la custodia de los hijos menores** de doce años, a menos que **alguno o ambos de los progenitores** hubiese sido **sentenciado** por incurrir en conductas de violencia familiar, sea de las contempladas en el Código Civil o en el Código Penal como delitos de violencia familiar o equiparable a la violencia familiar, exista orden de restricción dictada por autoridad competente, que se dedicare a la prostitución, al lenocinio, hubiere contraído el hábito de embriaguez, drogadicción o cualquier otra adicción que pusiere directa o indirectamente en riesgo la estabilidad física o emocional del menor, tuviere alguna enfermedad

contagiosa, o por su conducta antisocial ofreciere peligro grave para la salud o la moralidad de sus hijas e hijos.

...

Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Artículo 1076.- ...

I.- La custodia de las niñas, niños y adolescentes respecto de quienes ejercen la patria potestad; en este supuesto, cuando haya menores de doce años, **el juez ponderará cuál de los progenitores es el más apto para ejercer la custodia, debiéndose observar los** casos de excepción contemplados por el artículo 414 Bis del Código Civil para el Estado de Nuevo León. Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes conforme a su edad y madurez.

II.- ...

III.-...

IV.- ...

...

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2023.

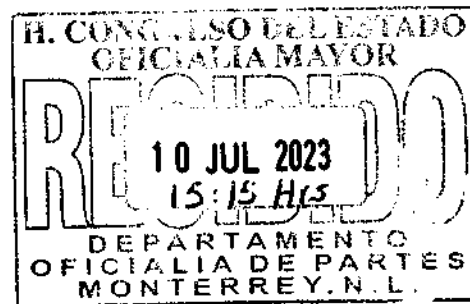


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro



Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforman por modificación del párrafo primero del artículo 414 BIS del Código Civil para el Estado de Nuevo León y fracción I del artículo 1076 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17228/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1077 BIS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

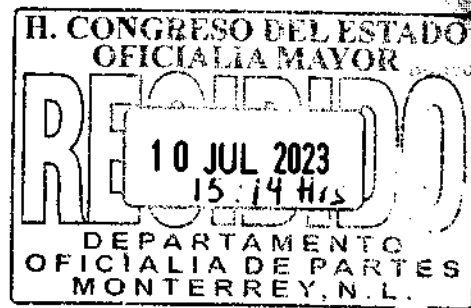
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente **iniciativa de reforma por modificación del artículo 1077; y adición de un artículo 1077 BIS del Código de Procedimientos Civil para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El índice de divorcios en nuestra entidad federativa, ha derivado en que los menores son privados de la convivencia de alguno de los progenitores, siendo la práctica habitual y más común que los jueces familiares concedan a una de los progenitores la custodia de los menores de edad y se asigne un régimen de convivencia para el progenitor no custodio, dicho régimen generalmente es de algunas pocas horas por un día a la semana, lo cual provoca en los menores una afectación a su estado emocional y de salud, muchas veces irreversible.

Debemos comprender que psicológicamente está demostrado que la separación de los padres provoca en los menores un sentimiento de inseguridad ante el porvenir, pues de un momento a otro la estructura sólida que ellos percibían como su hogar, se desvanece, más aún cuando existe disputa entre los progenitores por cuestiones de custodia y convivencia con los propios hijos.

Un hecho innegable es que los menores requieren para tener un sano desarrollo la convivencia, en forma constante, de ambos progenitores, quienes deben brindarles su apoyo, afín de garantizarles el acceso pleno a su desarrollo humano. A fin de destacar la importancia de la convivencia con los padres, enseguida se mencionan algunas de las afectaciones que pueden presentar los menores dependiendo de la edad en que se presente el suceso, debemos reseñar que las reacciones emocionales que se dan en los hijos no están predeterminadas y dependen de un número importante de factores variables, como la historia del niño y la manera y habilidad que tiene para enfrentarse a la nueva situación, lo cual tiene una influencia tremenda en el desarrollo integral del menor. Algunas de las reacciones que pueden aparecer dependiendo de la edad son:

De tres a cinco años:

- Se creen culpables por no haber hecho la tarea o no haber comido. Su pensamiento mágico los lleva a tomar responsabilidades tremendamente imaginarias.
- Temen quedarse solos y abandonados. Hay que recordar que en estas edades los padres constituyen el universo entero de los niños y que la

relación en la pareja es el medio en el que ellos están cuidados y mantenidos.

La edad más difícil es la de 6 a 12 años.

- Se dan cuenta de que tienen un problema y que duele, más no saben cómo reaccionar ante ese dolor.
- Creen que los padres pueden volver a juntarse y presionan o realizan actos que no llevan más que a un sentimiento de fracaso o a problemas adicionales en la pareja.

Los adolescentes experimentan:

- Miedo, soledad, depresión, y culpabilidad.
- Dudan de su habilidad para casarse o para mantener su relación.

Con la suscripción de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, México se compromete a la procuración del superior interés del menor, y reconoce que **la crianza de los menores recae generalmente en sus progenitores, siendo estos últimos los responsables directos de su sano desarrollo integral**, también, que la familia es el medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros, en particular de los niños, es decir, que el núcleo familiar permite al menor convivir de manera plena e ilimitada con ambos progenitores, forjando lazos afectivos tanto con el padre como con la madre, lo que es determinante para el sano desarrollo de la personalidad de los niños.

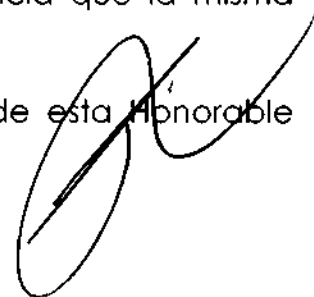
En tal tenor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció y resolvió que **"...la convivencia con ambos progenitores es fundamental para el desarrollo de los menores de edad; por lo tanto, en un escenario de ruptura familiar, los juzgadores deben garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias.** Ahora bien, la Primera Sala de la SCJN ha establecido que para tomar decisiones respecto a la guarda y custodia – y en general respecto a las convivencias de los menores con sus padres-, **debe utilizarse un estándar de riesgo, según el cual, debe tomarse la decisión que genere la menor probabilidad de que los menores sufran daño, de acuerdo con esto, a la larga existe un mayor riesgo de que la falta absoluta de contacto con alguno de los progenitores le ocasione más daños al menor que los que pudiera derivar del cambio de la guarda y custodia.** A pesar de la importancia de asegurar las convivencias, los tribunales no deben decretar el cambio de guarda y custodia sin antes haber intentado por otros medios que estas se lleven a cabo. Sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y alguno de los progenitores sigue sin presentar a los menores a las convivencias, el cambio de la guarda y custodia se vuelve necesario ya que es la única medida que puede garantizar que las convivencias se lleven a cabo..."

Ahora bien, una vez que ha quedado claro la trascendencia de la convivencia de los padres con los menores, resulta evidente que se debe garantizar a través del derecho positivo, el que los menores sufran la menor afectación posible ante un escenario adverso, como generalmente es el divorcio, por lo que se propone imponer a los jueces de la causa términos relativamente cortos a fin de que no se vea interrumpida la convivencia de los menores con ambos progenitores, es decir, que el juez resuelva a la brevedad posible el régimen de convivencia a fin

de restablecer lo antes posible la estabilidad emocional de los hijos. Además de establecer una serie de medidas tendientes a garantizar el pleno respeto al ejercicio del derecho de los menores a tener una convivencia con sus progenitores, en condiciones lo más parecidas a las que tendrían en un hogar con los padres unidos.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:



DECRETO

ÚNICO. – Se reforma por modificación del artículo 1077 y se adiciona el artículo 1077 BIS del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 1077.- El Juez, **dentro del plazo de 10 días hábiles** después de contestada la demanda y fijada la Litis, fijará un régimen de convivencia provisional con el demandante ya sea de manera libre, asistida o supervisada, atendiendo a las circunstancias del caso y al interés superior del menor involucrado, pudiendo negar dicha medida temporal en caso que exista un inminente riesgo a la integridad física, psicológica o emocional del menor.

La convivencia provisional cesará una vez que el Juez pronuncie la sentencia definitiva.

Artículo 1077 BIS.- El juez en todo caso deberá privilegiar los siguientes aspectos al momento de fijar el régimen de convivencia provisional y/o definitiva:

I.- En la medida de lo posible y si esto resulta conveniente para el bienestar de los menores, el juez deberá procurar que estos continúen con la convivencia y actividades que tenían antes de que se diera la separación de los progenitores.

II.- Deberá procurar en todo momento fijar un régimen de convivencia preferentemente en la modalidad libre, de tal forma que los menores convivan con el progenitor no custodio el mayor tiempo posible.

III.- Se deberá permitir que el progenitor no custodio participe en los traslados de los menores a las actividades académicas y extracurriculares, salvo que el juez considere que esto presenta algún tipo de riesgo para los menores, debiendo justificar debidamente su determinación.

IV.- En caso de que exista ofrecimiento formal de proporcionar actividades extracurriculares, atención médica adicional, terapias psicológicas o de otra índole a los menores por parte del progenitor no custodio, el juez deberá ponderar la situación integral de los menores buscando en todo momento el bienestar de los mismos y resolver en un término no mayor a 10 días hábiles.

V.- En caso de que el progenitor custodio se niegue a presentar a los menores para cumplir con el régimen de convivencia ordenado, el juez podrá prevenirlo para que cumpla con lo ordenado, apercibido de que en caso de continuar con

el desacato se podrá ordenar el cambio de guarda y custodia de los menores a fin de garantizar el interés superior del menor a convivir con ambos progenitores.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que reforma por modificación del artículo 1077; y adición de un artículo 1077 BIS del Código de Procedimientos Civil para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17229/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 294 BIS 1 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

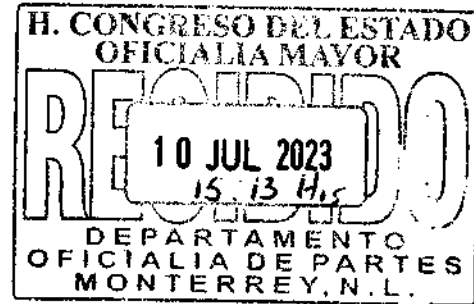
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa de reforma por adición del artículo 294 BIS 1 del Código Penal del Estado para el Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años se ha dado un fenómeno a nivel nacional y particularmente en Nuevo León, pues a causa de las crisis financieras, las situaciones que se han presentado a nivel global como la pandemia ocasionada por el Covid-19, entre otras, han generado daño a la economía de los países y la economía familiar no ha escapado a esta tendencia negativa.

A causa de esta situación, muchos ciudadanos perdieron sus empleos formales, a algunos otros se les rebajó el salario o tuvieron que realizar actividades económicas informales para sacar adelante a sus familias, esta situación particular provocó que muchos ciudadanos no pudieran hacer frente a sus obligaciones crediticias con instituciones financieras, casas comerciales, instituciones bancarias, etcétera.

Derivado de esta imposibilidad material de pago, los acreedores, a través de los departamentos internos de cobranza o mediante despachos externos iniciaron gestiones de cobro de cartera vencida, a lo que se le ha dado por denominar "Cobranza Extrajudicial", la cual, por no estar regulada derivó en una práctica constante de hostigamiento e intimidación, sin restricción alguna de las autoridades competentes.

Si bien es cierto que sería aceptable que por una ocasión se le haga saber al deudor las consecuencias legales de la falta de cumplimiento de sus obligaciones de pago, sin embargo, las llamadas en horas inadecuadas y varias veces al día no tienen como objeto el señalado con anterioridad, sino que el propósito es generar un hostigamiento a través de amenazas, insultos, difamaciones lo que provoca, muchas veces, afectaciones a la salud emocional de los deudores.

Las prácticas más comunes llevadas a cabo con estas gestiones de hostigamiento son, llamadas telefónicas varias veces al día, en horarios inoportunos, incluso durante la madrugada, con la intención evidente de molestar a los miembros de la familia, provocando innegablemente desequilibrios emocionales y daños a la dignidad de los deudores; llamadas telefónicas a terceros vinculados con el deudor, en las mismas condiciones y horarios que las antes descritas; amenazas de cárcel, embargos, y el chantaje es utilizado por la mayoría de las negociaciones comerciales e instituciones de crédito a través de sus áreas de cobranza extrajudicial, lo que vulnera la paz y en la tranquilidad de los ciudadanos, pues también es usual que se utilicen documentos o sellos falsos, notificaciones de acciones supuestamente judiciales sin la intervención de la autoridad jurisdiccional.

Es también común que despachos y bufetes de cobranza extrajudicial hagan mal uso de terminología procesal disfrazando de procedimiento ejecutivo sus amenazas para intimidar a deudores y a sus familias, e incluso a las personas que de buena fe han permitido usar su nombre como referencia en el procedimiento de otorgamiento de créditos.

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; y además dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

De lo anterior resulta evidente que nadie se encuentra facultado para hacer justicia por propia mano, principio constitucional que evidentemente ha sido transgredido con las prácticas a que nos hemos referido.

A su vez el artículo 16 constitucional establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, además se establece que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, sin embargo en estos despachos extrajudiciales se dan frecuentemente conductas y hechos que transgreden estas normas constitucionales y constituyen violaciones a los derechos humanos.

En efecto, en este tipo de cobranza se ven involucrados miles de deudores, avales y personas que aparecen como referencias, pues para el cobro de adeudos, se hace uso de medios ilícitos e ilegítimos en contra de los deudores,

haciéndose uso del engaño, la violencia, el hostigamiento y la intimidación con actitudes amenazantes y en muchas ocasiones con la utilización de documentación y sellos falsos; y también, usurpando funciones públicas o de profesión.

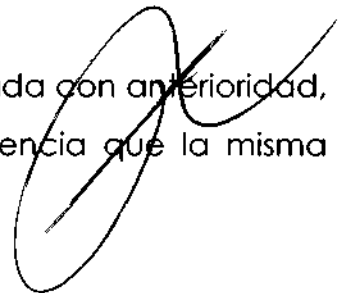
Ahora bien, algunas de las conductas señaladas en el párrafo anterior se encuentran actualmente tipificadas en el Código Penal para el Estado de Nuevo León, sin embargo, lo anterior no es óbice para que se regule en forma específica la práctica ilegal a que se refiere esta iniciativa, pues el referido ordenamiento legal contempla la solución al posible conflicto que se suscite cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales conexas que señalen sanciones diversas y lo resuelve con la institución jurídica denominada "reglas del concurso", que son reglas específicas que definen como se resolverán situaciones de conflicto.

En este punto es oportuno reflexionar sobre el concepto de cobranza extrajudicial ilegal, entendiéndose como tal, el uso de la violencia o el engaño, así como el hostigamiento o intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas por leyes federales, locales incluidos créditos de instituciones financieras, de instituciones de Crédito o de casas comerciales.

En este contexto resulta apremiante incorporar como una conducta tipificada como delito por el Código Penal del Estado de Nuevo León la cobranza extrajudicial ilegal, a fin de desalentar la utilización de esta práctica ilegal, de tal forma que cese la transgresión de los derechos fundamentales que toda persona tiene a la dignidad humana, la vida privada, la paz, la seguridad personal y la certeza jurídica.

Por lo antes manifestado es que se propone a través de esta iniciativa de reforma, incorporar como conducta tipificada por el Código Penal del Estado de Nuevo León la cobranza extrajudicial ilegal.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.



En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se Reforma por adición al artículo 294 BIS 1 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 294 BIS 1.- Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de cincuenta mil a trescientos mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal.

Se entiende por cobranza extrajudicial ilegal el uso de la violencia física, moral o psicológica; la intimidación ilícita, ya sea personalmente o a través de cualquier medio; hostigamiento telefónico o presencial al deudor o a terceros vinculados a éste; los requerimientos escritos que simulen resoluciones judiciales; la deshonra o descrédito provocado por dichas acciones, cuando sean utilizadas para requerir el pago de una deuda, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza.

Si el responsable de la conducta descrita en el párrafo anterior utiliza además documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentarán una mitad; si incurre en usurpación de funciones o de profesión, se aplicarán las reglas del concurso de delitos señalado en este Código.

Cuando las acciones antes descritas las lleve a cabo alguna institución de las reguladas en leyes federales, incluyendo créditos o financiamientos, que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, se estará a lo establecido en el Código Penal Federal.

No se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos cuando éstas sean jurídicamente posibles, siempre y cuando se notifiquen por cualquier medio por una sola ocasión.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2023

Mfra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro

Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor



La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por adición del artículo 294 BIS I del Código Penal del Estado para el Nuevo León.

Año: 2023

Expediente: 17230/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 227 DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

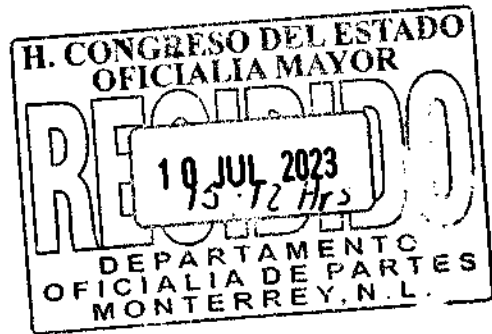
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa de reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en su artículo 227 fracción V**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La autonomía municipal es producto de una evolución constante que parte desde la concepción del municipio como una mera descentralización administrativa del poder del Estado, hacia constituirse en la expresión básica y angular del federalismo.

El aumento en las responsabilidades a cargo del municipio, hasta desembocar en el ayuntamiento como ente de gobierno autónomo e independiente de los Poderes Constituidos entraña a su vez la ampliación del espectro reglamentario a su cargo, es decir, a medida que mayores son sus atribuciones, sus facultades reglamentarias toman un papel más preponderante en su vida jurídico-institucional.

La Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León en vigor, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 31 de octubre de 2015, contenida en el Decreto número 215 emitido por esta Soberanía, precisamente abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del 28 de enero de 1991, lo que nos da una idea de los años que transcurrieron desde que, con la entrada en vigor el día 1o de enero de 2000, tomó vigencia la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante el cual se cambia de un régimen de descentralización administrativa a una forma de gobierno en el municipio.

Paralelamente con el desarrollo del municipio libre, las instituciones jurídico-políticas del Estado Mexicano y de nuestra Entidad Federativa han ido evolucionando con miras a una mejora constante, a la transparencia, rendición de cuentas y eficiencia gubernamental para la mejor justificación del quehacer del Gobierno: la procuración del bienestar general del individuo.

En tal tenor, mediante Decreto expedido por el Honorable Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha 18 de mayo de 2018 se expide la Ley General de Mejora Regulatoria, de observancia general en toda la República, cuyo objeto es establecer los principios y las bases a que deben sujetarse los tres órdenes de gobierno en materia de mejora regulatoria, es decir, a fin de lograr el perfeccionamiento de las regulaciones y la simplificación de los trámites y servicios que ofrece.

Al respecto, como parte del proceso de expedición y reforma reglamentaria a cargo de los municipios, como expresión de la republicana forma de gobierno, dicha Ley General contempla un período de consulta pública, mismo que no puede ser inferior a veinte días hábiles, en los términos del artículo 73 de la misma.

Ahora bien, conforme al Transitorio Quinto del mencionado Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, las Entidades Federativas tuvieron un plazo de un año a partir de su entrada en vigor para adecuar sus leyes al contenido de la Ley General, lo que desembocó en la expedición del Decreto Número 216, publicado el día 18 de enero de 2017 en el Periódico Oficial del Estado, por cuya virtud se establecen las disposiciones y principios rectores de la mejora regulatoria y la simplificación administrativa tanto de la Administración Pública Estatal como la Municipal y se establecen los mecanismos de coordinación entre las autoridades públicas y los sectores social y privado.

Al respecto, dicha Ley local establece en su artículo 32 que en todo procedimiento de expedición o de reforma reglamentaria, las autoridades municipales deberán establecer un período de consulta pública no menor a veinte días hábiles, en concordancia con lo dispuesto en la Ley General.

Es el caso, no obstante, que la Ley de Gobierno Municipal presenta una antinomia con lo señalado, puesto que en el artículo 227 fracción V se establece, en su parte conducente que "las iniciativas o reformas a los Reglamentos estarán disponibles para la consulta pública durante un plazo de 15-quince días hábiles, como mínimo" lo que, si bien no es taxativamente opuesto a lo señalado en la Ley General, sí contrasta con lo que en la misma se establece.

Por lo anterior, a fin de homologar lo dispuesto en la multi-citada Ley de Gobierno Municipal con la Ley General de Mejora Regulatoria, es necesario modificar el artículo en mención, a fin de igualar los plazos mínimos para la consulta pública.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

Por lo anteriormente expuesto atenta y respetuosamente me permito proponer a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por modificación el artículo 227 fracción V de la Ley de Gobierno Municipal para quedar como sigue:

ARTÍCULO 227.- Para la aprobación y expedición de los reglamentos municipales, el Ayuntamiento debe sujetarse a las disposiciones del presente Título y a las siguientes bases generales:

I. a IV. (...)

V. (...)

(...)

Las iniciativas o reformas a los Reglamentos estarán disponibles para consulta pública durante un plazo de **20-veinte** días hábiles como mínimo, en las oficinas de la autoridad municipal, así como en sus respectivos portales de internet, durante dicho plazo los interesados podrán presentar por escrito a las autoridades competentes, los planteamientos que consideren respecto de la iniciativa del Reglamento Municipal o reformas, los planteamientos deberán estar fundamentados y consignar domicilio para oír y recibir notificaciones.

VI. a IX. (...)

(...)

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

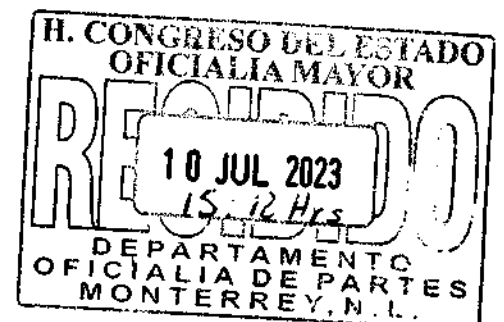
SEGUNDO.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los términos del artículo 149 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio del 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, en su artículo 227 fracción V.



Año: 2023

Expediente: 17231/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

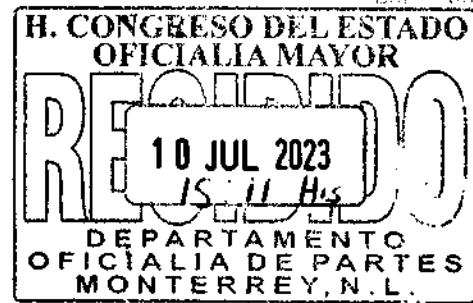
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 320 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa de reforma al Código Civil para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

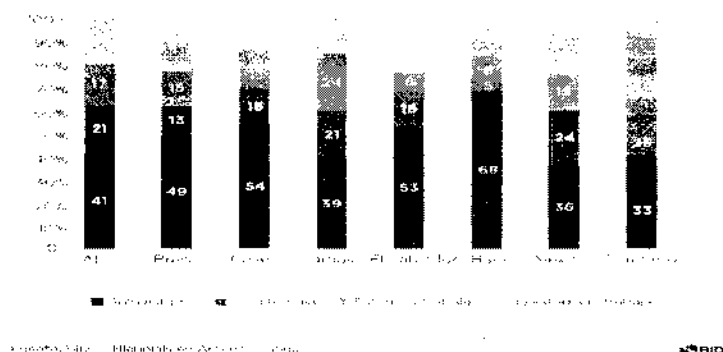
La conformación de las familias en la sociedad se ha modificado, y asimismo los hábitos tradicionales de los jóvenes han sufrido cambios en lo social, académico, y laboral, circunstancias que se han venido dando derivado, a su vez, de cambios globales tales como el acceso a la tecnología, el cambio en las perspectivas de la vida y los roles sociales del individuo, y muchos factores de tipo sociológico, cultural y económico.

Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo revela que la generación denominada "milenial" o "millennial," es decir la que engloba a las personas nacidas entre 1980 y 2003, es comúnmente calificada como poco preparada y sin aspiraciones, sin embargo, estas etiquetas no representan la realidad de millones de jóvenes en la región que pertenecen a ella.

Entre 2017 y 2018, se entrevistó a 15 mil jóvenes de entre 15 y 24 años de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Haití, México, Paraguay usándose encuestas existentes en Perú y Uruguay, para conocer sus perspectivas de trabajo y educación. Con dichos datos, se realizó un estudio para explicar la realidad de esta generación en América Latina y en el Caribe, en colaboración con académicos y especialistas de diferentes países, la organización "Espacio Público" y el "International Development Research Centre," de Canadá.

El estudio reveló que, efectivamente, el 21% de los encuestados no tiene trabajo ni estudia, representando el sector social comúnmente denominado "ninis". En México aproximadamente el 25% de esta generación se encuentra en esa categoría, según se ilustra en la siguiente gráfica.

¿A qué se dedican los millennials de América Latina y el Caribe?



Este fenómeno social, en el que los hijos mayores de edad no estudian ni trabajan se agrava, entre muchos factores, por dos particularmente importantes: por la actitud permisiva de los padres, y por la falta de legislación al respecto. Estos factores han propiciado que jóvenes con un potencial prometedor permanezcan en una peligrosa e improductiva zona de confort, sin afrontar las responsabilidades propias de la vida, al abrigo de sus padres o tutores, sin expectativa ni deseo de autosuperación.

Una figura del derecho civil que ha sido fundamental en el derecho familiar es el denominado "derecho a los alimentos," el cual, según el propio Código Civil del Estado consiste en proporcionar al acreedor alimentista la manutención, en general incluyendo entre otros: la comida, salud, vestido, habitación y las condiciones necesarias para que el acreedor alimentario aprenda una profesión u oficio.

Respecto de los menores de edad, en este rubro, los alimentos comprenderán, específicamente los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior del acreedor y para

proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su edad y circunstancias personales, lo cual también deberá considerarse respecto de los mayores de edad, cuando el caso así lo amerite.

En este contexto tenemos que el referido ordenamiento estatal establece en su artículo 320 lo siguiente:

"Art. 320.- Se suspenderá la obligación de dar alimentos:

I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;

II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;

III.- DEROGADA.

IV.- **Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista**, mientras subsistan estas causas;

V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables;

VI.-

En cualquiera de los supuestos anteriores, de cambiar las circunstancias que originaron la suspensión, podrá reclamarse en la vía incidental atendiendo

la necesidad de quien los reclama y la posibilidad de quien debe otorgarlos."

Este precepto establece que en varios supuestos jurídicos procede la suspensión del derecho a recibir alimentos, siendo uno de ello el relativo a "... falta de aplicación al trabajo del alimentista ...", es decir que sin el estado de necesidad del acreedor alimentario es consecuencia de la falta de intención de trabajar, en cuyo procede suspender el derechos a recibir los alimentos.

El categórico transcrito finaliza con la provisión de que, cuando las circunstancias que provocaron la suspensión varíen, es posible reclamar por la vía incidental la reanudación de la obligación de otorgar alimentos; en otra palabras, si un alimentista que no se aplica al trabajo le es suspendido el derecho a recibir alimentos, éste puede recuperar su derecho en el momento en que se aplique a trabajar, lo cual resulta contradictorio con el espíritu del derecho a recibir alimentos, que justamente consiste en satisfacer la necesidad del alimentista para recibirlos del deudor alimentario.

En estas condiciones consideramos que existe una situación contradictoria en el marco regulatorio referido lo que requiere necesariamente una reforma a fin de corregir esta situación irregular. Enseguida se inserta una tabla comparativa para mayor comprensión de la iniciativa.

Código Civil para el Estado de Nuevo León

Legislación vigente	Iniciativa
----------------------------	-------------------

<p>Art. 320.- Se suspenderá la obligación de dar alimentos:</p> <p>I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;</p> <p>II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;</p> <p>III.- DEROGADA.</p> <p>IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsistan estas causas;</p> <p>V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables;</p> <p>VI.- DEROGADA.</p> <p>En cualquiera de los supuestos anteriores, de cambiar las circunstancias que originaron la suspensión, podrá reclamarse en la vía incidental atendiendo la necesidad de quien los reclama y la posibilidad de quien debe otorgarlos.</p>	<p>Art. 320.- Se suspenderá la obligación de dar alimentos:</p> <p>I.- Cuando el que la tiene carece de medios para cumplirla;</p> <p>II.- Cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos;</p> <p>III.- DEROGADA.</p> <p>IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsista la primera de estas causas, en el caso de la segunda se estará a lo establecido en la fracción II de este mismo artículo;</p> <p>V.- Si el alimentista, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables;</p> <p>VI.- DEROGADA.</p> <p>En cualquiera de los supuestos anteriores, de cambiar las circunstancias que originaron la suspensión, podrá reclamarse en la vía incidental atendiendo la necesidad de quien los reclama y la posibilidad de quien debe otorgarlos.</p>
---	---

Lo anterior supone, no la tajante desvinculación de la obligación alimentaria, sino una forma de coaccionar al acreedor alimentista que, de manera dolosa, persiste en la dependencia económica por la falta de empleo; al mismo tiempo, la vinculación de esta hipótesis al supuesto

contenido en la fracción II del citado artículo, supone a su vez la posibilidad de una reducción en la carga alimentaria del deudor, en mérito de equidad.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:



DECRETO

ÚNICO.– Se Reforma por modificación la fracción IV del artículo 320 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 320.- Se suspenderá la obligación de dar alimentos:

I.- ...;

II.- ...;

III.- ...;

IV.- Cuando la necesidad de los alimentos depende de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo del alimentista, mientras subsista la

primera de estas causas, en el caso de la segunda se estará a lo establecido en la fracción II de este mismo artículo;

V.- ...;

VI.-

(...)

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio del 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**



La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma el Código Civil para el Estado de Nuevo León

Año: 2023

Expediente: 17232/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2612 BIS 1 AL 2612 BIS 15 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente **iniciativa por la que se adicionan los artículos 2612 BIS 1 al 2612 BIS 15 del Código Civil para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La sociedad civil, se define como una corporación privada, dotada de personalidad jurídica, constituida mediante un contrato celebrado entre 2 o más personas, para la realización de un fin común, lícito, posible y preponderantemente económico, mediante las aportaciones de bienes o industria, o de ambos siempre y cuando no tenga por objeto preponderante llevar a cabo una especulación comercial.

La naturaleza social del ser humano para unir esfuerzos en pro de un bien común es reconocida y garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual considera y contempla dos derechos fundamentales distintos, el primero es el derecho de reunirse y el segundo es el derecho de asociarse. Dicho numeral constitucional señala lo siguiente:

"Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee."

Ahora bien, en la vida social, el hombre necesita, por una parte, tener la seguridad de que los demás respetarán sus bienes y, por otra parte, saber cómo ha de comportarse respecto de los demás. Esta seguridad referente a las relaciones con los semejantes es la que puede denominarse seguridad jurídica, que representa en su faceta subjetiva, la certeza del derecho y para lograr esto se requiere la posibilidad de adquirir el conocimiento del derecho de sus destinatarios.

Gracias a esa información, difundida en los medios adecuados de publicidad, el sujeto de un ordenamiento jurídico debe poder saber con claridad y de antemano aquello que le está mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento los destinatarios del derecho pueden organizar su conducta y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de previsibilidad.

Por todo lo anterior, resulta claro que para que exista seguridad jurídica es necesaria la existencia de un ordenamiento jurídico que regule las conductas en la sociedad y que dicho ordenamiento jurídico sea eficaz y se cumpla.

En la actualidad en el Estado de Nuevo León existe una situación de escasa regulación en materia de la constitución y operación de las asambleas que pueden llevar a cabo los socios de una sociedad civil.

En efecto, en la regulación actual del contrato de sociedad civil, no se contemplan temas fundamentales en la operación de la sociedad civil, como la regulación de la correcta instalación y desenvolvimiento de las asambleas de socios, entre otros, de tal suerte que las deficiencias en la legislación vigente son suplidas por los notarios públicos al momento de constituir las sociedades civiles redactando en sus estatutos las reglas de operación, en suplencia de la deficiencia normativa.

Luego entonces nos encontramos ante una laguna legislativa histórica, que ha permanecido por décadas y ha sido subsanada por los notarios públicos, ahora bien, es oportuno precisar que no todas las sociedades civiles comparecen ante notario público a protocolizar sus contratos sociales, en estos casos tenemos a ciudadanos que se encuentra en una situación no regulada por el derecho positivo, que permanecen en un estado de inseguridad jurídica respecto de su actuar y el de sus socios en este tipo de sociedades, razón por la cual resulta de gran relevancia la iniciativa de reforma planteada para regular la operación de las sociedades civiles en el Estado de Nuevo León.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por adición de un párrafo segundo al artículo 2612 y los artículos 2612 BIS 1, 2612 BIS 2, 2612 BIS 3, 2612 BIS 4, 2612 BIS 5, 2612 BIS 6, 2612 BIS 7, 2612 BIS 8, 2612 BIS 9, 2612 BIS 10, 2612 BIS 11, 2612 BIS 12, 2612 BIS 13, 2612 BIS 14 y 2612 BIS 15 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 2612.- Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, observándose, respecto de ésta lo dispuesto en el artículo 2606.

Art. 2612 BIS 1.- La asamblea de socios es el órgano supremo de decisión en la sociedad y en tal carácter, le corresponde acordar, ratificar, modificar o rectificar, sin perjuicio de terceros, todos los actos y operaciones de la sociedad y sus resoluciones serán obligatorias para todos los socios.

Art. 2612 BIS 2.- Las asambleas de socios se reunirán en el domicilio social de la sociedad por lo menos una vez al año.

Art. 2612 BIS 3.- Las asambleas tendrán las siguientes facultades:

- I. Discutir, aprobar, modificar o reprobado el balance general correspondiente al ejercicio social clausurado y de tomar con estos motivos, las medidas que juzguen oportunas.
- II. Nombrar y remover a los administradores.
- III. Designar y remover, en su caso, el consejo de vigilancia.
- IV. Modificar el contrato social en apego al artículo 2591.
- V. Consentir en las cesiones de derechos de un socio y en la admisión de nuevos socios en apego al artículo 2598.
- VI. Decidir sobre los aumentos y reducciones del capital social.

VII. Decidir sobre la disolución de la sociedad; y

VIII. Las demás que les correspondan conforme a la Ley o al contrato social.

Art. 2612 BIS 4.- Cada socio tendrá derecho a votar y participar en las decisiones de las asambleas, de acuerdo a su participación dentro del capital social de la Sociedad, salvo lo que establezca el contrato social.

Art. 2612 BIS 5.- Las asambleas deberán ser convocadas por los administradores de la sociedad; si no lo hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omisión de éste, serán convocadas por los socios que representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

Art. 2612 BIS 6.- Salvo pacto en contrario, las asambleas deberán ser convocadas con por lo menos quince días naturales de anticipación a la fecha de celebración de la misma y las convocatorias se harán por medio de cartas certificadas con acuse de recibo y deberán contener el orden del día, lugar, fecha y hora de la reunión y no podrá tratarse ningún otro asunto que no esté expresamente incluido en el orden del día, salvo que asista a la reunión la totalidad de los socios y se acuerde por unanimidad de votos el asunto no incluido en el orden del día.

Art. 2612 BIS 7.- Toda resolución de la asamblea tomado en contravención a lo que disponen los artículos anteriores, será nula, salvo que en el momento de la votación se encuentren presentes o debidamente representados, la totalidad de los socios de la sociedad.

Art. 2612 BIS 8.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los socios que representen la totalidad del capital social tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieran sido adoptadas en asamblea de socios, siempre y cuando las resoluciones y votos se confirmen por escrito.

Art. 2612 BIS 9.- Las resoluciones de las asambleas de socios se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen, por lo menos, la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada. Salvo estipulación en contrario, si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del capital social representado.

Salvo pacto en contrario, el párrafo inmediato anterior no será aplicable para los supuestos que se encuentran contenidos en los artículos 2591, 2598 y 2604 primer párrafo, debiendo para tales efectos contar con el voto favorable y por escrito de la totalidad de los socios.

Art. 2612 BIS 10.- Tendrán derecho a asistir, participar y votar en las asambleas de socios quienes aparezcan registrados como tales en el libro de registro de socios de la sociedad.

Art. 2612 BIS 11.- Los socios podrán hacerse representar en las asambleas por mandatarios, ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La

representación deberá conferirse en la forma que prescriban los estatutos sociales y a falta de estipulación, por escrito y ante dos testigos.

Art. 2612 BIS 12.- Salvo estipulación contraria de los estatutos sociales, las asambleas serán presididas por el administrador único y en caso de existir más de un administrador, por quien fuere designado por los socios presentes en la asamblea. Asimismo, será secretario de la asamblea el que ocupe dicho cargo en el consejo de administración, en caso de existir éste, y en su defecto o ausencia lo será la persona que para tal efecto fuere designado por los socios presentes en la asamblea.

Art. 2612 BIS 13.- Las actas de asambleas se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias se hicieron en los términos que este Código o los estatutos sociales establecen.

Art. 2612 BIS 14.- Si el contrato social así lo establece, la asamblea procederá a la constitución de un consejo de vigilancia, formado de socios o de personas extrañas a la sociedad.

Art. 2612 BIS 15.- Son aplicables a la sociedad civil las disposiciones legales y reglas generales de los contratos establecidas en el presente Código.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio del 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que reforma por adición de los artículos 2612 BIS 1 al 2612 BIS 15 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17233/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: CC. MTRA. BRENDA LIZBETH SÁNCHEZ CASTRO Y LA DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 324 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

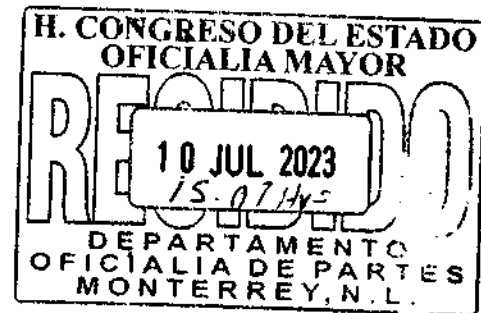
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Las suscritas Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro y Denisse Daniela Puente Montemayor, integrante del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura al H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa por la que se adicionan dos párrafos al artículo 324 del Código Civil para el Estado de Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho, al igual que la vida es cambiante, se debe adaptar para seguir siendo eficaz y cumplir la función para lo cual fue creado. En el mundo que actualmente vivimos se encuentra lleno de vertiginosos cambios, por lo que resulta imprescindible que nuestro marco normativo vigente se encuentre a la par de dichos cambios, sean en materia social, política, cultural o científica.

Muchos de los cambios que se suscitan en la sociedad son tecnológicos o científicos, cambios que modifican considerablemente la vida en sociedad y que en muchas ocasiones requieren la regulación jurídica, pues si esta adecuación normativa se producirán necesariamente conflictos civiles que pudieron ser previstos con antelación. Una de las funciones principales y quizá por la cual es identificada la función de esta Soberanía es la de crear Leyes y adecuar las mismas a las necesidades cambiantes de la sociedad, la cual nos impone la obligación de mantener especial atención a los cambios que se presentan en la sociedad.

Es por ello que las adecuaciones al marco normativo vigente deben ser acordes con los cambios que se suscitan, evitando en la medida de lo posible, que exista una gran brecha de tiempo entre el nacimiento de los hechos que se pretenden regular y la actualización de la norma.

Ahora bien, uno de los desarrollos que en materia de salud reproductiva se ha venido dando desde hace tiempo, pero que en la actualidad es muy común es el referente a la reproducción humana asistida, entendiéndose como el conjunto de técnicas o métodos biomédicos que facilitan o pueden sustituir a los procesos naturales de fecundación. El derecho a la procreación se encuentra tutelado en la Constitución Política Federal y Local en su artículo primero establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos.

Otro factor que se a dado con frecuencia en nuestro Estado es el alto índice de divorcios, lo cual nos coloca en tercer lugar nacional en divorcios según la información publicada por el INEGI en septiembre 2020, de tal forma que en la entidad se dan 38 divorcios por cada 10,000 habitantes de personas mayores de 17 años.

En este contexto es que resulta oportuno regular este tipo de concepción, a fin de que se establezcan parámetros que delimiten los derechos y obligaciones de los progenitores, pues resultaría de extrema gravedad el que se diera una concepción de este tipo sin el consentimiento expreso y actual de alguno de los progenitores, tomando en Cuenta precisamente la trascendencia del acto en sí mismo, la procreación de un nuevo ser humano, por lo que esto amerita el pleno consentimiento de los involucrados.

Es de resaltar que la presente iniciativa había sido presentada con anterioridad, sin embargo, fue caducada, y en virtud de la trascendencia que la misma representa es que se ingresa de nueva cuenta.

En merito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por adición de los párrafos cuarto y quinto del artículo 324 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 324.- Se presumen hijas o hijos de los cónyuges, salvo prueba en contrario:

I.- Las hijas o hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio;

II.- Las hijas o hijos nacidos dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de nulidad del contrato, de muerte del marido o de divorcio. Este término se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial.

En los casos de procreación con técnicas de reproducción humana asistida, se deberá acreditar que la concepción se realizó con el consentimiento expreso y actual del padre biológico al momento de consumarse la misma.

Se entiende por técnicas de reproducción humana asistida, el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos, además de la reproducción de cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado de Nuevo León.

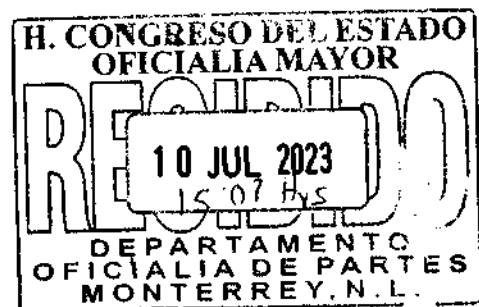
SEGUNDO.- Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio del 2023.


Mtra. Brenda Lizbeth Sánchez Castro


**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por adición de dos párrafos al artículo 324 el Código Civil para el Estado de Nuevo León.



Año: 2023

Expediente: 17236/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 9 EN SU INCISO 9 NUMERAL 1 DE LA LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

La suscrita, Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de decreto por se adicionan el inciso e) del numeral I del artículo 9 de la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La deforestación y la pérdida de masa forestal en todo el mundo han alcanzado niveles alarmantes. La creciente demanda de productos madereros y los cambios en el uso de la tierra han llevado a la degradación de los bosques y al deterioro de los servicios ecosistémicos que proporcionan, como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la provisión de agua.

Para abordar este problema con eficacia, es fundamental tomar medidas estratégicas para reforestar y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La tecnología satelital se ha convertido en una herramienta invaluable para ayudar a realizar plantaciones estratégicas de árboles, permitiendo una gestión forestal más efectiva y un seguimiento preciso del progreso.

Primeramente, la tecnología satelital puede proporcionar información crucial para determinar las áreas más adecuadas para realizar plantaciones de árboles. Los satélites pueden recopilar datos sobre la cubierta terrestre, como la vegetación existente, los usos de la tierra y las características topográficas.

Cabe destacar, que la tecnología satelital puede ser utilizada para monitorear y prevenir la deforestación ilegal y el aprovechamiento forestal no sostenible. Los satélites pueden detectar cambios en la cubierta terrestre y alertar sobre la posible deforestación en áreas protegidas o en lugares donde el aprovechamiento forestal está prohibido. Esta información puede ser utilizada para tomar medidas inmediatas y aplicar las leyes y regulaciones de conservación.

Por lo tanto, la tecnología satelital puede proporcionar datos en tiempo real sobre la tasa de deforestación y la pérdida de masa forestal, lo que permite una vigilancia continua y un seguimiento de los patrones espaciales y temporales. Esto no solo ayuda a identificar áreas en peligro y tomar medidas de conservación apropiadas, sino que también proporciona información valiosa para la formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel gubernamental.

La tecnología satelital ha demostrado ser una herramienta valiosa para facilitar las plantaciones estratégicas de árboles y promover la reforestación. Desde la identificación de áreas adecuadas para plantaciones hasta el monitoreo del progreso y la prevención de la deforestación ilegal, los satélites proporcionan datos precisos y actualizados que son fundamentales para una gestión forestal efectiva.

Es necesario un enfoque integral que incluya la participación de las comunidades locales, la adopción de prácticas de reforestación sostenibles y el establecimiento de políticas y regulaciones adecuadas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y el uso efectivo de la tecnología satelital podremos abordar de manera efectiva el problema de la pérdida de masa forestal y asegurar un futuro sostenible para nuestros bosques.

Es por lo anteriormente expuesto que acudimos a esta soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

Estos datos pueden ser utilizados para identificar áreas deforestadas, degradadas o desprovistas de vegetación, que son prioritarias para realizar plantaciones. Además, la tecnología satelital puede proporcionar información sobre la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y otros factores que afectan la supervivencia y el crecimiento de los árboles. Esta información es esencial para realizar plantaciones estratégicas y maximizar el éxito de los proyectos de reforestación.

Identificar áreas adecuadas para plantaciones de árboles, la tecnología satelital también puede ayudar a monitorear y evaluar el progreso de los proyectos de reforestación. Los satélites pueden proporcionar imágenes de alta resolución que permiten el seguimiento continuo de las áreas plantadas. Esto no solo permite verificar el éxito de las plantaciones y detectar problemas o deficiencias, sino que también proporciona información valiosa sobre la cantidad de carbono secuestrado y los beneficios ambientales generados. Estos datos son fundamentales para la rendición de cuentas y la evaluación de la efectividad de las iniciativas de reforestación.

Asimismo, la tecnología satelital puede ser utilizada para mejorar la planificación y la implementación de actividades de plantación de árboles. Los satélites pueden proporcionar imágenes de alta resolución que permiten identificar áreas específicas dentro de los sitios de plantación donde los árboles tendrían mayores posibilidades de supervivencia y crecimiento. Por ejemplo, la información sobre las características del dosel, la pendiente del terreno y la presencia de ríos o cuerpos de agua puede ser utilizada para determinar la distribución óptima de las especies de árboles y las densidades de plantación. Esta planificación precisa puede aumentar significativamente la eficiencia de los proyectos de reforestación y garantizar un uso óptimo de los recursos disponibles.

DECRETO

ÚNICO. - Se adicionan el inciso e) del numeral I del artículo 9 de la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 9.- La Secretaría es la dependencia encargada de establecer, instrumentar y coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y demás acciones que promuevan un medio ambiente sustentable, en consecuencia, en materia de arbolado urbano, le corresponden, las siguientes atribuciones:

- I. En coordinación con las entidades estatales y federales competentes, los Municipios del Estado, organismos no gubernamentales, asociaciones civiles y la sociedad en general:
 - a) Promover prácticas, métodos y técnicas que permitan el cuidado, conservación y protección del arbolado urbano;
 - b) Realizar campañas destinadas al cuidado, conservación y protección del arbolado urbano;
 - c) Promover la participación ciudadana en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano; y
 - d) Suscribir convenios y acuerdos de coordinación con la Federación, otros Estados, los Municipios y organismos auxiliares, para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley;
 - e) Promover el uso de tecnologías satelitales o aéreas para efecto de identificar zonas de riesgo o carentes de árboles, que permita arborizar de manera integral y equilibrada un área determinada;**
- II. Elaborar y evaluar los programas, planes y acciones en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano, y los que se deriven de los convenios celebrados para el cumplimiento de esta Ley;
- III. Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, y en su caso denunciar ante los órganos competentes, las infracciones que se cometan

en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano en el marco de esta Ley;

- IV. Promover campañas para arborizar las Áreas Urbanas que carezcan de árboles suficientes para el adecuado equilibrio ecológico de las mismas; y
- V. Las demás que conforme a la presente Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables le correspondan en materia de cuidado, conservación y protección del arbolado urbano.

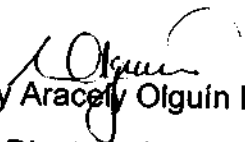
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. - Se concede un término de 60 días hábiles para que se ajusten los ordenamientos legales y los reglamentos municipales correspondientes, para efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

ATENTAMENTE.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023


Nancy Aracely Olguín Díaz
Diputada Local



Año: 2023

Expediente: 17237/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. NANCY ARACELY OLGUÍN DÍAZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UN PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY PARA LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ARBOLADO URBANO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -

La suscrita, Dip. Nancy Aracely Olguín Díaz e integrantes del Grupo Legislativo Partido Acción Nacional de la LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86, 87 y 88 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos a esta soberanía a proponer el siguiente proyecto de decreto por el se adiciona un párrafo cuarto al artículo 24 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La deforestación y la pérdida de masa forestal en todo el mundo han alcanzado niveles alarmantes. La creciente demanda de productos madereros y los cambios en el uso de la tierra han llevado a la degradación de los bosques y al deterioro de los servicios ecosistémicos que proporcionan, como la regulación del clima, la conservación de la biodiversidad y la provisión de agua.

Para abordar este problema con eficacia, es fundamental tomar medidas estratégicas para reforestar y asegurar la sostenibilidad a largo plazo. La tecnología satelital se ha convertido en una herramienta invaluable para ayudar a realizar plantaciones estratégicas de árboles, permitiendo una gestión forestal más efectiva y un seguimiento preciso del progreso.

Primeramente, la tecnología satelital puede proporcionar información crucial para determinar las áreas más adecuadas para realizar plantaciones de árboles.

Los satélites pueden recopilar datos sobre la cubierta terrestre, como la vegetación existente, los usos de la tierra y las características topográficas.

Estos datos pueden ser utilizados para identificar áreas deforestadas, degradadas o desprovistas de vegetación, que son prioritarias para realizar plantaciones. Además, la tecnología satelital puede proporcionar información sobre la calidad del suelo, la disponibilidad de agua y otros factores que afectan la supervivencia y el crecimiento de los árboles. Esta información es esencial para realizar plantaciones estratégicas y maximizar el éxito de los proyectos de reforestación.

Identificar áreas adecuadas para plantaciones de árboles, la tecnología satelital también puede ayudar a monitorear y evaluar el progreso de los proyectos de reforestación. Los satélites pueden proporcionar imágenes de alta resolución que permiten el seguimiento continuo de las áreas plantadas. Esto no solo permite verificar el éxito de las plantaciones y detectar problemas o deficiencias, sino que también proporciona información valiosa sobre la cantidad de carbono secuestrado y los beneficios ambientales generados. Estos datos son fundamentales para la rendición de cuentas y la evaluación de la efectividad de las iniciativas de reforestación.

Asimismo, la tecnología satelital puede ser utilizada para mejorar la planificación y la implementación de actividades de plantación de árboles. Los satélites pueden proporcionar imágenes de alta resolución que permiten identificar áreas específicas dentro de los sitios de plantación donde los árboles tendrían mayores posibilidades de supervivencia y crecimiento. Por ejemplo, la información sobre las características del dosel, la pendiente del terreno y la presencia de ríos o cuerpos de agua puede ser utilizada para determinar la distribución óptima de las especies de árboles y las densidades de plantación. Esta planificación precisa

puede aumentar significativamente la eficiencia de los proyectos de reforestación y garantizar un uso óptimo de los recursos disponibles.

Cabe destacar, que la tecnología satelital puede ser utilizada para monitorear y prevenir la deforestación ilegal y el aprovechamiento forestal no sostenible. Los satélites pueden detectar cambios en la cubierta terrestre y alertar sobre la posible deforestación en áreas protegidas o en lugares donde el aprovechamiento forestal está prohibido. Esta información puede ser utilizada para tomar medidas inmediatas y aplicar las leyes y regulaciones de conservación.

Por lo tanto, la tecnología satelital puede proporcionar datos en tiempo real sobre la tasa de deforestación y la pérdida de masa forestal, lo que permite una vigilancia continua y un seguimiento de los patrones espaciales y temporales. Esto no solo ayuda a identificar áreas en peligro y tomar medidas de conservación apropiadas, sino que también proporciona información valiosa para la formulación de políticas y la toma de decisiones a nivel gubernamental.

La tecnología satelital ha demostrado ser una herramienta valiosa para facilitar las plantaciones estratégicas de árboles y promover la reforestación. Desde la identificación de áreas adecuadas para plantaciones hasta el monitoreo del progreso y la prevención de la deforestación ilegal, los satélites proporcionan datos precisos y actualizados que son fundamentales para una gestión forestal efectiva.

Es necesario un enfoque integral que incluya la participación de las comunidades locales, la adopción de prácticas de reforestación sostenibles y el establecimiento de políticas y regulaciones adecuadas. Solo a través de un esfuerzo conjunto y el uso efectivo de la tecnología satelital podremos abordar de manera efectiva el problema de la pérdida de masa forestal y asegurar un futuro sostenible para nuestros bosques.

Es por lo anteriormente expuesto que acudimos a esta soberanía a presentar el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO.- Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 24 de la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo León:

Artículo 24.- Corresponde a los Ayuntamientos la expedición de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local, de conformidad con esta Ley. Estos programas tendrán por objeto:

IV.- Facilitar y coadyuvar con la Federación, el Estado y la Secretaría, la realización de inventarios de los recursos naturales con los que cuente el Municipio. Dicha información será integrada para su consulta, al Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales, y algún otro que determinen las leyes de la materia.

En materia de arbolado urbano, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local, buscará que los inventarios se realicen de manera quinquenal, permitiendo identificar, cuantificar, clasificar y proteger a las especies de árboles situados en espacios públicos y bienes de dominio municipal privado, en términos de la ley de Gobierno Municipal, de 7.5 centímetros de grosor, medido a un metro con treinta centímetros de altura y mayores a ésta medida, de cada uno de sus respectivos territorios. Se podrá establecer el uso de herramientas tecnológicas que permitan la localización e identificación del arbolado de sus respectivos municipios.

Así también podrán hacer uso de herramientas tecnológicas satelitales para efecto de identificar zonas de riesgo o carentes de árboles, que les permita realizar plantaciones estratégicas, específicas y concretas orientado a optimizar el inventario de árboles con el que cuente el estado o los municipios, para la mitigación del calor y la contaminación.

El inventario de arbolado urbano se aplicará en los municipios que integren la zona conurbada de Monterrey, y los demás municipios de acuerdo a su posibilidad presupuestal también podrán realizarlo. Por su parte, el inventario forestal, se realizará de acuerdo a lo que determine la Ley de la Materia.

Los resultados de cada inventario, deberán ser publicados en la página de internet, en la gaceta del municipio, y serán integrados al Sistema Estatal de Información Ambiental y de Recursos Naturales para su consulta permanente.

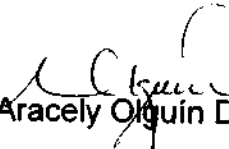
TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

SEGUNDO. - Se concede un término de 60 días hábiles para que se ajusten los ordenamientos legales y los reglamentos municipales correspondientes, para efecto de dar cumplimiento al presente decreto.

A T E N T A M E N T E.-

MONTERREY, NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023


Nancy Aracely Olguín Díaz
Diputada Local



Año: 2023

Expediente: 17240/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 10 Y 29 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): INFRAESTRUCTURA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente en nuestro estado se vive un auge en las construcciones verticales como lo son las plazas comerciales o los departamentos para uso de casa habitación; se estima que existen por lo menos 82 construcciones verticales y otras

22 obras en proceso de edificación en la zona metropolitana de Monterrey los cuales están destinados para comercio, corporativos o espacios de vivienda. ¹

Estudios revelan que, debido al boom de crecimiento vertical, entre el 25 y el 40 por ciento de las personas que están en busca de vivienda prefieren los departamentos en edificios verticales por razones de cercanía con los lugares donde trabajan, estudian o van de compras, de acuerdo con los resultados de este estudio, el perfil de las personas que demandan este tipo de vivienda son parejas jóvenes, adultos de la tercera edad y profesionistas o ejecutivos. ^{2,3}

Ante este panorama de crecimiento vertical en Nuevo León, es necesario que el marco legislativo se fortalezca y robustezca con el propósito de dar seguridad y certeza jurídica a quienes adquieren un departamento y son parte de un régimen de condominio.

La constitución de un régimen en condominio es el acto jurídico por el cual uno o varios propietarios de uno o un grupo de inmuebles establecen una modalidad de propiedad en la que el o los Condóminos tendrán un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre las Unidades de Propiedad Privativa y además un derecho de

¹ <https://abcnoticias.mx/local/2023/5/15/auge-de-vivienda-vertical-alcanza-mas-municipios-de-nuevo-leon-188882.html>

² <https://realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/vivienda/22598-boom-de-vivienda-vertical-en-monterrey>

³ <https://inmobiliare.com/indice-de-verticalizacion-de-vivienda-en-monterrey-alcanza-el-40/#:~:text=%C3%8Dndice%20de%20verticalizaci%C3%B3n%20de%20vivienda%20en%20Monterrey%20alc,anza%20el%2040%25,->

Publicado&text=De%20acuerdo%20con%20la%20empresa,diversos%20municipios%20de%20la%20entidad.

copropiedad sobre las Áreas y Bienes de Uso Común de un inmueble que comparten necesarios para un adecuado uso y disfrute, así lo establece el artículo dos de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León.

De acuerdo a sus antecedentes en el derecho civil, el régimen de propiedad en condominio es uno de los tipos de copropiedad forzosa en la que se combina la propiedad individual del condómino y la copropiedad con los demás propietarios, es decir, los miembros o condóminos son propietarios individualmente y a su vez son copropietarios de áreas en común, entre ellos el terreno sobre el cual está edificada la construcción.⁴

Estas áreas comunes del edificio son los cimientos, las paredes maestras, los patios, corredores, área de estacionamiento, áreas recreativas, escaleras, etc. Además, todos los servicios comunes del edificio son propiedad común, por lo tanto, cada propietario de los pisos o departamentos no puede realizar obras que afecten la estabilidad del edificio.

Para asegurar que se cumpla con los principios establecidos en la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León referente a la cultura condominal que entre otras cosas señala: *todas aquellas acciones que contribuyan a generar la sana convivencia y el cumplimiento del objetivo del condominio.*,

⁴https://www.lasallebajio.edu.mx/delasalle/contenidos/revistas/derecho/numero_9/alumnos_regimendecondominio.html

entendiéndose como elementos necesarios: el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el cumplimiento, la corresponsabilidad, la participación, la solidaridad y la aceptación mutua.

Ahora bien, la Ley en comento actualmente señala en el artículo 10 que:

“Artículo 10.- Cualquier modificación al Reglamento Interno se acordará en Asamblea General Extraordinaria y deberá ser aprobada por lo menos con el voto favorable del cincuenta por ciento del Proindiviso total del Condominio.”

Por su parte el artículo 29 en su fracción VII contempla:

“Artículo 29.- La Asamblea General es el órgano supremo del Condominio que contará con un Presidente, un Secretario y, cuando menos, dos escrutadores. Las Asambleas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y serán convocadas por el Presidente o el Secretario de la Asamblea General o en su caso, por el Comité Consultivo y de Vigilancia sin menoscabo de lo que establece la fracción X de este artículo.

Las Asambleas Generales se regirán por lo siguiente:

VII.- Cuando un sólo Condómino represente el treinta por ciento o más del Proindiviso, se requerirá, además, el voto a favor de la mayoría del porcentaje restante para que sean válidos los acuerdos;”

Para evitar que sea un solo condómino quien tome las decisiones respecto al régimen en condominio consideramos que es necesario se establezcan medidas suficientes para salvaguardar la participación equitativa en la toma de decisiones de todos y cada uno de los condóminos o propietarios que traigan consecuencias a la totalidad del régimen en condominio, es en este sentido, es que proponemos que todas las votaciones que se hacen se establezca una mayoría del 65% a favor para que sean válidos todos los acuerdos tomados en las Asambleas Generales.

Con la medida anterior se estará garantizando que todas las modificaciones que se realicen al régimen de condominio serán votadas por la mayoría calificada.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se Reforma la fracción VII del Artículo 29 y se Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 10 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 10.- ...

Para llevar a cabo las modificaciones a que hace referencia el párrafo anterior, en el supuesto que un sólo Condómino represente el treinta por ciento o más del

Proindiviso, se requerirá cumplir con el voto favorable del sesenta y cinco por ciento restante del Proindiviso total del Condominio.

Artículo 29.- ...

...

I.- a VI. - ...

VII.- Cuando un sólo Condómino represente el treinta por ciento o más del Proindiviso, se requerirá, el voto a favor del sesenta y cinco por ciento del Proindiviso restante del Condominio para que sean válidos los acuerdos;

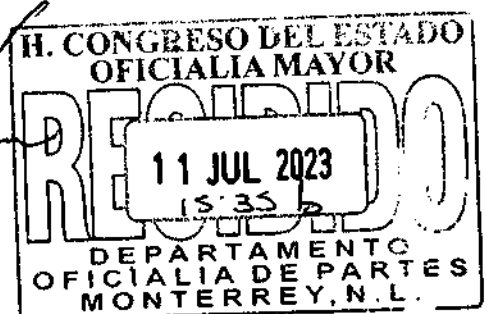
VIII.- a XI. ...

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 10 días del mes de julio de 2023.


Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Irais Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE
INMUEBLES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Año: 2023

Expediente: 17241/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DANIEL BAUTISTA ROCHA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL DEPORTE.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Monterrey, N. L. 12 de julio de 2023

✓ H. Congreso del Estado de Nuevo León

Comisión de Educación, Cultura y Deporte

Anteponiendo un saludo me dirijo a ustedes de la manera más atenta para solicitarles de ser posible hacer la adhesión a la ley del Deporte en el artículo 39 fracción VII y el artículo 53 del capítulo VII en la que se refiere que los deportistas, entrenadores y masajistas, se anexa documento con Proyecto de Reforma a la Ley Estatal del Deporte para apoyo a los Entrenadores de Nuevo León y sean considerados para que cuenten con mejores condiciones laborales en base a la ley del trabajo vigente y así poder contar con los beneficios que estipula dicha ley tales como jornada laboral pagada y aguinaldo y en especial servicio médico para el empleado y su familia conforme a la ley y a lo estipulado en el contrato de servicios que se presten al gobierno estatal, esta adhesión a la ley del deporte en Nuevo León con el apoyo de todas las bancadas sería un justo derecho a los entrenadores que trabajan por honorarios y sin derecho a alguna seguridad social y crecimiento laboral alguno para el Instituto Estatal de Cultura Física y deporte de Nuevo León INDE sin olvidar que sin entrenador no hay campeón, conocedor de que nuestro Estado es referente nacional en materia deportiva estoy seguro, que contaré con el apoyo a esta petición justa para las futuras generaciones de entrenadores y deportistas, sin más por el momento quedo a sus órdenes, su servidor y amigo.

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]
Daniel Batista Rocha

Medallista Olímpico



- Anexa 5-cinco folios simples-

Proyecto de Reforma o Adhesión a la Ley Estatal del Deporte para apoyo a los Entrenadores de Nuevo León

" HAGAMOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE UN HÁBITO "



Introducción

- El deporte es un detonador de valores que alienta el ánimo de cooperación y solidaridad, estimula el deseo del éxito en un marco de sana competencia y coadyuva al bienestar físico, psicológico y moral de quienes lo practican.
- En nuestro país tenemos tres grandes problemas que inciden en el desarrollo social. Seguridad, la salud en general y la obesidad infantil. La activación física y el deporte coadyuvan a prevenir, rehabilitar, y mejorar la calidad de vida, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con alguna discapacidad.
- En nuestro país los hábitos para realizar actividad física o deportiva son muy reducidos. Por lo que después de la etapa escolar los mexicanos se alejan definitivamente del ejercicio y como consecuencia al caer en el sedentarismo aumentan las enfermedades crono – degenerativas, como la obesidad, cardiovasculares, diabetes, etc.
- El deporte coadyuva también en el problema de la inseguridad como un programa preventivo ante el pandillerismo, violencia intra familiar y múltiples conductas antisociales afectando principalmente a la niñez y juventud las partes mas vulnerables de la comunidad.
- La educación física, la activación física y el deporte en todas sus manifestaciones, como son el deporte de iniciación desarrollo del deporte y deporte de calidad o alto rendimiento, desarrolla el sentido de pertenencia y arraigo en su comunidad, en su municipio, en el estado y como Mexicano, y se fortalece el liderazgo del niño y joven deportista.

Situación actual

- Dentro de las políticas públicas para el desarrollo integral de la juventud, cada vez son menos los recursos económicos que se aplican a los jóvenes en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, becas al extranjero, en el deporte a nivel estatal y nacional, por esta situación actual solicito de la manera mas atenta a este congreso de Nuevo León, apoyar a nuestras autoridades deportivas del estado a revertir esta situación solicitando al poder ejecutivo mayores recursos económicos, para invertirlos en los programas de desarrollo deportivo y deporte social.
- Y así mantener a nuestro estado en los primeros lugares como ha sido una tradición en todos los eventos convocados por la CONADE y las Federaciones Nacionales, coadyuvando y cumplir a realizar los sueños de la juventud deportiva de Nuevo León, logrando participar en juegos Centroamericanos, Panamericanos, Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos, y lograr ser medallistas Mundiales y Olímpicos.

Propuesta

- Por todo lo anterior en nuestro estado necesitamos maestros de educación Física Estatales en la educación básica y Activadores Físicos en las colonias más populares y plazas públicas de Monterrey y área metropolitana.
- Pero sobre todo necesitamos entrenadores deportivos que atiendan a los deportistas que representan a nuestro estado y a nuestro país.
- Entrenadores bien remunerados con todas las prestaciones, beneficios de seguridad social y de crecimiento. Que los Entrenadores sean considerados por el estado como empleados basificados con prestaciones como marca la ley laboral del estado de Nuevo León, con las mismas prestaciones como las tienen todos los empleados del gobierno del estado.
- O como segunda opción: Contratos laborales con la prestación de los aguinaldos anuales correspondientes, y adherirlos a través del estado al Seguro Social IMSS.
- Porque sin entrenador no hay campeón, esa es mi experiencia, gran parte de nuestro éxito deportivo se lo debemos a nuestros entrenadores.

LEY ESTATAL DEL DEPORTE

En el CAPÍTULO VI, DE LOS FOMENTOS Y ESTIMULOS AL DEPORTE, Artículo 39, fracción XII, dice:

(REFORMADA, P.O. 28 DE MARZO DE 2022)

XII.- Contar con un seguro de vida y gastos médicos cuando se represente a la Entidad en competencias oficiales, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal; Se sugiere debe decir:

XII.- Contar con un seguro de vida y gastos médicos cuando se represente a la Entidad en competencias oficiales; estos beneficios aplicarían para el deportista y personal de apoyo como entrenadores, médicos y masajistas entre otros.

En el CAPÍTULO VII, DEL SERVICIO MÉDICO EN EL DEPORTE, Artículo 53, dice:

Artículo 53.- Todo deportista organizado que practique alguna actividad incluida en el Sistema Estatal del Deporte tendrá derecho a recibir atención médica, tanto en la prevención, como la atención y tratamiento de lesiones, con motivo de su participación en entrenamientos, juegos y/o competencias autorizadas.

Para tal efecto, las autoridades deportivas promoverán los mecanismos de concertación con las Instituciones Públicas y Privadas que integran el sector salud, así como con los organismos deportivos.

Se sugiere debe decir:

Artículo 53.- Todo deportista y personal de apoyo como entrenadores, médicos y masajistas entre otros, que participen en alguna actividad incluida en el Sistema Estatal del Deporte, tendrán derecho al servicio médico permanente, derivado de su actividad con motivo de su participación en entrenamientos, juegos de preparación y/o competencias autorizadas municipales, estatales, nacionales e internacionales.

Para tal efecto, será responsabilidad de las autoridades deportivas de los Municipios y el Estado, establecer los mecanismos de concertación con las Instituciones Públicas y Privadas que integran el sector salud, para garantizar el servicio médico señalado.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo



No autorizo



Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono:

Núm. Ext. _____

Núm. Int. _____

Municipio: _____

Estado: _____

C.P. _____

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo



No autorizo



Correo: _____

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

Año: 2023

Expediente: 17242/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 3, 4 Y 10 BIS DE LA LEY QUE REGLA EL USO DE LA VÍA PÚBLICA EN EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.

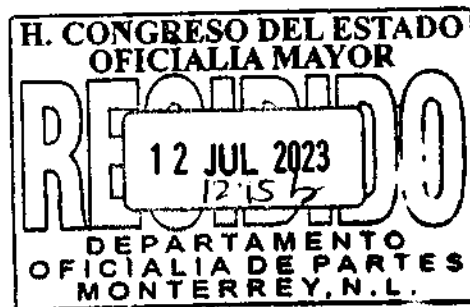
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): MOVILIDAD.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Dip. Mauro Guerra Villarreal
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente



El suscrito, Diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional perteneciente a la LXXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como, lo dispuesto en los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de **Decreto por el que se reforma la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial**, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La venta en la vía pública esta prevista en la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial, misma que dispone en el artículo 1º que las autoridades municipales del estado ordenaran y regularan el uso de las vías públicas en el abasto comercialización de bienes y servicios en sus modalidades de comercio ambulante fijo, semifijo, popular, mercados rodantes y oferente itinerante.

Asimismo, la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León establece en el inciso a) fracción II del artículo 33, que son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos en materia de servicios públicos establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su circunscripción territorial, los servicios de mercados y centrales de abasto, dicho dispositivo textualmente cita lo siguiente:

"II. En materia de servicios públicos:

a) Establecer los criterios y lineamientos para la prestación, en su circunscripción territorial, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de la presente Ley, los servicios públicos de agua potable, drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; **mercados**

y centrales de abastos; panteones; rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; Seguridad Pública Municipal, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Tránsito Municipal; así como los demás que se determinen conforme a los ordenamientos señalados. Para tal efecto, en los casos en que los Municipios no cuenten con los reglamentos correspondientes, se estará a lo dispuesto por la presente Ley y por las demás disposiciones aplicables estando obligado en todo momento a observar los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y (...)"

De este precepto citado supra, podemos mencionar que los municipios son quienes deben reglamentar en sus demarcaciones territoriales las normas a las que han de sujetarse los vendedores ambulantes y los mercados rodantes. Respecto a los permisos, la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial, refiere en el artículo 4, lo siguiente:

ARTICULO 4o.- Las Autoridades Municipales deberán abstenerse de otorgar permisos para la instalación permanente de vendedores populares en sus modalidades de puestos fijos y semifijos. Cualquier acto de autoridad que contravenga lo estipulado en este artículo será nulo de pleno derecho.

Las Autoridades Municipales analizarán de conformidad con los giros o actividades de los comerciantes populares, la posibilidad de que algún o algunos de ellos se instalen para satisfacer el abasto oportuno de bienes y servicios en su jurisdicción.

Los permisos se otorgarán de manera personal y directa a los solicitantes, con excepción de los permisos para el funcionamiento de los mercados rodantes, los cuales podrán otorgarse de manera colectiva. (Énfasis propio)

En la tramitación de los permisos a que se refiere esta Ley, no se permitirá la gestión oficiosa. Las Organizaciones legalmente constituidas podrán fungir como promotores y gestores para el efecto de la obtención de dichos permisos.

Destaca de este precepto, que cuando se trata de mercados rodantes los permisos pueden solicitarse de manera colectiva y es en este punto donde presumiblemente pudiera haber un fraude a las arcas municipales, pues no siempre se enteran el total de las cuotas cobradas por los líderes a los comerciantes.

Ofrecer productos de manera ambulante o en mercados rodantes o tianguis sea cual fuere su nombre, es una costumbre arraigada en nuestro país, algunas personas gustan de ir a comprar sus productos a este tipo de lugares, además de ser una opción de sustento para miles de familias.

Un estudio sociológico sobre los tianguis en el Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM), estima que, en 7 de 13 municipios de la ZMM, se instalan semanalmente 944 tianguis; se realizó un conteo de puestos en 60 mercados, mismos que representan el 6.3% del total de 944 reportados por los municipios. En estos 60 mercados se contabilizaron 9,551 puestos, sin contar vendedores eventuales y ambulantes. A partir de la muestra se puede decir algo sobre el tamaño de los mercados. Casi la mitad (48.3% o 29 mercados) tenían en el momento del conteo entre 100 y 199 puestos. Seis mercados tenían entre 50 y 99 puestos, correspondiendo a 10% del total; los 11 mercados que contaban con menos de 50 vendedores representaron 18.3%, y se contabilizó un mercado con más de 300 puesteros, dos con más de 400, uno con más de 500 y otro con más de 600.¹

Quien ha intentado vender algo en la calle o llegar a instalarse a un mercado así sin más, sabe que enseguida llegan a quitarlo o a **exigir una cuota** para poder ofrecer su producto o servicio, las personas que realizan estos cobros no son precisamente trabajadores de los municipios, sino que son supuestos líderes de los comerciantes los que cobran para dejar a la gente vender en la vía pública.

Los cobros de las cuotas se hacen directamente por los líderes de los mercados sin que exista realmente un control sobre el monto que se recauda y sin tener la certeza de saber a dónde se va ese dinero o si llega íntegro a las arcas municipales.

De acuerdo a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en su artículo 65 bis 1, fracción I, dispone que por ocupar la vía pública se pagará 0.0224 cuotas diarias por metro cuadrado completo o fracción.

Es una realidad que los líderes cobran una cuota a los vendedores para que estos puedan trabajar en los tianguis y mercados que se instalan en diversos puntos de Nuevo León. Una investigación del año 2017, cita que los vendedores pagaban 180 pesos diarios, si quieren trabajar 5 días a la semana en diversos mercados deben pagar 1,500 pesos, además a esa cantidad deben sumar los gastos de limpia y luz, a veces también conceptos de seguridad y otros, si no se solventa la suma no los

¹ Sandoval-Hernández, Efrén. (2022). Ganar 'clientes' y gestionar favores. Delegados sindicales en tianguis de Monterrey. *Estudios sociológicos*, 40(118), 187-211. Epub 08 de abril de 2022. <https://doi.org/10.24201/es.2022v40n118.1994>

dejan trabajar y les quitan su lugar. Algunos oferentes señalaron que ese dinero no llegaba al municipio.²

Esta iniciativa tiene como objetivos que los municipios tengan control de los ingresos por concepto de ocupación de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial de tipo ambulante o en mercados rodantes, con esta acción además se garantiza que los oferentes no sean víctimas de chantajes por parte de los líderes.

Para tal efecto se propone que los municipios integren un padrón de comerciantes de mercados rodantes, que realicen verificaciones aleatorias en estos y que a los oferentes se les expida un recibo por el pago que realizan por concepto de ocupación de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial de tipo ambulante o en mercados rodantes, mismo que deberán exhibir en las verificaciones que realice la autoridad municipal competente.

Asimismo, se propone que la permanencia en los mercados no este condicionada a acudir a asambleas, marchas o mítines sindicales o de tipo político ninguno.

En beneficio de la población y de la sociedad en su conjunto se propone también etiquetar los recursos que ingresen a las arcas municipales por concepto de ocupación de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial de tipo ambulante o en mercados rodantes, para que estos sean utilizados para el mejoramiento del entorno, que se invierta en alumbrado público, mobiliario urbano, pavimentación etc.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona la fracción III. Bis al artículo 3; un párrafo cuarto al artículo 4 y un artículo 10 bis a la Ley para Regular el Uso de la Vía Pública en el Ejercicio de la Actividad Comercial, para quedar como sigue:

ARTICULO 3o.- Corresponde a las Autoridades Municipales:

² <https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ctm-obtiene-24-mdp-a-la-semana-por-derecho-de-piso-en-mercados-de-monterrey/> (31/05/23)

I. a III. (...)

III. Bis.- Integrar un padrón de comerciantes que ofertan sus productos o servicios en mercados rodantes y comercio popular, asimismo realizará verificaciones aleatorias en los mismos a fin de constatar que los oferentes cuenten con sus permisos y recibos de pago por concepto de ocupación de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial;

IV. a V. (...)

(...)

ARTICULO 4o.- (...)

(...)

(...)

Los permisos que sean otorgados de manera colectiva deberán especificar el número de puestos que integraran el mercado rodante o comercio popular, especificaciones de los bienes y servicios que se ofrecen, nombres e información de identificación de los oferentes. En este caso, la persona que tramita el permiso colectivo deberá entregar un recibo de pago a cada oferente y no podrá realizar cobros en exceso a los mismos ni obligarlos o condicionar su espacio en el mercado rodante a que estos acudan a ningún tipo de asamblea sindical o afín a algún partido o agrupación política.

(...)

ARTÍCULO 10 BIS. Los derechos obtenidos por concepto de ocupación de la vía pública en el ejercicio de la actividad comercial de tipo ambulante, mercados rodantes y comercio popular, serán destinados al mejoramiento del entorno en que se encuentren, para tal efecto se destinarán para alumbrado público, equipamiento urbano, pavimentación y mejoramiento de los servicios públicos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.

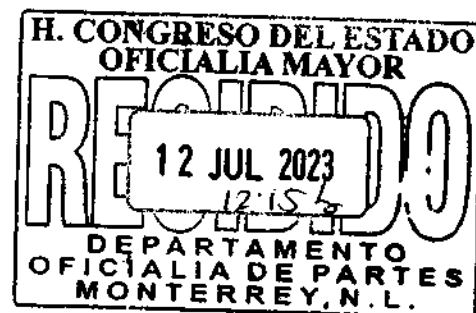
SEGUNDO. Los municipios del Estado de Nuevo León deberán adecuar sus reglamentos y normativa aplicable en un plazo no mayor a 120 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para dar cumplimiento al mismo.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los doce días del mes de julio de 2023.

Atentamente,



Dip. Waldo Fernández González



Año: 2023

Expediente: 17244 /LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN AL CAPÍTULO II BIS AL TÍTULO QUINTO EL CUAL CONTEMPLA LOS ARTÍCULOS 203 BIS Y 203 BIS 2 A LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN; ASÍ COMO DEROGACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 446 Y POR ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 446 BIS 1 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A CREAR UN COMITÉ ESTATAL DE FLOREA Y ARBOLADO URBANO.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



LXXVI

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SEPTUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL DEPARTAMENTO
OFICIALIA DE PARTES
MONTERREY, N.L.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN
PRESENTE. -

El suscrito Dip. **Luis Alberto Susarrey Flores** y los Diputados y Diputadas integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, de conformidad con los artículos 86 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar **Iniciativa de reforma a la Ley Ambiental y al Código Penal del estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Todos los mexicanos tenemos derecho a gozar de un medio ambiente sano, así lo dice nuestra Constitución Política en el quinto párrafo del artículo 4to, el cual a la letra menciona:

Artículo 4.- ...

(...)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Sin embargo, este derecho no solo no es garantizado por nuestro gobierno, sino que cada vez empeora más. Nuevo León tiene ya varios años siendo la ciudad más contaminada de todo el país (lo que por mucho tiempo fue la Ciudad de México), respiramos el peor aire y eso cada vez cuesta más vidas.



La crisis medioambiental de Nuevo León por supuesto que no es producto de la casualidad, hemos descuidado al estado en muchos sentidos por muchos años. Diversos estudios muestran que las fuentes de contaminación principales en la entidad son las fábricas, los vehículos de combustible, el crecimiento demográfico y las necesidades asociadas, etc, algunas más que otras, sin embargo, poco se ha hecho para corregir esto, pues cuando hablamos de contaminación nos parece más sencillo culpar a otros, y no asumir cada quien el costo que corresponda y buscar desde lo individual cómo le podemos aportar al planeta.

Una de las más útiles herramientas que tenemos para mitigar el daño ambiental es la plantación de árboles, pues estos absorben el CO₂ de la atmosfera y lo convierten en carbono que se almacena en su tronco, raíces y hojas. Entre sus principales beneficios, además de que sin duda al plantar un arbol se cultiva la esperanza de tener una vida más sana, los árboles producen oxígeno, purifican el aire, forman suelos fértiles, evitan erosión, mantienen ríos limpios, captan agua para los acuíferos, sirven como refugios para la fauna, reducen la temperatura del suelo, propician el establecimiento de otras especies, regeneran los nutrientes del suelo y mejoran el paisaje.

Sin embargo, el gobierno del estado en turno parece desconocer todos estos beneficios pues hace unos días el director del Organismo de la Cuenca Río Bravo, Conagua, y el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, informaron en rueda de prensa que iban arrancarían la limpieza en un tramo de 26 kilómetros de longitud del río Santa Catarina desde el Arroyo del Obispo en San Pedro Garza García hasta el puente de la avenida Israel Cavazos en Guadalupe. Esto para evitar riegos de inundación con la inminente temporada de lluvias.

El Gobierno del Estado de manera autoritaria y sin consenso previo con los ciudadanos, ya inició el desazolve en el Río Santa Catarina, mismo al que muchos



expertos han señalado de ecocidio al no ser selectivo ni considerado con la flora y fauna del ecosistema de la zona, lo cual ha despertado el rechazo de la ciudadanía de Nuevo León.

El Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, preocupado por este ecocidio, como lo han llamado expertos en la materia, ha convocado a una mesa de trabajo el día de hoy para encontrar una solución en conjunto, que proteja vidas humanas por el riesgo que hay de que lleguen inundaciones a la entidad por la temporada de lluvias y huracanes pero que esto no sea un pretexto para llevarse de encuentro la vegetación y afectar al río y a todo nuestro medio ambiente. Es decir, la ciudad se necesita adecuar al río, no el río a la ciudad.

Problemas como este, han sucedido a lo largo de los años en la entidad, pese a que el código penal es claro con las sanciones que existen para quien tale o desmonte arbolado sin autorización, esto ha sucedido en construcciones y desarrollos, en parques, etc, y si no ponemos un alto a esto, se puede salir aún más de control.

Por lo anterior, la bancada de Acción Nacional propone crear un Comité Estatal de Flora y Arbolado Urbano que este conformado por el Secretario de Medio Ambiente del estado, dos representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o de la Universidad Regiomontana pertenecientes a facultades o áreas especializadas en Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra; y dos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en Medio Ambiente y materias afines.

Dicho comité será quien autorice los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano y los proyectos de arborización en parques y áreas públicas. Nuevo León tiene a gente muy capaz, experta en temas medio ambientales, y estamos seguros que al conformar dicho comité, el gobierno tomará decisiones más técnicas



y dejará las improvisaciones en un tema tan delicado como el cuidado al medio ambiente. Además se propone aumentar las sanciones (de prisión y multa económica) por el delito de tala de arboles.

Es por lo anteriormente expuesto que el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional somete a consideración de esta asamblea el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se **ADICIONA** el capítulo II Bis al Título Quinto el cual contempla los artículos 203 Bis y 203 Bis 1 a la **Ley Ambiental del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

TÍTULO QUINTO

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN AMBIENTAL

...

CAPITULO II BIS

DEL COMITÉ ESTATAL DE FLORA Y ARBOLADO URBANO

Artículo 203 Bis.- El Comité Estatal de Flora y Arbolado Urbano estará conformado de la siguiente manera:

- I. El Secretario de Medio Ambiente del estado;**
- II. Dos representantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Universidad de Monterrey, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o de la Universidad Regiomontana pertenecientes a facultades o áreas especializadas en Medio Ambiente y Ciencias de la Tierra; y**



- III. Dos representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en Medio Ambiente y materias afines.**

Artículo 203 Bis 1.- El Comité Estatal de Flora y Arbolado Urbano tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Autorizar los trámites de retiro y reposición de flora y arbolado urbano;**
- II. Interponer ante las autoridades competentes los recursos correspondientes por faltas administrativas cometidas por servidores públicos, personas físicas y morales;**
- III. Interponer ante las autoridades competentes las denuncias por delitos ambientales cometidos por servidores públicos, personas físicas y morales; y**
- IV. Autorizar los proyectos de arborización en parques y áreas públicas.**

ARTÍCULO SEGUNDO. – Se **DEROGA** la fracción I del artículo 446 y se **ADICIONA** el artículo 446 Bis I al Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 446.- ...

I. SE DEROGA

II al X. ...

ARTÍCULO 446 Bis I.- SE IMPONDRÁ PENA DE PRISIÓN DE CUATRO A DOCE AÑOS Y MULTA DE CUARENTA A CIENTO SETENTA CUOTAS, A QUIEN TALE,



DESMONTE O DESTRUYA ÁRBOLES DE BOSQUES Y/O AFECTE RECURSOS FORESTALES, SALVO AQUELLOS CASOS QUE ESTÉN CONTEMPLADOS EN LOS ORDENAMIENTOS CORRESPONDIENTES Y CUENTEN CON EL PERMISO O AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A 13 JULIO DE 2023

ATENTAMENTE

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

**CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES
C. DIPUTADO LOCAL**

**MAURO GUERRA VILLARREAL
C. DIPUTADO LOCAL**


**LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
C. DIPUTADO LOCAL**





MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA
C. DIPUTADO LOCAL



NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
C. DIPUTADA LOCAL

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
C. DIPUTADA LOCAL

FÉLIX ROCHA ESQUIVEL
C. DIPUTADO LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL
C. DIPUTADO LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA
C. DIPUTADA LOCAL

DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA
C. DIPUTADO LOCAL

GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ REYES
C. DIPUTADO LOCAL

FERNANDO ADAME DORIA
C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ
C. DIPUTADA LOCAL

AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA
C. DIPUTADA LOCAL

Año: 2023

Expediente: 17246 /LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 110 BIS V DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .

El suscrito **Diputado Héctor García García** e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 88 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a **presentar iniciativa en donde se modifica el artículo 110 Bis V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, lo anterior bajo la siguiente:**

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los espacios públicos son bienes comunes y tienen una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa.

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, por lo que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Con la iniciativa a la Ley de Gobierno Municipal que proponemos es para ampliar desde los municipios el garantizar derecho de todas las personas a vivir y disfrutar de las ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, la densidad de áreas verdes en un territorio debería contar un mínimo del 10 por ciento, sin embargo, Nuevo León alcanza apenas el 1.9 por ciento, según la plataforma

Vemos oportuno ampliar el número de áreas verdes y la construcción de plazas públicas, y llegar así a los estándares deseables de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

En general hay una percepción compartida de que hacen falta más y mejores áreas verdes y en algunos rubros en particular, sobre todo, arbolado y seguridad, la evaluación ciudadana no es tan positiva; pero está claro, que las existentes deben ser equipadas infraestructura para que todas las personas puedan contar con espacios públicos y plazas para la práctica del deporte.

Datos proporcionados por las diferentes administraciones señalan que en el área metropolitana de Monterrey existen alrededor de 3 mil 553 plazas públicas al interior de colonias, pero se está por debajo de los estándares del número de estos espacios que debe haber en los municipios.

El Consejo Nuevo León indica que durante el 2021 sólo se construyeron 105 nuevos espacios y son los municipios de Juárez, Cadereyta y Guadalupe los peores evaluados.

El Municipio de Apodaca construyó 18 nuevos espacios, Escobedo y García 9, Guadalupe 15, Juárez 8, Monterrey y San Nicolás 7, San Pedro 13 y Santa Catarina 19.

Por otra parte, una de las atribuciones de los municipios es establecer criterios y lineamientos para dotar de servicios públicos a los habitantes, entre los que se encuentra el equipamiento de parques y jardines.

Es por ello, que la propuesta de iniciativa que hoy proponemos a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León es para que dentro de las facultades y obligaciones de los municipios pueden dotar a las plazas y espacios públicos de aparatos para la activación física y la práctica del deporte para las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de igualdad.

Cabe mencionar que las plazas públicas de los 51 municipios del estado de Nuevo León son parte fundamental para recreación, esparcimiento y práctica del deporte de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sin duda, que la práctica del deporte y la activación física también contribuyen a mantener una buena salud física y mental de las personas de todas las edades, por lo que propone la siguiente tabla comparativa de la propuesta que ley que se plantea.

LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TEXTO VIGENTE

TEXTO QUE SE PROPONE

SECCIÓN VII DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES

ARTÍCULO 110 Bis V.- El área encargada del cuidado y protección de parques y jardines es la unidad administrativa que tendrá a cargo la creación, cuidado, protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración de los parques y jardines de competencia municipal, con base a lo establecido en la Ley Ambiental del Estado, la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León y demás leyes y reglamentos municipales.

SECCIÓN VII DEL CUIDADO Y PROTECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES

ARTÍCULO 110 Bis V.- El área encargada del cuidado y protección de parques y jardines es la unidad administrativa que tendrá a cargo la creación, cuidado, protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración de los parques y jardines, **así como equipar plazas y espacios públicos con infraestructura para la activación física y práctica del deporte** de competencia municipal, con base a lo establecido en la Ley Ambiental del Estado, la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León y demás leyes y reglamentos municipales.

<p>"En los Municipios con más de cien mil habitantes, el área tendrá el nivel de Secretaría o de Dirección General. En los demás Municipios dicha área tendrá el nivel de acuerdo con sus posibilidades presupuestales."</p>	...
<p>*N. de E. La porción normativa entrecomillada fue declarada inválida en Sesión celebrada en fecha 24 de agosto de 2021, por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia Constitucional 195/2020.</p>	...

Cabe mencionar que la pandemia provocada por el Covid-19 mantuvo en el encierro a más de 5 millones de personas en el estado, lo que provocó problemas de estrés, ansiedad y obesidad, por lo que los espacios públicos son parte fundamental para retomar el acondicionamiento físico y la práctica del deporte en las colonias.

Con base en los razonamientos expuestos con anterioridad, quienes integramos el Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano presentamos ante esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se reforma el primer párrafo del artículo 110 Bis V de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 110 Bis V.- El área encargada del cuidado y protección de parques y jardines es la unidad administrativa que tendrá a cargo la creación, cuidado, protección, la conservación, el mantenimiento y la restauración de los parques y jardines, **así como**

equipar plazas y espacios públicos con infraestructura para la activación física y práctica del deporte de competencia municipal, con base a lo establecido en la Ley Ambiental del Estado, la Ley para la Conservación y Protección del Arbolado Urbano del Estado de Nuevo León y demás leyes y reglamentos municipales.

...

...

TRANSITORIO

ÚNICO. – El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, NL., a Julio de 2023

DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO



Año: 2023

Expediente: 17247 /LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. VENECIA GUZMÁN ELIZONDO

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PONE A CONSIDERACIÓN DE ESTA LA ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): LEGISLACIÓN.

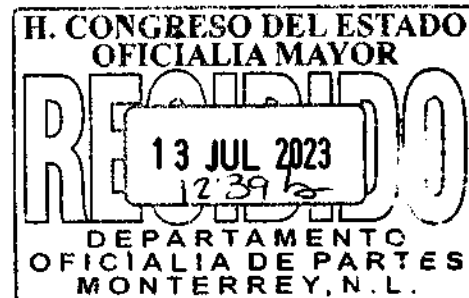
Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

2 Sin anexos 2

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

PRESENTE. -



La suscrita, C. Venecia Guzmán Elizondo, ciudadana mexicana en el uso goce y disfrute de mis derechos civiles, me permito someter a consideración, de esa Honorable soberanía, la presente solicitud de iniciativa de reforma, la cual tiene como objeto modificar y adicionar, diversos artículos la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, y acorde a que la misma no ha sufrido modificaciones desde la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, siendo esta el 13-trece de mayo del 2016-dos mil dieciséis.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Participación Ciudadana en México representa un reto ante las estrategias y reformas, que además de falta de innovación, también nos encontramos lejos de lograr la promoción e inclusión de todas las personas en la toma de decisiones que forman parte del interés público y social en nuestra comunidad.

Tal es el caso de la Ley de Participación Ciudadana, que se ha visto limitados los mecanismos de participación y aplicación, a los considerados como ciudadanos en términos del artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Secretaría de Innovación y Participación Ciudadana realizó mesas de trabajo con diversas entidades pertenecientes a distintos órdenes de gobierno con quienes se consultó la viabilidad y factibilidad del ejercicio del derecho de participación de las y los niños y adolescentes en el Presupuesto Participativo.

Este año, El municipio de San Pedro Garza García, reformó diversos artículos del Reglamento de Atención y Participación Ciudadana del Municipio, dentro de los grandes cambios que se normaron, fue la inclusión de los menores entre 9 y 17 años, y como parte de garantizar el acceso a sus derechos, para ser partícipes del Programa de Presupuesto Participativo, e incluirlos en la toma de decisiones de nuestra comunidad.

Es importante tomar en cuenta que es obligación de los municipios garantizar el derecho humano de participación, que la visión de los niños, niñas y adolescentes, puede transformar a la ciudad para bien, además de que fomenta la Práctica de la democracia de las generaciones futuras, formar adultos responsables, y la enseñanza en la práctica de la soberanía como ciudadanos.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 13-trece de mayo del 2016-dos mil dieciséis, en la que señala lo siguiente:

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, la participación ciudadana es el derecho de las y los ciudadanos y habitantes del Estado de Nuevo León, de conformidad con las disposiciones vigentes, a intervenir y participar individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, por lo que el Estado debe garantizar la utilización de todos los medios de comunicación institucionales, así como las redes sociales, para proveer la información, difusión, capacitación y educación, para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana.

Artículo 8. Para efectos de esta Ley, son habitantes del Estado de Nuevo León, las personas que residan en su territorio. Son ciudadanos del estado de Nuevo León, las personas que se encuentren en el supuesto del artículo 31 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 9. Las y los habitantes del Estado de Nuevo León tienen las siguientes obligaciones:

III. Cumplir con las disposiciones de la Presente Ley;

SEGUNDO. Que el pasado 01-primer de octubre del 2022-dos mil veintidós, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León la Reforma Integral a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León mediante Decreto número 248, misma en la que hace referencia específicamente en lo siguiente:

Artículo 3.- Esta Constitución tendrá el fin de salvaguardar en todo momento la dignidad y la libertad de las personas, armonizando lo aspectos individuales y sociales de la vida humana que propicien el desarrollo humano sustentable.

En el Estado de Nuevo León, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Federal establece. A través de las leyes que emanen de esta Constitución, y en lo que resulte competencia de los poderes de esta

entidad, se generarán los mecanismos idóneos para garantizar el ejercicio de dichos derechos.

Los derechos humanos de esta constitución alientan la vida democrática y son expresión concreta de la dignidad humana. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Artículo 5. Todas las personas en el Estado son iguales y libres. En consecuencia, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad de la persona y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Artículo 31. El estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del Estado.

Artículo 55. Son obligaciones de quienes habitan en el Estado:

I.- Ser responsables de que sus hijos y pupilos menores de dieciocho años concurren a las escuelas para recibir educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, a revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el interés superior de la niñez y de la primera infancia, e inculcando los valores sociales

Artículo 58. Las personas tienen el derecho a participar en las decisiones del Estado a través de los instrumentos de participación ciudadana que establece esta Constitución y las leyes correspondientes.

Los instrumentos de participación ciudadana serán mínimo los siguientes

...VI. Presupuesto Participativo

TERCERO. Que el pasado 23 de marzo del 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León la reforma al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana del Municipio de San Pedro Garza García, y que suscribo a continuación:

342. [...] Las niñas, los niños y los adolescentes residentes del municipio de nueve años en

adelante podrán participar en la etapa de votación del Programa, bajo los requisitos señale el manual.

345 bis. "[...] Las niñas, los niños y los adolescentes residentes del municipio de nueve años en adelante podrán participar en la etapa de votación del Programa bajo los requisitos que señale el manual."

CONCLUSIONES

PRIMERO. Se pone a consideración de H. Congreso del Estado la adición a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, un apartado donde se señalen los mecanismos necesarios para garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Nuevo León, atendiendo a las disposiciones establecidas en los artículos, 2, 6, 13, 63 bis, 71, y 73 de la Ley General de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como a los artículos 2, 90, y 91 de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. Se pone a consideración en relación al párrafo que antecede, la siguiente propuesta en relación a la adición a la Ley de Participación Ciudadana del estado de Nuevo León:

De los mecanismos para la Participación de las niñas, niños y Adolescentes

- I. Las autoridades de las entidades estatales, y municipales del estado de Nuevo León, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman en ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen.
- II. Los mecanismos de participación social que para tal efecto se promuevan, tomarán en cuenta la opinión y considerarán los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses y preocupaciones.
- III. Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el Estado de Nuevo León, tienen derecho a la participación en los instrumentos que establece esta Ley, las autoridades competentes en el marco de su aplicación, deberán de establecer las condiciones y los criterios para garantizar este derecho, tomando en cuenta

su condición de edad, desarrollo cognoscitivo y madurez, conforme a las Leyes General y Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

TERCERO. Se somete a consideración del H. Congreso del Estado, alinear la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nuevo León, conforme a las disposiciones publicadas en la Reforma Integral a la Constitución del estado Libre y Soberano de Nuevo León, publicada el 22-veintidós de octubre del 2022-dos mil veintidós, esto en razón de garantizar a todas las personas del Estado de Nuevo León, y sin discriminación alguna, el acceso al ejercicio de sus derechos, no siendo una limitante, los requisitos que se establecen para la ciudadanía.



Venerica Guzmán



En anexa





H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Siño dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo



No autorizo



Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

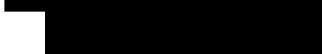


Núm. Ext.

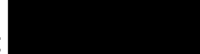
Núm. Int.

X

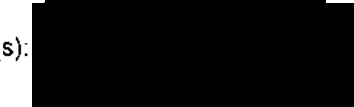
Colonia:



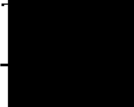
Municipio:



Teléfono(s):



Estado:



C.P.



Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo



No autorizo



Correo:



Verencia Guzmán

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

Año: 2023

Expediente: 17249/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: LA C. DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 157 BIS, 157 BIS I, 157 BIS II Y 157 BIS III DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . -



Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por adición de los artículos 157 Bis, 157 Bis I, 157 Bis II y 157 Bis III la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cerro de la Silla, la Cascada de Guadalupe, la posibilidad de pasar el día disfrutando de la naturaleza y practicar senderismo, es una de las principales atracciones y distintivas de Nuevo León. En los pasados 35 años el área metropolitana creció ocho veces su tamaño, de acuerdo con cifras del INEGI, el problema es que las áreas verdes no han crecido a ese nivel.

La Organización Mundial de la Salud, determina que el estándar internacional de superficie verde por habitante debe ser 9 metros cuadrados. Tomando esto en cuenta, es probable que únicamente 4 municipios cuentan con estos parámetros:

1. **San Pedro Garza García** con una superficie de 1,595,860.967 metros cuadrados de área verde, y tomando en cuenta que su población es de poco más de 430 mil habitantes, cuenta con 12.92 metros cuadrados por habitante, el único que sobrepasa el estándar de la OMS.
2. **García** tiene una superficie de 1,975,496.634 metros cuadrados de área verde y con sus más de 247 mil habitantes, promedia 7.99 por ciento.
3. **Apodaca**, cuenta con una superficie de 3,690,471.836 metros cuadrados de área verde y una población de más de 597 mil personas, promediando 6.18 por ciento.
4. **Guadalupe**, es el segundo municipio de la zona metropolitana con más superficie de área verde, al registrar 4,084,635.068 metros cuadrados, pero al promediar con los más de 682 mil habitantes, el resultado es de 5.98 por ciento.

El Estado se caracteriza por ser una región dinámica y poderosa, cuyo crecimiento económico y desarrollo urbano han traído consigo importantes beneficios para sus habitantes. Sin embargo, esta expansión ha implicado la pérdida progresiva de espacios naturales, áreas verdes y zonas de esparcimiento, lo cual ha impactado negativamente en la calidad de vida y bienestar de la población.

La preservación y recuperación de áreas verdes es esencial para asegurar un entorno saludable y equilibrado en nuestras ciudades y comunidades. Estos espacios proporcionan múltiples beneficios, tanto para el medio ambiente como para la salud física y mental de las personas. Las áreas verdes contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, la regulación de los ciclos hidrológicos y la mejora de la calidad del aire.

Asimismo, las áreas verdes son espacios fundamentales para la recreación, el esparcimiento, la convivencia social y la práctica de actividades físicas al aire libre. Estos espacios ofrecen a la población un escape de la vida urbana acelerada, promoviendo el bienestar emocional, la cohesión comunitaria y la calidad de vida en general. Ello sin mencionar que es, indirectamente, una forma de prevenir el delito.

Es en este contexto que hoy propongo reformas a Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, con el propósito de fomentar y facilitar la recuperación de áreas verdes en nuestra entidad. Estas reformas se fundamentan en los siguientes principios y consideraciones:

1. **Conservación del medio ambiente:** Reconocemos la importancia de preservar y proteger los ecosistemas naturales y la biodiversidad en Nuevo León. La recuperación de áreas verdes contribuirá a la conservación de nuestros recursos naturales y a la protección de especies nativas.

2. Mejora de la calidad de vida: Las áreas verdes proporcionan beneficios directos a la salud y el bienestar de los ciudadanos. Al promover la recuperación de estos espacios, estaremos creando entornos más saludables y propicios para la calidad de vida de la población.

3. Equidad y accesibilidad: Es fundamental garantizar que todas las comunidades, independientemente de su ubicación geográfica o nivel socioeconómico, tengan acceso equitativo a áreas verdes cercanas. La recuperación de espacios verdes debe ser inclusiva y buscar la equidad en la distribución de estos recursos.

4. Participación ciudadana: Reconocemos el papel fundamental de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en la planificación de la recuperación de áreas verdes. Promoveremos la participación activa de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales en los procesos de diseño, implementación y mantenimiento de estos espacios.

5. Sinergias con otros sectores: La recuperación de áreas verdes debe ser abordada de manera integral, en colaboración con diferentes sectores, como urbanismo, salud, educación y desarrollo

Con esto en mente, la presente iniciativa tiene como objetivo promover y facilitar la recuperación de áreas verdes en el estado de Nuevo León. Reconociendo la importancia de los espacios verdes para la salud y el bienestar de la población, así como para la conservación del medio ambiente, se busca fomentar la creación y restauración de áreas verdes urbanas y rurales.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO: Se reforma por adición de los artículos 157 Bis, 157 Bis I, 157 Bis II y 157 Bis III la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para quedar como sigue:

Artículo 157 Bis. Se establecerán los Programas de Recuperación de Áreas Verdes, los cuales estarán destinados a la adquisición de terrenos, restauración de espacios degradados y la creación de nuevos parques y jardines.

Para ello, se llevará a cabo un estudio exhaustivo para identificar áreas verdes degradadas o subutilizadas en el estado, con el fin de priorizar su recuperación y restauración. Se considerarán criterios como la ubicación geográfica, la accesibilidad, la demanda y necesidad de áreas verdes en cada comunidad entre los criterios para la delimitación de los programas.

Artículo 157 Bis I. Para los Programas de Recuperación de Áreas Verdes se fomentará la participación ciudadana en la identificación de áreas verdes a recuperar, en el diseño de proyectos de restauración y en las labores de recuperación a través de convenios de colaboración. Así como a través de la denuncia de lotes abandonados y en malas condiciones.

Artículo 157 Bis II. Se destinarán recursos para la restauración y mantenimiento adecuado de las áreas verdes recuperadas, incluyendo la plantación de especies nativas, la instalación de sistemas de riego eficientes y la implementación de prácticas sostenibles de manejo.

Además, se buscará desarrollar programas de educación ambiental y sensibilización dirigidos a la comunidad, con el fin de promover el valor de las áreas verdes, fomentar su cuidado y generar conciencia sobre su importancia para la calidad de vida y el equilibrio ecológico.

Artículo 157 Bis III. La Secretaría y los Gobiernos Municipales establecerán los incentivos que consideren procedentes para promover la inclusión de áreas verdes en nuevos desarrollos urbanos, tales como la reducción de impuestos o la simplificación de trámites administrativos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. La Secretaría, en coordinación con los gobiernos municipales, y en su caso, con la participación de la ciudadanía, deberán localizar y diseñar el Programa de Recuperación de Áreas Verdes en el plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO. Las erogaciones en que se incurra por la implementación de lo previsto en el presente Decreto correrán a costa de la disponibilidad presupuestal asignado a las autoridades responsables.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 13 de julio de 2023.




Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Viriginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Héctor García García
Contreras

Dip. María Del Consuelo Gálvez

Dip. Roberto Carlos Farias García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma por adición de los artículos 157 Bis, 157 Bis I, 157 Bis II y 157 Bis III la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

Año: 2023

Expediente: 17250/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

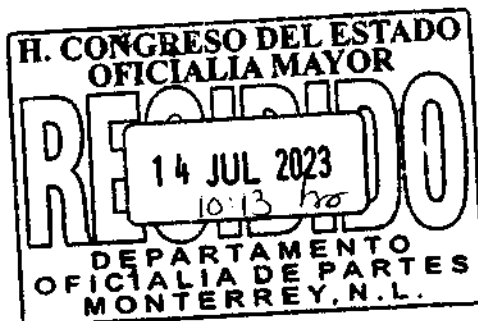
ASUNTO RELACIONADO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 271 BIS 5, CAPÍTULO SEXTO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



La suscrita Diputada Jessica Elodia Martínez Martínez, perteneciente al Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como los numerales 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudo ante esta Soberanía a presentar **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 271 BIS 5 del Código Penal para el Estado de Nuevo León**, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La evolución de las tecnologías de la comunicación ha avanzado a pasos agigantados permitiendo a las personas usuarias tener un acceso inmediato a una red de fuente masiva de contenidos e información. De igual manera, la red crea un espacio de difusión de información que de manera instantánea se puede viralizar y llegar a un sinfín de personas en cuestión de segundos, este efecto puede ser negativo o positivo dependiendo de la perspectiva con las que se clasifique. Un aspecto negativo muy claro sería la facilidad y rapidez para compartir contenido íntimo de una persona.

Actualmente, el marco jurídico penal del Estado de Nuevo León define los delitos contra la intimidad, como aquellas acciones que vulneran la privacidad de las personas a través de la difusión por uno o varios medios, digitales o análogos, de contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la persona que figura en el material y que se convierte en víctima o víctimas de esta situación.

Esos delitos surgen en el marco de una era digitalizada donde personas que contaba con la posesión de contenido íntimo de una o un tercero y lo compartían principalmente en redes sociales y sistemas de comunicación instantánea, sin tener el consentimiento de la o las personas que figuran en el material.

Lo anterior se realizaba a fin de crear comunidades con el mismo objetivo de compartir contenido íntimo ajeno, por venganza, o despecho. Así mismo, no podemos dejar de lado que había personas que lo hacían por la simple razón de tener dicho material bajo su control o peor aún, para comercializarlo.

De acuerdo con la información publicada por diversos medios de comunicación, se establece que en Nuevo León en periodo comprendido de mayo del 2019 al mes de enero del año 2022 se obtuvo un

registro de mil cincuenta seis delitos contra la intimidad personal, donde por desgracia la mayoría de las víctimas son mujeres.

De igual manera, existen comunidades similares a las ya citadas, pero que se dedican a la venta, intercambio y arrendamiento de este material, estos usuarios y comunidades sin guardar secreto alguno y con la publicidad con la que cuentan las plataformas digitales ofrecen a la venta este material como si se tratase cualquier artículo de mercadeo. A su vez, almacenan estos contenidos en plataformas o sistemas de mensajería en donde los interesados en consumir ese tipo de contenido pagan una suscripción temporal que por tiempo definido les da acceso al mismo. Un tercer escenario es el trueque de estos contenidos, esta dinámica se da entre 2 o más usuarios quienes se intercambian un material por otro.

Es muy importante destacar que, este tipo de comunidades y personas que se dedican al “*retail*” de contenido íntimo, no están operando solamente en los ambientes digitales sino también en los escenarios físicos. El más claro ejemplo de esto, son los establecimientos de mercancía pirata, en donde además se comercializan discos de música y películas, los cuales se encuentran en diferentes puntos del Estado y quienes ofertan y vociferan a las personas transeúntes, no importando si estas pueden ser menores de edad que, al interior de estos comercios tienen secciones especiales destinadas a la venta de contenido íntimo, el cual puede incluir material íntimo sin el consentimiento de la o las víctimas.

Así mismo, es importante mencionar que muchos de estos contenidos íntimos en algunas ocasiones veces llegan a estas comunidades o “distribuidores” por la sustracción no consensuada que hace un tercero al poseedor del contenido, y es este tercero quien inicia con la distribución onerosa o gratuita del contenido. La sustracción de estos contenidos suele ocurrir de diferentes maneras. Algunas personas pueden ser víctimas de hacking, en otras ocasiones las imágenes o videos pueden ser obtenidos por medio del engaño o la coerción, así como el supuesto donde el contenido sea robado físicamente de un dispositivo o cuenta en línea, hecho que no se encuentra establecido en nuestro código penal, elemento esencial para la elaboración de la presente iniciativa.

Bajo el supuesto que sea y sin importar el escenario donde se presenten, estos hechos configuran en una violación a la integridad personal, así como una profunda lesión emocional de las personas que figuran en este tipo de material, la cual en su gran mayoría termina sujeta al escrutinio público producto de la exposición en redes sociales, sistemas de mensajería instantánea y otros medios del material donde se encuentra registrada su vida sexual de; el momento más íntimo y humano que puede tener una persona.

En la actualidad contamos con una legislación penal actualizada que, gracias a la *“Ley Olimpia”* se prevén como delitos contra la intimidad algunos supuestos que tienen como fin último el de prevenir, evitar, atender y combatir la circulación de material íntimo sin la aprobación de la persona o personas que figuran el material, hechos que de ser consumados lastiman la integridad y dignidad de las personas.

Este tipo de legislación 2019, busca garantizar y proteger el derecho fundamental de las personas a la privacidad y les proporciona un marco legal para salvaguardar su intimidad, dignidad y sobre todo su reputación. De igual manera, se tornan importantes en una época sumamente digitalizada y en donde como consecuencia la privacidad, el honor y la intimidad se ven debilitadas por la presteza de las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea.

Es fundamental puntualizar que, la redacción actual de la legislación deja fuera los supuestos en los que estos contenidos sean sometidos a un intercambio, arrendamiento y oferteo, así como el de sustracción, como ya lo he citado en el presente documento.

Con base a lo anterior, es necesario contar con una legislación actualizada, enfocada y que sea más efectiva para poder abordar de manera integral estos desafíos y poder asegurar protección a todas las personas. Es más que necesario adicionar estos hechos en nuestro Código Penal para establecer consecuencias legales para aquellos que incurran o piensen incurrir en estos actos, con el objetivo de que se desistan de este tipo de comportamientos. Así mismo, debemos proporcionar vías legales para que las víctimas busquen justicia y protección por parte del Estado.

Es importante destacar que, el Código Penal para el distrito Federal que es aplicable a la Ciudad de México, engloba los supuestos de intercambio y arrendamiento de contenidos íntimos, lo que refleja una legislación integral para atender la ya citada problemática.

Reforzar los delitos contra la intimidad es esencial para proteger los derechos de las personas, prevenir futuras violaciones, brindar apoyo a las víctimas y crear una cultura de respeto a la privacidad. También, es necesario adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y situaciones sociales que se presentan a fin de generar las condiciones necesarias para disuadir a los posibles perpetradores y prevenir futuros delitos.

Para sustentar de manera ejemplar y descriptiva, presento el siguiente cuadro comparativo que sirve de ilustración para comprender de mejor manera mi propuesta de reforma al Código Penal para el Estado Nuevo León.

ARTÍCULO 271 BIS 5. Comete el delito contra la intimidad personal, quien o quienes, revelen, difundan, distribuyan, publiquen o exhiban mediante correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento.

Así como quien videografe, audiografe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

A quien cometa el delito descrito en los párrafos anteriores, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión

La pena se aumentará hasta en una mitad:

- I. Cuando las imágenes, audio o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico hayan sido obtenidos cuando la víctima fuese menor de dieciocho años de edad, o bien, cuando no tenga la capacidad de comprender o resistir el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho que constituye el contenido revelado, difundido, publicado o exhibido

ARTÍCULO 271 BIS 5. Comete el delito contra la intimidad personal, quien o quienes, **sustraigan**, revelen, difundan, distribuyan, publiquen o exhiban mediante correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento.

Así como quien videografe, audiografe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

A quien cometa el delito descrito en los párrafos anteriores, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión

La pena se aumentará hasta en una mitad:

- I. Cuando las imágenes, audio o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico hayan sido obtenidos cuando la víctima fuese menor de dieciocho años de edad, o bien, cuando no tenga la capacidad de comprender o resistir el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho que constituye el contenido revelado, difundido, publicado o exhibido

<p>II. Cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o bien, por cualquier persona con la que la víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza;</p> <p>III. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones</p> <p>IV. Cuando se haga con fines lucrativos</p> <p>V. Cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.</p>	<p>II. Cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o bien, por cualquier persona con la que la víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza;</p> <p>III. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones</p> <p>IV. Cuando se haga con fines lucrativos</p> <p>V. Cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.</p>
<p>Se equipará al delito contra la intimidad personal y se sancionará como tal:</p> <p>a) El registro o toma de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento. No se actualizará este supuesto cuando el sujeto activo justifique, que el registro fue meramente casual o automático;</p> <p>b) La revelación, difusión o exhibición ante dos o más personas de imágenes, audios o videos íntimos, de contenido erótico</p>	<p>Se equipará al delito contra la intimidad personal y se sancionará como tal:</p> <p>a) El registro o toma de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento. No se actualizará este supuesto cuando el sujeto activo justifique, que el registro fue meramente casual o automático;</p> <p>b) La revelación, difusión o exhibición ante dos o más personas de imágenes, audios o videos íntimos, de contenido erótico</p>

sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento; y c) La publicación y comercialización, de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Se entenderá por imágenes, audios o videos íntimos, aquellos que contengan revelaciones de tipo sexual de la persona	sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento; y c) La publicación, comercialización, promoción, intercambio y arrendamiento de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Se entenderá por imágenes, audios o videos íntimos, aquellos que contengan revelaciones de tipo sexual de la persona
---	--

Es por la importancia de generar condiciones para la protección integral de las y los ciudadanos a fin de garantizar su derecho a la privacidad y a la dignidad, así como para asegurar la permanencia del Estado de Nuevo León como uno de los mejores estados del país para vivir, es que solicito se someta a la consideración de las y los diputados integrantes de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

Primero.- Se reforma por modificación de la redacción del artículo 271 BIS 5, Capítulo sexto del **Código Penal Para el Estado De Nuevo León**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 271 BIS 5. Comete el delito contra la intimidad personal, quien o quienes, **sustraigan**, revelen, difundan, distribuyan, publiquen o exhiban mediante correo electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales o por cualquier otro medio, imágenes, audios o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento.

Así como quien videografe, audiografe, fotografíe, imprima o elabore, imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento.

A quien cometa el delito descrito en los párrafos anteriores, se le impondrá una pena de tres a seis años de prisión

La pena se aumentará hasta en una mitad:

- VI. Cuando las imágenes, audio o videos de contenido erótico, sexual o pornográfico hayan sido obtenidos cuando la víctima fuese menor de dieciocho años de edad, o bien, cuando no tenga la capacidad de comprender o resistir el carácter erótico, sexual o pornográfico del hecho que constituye el contenido revelado, difundido, publicado o exhibido
- VII. Cuando el delito sea cometido por el cónyuge, concubinario o concubina, o bien, por cualquier persona con la que la víctima haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- VIII. Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones
- IX. Cuando se haga con fines lucrativos
- X. Cuando a consecuencia de los efectos o impactos del delito, la víctima atente contra su integridad o contra su propia vida.

Se equipará al delito contra la intimidad personal y se sancionará como tal:

- a) El registro o toma de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento. No se actualizará este supuesto cuando el sujeto activo justifique, que el registro fue meramente casual o automático;
- b) La revelación, difusión o exhibición ante dos o más personas de imágenes, audios o videos íntimos, de contenido erótico sexual o pornográfico, de una persona sin su consentimiento; y
- c) La publicación, comercialización, **oferteo, intercambio y arrendamiento** de imágenes, audios o videos íntimos de contenido erótico, sexual o pornográfico de una persona sin su consentimiento. Se entenderá por imágenes, audios o videos íntimos, aquellos que contengan revelaciones de tipo sexual de la persona.

TRANSITORIOS

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.


Monterrey Nuevo León a viernes 14 de Julio del año 2023.

DIP. JESSICA ELODIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE LA LXXVI LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.



2024

2024

2024

2024

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 9 Y UNA SECCIÓN X DEL CAPÍTULO IV DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GOMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por adición de una fracción V del artículo 9 y por adición de una sección X, del Capítulo IV de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La masa arbórea urbana brinda un importante abanico de servicios ambientales para la humanidad.¹ Uno de los más importantes sin duda radica en el combate que los árboles pueden ayudar a generar contra la contaminación del aire. En ese sentido, se enlistan un poco más a detalle alguno de los beneficios que proporcionan:

- Actúan como filtros naturales de la contaminación, al absorber la misma a través de sus hojas y corteza.

¹ Nowak, DJ, sin fecha, The Effects of Urban Trees on Air Quality , USDA Forest Service, Syracuse, NY

- Su follaje atrapa las partículas de contaminación evitando que se propaguen por el aire, lo cual en nuestra entidad es de vital importancia.
- Son grandes productores de oxígeno, lo cual ayuda a mejorar la calidad del aire en general.
- Entre los contaminantes que pueden absorber destacan el polvo, el humo, diversos tipos de óxidos nitrógenos y dióxidos de azufre, y por supuesto, el dióxido de carbono.
- Ayudan a reducir el efecto de isla de calor, magnificado por las grandes cantidades de cemento que tiene nuestra ciudad.
- Ayudan a reducir los precursores de ozono superficial.
- Contribuyen a mejorar la absorción de escurrimientos de lluvias.
- Fortalecen el ciclo del agua, ayudando a generar más humedad, la cual se traduce eventualmente en lluvia más frecuente.
- Ayudan a mejorar los entornos urbanos, reduciendo el estrés y bajo ciertos parámetros el crimen y la inseguridad.
- Ayudan a incrementar la biodiversidad, la cual es importante para mantener todos los ciclos naturales en adecuado funcionamiento.

Al revisar esta larga lista de prestaciones brindadas por los árboles, es inevitable que estos deban ser considerados como una valiosa herramienta para atender tres graves problemáticas de nuestra ciudad: contaminación atmosférica, falta de agua e inundaciones con lluvias leves.

Desafortunadamente y pese al enorme valor de la masa arbórea, de acuerdo con información oficial de la administración y diversos estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León y El Tecnológico de Monterrey, nuestra metrópoli presenta un déficit estimado de poco más de 1 millón de árboles.²

Dicha situación se traduce en una merma general en la calidad de vida, pues la falta de árboles agrava las problemáticas que ya hemos mencionado, en especial la del aire contaminado.³

² <https://vidauniversitaria.uanl.mx/expertos/necesita-nuevo-leon-mas-arboles-nativos/>

³ <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/>

El aire contaminado es un tema recurrente en las notas de prensa de la entidad, y en lo que refiere a numeralia este 2023 se ha decretado por séptima vez una alerta ambiental en lo que va del año⁴

Aunado a esto la entidad suele tener en promedio más de 200 días por encima de la norma, es decir, con concentraciones de contaminación que van desde la mala a la extremadamente mala.⁵

Como bien se sabe, la contaminación atmosférica provoca múltiples enfermedades, entre las que destacan los problemas cerebro vasculares y cardiacos, daños a los pulmones y vías respiratorias, daño a ojos, aumento de alergias, aumento de propensión a gripas y enfermedades similares, cáncer, e incluso se ha comprobado que daña también a los no nacidos en el vientre de sus madres.⁶

Al hablar de esta problemática de enfermedades, es indispensable mencionar los beneficios para el sistema de salud y para las personas que se conseguirían mitigando dicha polución.

En su estudio denominado “Beneficios económicos de reducir la contaminación” el Doctor del Tec de Monterrey Gerardo Mejía refiere que la evidencia indica que por cada 10 microgramos que se reduzca la contaminación, se podrían generar ahorros entre insumos en el sector salud y pérdida de productividad laboral de hasta 800 millones de dólares.⁷

En cuanto a profundizar sobre el diagnóstico de falta de arbolado, en el año 2005 uno de los más grandes catedráticos de la UANL, el doctor Glafiro Alanís Flores, indicaba que para lograr abatir los déficits de masa arbórea se debían aprovechar espacios como, cauces de ríos, parques públicos, parques deportivos, parques industriales, camellones y algunas banquetas.⁸

La sugerencia de forestación era de especies nativas por su bajo mantenimiento hídrico.

⁴ <https://www.elfinanciero.com.mx/estados/2023/04/05/calidad-del-aire-en-monterrey-activan-septima-alerta-por-contaminacion/>

⁵ <https://verificado.com.mx/contaminacion-nuevo-leon-versiones-encontradas/>

⁶ [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health#:~:text=Household%20air%20pollution%20exposure%20leads,\(COPD\)%20and%20lung%20cancer.](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health#:~:text=Household%20air%20pollution%20exposure%20leads,(COPD)%20and%20lung%20cancer.)

⁷

⁸ <https://www.redalyc.org/pdf/402/40280104.pdf>

En ese sentido, podemos ver a lo largo de los años que todas las autoridades han implementado en mayor o menor medida campañas de reforestación.

En múltiples ocasiones se ha mencionado el famoso número de 1 millón de árboles, sin embargo existe poca certeza de como vienen funcionando estos programas, toda vez que es frecuente ver como las flamantes reforestaciones terminan con árboles muertos por falta de mantenimiento.

Esta situación repercute en un círculo que impacta la eficiencia de las políticas públicas de arbolado. Al revisar algunas reforestaciones en los últimos 10 años, se puede observar una constante en múltiples gobiernos y administraciones: se realizan campañas de reforestación, pero se descuida o se olvida el mantenimiento a los árboles.

Lugares como el Mercado Campesino, el Parque Libertad, los parques de la Talavera, San Pedro 400, Parques lineales en Escobedo, el Estadio BBVA, camellones de avenidas como Lázaro Cárdenas, Venustiano Carranza, Abraham Lincoln, Nogalar, Las Torres solo por mencionar algunas, son ejemplos de lugares donde en diversos momentos de los últimos años se han erogado recursos para reforestar, sin que se pueda siempre garantizar un adecuado riego a los árboles.

Esto ocasiona que no se pueda combatir el déficit de árboles, y que además se desperdicien recursos financieros y humanos en un esfuerzo que no rinde los frutos necesarios.

Por otra parte, a veces incluso se han hecho reforestaciones en plena canícula, lo cual, aunado al bajo mantenimiento, reduce las posibilidades de supervivencia de los árboles.

Ante esta situación es preciso que la ley establezca una serie de lineamientos que ayuden a garantizar que los árboles tengan una mayor probabilidad de supervivencia, además de tener un control más específico de los árboles que se tienen colocados y de sus ubicaciones.

Para ello, se plantea la siguiente propuesta, en la que si bien, algunas cosas ya se empiezan a observar en algunas autoridades, es importante que se haga ley para que todo el esfuerzo de arborización vea aumentada su eficiencia e impacto en la ciudadanía.

Es por ello, que lo que se propone es que la Secretaría de Medio Ambiente implemente un sistema de georreferenciado en el que cada que una

autoridad plante un árbol se ingresen los siguientes datos: Información de georreferencia de cada árbol plantado, especie, fotografía al momento de la finalización de la plantación, bitácora de riego en caso de que este dependa de alguna autoridad federal, estatal o municipal.

Además, se establecerá que no se podrán plantar árboles por parte de las autoridades en canícula, esto con la finalidad de aumentar las probabilidades de supervivencia de los árboles.

Si todos los municipios, el estado y la federación siguen estas pautas, tendríamos mayor control sobre los avances de arborización, mayor control del adecuado mantenimiento, además de generar más facilidades de coordinación para las autoridades.

Esto ayudaría a que los esfuerzos para generar los famosos bosques urbanos fueran más eficientes y reducir de manera real y monitoreada el déficit arbóreo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atenta y respetuosamente me permito proponer a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO:

Artículo único.- Se reforma por adición de una fracción V del artículo 9 y por adición de una sección X, del Capítulo IV de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 9.- La Secretaría es la dependencia encargada de establecer, instrumentar y coordinar las políticas, estrategias, planes, programas y demás acciones que promuevan un medio ambiente sustentable, en consecuencia, en materia de arbolado urbano, le corresponden, las siguientes atribuciones:

I al IV...

V. Establecer y mantener en funcionamiento el Registro de Georreferencia y mantenimiento del arbolado urbano.

INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL ESTADO

SECCIÓN I AL IX...

SECCIÓN X.

DEL REGISTRO DE GEORREFERENCIA Y MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO URBANO.

Artículo 67 Bis. Todo proceso de plantación de arbolado urbano realizado en el estado por cualquiera de las autoridades estatales y municipales en la zona metropolitana de Monterrey, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- I. Información de georreferencia de cada árbol plantado.
- II. Especie.
- III. Fotografía al momento de la finalización de la plantación.
- IV. Bitácora de riego en caso de que este dependa de alguna autoridad federal, estatal o municipal.

Esta bitácora y georreferencia deberá estar disponible en todo momento a la ciudadanía para que pueda darle seguimiento a las forestaciones e incluso sumarse a su riego y cuidado si así lo desea.

Artículo 67 Bis. I En lo que refiere a reforestación, todas las autoridades deberán abstenerse de plantar árboles durante la época de canícula, esto con la finalidad de aumentar las probabilidades de supervivencia de los árboles que se planten.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO.- La Secretaría dispondrá de un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para implementar el sistema en el cual se hará el georreferenciado.

ATENTAMENTE

**Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 14 de julio del 2023**



Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

La presente hoja de firmas corresponde a iniciativa de reforma a la ley ambiental en materia de georreferencia de arbolado



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA LA PRIMERA FRACCIÓN DEL ARTÍCULO 38 Y POR ADICIÓN DEL ARTÍCULO 40 BIS III DEL CAPÍTULO VIII BIS DENOMINADO "DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES" TODOS DE LA LEY DE PROFESIONES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



**DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E. –**



Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 96 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma la primera fracción del artículo 38, así como se adiciona el artículo 40 bis III del Capítulo VIII Bis denominado “De las Prácticas Profesionales” todos de la Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro estado, Nuevo León, es cuna de grandes centros educativos de nivel profesional que llaman la atención de estudiantes y futuros profesionistas no solamente radicados en nuestra entidad, sino en otros estados e incluso otras partes del mundo.

El nivel educativo de las instituciones de enseñanza profesional, por su exigencia, es de calidad y una garantía para la adecuada formación de profesionales en las distintas áreas como son las ciencias sociales, ciencias exactas, ciencias naturales entre otras. A lo largo de cuatro o cinco años estos alumnos asisten regularmente a clases a sus planteles, y ahora ante la alta demanda de espacios, las instituciones educativas han optado por incluir la modalidad a distancia a través de distintas plataformas, con el fin de alcanzar su meta de graduarse.



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



Como parte de los requisitos para poder conseguir su título profesional se encuentran, obviamente, el haber acreditado cada una de sus "Unidades de Aprendizaje" además de cumplir con el denominado Servicio Social y Prácticas Profesionales; en el cual se deben de destinar 480 horas, en el caso del Servicio, en un período de entre seis meses y dos años en beneficio a la comunidad.

Una buena parte de los estudiantes, que son alumnos de las distintas Universidades de Nuevo León, provienen de otras entidades del País, por lo que para ellos sería una gran oportunidad el realizar su Servicio Social y Prácticas Profesionales en sus entidades de origen.

Incluso estudiantes nuevoleonenses podrán tener un interés en cumplir con estos requisitos en alguna área de su interés, que se encuentre en otro estado de la república mexicana. Sí bien se entiende que la filosofía del Servicio Social es regresar a la entidad que te brindó la oportunidad de estudiar una carrera profesional, un sentido de gratitud, se establecerán circunstancias de reciprocidad con los distintos Estados.

Ante esta circunstancia es que proponemos modificar la Ley de Profesionistas del Estado para que exista la posibilidad que el Servicio Social y las Prácticas Profesionales se puedan realizar en otras entidades de Nuevo León. Asimismo, que ante contingencias sanitarias la Secretaría de Salud establezca los protocolos para dar cumplimiento con estos requisitos que deben de cumplir los futuros profesionistas.

Por ello es que se propone reformar la fracción primera, del artículo 38 de la



Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León, en donde actualmente se limita a prestar el Servicio Social solamente en el estado de Nuevo León, y adicionar una fracción bis al artículo 40 para que se establezcan protocolos en caso de contingencias sanitarias.

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
<p>ARTICULO 38.- Los servicios profesionales de índole social deberán ser prestados:</p> <p>I.- Por los estudiantes de las profesiones anotadas en el artículo 5o. de esta Ley, como requisito previo a la obtención de su título profesional durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre y cuando no tengan impedimento físico o mental para cumplir con el servicio; los estudiantes o egresados de las instituciones universitarias o de educación superior existentes en la Entidad, deberán prestar sus servicios en el Estado de Nuevo León; la realización de éste o de actividades que con dicho carácter pudieren corresponder, según el tipo de</p>	<p>ARTICULO 38.- Los servicios profesionales de índole social deberán ser prestados:</p> <p>I.- Por los estudiantes de las profesiones anotadas en el artículo 5o. de esta Ley, como requisito previo a la obtención de su título profesional durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre y cuando no tengan impedimento físico o mental para cumplir con el servicio; los estudiantes o egresados de las instituciones universitarias o de educación superior existentes en la Entidad, deberán prestar sus servicios preferentemente en el Estado de Nuevo León, y en su caso se podrá autorizar la prestación de estos servicios en otros Estados de la</p>



profesión, sea por estudiantes, pasantes o graduados, que no hubieren cursado la carrera profesional en instituciones sitas en la Entidad, podrá autorizarse bajo circunstancias de reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los Comités de Evaluación que para cada profesión se emitan.

II.- Por cualquier profesional cuando así le sea solicitado por el Ejecutivo del Estado a través del Departamento de Profesiones, para satisfacer el interés público, siempre que la naturaleza del servicio sea de carácter temporal y no resulte incompatible con sus actividades;

III.- Por los Colegios Profesionales.

República Mexicana, en donde existan convenios de reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los Comités de Evaluación respectivos, la realización de éste o de actividades que con dicho carácter pudieren corresponder, según el tipo de profesión, sea por estudiantes, pasantes o graduados, que no hubieren cursado la carrera profesional en instituciones sitas en la Entidad, podrá autorizarse bajo circunstancias de reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los Comités de Evaluación que para cada profesión se emitan.

II.- ...

III.- ...



Capítulo VIII Bis De las Prácticas Profesionales	Capítulo VIII Bis De las Prácticas Profesionales
SIN CORRELATIVO	Artículo 40 bis III.- En caso de una contingencia sanitaria, la prestación del Servicio Social y de las Prácticas Profesionales se podrá ejercer de acuerdo a los protocolos dictados por la Secretaría de Salud del Estado.

Es por lo anteriormente expuesto y en aras de que el servicio social sea una herramienta para los estudiantes, es que el Partido Acción Nacional presenta el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma la primera fracción del artículo 38, así como se adiciona el artículo 40 bis III del Capítulo VIII Bis denominado "De las Prácticas Profesionales" todos de la **Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

ARTICULO 38.- Los servicios profesionales de índole social deberán ser prestados:



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



I.- Por los estudiantes de las profesiones anotadas en el artículo 5o. de esta Ley, como requisito previo a la obtención de su título profesional durante un lapso no menor de seis meses ni mayor de dos años, siempre y cuando no tengan impedimento físico o mental para cumplir con el servicio; los estudiantes o egresados de las instituciones universitarias o de educación superior existentes en la Entidad, deberán prestar sus servicios **preferentemente** en el Estado de Nuevo León, **y en su caso se podrá autorizar la prestación de estos servicios en otros Estados de la República Mexicana, en donde existan convenios de reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los Comités de Evaluación respectivos**, la realización de éste o de actividades que con dicho carácter pudieren corresponder, según el tipo de profesión, sea por estudiantes, pasantes o graduados, que no hubieren cursado la carrera profesional en instituciones sitas en la Entidad, podrá autorizarse bajo circunstancias de reciprocidad y de acuerdo a los reglamentos de los Comités de Evaluación que para cada profesión se emitan.

II - III...

Artículo 40 bis III.- En caso de una contingencia sanitaria, la prestación del Servicio Social y de las Prácticas Profesionales se podrá ejercer de acuerdo a los protocolos dictados por la Secretaría de Salud del Estado.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

MONTERREY NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



ATENTAMENTE

DIP. CARLOS ALBERTO
DE LA FUENTE
FLORES

DIP. MAURO GUERRA
VILLARREAL

DIP. ITZELSOLEDAD
CASTILLO ALMANZA

DIP. ADRIANA PAOLA
CORONADO RAMÍREZ

DIP. FERNANDO
ADAME DORIA

DIP. GILBERTO DE
JESÚS GÓMEZ REYES



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



DIP. AMPARO LILIA
OLIVARES
CASTAÑEDA

DIP. LUIS ALBERTO
SUSARREY FLORES

DIP. MAURO ALBERTO
MOLANO NORIEGA

DIP. MYRNA ISELA
GRIMALDO IRACHETA

DIP. DANIEL OMAR
GONZÁLEZ GARZA

DIP NANCY ARACELY
OLGUÍN DÍAZ

DIP. EDUARDO LEAL
BUENFIL

DIP. FELIX ROCHA
ESQUIVEL

Año: 2023

Expediente: 17255/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO , MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A LOS ARTÍCULOS 31 Y 32 DEL TÍTULO CUARTO DENOMINADO "OBLIGACIONES" DEL CAPÍTULO ÚNICO DE LAS "OBLIGACIONES DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA" DE LA LEY DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN..

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): COMISIÓN DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Mtra. Armida Serrato Flores

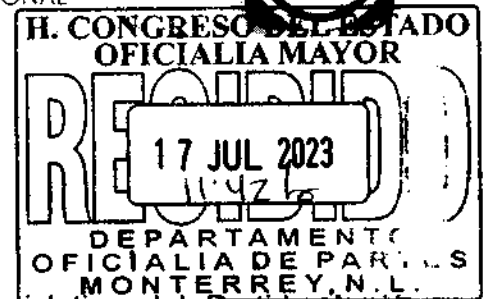
Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



**DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . –**



Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 96 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **iniciativa con proyecto de decreto para reformar las fracciones XXIV y XXV del artículo 31 y las fracciones VII y VIII del artículo 32, así como se adiciona las fracciones XXVI y XXVII del artículo 31 y fracciones IX y X del artículo 32, todos pertenecientes al TÍTULO CUARTO denominado “Obligaciones” del Capítulo Único de las “Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada” de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El creciente índice de delitos que se presentan en Nuevo León y en particular en el área metropolitana de Monterrey, ha orillado a los ciudadanos a contratar seguridad privada para el resguardo de sus colonias, principalmente fraccionamientos privados.

Por acuerdo de los residentes, quienes buscan un control de las personas que ingresan a su colonia, y así sentirse más seguros, es común ver que se hayan instalado casetas de vigilancia en los accesos de estos fraccionamientos que han sido aceptados por unos y rechazados por otros.



A través de los medios masivos de comunicación y por comentarios de ciudadanos que nos hacen en los recorridos por nuestros distritos, refieren de los incidentes que surgen entre guardias de seguridad privada y visitantes a estos fraccionamientos.

Sin embargo, la labor de los guardias privados no se limita a permitir la entrada de los residentes de estas colonias en donde se han instalado casetas de vigilancia, sino también a los visitantes y trabajadores que acuden a invitación o petición de un residente.

Cada colonia tiene sus reglas para permitir el ingreso de los visitantes y trabajadores, en algunos casos solicitan contar con una aplicación en sus dispositivos móviles, en donde ingresan sus datos personales; en otras muestran su credencial de elector u otra identificación que es resguardada por los vigilantes mientras se permanece en el fraccionamiento: en otros casos se escanea o por toma fotografía de las identificaciones y en otros, simplemente se toman los datos.

Aquí surge una duda sobre el manejo de la información de los visitantes y trabajadores que ingresan a una colonia privada, por parte de los vigilantes y/o de las empresas para las que ellos laboran.

Es información estrictamente personal que queda en resguardo las personas y se desconoce el destino que le darán, una vez que haya concluido la permanencia de los visitantes y trabajadores a estas colonias privadas.

Es información a la cual se le puede dar un uso diferente al de una simple identificación, y que se les entregue a promotores de ventas, organizaciones sociales, religiosas o bien a otras personas con otros intereses.

Ante ello se hace necesario el hacer precisiones del manejo de custodia de la información que se recabe de los visitantes y trabajadores de las colonias privadas, en la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo León, tanto para



las empresas de Seguridad Privada como para los vigilantes que laboren para una compañía o lo hagan por su cuenta.

Para un entendimiento pleno de los cambios que se proponen mostraremos el siguiente comparativo:

TÍTULO CUARTO **Obligaciones**

Capítulo Único **De las Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada**

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 31.- Son obligaciones de los prestadores de servicios: I-XXIII...	Artículo 31.- Son obligaciones de los prestadores de servicios: I-XXIII...
XXIV.-Registrar ante la Dirección los animales con que operen y sujetar su utilización a las normas aplicables; y	XXIV.-Registrar ante la Dirección los animales con que operen y sujetar su utilización a las normas aplicables;
XXV.-Entregar a la Dirección un reporte mensual detallado de actividades. El incumplimiento a esta disposición podrá ser causa de cancelación de la autorización y el registro para funcionar como prestadores del servicio.	XXV.-Entregar a la Dirección un reporte mensual detallado de actividades. El incumplimiento a esta disposición podrá ser causa de cancelación de la autorización y el registro para funcionar como prestadores del servicio;



SIN CORRELATIVO	XXVI.- Mantener en su base de datos en una temporalidad máxima de 72 horas la información proporcionada por las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su resguardo custodia; y
SIN CORRELATIVO	XXVII.-Abstenerse de compartir la información de las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su custodia excepto a la persona física o moral que lo contrató y/o a las autoridades policíacas y judiciales.
Artículo 32.- Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada: I-VI ... VII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la licencia o su equivalente que autorice su portación; y VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las especificaciones que al efecto	Artículo 32.- Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada: I- VI ... VII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la licencia o su equivalente que autorice su portación; VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las especificaciones que al efecto



dispongan los ordenamientos federales, estatales y municipales.	dispongan los ordenamientos federales, estatales y municipales;
SIN CORRELATIVO	IX.- Mantener en su base de datos en una temporalidad máxima de 72 horas la información proporcionada por las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su resguardo custodia; y
SIN CORRELATIVO	X.- Abstenerse de compartir la información de las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su custodia excepto a la persona física o moral que lo contrató y/o a las autoridades policiacas y judiciales.

Es por lo anteriormente expuesto que nuestro Grupo Legislativo, en busca de fomentar la seguridad de nuestra ciudadanía y de garantizar un buen manejo de la información y/o contenido que pueda estar al alcance de la seguridad privada, es que presentamos el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se reforma las fracciones XXIV y XXV del artículo 31 y las fracciones VII y VIII del artículo 32, así como se adiciona las fracciones XXVI y XXVII del artículo



31 y fracciones IX y X del artículo 32, todos pertenecientes al TÍTULO CUARTO denominado "Obligaciones" del Capítulo Único de las "Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada" de la **Ley de Seguridad Privada para el Estado de Nuevo**, para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO

Obligaciones

Capítulo Único

De las Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada

Artículo 31.- Son obligaciones de los prestadores de servicios:

I-XXIII...

XXIV.-Registrar ante la Dirección los animales con que operen y sujetar su utilización a las normas aplicables;

XXV.-Entregar a la Dirección un reporte mensual detallado de actividades. El incumplimiento a esta disposición podrá ser causa de cancelación de la autorización y el registro para funcionar como prestadores del servicio;

XXVI.- Mantener en su base de datos en una temporalidad máxima de 72 horas la información proporcionada por las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su resguardo custodia; y

XXVII.-Abstenerse de compartir la información de las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su custodia excepto a la persona física o moral que lo contrató y/o a las autoridades policíacas y judiciales.



Artículo 32.- Son obligaciones del personal operativo de seguridad privada:

I- VI ...

VII. En caso de portar armas, hacer uso responsable de ellas y contar con la licencia o su equivalente que autorice su portación;

VIII. En caso de hacer uso de vehículos automotores, cumplir con las especificaciones que al efecto dispongan los ordenamientos federales, estatales y municipales;

IX Mantener en su base de datos en una temporalidad máxima de 72 horas la información proporcionada por las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su resguardo custodia; y

X. -Abstenerse de compartir la información de las personas que ingresan a las propiedades que están bajo su custodia excepto a la persona física o moral que lo contrató y/o a las autoridades policíacas y judiciales

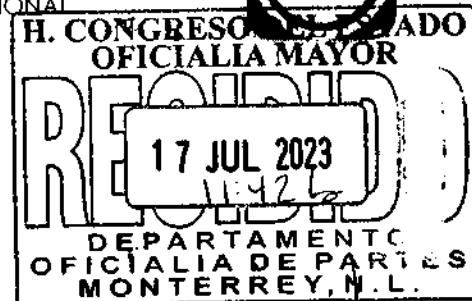
TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

MONTERREY NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



ATENTAMENTE

DIP. CARLOS ALBERTO
DE LA FUENTE
FLORES


DIP. MAURO GUERRA
VILLARREAL

DIP. ITZELSOLEDAD
CASTILLO ALMANZA

DIP. ADRIANA PAOLA
CORONADO RAMÍREZ

DIP. FERNANDO
ADAME DORIA

DIP. GILBERTO DE
JESÚS GÓMEZ REYES



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



DIP. AMPARO LILIA
OLIVARES
CASTAÑEDA

DIP. LUIS ALBERTO
SUSARREY FLORES

DIP. MAURO ALBERTO
MOLANO NORIEGA

DIP. MYRNA ISELA
GRIMALDO IRACHETA

DIP. DANIEL OMAR
GONZÁLEZ GARZA

DIP NANCY ARACELY
OLGUÍN DÍAZ

DIP. EDUARDO LEAL
BUENFIL

DIP. FELIX ROCHA
ESQUIVEL

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 81 DE LA LEY AMBIENTAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE).

Mtra. Armida Serrato Flores

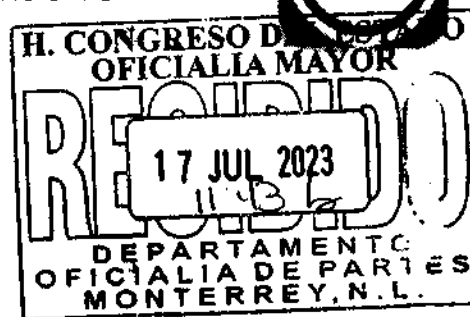
Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



**DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E. –**



Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 96 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma el primer párrafo del artículo 81 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hace poco más de 22 años, el 24 de noviembre del año 2000, en la administración del gobernador Fernando Canales Clariond, se publicó el primer decreto en donde se determinaba la protección de 23 de las 29 Áreas Naturales Protegidas por el gobierno del estado de Nuevo León. Actualmente se encuentran bajo protección del Estado y municipios de Nuevo León 157 mil 723.23 hectáreas, casi el tres por ciento, del territorio estatal lo cual ayuda a la conservación de la flora y la fauna de cada una de las regiones que están bajo esta protección.

Un Área Natural Protegida, es una zona del territorio estatal, que mediante un decreto del titular del Poder Ejecutivo se conservan, protegen, y dado el caso, se recuperan los valores biológicos, ecológicos y físicos, para asegurar la continuidad de sus procesos naturales. Gracias a esta determinación especies



forestales como: palma, cactáceas, crasuláceas, enebros, mezquite, encinos, barreta, oyamel, abetos, pinos, ciprés y ahuehuete, entre otros se encuentran a

salvo. También especies animales como: serpiente de cascabel, zorra, puma, búho, oso negro, jaguar, cotorra serrana, armadillo, perico, venado cola blanca, jaguarundi, gato montés, murciélagos, águila real, gorrión worthen, tecolote llanero y el perrito llanero, se encuentran bajo resguardo.

A continuación, presentamos un cuadro en donde se establecen las 29 Áreas Naturales Protegidas del Estado de Nuevo León, en donde se precisa el número de hectáreas que cubre y el municipio en que se localiza.

Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Nuevo León

	Área Natural	Municipio	Superficie en Ha
1	Trinidad y Llano Salas	Aramberri	1,972.28
2	La Trinidad	Aramberri	132.36
3	San Juan y Puentes	Aramberri	21.66
4	Sandia El Grande	Aramberri	1,902.74
5	Acuña	Dr. Arroyo	1,228.38
6	El Refugio de Apanaco	Dr. Arroyo	989.38
7	Cerro "El Peñón	Dr. González	103.39
8	La Purísima (Bosque de enebro)	Iturbide	18.3
9	La Purísima (Bosque de oyamel)	Iturbide	844.54
10	Las Flores	Linares	81.99
11	San Elías	Mier y Noriega	653.92
12	Cañón "Pino del	Mier y Noriega	2,567.21



	Campo"		
13	Vaquerías	General Terán	1,121.27
14	Santa Marta de Abajo	General Zaragoza	27.18
15	Sierra "Picachos	Agualeguas, Higueras, Cerralvo, Sabinas y Salinas Victoria	75,872.55
16	Cerro "El Potosí"	Cerro "El Potosí"	989.38
17	Sierra "Corral de los Bandidos"	García	1,175.01
18	Cerro "La Mota"	García	9,432.26
19	Sierra "El Fraile" y "San Miguel"	García. Abasolo, Hidalgo, Gral. Escobedo, El Carmen y Mina	23,506.36
20	Sierra "Las Mitras"	Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Gral. Escobedo y García	3,744.22
21	Cerro "El Topo	Monterrey y Gral. Escobedo	1,093.30
22	Sierra "Cerro de la Silla	Guadalupe, Juárez, Santiago, Allende y Cadereyta	10,620.37
23	Baño de San Ignacio	Linares	4,225.40
24	Llano de la Soledad	Galeana	7,607
25	La Trinidad	Galeana	3,282.60
26	La Hediondilla	Galeana	4,381.90
27	Cerro del Obispado	Monterrey	18.38
28	Parque Lineal (Río Santa Catarina)	Monterrey, Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, San Pedro Garza García y García	677.36



29	Nuevo Parque Ecológico La Pastora	Guadalupe	143.79
----	--------------------------------------	-----------	--------

Es de precisar que la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nuevo León, tiene entre sus responsabilidades de acuerdo al artículo 81 de la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León, el constituir el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, el cual tendrá una representación permanente de funcionarios de esta dependencia, de otras dependencias del gobierno del estado, de instituciones académicas, centros de investigación, productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como por personas físicas, de reconocido prestigio en la materia.

Asimismo, tiene la opción, más no la obligación de invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos municipales, cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia estatal que se encuentren en el territorio de los mismo, y podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto de que se trate.

Cabe destacar que no existe la opción, mucho menos la obligación de la Secretaría de invitar a la participación en este Consejo de Protección de Áreas Naturales Protegidas a representantes de este Congreso del Estado, por lo cual consideramos necesario contar con un asiento permanente en virtud de la representatividad que nos ha otorgado la ciudadanía.

Ante ello es que proponemos reformar por adición y modificación el artículo 81 de la mencionada ley, para garantizar un lugar permanente en este Consejo a una representación del Congreso del Estado y de las autoridades de los Municipios



en donde se decreten las Áreas Naturales Protegidas. Es por lo anterior, que presentamos un cuadro comparativo:

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
<p>Artículo 81.- La Secretaría constituirá el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de la misma, de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, de instituciones académicas, centros de investigación, productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como por personas físicas, de reconocido prestigio en la materia.</p> <p>El Consejo fungirá como un órgano de consulta y apoyo de la Secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia.</p> <p>El Consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos municipales, cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia estatal que se encuentren en el territorio de los mismos. Asimismo, podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto de que se trate.</p>	<p>Artículo 81.- La Secretaría constituirá el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado hasta por tres representantes de la misma, un representante de áreas de interés de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, dos representantes del Congreso del Estado, representantes de los gobiernos municipales cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia estatal que se encuentren en el territorio de los mismos, representantes de instituciones académicas, centros de investigación, productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como por personas físicas, de reconocido prestigio en la materia.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>



Las opiniones y recomendaciones que formule el Consejo, deberán ser consideradas por la Secretaría en el ejercicio de las facultades que en materia de áreas naturales protegidas le corresponden conforme a éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables	
--	--

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el primer párrafo del artículo 81 de la **Ley Ambiental del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

Artículo 81.- La Secretaría constituirá el Consejo Estatal de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado **hasta** por **tres** representantes de la misma, **un representante de áreas de interés** de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, **dos representantes del Congreso del Estado, representantes de los gobiernos municipales cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia estatal que se encuentren en el territorio de los mismos, representantes** de instituciones académicas, centros de investigación, productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como por personas físicas, de reconocido prestigio en la materia.

...

...

...



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

MONTERREY NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023

ATENTAMENTE



DIP. CARLOS ALBERTO
DE LA FUENTE
FLORES

DIP. MAURO GUERRA
VILLARREAL

DIP. ITZELSOLEDAD
CASTILLO ALMANZA

DIP. ADRIANA PAOLA
CORONADO RAMÍREZ

DIP. FERNANDO
ADAME DORIA

DIP. GILBERTO DE
JESÚS GÓMEZ REYES



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



DIP. AMPARO LILIA
OLIVARES
CASTAÑEDA

DIP. LUIS ALBERTO
SUSARREY FLORES

DIP. MAURO ALBERTO
MOLANO NORIEGA

DIP. MYRNA ISELA
GRIMALDO IRACHETA

DIP. DANIEL OMAR
GONZÁLEZ GARZA

DIP. NANCY ARACELY
OLGUÍN DÍAZ

DIP. EDUARDO LEAL
BUENFIL

DIP. FELIX ROCHA
ESQUIVEL

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 110 BIS I DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN: LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E . –

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86, 87 y 96 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y con fundamento en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta soberanía a presentar **iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al artículo 110 bis I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Estudios e investigaciones han comprobado que los autos abandonados provocan infinidad de enfermedades, además de causar daños considerables al suelo y al medio ambiente. El asbesto de las pastillas de freno es uno de los agentes ambientales más peligrosos para la salud provocando fibrosis en los pulmones, enfisemas, dilatación en bronquios, estrechamiento en vasos sanguíneos y cáncer de pulmón.

El cadmio en los aceites lubricantes y la pintura ocasionan irritación de las vías respiratorias, daño renal y en hígado.

Asimismo, los líquidos anticongelantes y líquido de frenos provocan lesiones en riñones, daño cerebral y de medula espinal. La acumulación de vehículos genera la proliferación de fauna dañina, así como también son focos de infección que pueden provocar la proliferación de mosquitos que causan dengue, Zika o chikungunya, ya que al estar abandonados fungen como chatarra que acumulan agua y otros líquidos.



Los vehículos abandonados en la vía pública y en los corralones, generan un alto nivel de contaminación y ocasionan diversos problemas de seguridad, por lo que es urgente que se tomen medidas para retirarlo, lo cual puede ser mediante la adjudicación a la autoridad municipal correspondiente, para que a su vez lo subaste a personas interesadas en comprar, ya sea para disponer de este como tal o de sus partes.

En Estados Unidos y en Europa principalmente, ya existen políticas claras en torno a los vehículos que ya no tienen utilidad, ya que en dichas latitudes existen programas de deschatarización muy exitosos que han logrado reducir la contaminación que producen los vehículos en desuso o abandonados.

Estudios revelan que el 90 por ciento de los componentes de un vehículo puede ser reutilizado, por lo cual esa opción podría representar un ingreso para quien emprenda los programas de deschatarización vehicular.

Ante esto proponemos modificar el artículo 110 bis I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León para dar facultades a los Ayuntamientos de disponer de los vehículos que fueron depositados por diversas circunstancias como violaciones al reglamento de tránsito, sucesos delictivos, cualquiera de los espacios destinados para estos fines.

TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 110 Bis I.- Son facultades y obligaciones del área encargada de la Protección al Medio Ambiente, las de competencia municipal en materia ambiental establecidas en la Constitución Política de los Estados	ARTÍCULO 110 Bis I.- Son facultades y obligaciones del área encargada de la Protección al Medio Ambiente, las de competencia municipal en materia ambiental establecidas en la Constitución Política de los Estados



<p>Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las leyes de carácter federal y estatal, los reglamentos municipales correspondientes y las Normas Oficiales Federales y Estatales.</p> <p>SIN CORRELATIVO</p>	<p>Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, las leyes de carácter federal y estatal, los reglamentos municipales correspondientes y las Normas Oficiales Federales y Estatales.</p> <p>El área encargada de Protección al Medio Ambiente podrá iniciar el procedimiento de declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento de vehículos almacenados en los espacios destinados para tales efectos cuando:</p> <p>I. Lo manifieste expresamente el propietario del vehículo ante la Tesorería Municipal.</p> <p>II. El vehículo permanezca almacenado en los depósitos vehiculares más de cuarenta y cinco días naturales, sin que el interesado hubiere convenido la liquidación de los créditos fiscales y sus accesorios, correspondientes, o</p> <p>III. El vehículo permanezca almacenado por más de siete días naturales sin reclamación del</p>
---	--



SIN CORRELATIVO	<p>interesado y carezca de marcas de identificación y placas y no sea posible conocer, por los documentos al interior del mismo, el nombre de su propietario o poseedor o domicilio de éste.</p> <p>Se exceptúan de los anteriores supuestos, los vehículos en custodia o depósito del Municipio por disposición de la autoridad judicial, del Ministerio Público o de las autoridades fiscales.</p>
SIN CORRELATIVO	<p>El Ayuntamiento deberá publicar regularmente en su sitio oficial y/o estrados oficiales la lista de vehículos almacenados en los espacios destinados para tales efectos con una breve descripción de los mismos y en lugar de donde se encuentra.</p>
SIN CORRELATIVO	<p>En los casos de las fracciones anteriores, previamente a la declaratoria de abandono, el Ayuntamiento dará aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y a la Fiscalía General de la República, Secretaría de Hacienda</p>



SIN CORRELATIVO

y Crédito Público para que realicen las observaciones que consideren pertinentes; y mandará publicar dos veces, con intervalo de diez días, avisos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación masiva en el Estado, concediéndose un plazo de veinte días naturales a partir de la segunda publicación para que las citadas autoridades o el interesado presenten objeciones o para que éste último liquide o convenga con el Municipio el pago de los créditos fiscales correspondientes.

Concluido el plazo de veinte días señalado en el párrafo anterior sin que se hubieren presentado objeciones o se liquiden o convenga el pago de los créditos fiscales respectivos, o en el caso de la fracción I de este artículo, la Tesorería Municipal hará la declaratoria de abandono del vehículo, debiendo publicar la resolución correspondiente tanto en el Periódico Oficial del Estado como en un periódico de circulación masiva en el



SIN CORRELATIVO	<p>Estado y, previo avalúo efectuado por perito designado por el Ayuntamiento procederá a su enajenación en subasta pública, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la resolución, ante fedatario público.</p> <p>Los recursos que se obtengan por la enajenación del vehículo se destinarán, en primer término, a la liquidación de los adeudos generados con el Municipio y los recursos restantes formarán parte de las Hacienda Municipal.</p>
-----------------	--

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma por adición un segundo párrafo que contiene las fracciones I, II y III, se adicionan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, todos del artículo 110 Bis I de la **Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 110 Bis I.- ...

El área encargada de Protección al Medio Ambiente podrá iniciar el procedimiento de declaratoria de abandono a favor del Ayuntamiento de vehículos almacenados en los espacios destinados para tales efectos cuando:



- I. Lo manifieste expresamente el propietario del vehículo ante la Tesorería Municipal.**
- II. El vehículo permanezca almacenado en los depósitos vehiculares más de cuarenta y cinco días naturales, sin que el interesado hubiere convenido la liquidación de los créditos fiscales y sus accesorios, correspondientes, o**
- III. El vehículo permanezca almacenado por más de siete días naturales sin reclamación del interesado y carezca de marcas de identificación y placas y no sea posible conocer, por los documentos al interior del mismo, el nombre de su propietario o poseedor o domicilio de éste.**

Se exceptúan de los anteriores supuestos, los vehículos en custodia o depósito del Municipio por disposición de la autoridad judicial, del Ministerio Público o de las autoridades fiscales.

El Ayuntamiento deberá publicar regularmente en su sitio oficial y/o estrados oficiales la lista de vehículos almacenados en los espacios destinados para tales efectos con una breve descripción de los mismos y en lugar de donde se encuentra.

En los casos de las fracciones anteriores, previamente a la declaratoria de abandono, el Ayuntamiento dará aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León y a la Fiscalía General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realicen las observaciones que consideren pertinentes; y mandará publicar dos veces, con intervalo de diez días, avisos en el Periódico Oficial del Estado y en un periódico de circulación masiva en el Estado, concediéndose un plazo de veinte días naturales a partir de la segunda publicación para que las citadas autoridades o el interesado presenten objeciones o para que éste último liquide o convenga con el Municipio el pago de los créditos fiscales correspondientes.

Concluido el plazo de veinte días señalado en el párrafo anterior sin que se hubieren presentado objeciones o se liquiden o convenga el pago de los créditos fiscales respectivos, o en el caso de la fracción I de este artículo, la Tesorería Municipal hará la declaratoria de abandono del vehículo, debiendo publicar la resolución correspondiente tanto en el Periódico Oficial del Estado como en un periódico de circulación masiva en el Estado y, previo avalúo



efectuado por perito designado por el Ayuntamiento procederá a su enajenación en subasta pública, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la resolución, ante fedatario público.

Los recursos que se obtengan por la enajenación del vehículo se destinarán, en primer término, a la liquidación de los adeudos generados con el Municipio y los recursos restantes formarán parte de las Hacienda Municipal.

TRANSITORIO

ÚNICO. - El Presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

MONTERREY NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023

ATENTAMENTE,



DIP. CARLOS ALBERTO
DE LA FUENTE
FLORES

DIP. MAURO GUERRA
VILLARREAL

DIP. ITZELSOLEDAD
CASTILLO ALMANZA

DIP. ADRIANA PAOLA
CORONADO RAMÍREZ



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL



DIP. FERNANDO
ADAME DORIA

DIP. GILBERTO DE
JESÚS GÓMEZ REYES

DIP. AMPARO LILIA
OLIVARES
CASTAÑEDA

DIP. LUIS ALBERTO
SUSARREY FLORES

DIP. MAURO ALBERTO
MOLANO NORIEGA

DIP. MYRNA ISELA
GRIMALDO IRACHETA

DIP. DANIEL OMAR
GONZÁLEZ GARZA

DIP NANCY ARACELY
OLGUÍN DÍAZ



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI Legislatura
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL



DIP. EDUARDO LEAL
BUENFIL

DIP. FELIX ROCHA
ESQUIVEL

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE C. ING. OMAR SALINAS CAVAZOS.

ASUNTO RELACIONADO, MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE LEY PARA EL USO DE LA APLICACIÓN EDUCARE.AI, EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICAS.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN: EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA DE LEY

= Anexo impresión de credencial de elector en
22x35 folios simples

**H. Congreso del Estado de Nuevo Leon
SEPTUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA**



PROMOVENTE: Ing Omar Salinas Cavazos
CONSIDERANDO:

- Que la educación es un derecho fundamental de todos los niños y jóvenes en nuestro país;
- Que es responsabilidad del Estado garantizar este derecho, así como crear condiciones propicias para el pleno desarrollo académico de los alumnos;
- Que muchos alumnos de escuelas públicas demuestran un alto mérito académico y podrían beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las escuelas particulares;
- Que la subrogación de los servicios de educación básica a las escuelas particulares podría permitir premiar la cultura del esfuerzo, incrementar la productividad de las escuelas particulares y lograr ahorros para las autoridades educativas;

POR LO TANTO, propongo la siguiente:

LEY PARA LA SUBROGACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA A ESCUELAS PARTICULARES POR MÉRITO ACADÉMICO

Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer un marco normativo que promueva la subrogación de servicios de educación básica a escuelas particulares que decidan recibir a alumnos con mérito académico de escuelas públicas para ocupar sus espacios disponibles sin exceder la capacidad de sus instalaciones.

Artículo 2. Las escuelas privadas que decidan participar en este programa recibirán:

- a) Un subsidio gubernamental por cada estudiante de escuela pública con mérito académico que se inscriba en su institución, que cubrirá la totalidad o una parte significativa de las tarifas de matrícula.
- b) Soporte pedagógico y capacitación docente para garantizar que pueden ofrecer una educación de alta calidad a todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico.

Artículo 3. Los alumnos de las escuelas públicas con mérito académico que participen en este programa:

- a) Tendrán la oportunidad de recibir una educación de alta calidad en una escuela privada, reconociendo así la cultura del esfuerzo y recompensando su desempeño académico.
- b) Mantendrán todos los derechos y beneficios asociados a su condición de estudiantes de escuelas públicas.

Artículo 4. El Estado, a través de la Secretaria de Educacion Publica:

- a) Supervisará y regulará este programa para garantizar que se respeten los derechos de los estudiantes y se mantenga la equidad en el acceso a la educación.
- b) Evaluará regularmente la calidad de la educación proporcionada por las escuelas privadas participantes y tomará medidas para garantizar que cumplan con los estándares de calidad establecidos.

Artículo 5. Este programa contribuirá a:

- a) Incrementar la productividad de las escuelas particulares al tener cubierta la capacidad de sus instalaciones.
- b) Ahorrar recursos públicos destinados a la apertura de nuevas escuelas, que podrán ser redirigidos para mejorar la calidad de la educación en el sector público.

Artículo 6. Se emitirá la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación.

Artículo 7. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita respetuosamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen.

a los 18 días del mes Julio del 2023



Atentamente

Ing Omar Santos Cervantes
Instituto Educativo



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALINAS
CAVAZOS
OMAR
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO H

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA



ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



B005945

EDMUNDO JOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA

OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo



No autorizo



Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono(s):

Núm. Ext.:

Municipio:

Estado:

Núm. Int.:

C.P.:

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo



No autorizo



Correo:

César Saizán Cossío

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

AÑO:2023

EXPEDIENTE: 17259/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. ING. OMAR SALINAS CAVAZOS

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE LEY PARA LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LAS EMPRESAS.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DE 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISIÓN (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA DE LEY

= Anexo a impresión de credencial del sector en Zedex tipo Simple =

**H. Congreso del Estado de Nuevo León
SEPTUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA**



PROMOVENTE: Ing Omar Salinas Cavazos
CONSIDERANDO:

- Que la educación es un derecho fundamental (Art. 33 de la Constitución Política del Estado de nuevo León) y debe adaptarse a las necesidades de cada estudiante;
- Que las nuevas tecnologías (Art 19.... El Estado y los municipios, en concordancia con este artículo, tendrán como prioridad el desarrollo de herramientas tecnológicas relacionadas con la seguridad, desarrollo urbano, movilidad, vías públicas, energías renovables, medio ambiente, salud, educación y cultura.), y en particular la inteligencia artificial, ofrecen enormes posibilidades para mejorar y personalizar la educación;
- Que la aplicación EDUCARE.ai, basada en la inteligencia artificial, puede contribuir de manera significativa a mejorar la educación en nuestras escuelas públicas;
- Que el uso de la aplicación EDUCARE.ai puede permitir la personalización del aprendizaje, mejorar el compromiso de los estudiantes, asistir a los profesores, permitir el acceso a una gran cantidad de recursos e información.
- Que la aplicación EDUCARE.ai, basada en la inteligencia artificial, puede apoyar al auto aprendizaje de los estudiantes con necesidades especiales, problemas físicos y socioemocionales que les impiden asistir a los centros educativos.
- Que la aplicación EDUCARE.ai, basada en la inteligencia artificial, ofrece clases interactivas en línea en tiempo real impartidas por maestros especialistas para elevar el nivel educativo de las escuelas publicas ademas de evitar la interrupcion de la formación educativa de los estudiantes por motivos de salud, climatologicos y personales.

POR LO TANTO, propongo la siguiente:

LEY PARA EL USO DE LA APLICACIÓN EDUCARE.AI EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

Artículo 1. El objeto de esta Ley es establecer un marco normativo que promueva el uso de la aplicación EDUCARE.ai en las escuelas públicas de educación básica.

Artículo 2. Se promoverá la implementación de la aplicación EDUCARE.ai en todas las escuelas públicas de educación básica del Estado, con el objetivo de:

- a) Personalizar el aprendizaje, adaptando el contenido educativo a las necesidades individuales de cada estudiante.
- b) Mejorar el compromiso del estudiante, mediante el uso de técnicas de gamificación y otros métodos.
- c) Asistir a los profesores, proporcionando feedback sobre el rendimiento de los estudiantes, sugiriendo áreas de mejora y ayudando a identificar a los estudiantes que puedan necesitar ayuda adicional.
- d) Facilitar el aprendizaje a cualquier hora y en cualquier lugar, permitiendo el acceso al material educativo en cualquier momento y lugar.
- e) Automatizar la evaluación, permitiendo a los profesores dedicar más tiempo a la enseñanza y menos tiempo a las tareas administrativas.
- f) Proporcionar acceso a una vasta cantidad de información y recursos educativos.
- g) Ofrecer soporte personalizado a los estudiantes con necesidades especiales. Contribuir a la formación continua y actualización del profesorado.

Artículo 3. El Estado, a través de la Secretaría de Educación:

- a) Supervisará y regulará el uso de la aplicación EDUCARE.ai en las escuelas públicas para garantizar que se respeten los derechos de los estudiantes y se mantenga la equidad en el acceso a la educación.
- b) Proporcionará la formación necesaria a los profesores para el uso eficaz de la aplicación EDUCARE.ai.

Artículo 4. Se emitirá la reglamentación necesaria para la implementación de esta Ley en un plazo no mayor a 180 días a partir de su publicación.

Artículo 5. Esta Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por lo anteriormente expuesto, le solicito respetuosamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión correspondiente para su análisis y dictamen.

a los 18 días del mes Julio del 2023



Atentamente,

Ing Omar Salinas Cavazos
Instituto Educare.



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SALINAS
CAVAZOS
OMAR
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO: H

CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO 1991 01

ESTADO

MUNICIPIO

SECCIÓN

LOCALIDAD

EMISIÓN

VIGENCIA

ELECCIONES FEDERALES

LOCALES Y EXTRAORDINARIAS



Scanner

B005946

EDMUNDO J. MORENO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Esc



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono:

Núm. Ext.

Municipio:

Estado:

Núm. Int.

C.P.

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo:

[Firma autógrafa]

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

Año: 2023

Expediente: 17260/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, E INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Fariás García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Uno de los elementos que conforman el patrimonio cultural inmaterial de una sociedad en una determinada región o estado es la gastronomía. Las costumbres gastronómicas de un pueblo o una comunidad conforman parte de su identidad

colectiva y son un elemento que permiten que un individuo se sienta integrante de un grupo.¹

En el 2010 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció formalmente a la gastronomía como una categoría dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, es decir, el patrimonio cultural no solamente se refiere a los monumentos, colecciones de objetos o vestigios materiales de civilizaciones pasadas, sino que también comprende todas las tradiciones y experiencias vivas transmitidas de generación en generación como las tradiciones orales, usos sociales, rituales y todos los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y al entorno social.²

Uno de los principales objetivos de la UNESCO al declarar la gastronomía como patrimonio cultural inmaterial, es proteger y salvaguardar todas aquellas tradiciones culinarias propias de un pueblo o región y preservar la diversidad cultural ante los efectos de la globalización.³

La UNESCO ha señalado que: *"el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros"*

¹ http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0797-36912016000100001

² <https://ich.unesco.org/es/RL/la-cocina-tradicional-mexicana-una-cultura-comunitaria-ancestral-y-viva-y-el-paradigma-de-michoacan-00400>

³ <https://www.culinariamexicana.com.mx/cocinas-reconocidas-unesco/>

*modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados “.*⁴

La importancia de proteger nuestro patrimonio cultural gastronómico es crucial si queremos que las futuras generaciones puedan seguir teniendo un sentido de pertenencia e identidad con la riqueza cultural de nuestro estado.

En tal sentido, el día 7 de Julio del presente año, el poder Ejecutivo declaró la gastronomía de nuestro estado como un elemento primordial de nuestro patrimonio cultural inmaterial⁵, esto en virtud de lo establecido en nuestra Constitución local en su artículo 42 que a la letra dice:

“Artículo 42.- Todas las personas tienen derecho a la educación artística, al acceso a la vida cultural y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como al ejercicio de sus derechos culturales.

El Estado promoverá la cultura regional que caracteriza las raíces históricas, tradicionales, culinarias y artísticas, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.

⁴ <https://es.unesco.org/themes/patrimonio-cultural-inmaterial>

⁵ http://sistec.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Archivos/AC_0001_0007_00171676_000001.pdf

La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural."

Es importante señalar que el derecho a la cultura reconocido como un derecho humano, es también parte importante del desarrollo turístico y económico de nuestro estado, por lo que estimamos importante se siga asegurando y fortaleciendo la gastronomía de Nuevo León como una manifestación viva de nuestra diversidad cultural.

Para fortalecer y promover la riqueza cultural gastronómica de nuestro estado consideramos que es necesario que a través de la educación básica las niñas, los niños y adolescentes de Nuevo León conozcan y aprendan la cocina tradicional neolonesa como parte de su formación integral educativa, fomentando de esta manera su identidad colectiva y social.

Además, es importante seguir manteniendo las prácticas de la gastronomía típica en Nuevo León con toda la sociedad, especialmente con los adultos mayores a través de programas donde se sigan divulgando conocimientos y prácticas con el propósito de conservar la herencia cultural de nuestro estado.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ÚNICO. – Se Reforma la fracción XXIV del Artículo 21 y se Adiciona una fracción XXV al Artículo 21, recorriéndose la subsecuente, de la Ley de Educación del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 21. Corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal las siguientes atribuciones:

I.- a XXIII.- ...

XXIV.- Canalizar al Instituto de Salud Mental a los estudiantes y sus familias para que se les brinde el tratamiento y seguimiento correspondiente o en su caso dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

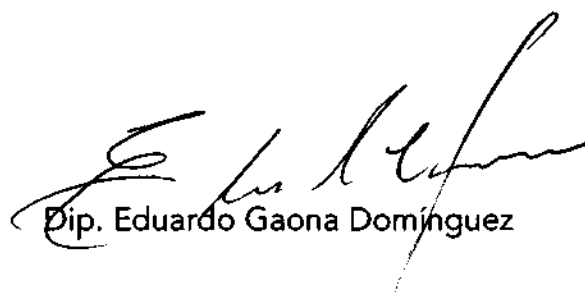
XXV.- Fomentar el vínculo de la gastronomía tradicional de Nuevo León en todos los tipos y modalidades de educación, a través de cursos, talleres, así como de cualquier otra actividad extracurricular, en las cuales se incluirá por lo menos con elementos suficientes para promover una correcta nutrición y el reconocimiento de la herencia cultural del estado; y

XXVI.- Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.

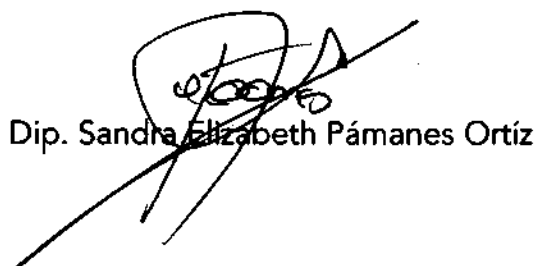
TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 17 días del mes de julio de 2023.


Dip. Eduardo Gaona Domínguez




Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre


Dip. Tabita Ortiz Hernández


Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. ALFREDO BARRIOS ROJAS Y UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY, FACULTAD DE CRIMINOLOGÍA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BULLYING.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN A LA LEY CONTRA EL ACOSO Y
VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS DE LA LXXVI

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

Los suscritos estudiantes de la licenciatura en Criminología de la Universidad Metropolitana de Monterrey, con domicilio para oír y recibir notificaciones de ese poder legislativo en la avenida [REDACTED]

ante ustedes diputadas y diputados con el debido respeto compadecemos a exponer:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1° y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículo 20 de la ley orgánica del Congreso del Estado y 39 del reglamento para el gobierno interior del poder legislativo, ocurrimos como estudiantes de Criminología a presentar formalmente **INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN A LA LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, en razón de que además de estudiantes somos ciudadanos que como ustedes diputados queremos tener leyes que benefician a la sociedad y lograr de manera significativa reducir los índices de seguridad, violencia y delincuencia que se

están desbordando sin control alguno en las instituciones educativas desde el nivel básico hasta el medio superior, conforme a lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy en la actualidad la inseguridad, la violencia y la delincuencia en el contexto de la mitad de la niñez y la juventud se ha incrementado de manera exponencial en los centros educativos del ámbito público y también en las escuelas privadas.

Este tipo de violencia no escapa de ninguna clase social ni económica, porque esta violencia escolar de entre algunos orígenes se ha sustentado de entre algunos factores, entre ellos la disfunción familiar, la violencia familiar que propicia sus efectos en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, el rol que llevan estos en sus relaciones vecinales, aunado además al uso indebido y sin control de la tecnología, entendida en el uso de la telemática y la cibernética, han generado nuevos paradigmas de conducta o conductuales en la niñas, niños y adolescentes, fomentando en ellos aspectos endógenos y exógenos que coadyuvan a comportamientos criminógenos cuyo resultado es la externación de la violencia sobre todo física contra los propios niñas, niños y adolescentes.

Las estadísticas de la fiscalía general del Estado nos indica que a partir del año 2017 la violencia familiar se ha incrementado sistemáticamente y esto ha originado un mayor uso en estos grupos vulnerables del ciberespacio, que a su vez ha propiciado el ciberacoso e incluso el cibersuicidio y todo esto debe de anularse mediante prevención del delito.

Según estadísticas de la Organización Internacional para el desarrollo Integral de Niñez de la Organización de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, 8 de cada 10 niños o niñas son víctimas del bullying, que han dejado consecuencias nocivas en su salud mental y que trascienden a un comportamiento inestable e inseguro en el desarrollo de su personalidad y que mas tarde esta niñez victima en una personalidad victimaria, agresora y con tendencias a burlar la ley penal, incluso que la violencia en la educación básica

se ha trasladado a la violencia media superior, es decir si un niño es maltratado de la primaria por sus compañeros, este mismo niño generará violencia en la secundaria o preparatoria, al grado de llegar a cometer delitos de alto impacto, como lo es la violación y el homicidio con armas de fuego, y esto ya ha ocurrido diputadas y diputados en fechas recientes en escuelas públicas y privadas del área metropolitana de Monterrey incluso hubo un caso en el Estado de Chihuahua en donde después de acosar varios niños a un compañerito que después “jugaron” a que lo secuestraban, lo amarraron y luego lo asesinaron “lo ejecutaron” y luego lo inhumaron, todo debido a una imitación a una serie de narcotraficantes, la cual se traduce en conductas de repetición o imitación por falta de una adecuada cultura del uso de las tecnologías de la información y comunicación y donde los mismos padres de familia incurren en responsabilidad compartida además con las autoridades educativas, salud y de seguridad pública por no formular o crear políticas públicas que contengan programas o acciones de prevención del delito, incluyendo además como responsables a los empresarios del ámbito de las radiodifusiones y sistemas digitales por no tener un control en la aplicación de la ley federal de radio y televisión, en donde uno de los objetivos es procurar y controlar que las transmisiones, tengan como prioridad enaltecer los valores, laboral y la ética para lograr en la niñez y juventud un desarrollo adecuado de su personalidad y la armonización social.

Ahora bien, los suscritos estudiantes de Criminología expresamos a ustedes diputados, que nuestra intención es reformar a la ley contra el acoso cuya violencia escolar del ESTADO DE NUEVO LEÓN, para que se adicione en el artículo 20 de esta ley, que también se incluya en los comités interdisciplinarios que tienen todas las escuelas, además de un profesor, psicólogo y un trabajador social, que también se integre a estos comités un criminólogo titulado o en su caso un estudiante académicamente destacado, que bajo el asesoramiento de un titular desempeñe el ejercicio profesional o practico de la ciencia criminológica para elaborar programas o planes de prevención del delito en materia de acoso y violencia escolar.

En la inteligencia de que ese Congreso del Estado con la aprobación de la mayoría de los diputados, se autorice el presupuesto de egresos que cubran los salarios nominales de los criminólogos, así como de las compensaciones económicas que deberán de recibir los estudiantes que trabajen en estas instituciones educativas.

Finalmente, consideramos de suma importancia esta iniciativa de reforma legislativa a la ley mencionada, porque fortalece la gestión eficaz en las instituciones de seguridad pública como lo es el presente caso, e incluso diputadas y diputados esta iniciativa de ley acaso deberá de replicarse en todo el país, porque en Nuevo León no es el único estado que padece de este grave problema de inseguridad, violencia y delincuencia, que en estados como Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Estado de México, se han desarrollado hechos muy lamentables contra la niñez y la juventud, derivados del acoso y la violencia escolar. Por eso, esta es una gran oportunidad para actuar por la seguridad y preservar la integridad y vida de la niñez y la juventud.

Diputadas y diputados, también consideramos en nuestra calidad de estudiantes de criminología que de acuerdo a una reforma al código civil del Estado, ese honorable Congreso el día de ayer ya publicó para conocimiento del pueblo que se autoriza la legalidad de los “matrimonios igualitarios” es decir la unión legal entre personas del mismo sexo, y que es una reforma que reconoce los derechos a una vida libre de preferencia sexual y desarrollo de la personalidad, es decir un derecho a no ser discriminados en razón de su género y que además tienen derecho a la adopción de niñas y niños.

Sin embargo, en el conceso desarrollo de las niñas y niños particularmente como estudiantes de primaria, hasta donde logran de tener un desarrollo psicosocial y cultural que les permita convivir con los hijos de matrimonios tradicionales y que no sean objeto de la marginación ni la discriminación en su ámbito educativo incluso con los propios maestros. En consecuencia, diputadas y diputados la reforma contra el acoso escolar debe ampliarse y aplicarse jurídica y

criminológicamente a los hijos de los matrimonios igualitarios que estudian tanto las escuelas públicas como privadas, en donde los criminólogos y/o estudiantes destacados deberán intervenir para aplicar sus conocimientos científicos y prevenir el bullying escolar.

Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos:

PRIMERO; Que en nuestra calidad de estudiantes de Criminología de la Universidad Metropolitana de Monterrey, por presentando ante ese Congreso la presente iniciativa de reforma por adición a la ley mencionada y se le pide al presidente del Congreso que en su oportunidad la envíe para el debate ante la comisión de seguridad pública.

SEGUNDO; Una vez aprobada esta iniciativa, se solicita de ustedes diputadas y diputados, que sea enviada al gobernador del Estado para que se ordené la liberación del presupuesto para cumplir los fines de esta reforma a la ley.

ATENTAMENTE

Monterrey, N.L., 28 de junio de 2023

Milton Isai Paez Sandoval.

Milton.

Alan Missael Armendáriz Alonso

Giovanni Antonio Domínguez Castilla

Andrick Javier Palacios Vazquez

Gloria Cristhel Jimenez Bolain

Alexandra Gallardo García

Britany Estefania Rodriguez Perez

Arizbeth Gómez Reyes

Valeria Montserrat García Ramírez

Perla Patricia Antonio Hernández

Danna Anyel Castillo Hernández

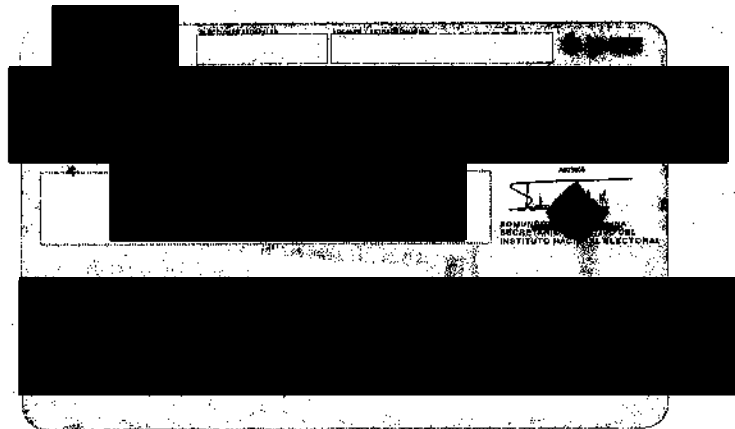
Brayan Osiel Pereyra Hurtado

Alfredo Barrios Rojas

Andrick T.P.V

Saul Efraim Martinez Gm.







H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo



No autorizo



Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Colonia:

Teléfono:

Núm. Ext. _____ Núm. Int. _____

Municipio: _____

Estado: _____ C.P. _____

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo



No autorizo



Correo:

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

Año: 2023

Expediente: 17262/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 9 Y 97 DE LA LEY ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Dip. Mauro Guerra Villarreal
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente



El suscrito, Diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional perteneciente a la LXXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como, lo dispuesto en los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de **Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León**, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el año 2014 surgieron dos nuevas formas de evasión fiscal que son empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas, ambas prácticas no solamente implican una importante defraudación al fisco, sino que es en detrimento de todos los mexicanos, en razón de que la recaudación de ingresos se ve afectada, circunstancia que se traduce a menores recursos para que el Estado pueda implementar políticas públicas en favor de la población.

El Código Fiscal de la Federación, establece en el artículo 69-B los supuestos en los que los contribuyentes emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan esos comprobantes. Es decir, lo que se conoce como empresas facturadoras de operaciones simuladas.

Al respecto el Sistema de Administración Tributaria (SAT) en el año 2021, publicó en el Diario Oficial de la Federación una relación de 12,505 empresas que facturan operaciones simuladas.

Estas organizaciones conocidas como factureras, su actividad consiste en simular operaciones para evadir el pago de contribuciones en perjuicio del fisco federal y, por otro lado, a cualquier otra organización que ofrezca de manera repetitiva, consistente y reiterada a contribuyentes con una actividad legítima esquemas simulados o que mediante el engaño provocan obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal o bien la omisión en el pago de contribuciones.¹

En diversos estados de la República mexicana se ha presentado esta situación, que además de ser un fraude al fisco también en detrimento de todos los mexicanos, también debe ser considerado un delito electoral. Uno de los mecanismos que se utilizan para desviar recursos a las campañas es a través de la utilización de “empresas fantasmas” o empresas de papel llamadas así por el procurador fiscal, que no son otra cosa que, empresas que simulan operaciones.

Lo anterior es así porque algunas veces la procedencia de los recursos es de origen ilícito, en este caso particular, son producto de esquemas de simulación, que en definitiva son acciones que lesionan los intereses de la sociedad al viciar los procesos electorales del país.

Por ejemplo, en el Estado de Nuevo León y de acuerdo al periódico El Norte, se vinculó a un dirigente partidista de Movimiento Ciudadano con la empresa BMDI la cual ha tenido operaciones por más de 25 millones de pesos con empresas que integran una red de 100 factureras en las que aparecen como accionistas personas de origen modesto.

Es necesario que los procesos electorales estén libres de recursos que provengan de empresas simuladas, razón por la cual, esta iniciativa propone que esa acción sea causante de inhabilitación para poder ser elegible para cualquier cargo de elección popular en el estado de Nuevo León.

En marzo de 2021, el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, suscribieron un Convenio de Colaboración, durante este acto el Procurador señaló que *“bajo el velo corporativo de las empresas de papel, los grupos organizados pretenden disfrazar*

¹ Acción de Inconstitucionalidad 130/2019 y su Acumulada 136/2019.

el origen de los gastos de campañas políticas, rebasar los topes establecidos en ley y emitir tarjetas de servicios para comprar la voluntad de los ciudadanos, sobre todo la de los más marginados, y una vez que llegan al poder buscan cobrarse las cuentas con la entrega ilegal de obras o servicios a sobreprecios obscenos, un círculo vicioso que debe atacarse.”²

En el año 2018, la Procuraduría Fiscal detectó el uso de empresas factureras para el financiamiento de campañas electorales, razón por la cual, esta acción debe estar prevista en la legislación electoral, para efectos de que aquellos ciudadanos que pretendan postularse para ejercer un cargo de elección popular no estén implicados con empresas factureras, de lo contrario serán inelegibles.

El Gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Asociación de Bancos de México, presentó una guía para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita durante procesos electorales, que es un sistema preventivo para generar un sistema robusto y prevenir la comisión de delitos electorales.³

En el contenido de esta guía se encuentran señales de alerta, entre ellas, destaca para efectos de la presente iniciativa las empresas de reciente creación que realizan grandes volúmenes de operaciones.

Información del Banco de México destaca que en los procesos electorales hay un aumento de al menos 6% de uso de efectivo en relación con el año inmediato anterior y el día de mayor utilización de efectivo es el de la jornada electoral, situación que presumiblemente pudiera atribuirse e interferir en el resultado electoral.

Las personas que pretenden ser elegibles a un puesto de elección popular deben tener un modo honesto de vivir y de ninguna manera podrán estar vinculados a operaciones con empresas fantasmas. De lo contrario la equidad en la contienda electoral podrá verse empañada por actos contrarios a la ley.

² <https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/1/procuraduria-fiscal-ine-pactan-atajar-factureras-empresas-fantasma-259231.html> (18/07/23)

³ <https://www.axisnegocios.com/breves.phtml?id=94279> (18/07/23)

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 9 y una fracción IV Bis al artículo 97 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 9. (...)

Asimismo, serán inelegibles para los cargos de Diputados, Gobernador y para ser miembro de un Ayuntamiento, aquellos ciudadanos que a nombre propio o siendo dueños o accionistas de empresas, hayan celebrado en los tres años previos a la elección operaciones, negocios o relaciones comerciales con personas físicas o morales que se encuentren en la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes emitida por la autoridad fiscal.

Artículo 97. Son facultades y obligaciones de la Comisión Estatal Electoral:

I. a IV. (...)

IV. Bis. Integrar en colaboración con la autoridad fiscal un registro de ciudadanos que a nombre propio o siendo dueños o accionistas de empresas hayan celebrado por un monto superior a los diez millones de pesos operaciones, negocios o relaciones comerciales con personas físicas o morales que se encuentren en la relación de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes emitida por la autoridad fiscal.

V. a XXXV. (...)

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los diecinueve días del mes de julio de 2023.

Atentamente,

Dip. Waldo Fernández González



Año: 2023

Expediente: 17266/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. ANA PAULINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y GONZALO RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.-



Los suscritos Ciudadanos Ana Paulina Fernández Fernández y Gonzalo Ramón Fernández Fernández, mexicanos, mayores de edad, nuevoleonenses, con domicilio para oír y recibir

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] en ejercicio de nuestro derecho establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanía a promover iniciativa de reforma a Ley de Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Nuevo León, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia en el ejercicio del poder público, es una de las mayores conquistas de las sociedades contemporáneas en materia de contención y combate a fenómenos sociales perjudiciales como la corrupción y el abuso arbitrario del poder político en los gobiernos; pero esa conquista debe mantenerse actualizada respecto de formas de evadir o inclusive simular la transparencia en la administración pública.

De ahí, que resulte pertinente señalar el concepto de transparencia proactiva, establecido en la legislación tanto Estatal como General en el rubro de transparencia de los entes públicos, el cual nos obliga a caminar hacia un mayor grado de tutela de este derecho fundamental, mismo que recordemos, se encuentra garantizado primigeniamente desde la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1, es decir, a partir de su concepción de fuente internacional, fue aterrizando en el Derecho nacional, dando paso a su positivización en el ordenamiento jurídico.

Pues bien, esta transparencia proactiva, está en consonancia con el principio de progresividad de los derechos humanos, el cual forma parte del nuevo paradigma Constitucional reformado en 2011, dentro del que se establece la obligación del Estado Mexicano de transitar gradualmente hacia la mayor protección de los derechos humanos, es decir, no solo de no regresar (exigencia negativa) sino de adoptar las medidas necesarias para hacer posible un mayor grado de tutela de los derechos humanos a las personas dentro de su jurisdicción (exigencia positiva), concepción que ha quedado delineada con claridad en la jurisprudencia de la Primera Sala de nuestro máximo Tribunal en el País que a continuación se inserta para ilustrar:

Registro digital: 2015305 Instancia: Primera Sala Décima Época

Materia(s): Constitucional Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 47, octubre de 2017, Tomo I, página 189

Tipo: Jurisprudencia

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. SU CONCEPTO Y EXIGENCIAS POSITIVAS Y NEGATIVAS. El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

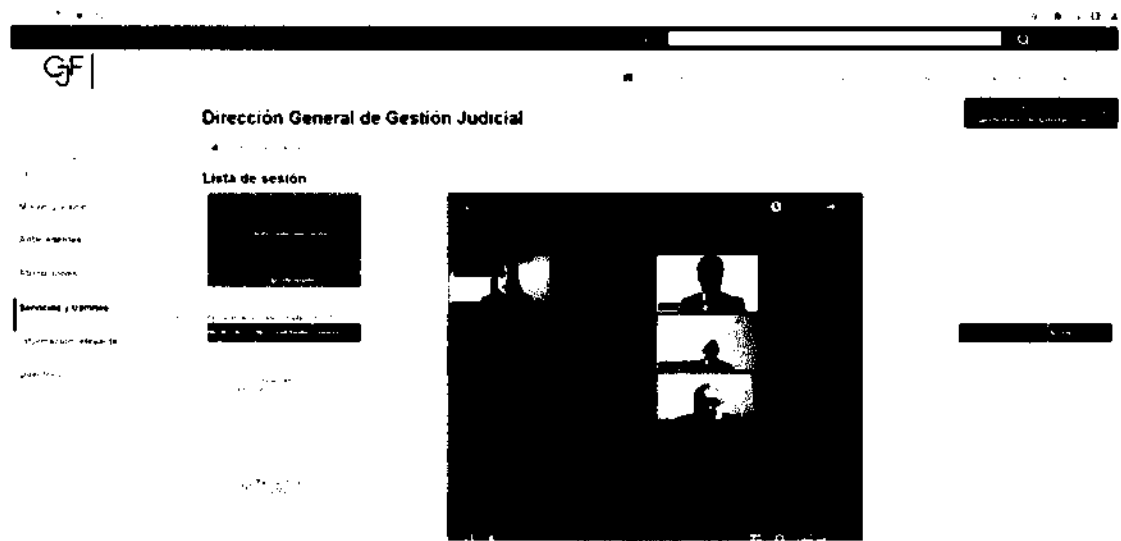
De lo mencionado con antelación se advierte, que la vocación progresiva de los Derechos Humanos, que por mandato del artículo 1º de la Constitución General de la Republica, constriñe no solo al interprete de la Ley, sino también al que la legisla, lo compromete cada vez en mayor grado, a la ampliación del espectro de protección de dichos derechos, en consonancia con los objetos y fines de un Estado Democrático de Derecho como el nuestro.

En base a ese contexto de transparencia proactiva y progresividad de los derechos humanos que impera en nuestro paradigma Constitucional, se hace patente la necesidad de elevar el umbral de transparencia en las decisiones jurisdiccionales de la Sala Superior del

Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León, la cual delibera de manera colegiada, sus determinaciones trascendentes mediante la resolución de los recursos de revisión de los juicios contenciosos que se dirimen en las Salas Ordinarias de dicho Tribunal y que inclusive, llegan a formar criterios de interpretación obligatorios en términos del artículo 98 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León.

Cabe mencionar, que la tendencia inexorable es que, los órganos colegiados jurisdiccionales, dada su naturaleza deliberativa colectiva, sean transparentes en sus sesiones a través de videgrabaciones transmitidas en tiempo real, es decir, en vivo al mismo tiempo en que están sucediendo y que inclusive queden resguardadas en su portal de internet oficial, para su eventual consulta.

Este mecanismo de transparencia en las sesiones jurisdiccionales de órganos colegiados, son ya habituales por ejemplo, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también encontramos en los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, esta buena práctica de transparencia, de lo cual y para ilustrar, a continuación se inserta imagen de referencia donde se aprecia que deliberan en tiempo real, diversos juicios de amparo y recursos de revisión de su competencia:



Estas prácticas son ejemplo de una transparencia jurisdiccional moderna, que disipan y al mismo tiempo disuaden de actuaciones irregulares a los órganos colegiados; modelo que debe imperar en una Sociedad de avanzada como la Neolonesa, por lo que se propone ajustar el marco legislativo para estar en condiciones de cumplir con el principio de progresividad en materia de transparencia antes aducido; en virtud de lo anterior, se propone:

Dice	Se propone
Artículo 4o.- Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal serán públicas, con excepción de los casos en que la moral, el interés público o la Ley exijan que sean privadas.	<p>Artículo 4o.- Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal serán públicas, con excepción de los casos en que la moral, el interés público o la Ley exijan que sean privadas.</p> <p>Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal serán videograbadas y transmitidas en tiempo real, mediante la página oficial del Tribunal; en dichas sesiones, los Magistrados integrantes de la Sala Superior se referirán de forma genérica a las partes procesales que intervienen en los asuntos jurisdiccionales a tratar, de manera que se salvaguarden los datos personales de los mismos, así como cualquier otra información que por su naturaleza y por disposición de ley, se tenga que omitir.</p> <p>Las videograbaciones de las sesiones de la Sala Superior del Tribunal, quedarán registradas para ser consultadas en el portal oficial de dicho órgano jurisdiccional.</p>

Por lo antes expuesto, quienes suscribimos el presente documento, solicitamos a este Poder Legislativo se siga con el trámite correspondiente y en su momento apruebe el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. - Se reforma el artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal serán públicas, con excepción de los casos en que la moral, el interés público o la Ley exijan que sean privadas.

Todas las sesiones de la Sala Superior del Tribunal serán videograbadas y transmitidas en tiempo real, mediante la página oficial del Tribunal; en dichas sesiones, los Magistrados integrantes de la Sala Superior se referirán de forma genérica a las partes

procesales que intervienen en los asuntos jurisdiccionales a tratar, de manera que se salvaguarden los datos personales de los mismos, así como cualquier otra información que por su naturaleza y por disposición de ley, se tenga que omitir.

Las videograbaciones de las sesiones de la Sala Superior del Tribunal, quedarán registradas para ser consultadas en el portal oficial de dicho órgano jurisdiccional.

TRANSITORIOS

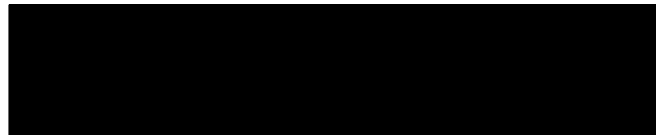
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita:

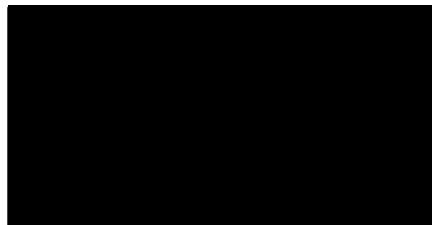
ÚNICO: Se me tenga por ejerciendo el derecho establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanía a promover iniciativa de reforma

Justo y legal lo solicitado, espero sea proveído en sus términos.

A t e n t a m e n t e

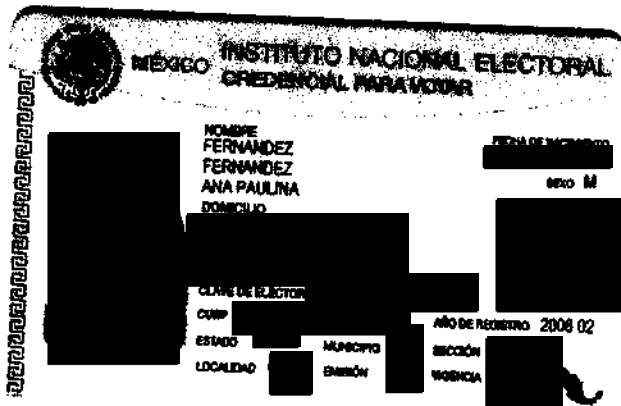


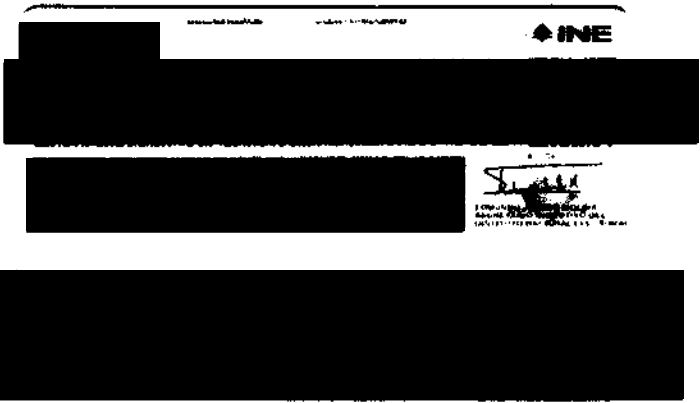
ANA PAULINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ



GONZALO RAMON FERNANDEZ FERNÁNDEZ









MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GONZALO RAMON
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO: 2014 01

ESTADO

MUNICIPIO

SECCION

LOCALIDAD

EMISION

VIGENCIA

SECRETARY GENERAL

SECRETARY GENERAL

◆ INE

SECRETARY GENERAL
SECRETARY GENERAL
SECRETARY GENERAL



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: [Redacted] Núm. Ext. [Redacted] Núm. Int. [Redacted]
Colonia: [Redacted] Municipio: [Redacted]
Teléfono(s): [Redacted] Estado: [Redacted] C.P. [Redacted]

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo [Redacted]

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL INTERESADO

Ana Paulina Hernández Hernández

Año: 2023

Expediente: 17267/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. ANA PAULINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y GONZALO RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 100 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Anexo impreso de
credenciales de elector
en tu propio formulario



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

Los suscritos Ciudadanos **Ana Paulina Fernández Fernández** y **Gonzalo Ramón Fernández Fernández**, mexicanos, mayores de edad, nuevoleonenses, con domicilio para oír y recibir notificaciones [REDACTED]

[REDACTED] en ejercicio de nuestro derecho establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanía a promover iniciativa de reforma a Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La transparencia en el ejercicio gubernamental debe de adecuarse en la medida de que la propia administración pública va cambiando y esto obedece a su vez, al dinamismo con que también las sociedades van evolucionando; en ese sentido, las normas jurídicas deben de actualizarse y adecuarse a esas inercias de cambio.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos también considerar que la transparencia proactiva, nos conduce a desarrollos cada vez abiertos, en relación a la información que debe ponerse a disposición de la ciudadanía en general y ante ello, se plantea la adecuación al precepto legal antes aducido, en los siguientes términos:

Dice	Se propone
Artículo 100. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley, los órganos u organismos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I.- ...	Artículo 100. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley, los órganos u organismos autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información: I.- ...

II.- ...	II.- ...
III.- ...	III.- ...
IV.- Tribunal de Justicia Administrativa:	IV.- Tribunal de Justicia Administrativa:
a) Las estadísticas de asuntos atendidos por el tribunal;	a) Las estadísticas de asuntos atendidos por el tribunal;
b) Las versiones públicas de las sentencias definitivas o resoluciones, que se hayan emitido por el tribunal administrativo y que pongan fin a un procedimiento, incluidas las que se dicten durante el desarrollo del proceso respectivo;	b) Las versiones públicas de las sentencias definitivas o resoluciones, que se hayan emitido por el tribunal administrativo y que pongan fin a un procedimiento, incluidas las que se dicten durante el desarrollo del proceso respectivo;
c) Las listas de notificación de los acuerdos, resoluciones y sentencias emitidos;	c) Las listas de notificación de los acuerdos, resoluciones y sentencias emitidos;
	d) Versiones estenográficas de las sesiones y actas de la Sala Superior;
	e) El orden del día de sus sesiones así como el enlace para ingresar a la transmisión de las sesiones de la Sala Superior, así como la videgrabación de las mismas para su consulta;
	f) Los acuerdos emitidos por la Sala Superior;
	g) El calendario anual de días hábiles;
	h) Estadísticas sobre solicitudes en materia de acceso a la información, que incluya el perfil del solicitante, tema de la solicitud, la respuesta;
	i) Relación de juicios de amparos interpuestos en contra de las

	<p>sentencias o resoluciones;</p> <p>j) Criterios de interpretación;</p> <p>k) Programa anual de trabajo, en caso de que haya;</p> <p>l) Convocatorias a concursos de oposición;</p> <p>m) Convenios celebrados;</p> <p>ñ) Principales indicadores sobre la actividad jurídico administrativa que realizan, en los que se contengan al menos asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad administrativa, número de sentencias o resoluciones dictadas y, en su caso las que sean confirmadas, revocadas o modificadas por unidad administrativa;</p> <p>o) Los manuales de organización y procedimientos que se requieran para su debida organización y funcionamiento, y</p> <p>p) Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se describan unidades administrativas.</p>
--	---

En virtud de las consideraciones antes expuestas, ponemos a consideración del H. Congreso del Estado el siguiente proyecto de:

DECRETO:

PRIMERO: Se reforma por modificación el artículo 100 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

"Artículo 100. Además de lo señalado en el artículo 95 de la presente Ley, los órganos u organismos autónomos deberán poner a disposición del

público y actualizar la siguiente información:

I.- ...

II.- ...

III.- ...

IV.- Tribunal de Justicia Administrativa:

a) Las estadísticas de asuntos atendidos por el tribunal;

b) Las versiones públicas de las sentencias definitivas o resoluciones, que se hayan emitido por el tribunal administrativo y que pongan fin a un procedimiento, incluidas las que se dicten durante el desarrollo del proceso respectivo;

c) Las listas de notificación de los acuerdos, resoluciones y sentencias emitidos;

d) Versiones estenográficas de sesiones y actas la Sala Superior;

e) El orden del día de sus sesiones así como el enlace para ingresar a la transmisión de las sesiones de la Sala Superior, así como la videograbación de las mismas para su consulta;

f) Los acuerdos emitidos por la Sala Superior;

g) El calendario anual de días hábiles;

h) Estadísticas sobre solicitudes en materia de acceso a la información, que incluya el perfil del solicitante, tema de la solicitud, la respuesta;

i) Relación de juicios de amparos interpuestos en contra de las sentencias o resoluciones;

j) Criterios de interpretación;

k) Programa anual de trabajo, en caso de que haya;

l) Convocatorias a concursos de oposición;

m) Convenios celebrados;

n) Servicios y trámites que ofrezcan, así como los requisitos y formatos que, en su caso, sean necesarios para acceder a ellos;

ñ) Principales indicadores sobre la actividad jurídico administrativa que

realizan, en los que se contengan al menos asuntos ingresados, egresados y existencia, por unidad administrativa, número de sentencias o resoluciones dictadas y, en su caso las que sean confirmadas, revocadas o modificadas por unidad administrativa;

o) Los manuales de organización y procedimientos que se requieran para su debida organización y funcionamiento, y

p) Los acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se describan unidades administrativas.

TRANSITORIOS

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente se solicita:

ÚNICO: Se me tenga por ejerciendo el derecho establecido en los artículos 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, acudimos ante esta Soberanía a promover iniciativa de reforma


Justo y legal lo solicitado, espero sea proveído en sus términos.

A t e n t a m e n t e


ANA PAULINA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ


GONZALO RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ





MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

PROCESO

2006

NOMBRE

FERNANDEZ
FERNANDEZ
ANA PAULINA

DOMICILIO

FECHA DE EMISIÓN

SEDO M

CLAVE DE ELECTRO

CLUP

ESTADO

LOCALIDAD


MUNICIPIO

CANTÓN

AÑO DE REGISTRO 2006 02

SECCIÓN

MOBILIDAD



Manufactured by [REDACTED] **INE**

[REDACTED] **SAFETY**
SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY

[REDACTED]



MEXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GONZALO RAMON
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO H



CLAVE DE ELECTOR

CURP

AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO

MUNICIPIO

SECCION

LOCALIDAD

EMISION

VIGENCIA

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED

DATE 11/11/2011 BY 60322

◆ INE

2011

JACOB M. JEC

5-2341



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle:

Núm. Ext.:

Núm. Int.:

Colonia:

Municipio:

Teléfono:

Estado:

C.P.:

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo ☒

No autorizo ☐

Correo:

NOMBRE Y FIRMA AUTOGRAFA DEL INTERESADO

Ana Patricia Hernández Hernández

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 6 Y 70 DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): MOVILIDAD.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



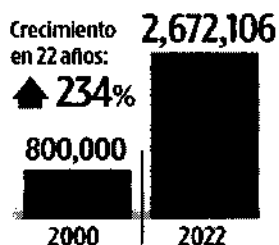
Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforma por adición de una fracción IV BIS el artículo 6 y por modificación la fracción I del artículo 70 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El número de vehículos motorizados en Nuevo León ha tenido un crecimiento del 234% entre el año 2000 y 2022, es decir, en el año inmediato anterior el padrón vehicular en nuestra entidad era de aproximadamente 2 millones 627 mil 106 vehículos, lo que visibiliza que hay más de un carro por cada dos habitantes, tal y como se muestra a continuación:

Motorizados

Cifra de vehículos en NL



Población de NL:

5,784,442

Más de un carro
por cada
dos habitantes

Aunque trasladarse es algo necesario el verdadero reto recae en hacerlo de una manera sostenible, y el uso del transporte público es una alternativa que beneficia al usuario (en costos y tiempo de traslado) y al medio ambiente (debido a que emite menos gases de efecto invernadero por pasajero que un automóvil) a la par de colaborar a la reducción del tráfico vehicular.

Sin embargo, para que la ciudadanía prefiera el uso del transporte público es necesario que el mismo sea atractivo en todos los aspectos, lo que conllevará a una desincentivación del uso de vehículos particulares, y por consiguiente a la obtención de múltiples beneficios en distintos ámbitos tales como contaminación, tráfico y economía sustentable.

En la actualidad, el gobierno del estado de Nuevo León se encuentra trabajando de forma exhaustiva en la movilidad que nuestra entidad merece, por lo que, entre muchas otras cosas, ha puesto en circulación camiones que pueden albergar hasta 100 ciudadanos, que son de bajo nivel, incluyentes, que cuentan con clima y hasta WIFI, demostrando que es

si posible contar con un transporte público de calidad, accesible, seguro y cómodo.

Bajo esa tesitura, el artículo 70 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León nos establece los derechos de los usuarios del transporte público, y particularmente la fracción primera del citado numeral nos dice las cualidades con las que debe de contar el servicio, estableciendo textualmente lo siguiente:

"Artículo 70. Son derechos de los usuarios del servicio de Transporte Público:

I. Recibir un servicio público de transporte de calidad, en forma permanente, regular, continua, uniforme e ininterrumpida y en las mejores condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;"

Y que aunque si bien nos dice que es derecho del usuario del transporte recibir un servicio en las mejores condiciones de comodidad, nuestra legislación carece de la definición del mencionado concepto (comodidad).

Y ante la reciente ola de calor que enfrentó nuestro estado, la comodidad de los usuarios se vio comprometida, lo que conllevó a que las autoridades tuvieran que aplicar multas a las unidades de camiones que no tuvieran el

clima encendido, lo anterior de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Movilidad de Nuevo León, lo que evidencia que los derechos de los usuarios son infringidos y su movilidad e incluso su salud se encuentran comprometidas, además de que ante las temperaturas tan drásticas que se presentan en nuestro estado resulta necesario que el transporte público cuente con aire climatizado y obstruir cualquier posibilidad de que esto no se lleve a cabo; lo anterior también beneficiará a choferes, principalmente del SETME Y EL SETRA, que pasan su jornada laboral a bordo de las unidades sin importar las inclemencias del tiempo, así como que el servicio de taxis se brinde en mejores condiciones y sea competitivo ante los demás.

Además de lo anterior, es de considerar que la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León contempla entre sus principios el de asequibilidad, sin embargo, no lo establece en el mencionado artículo 70 como un derecho de los usuarios, además de la omisión de que el servicio público de transporte deba de ser puntual.

Por lo que con la finalidad de robustecer el trabajo realizado por el gobierno del estado y que el mismo trascienda y persista a través del tiempo y administraciones, a la par de garantizar de manera clara y precisa los derechos de los usuarios, es que se considera necesario que la ley en aplicación de la materia establezca de manera clara y precisa lo que abarca el concepto de comodidad en el transporte público, además de añadir a los derechos del usuario que el mismo sea asequible y puntual.

Allegando el siguiente cuadro comparativo para mejor entendimiento de la iniciativa propuesta:

Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León	
Texto vigente	Texto propuesto
<p>Artículo 6. El Estado y los Municipios al diseñar e implementar sus programas, políticas, acciones de accesibilidad y movilidad, observarán los principios siguientes:</p> <p>I. a IV. ...</p> <p>SIN CORRELATIVO</p> <p>V. a XVI. ...</p>	<p>Artículo 6. El Estado y los Municipios al diseñar e implementar sus programas, políticas, acciones de accesibilidad y movilidad, observarán los principios siguientes:</p> <p>I. a IV. ...</p> <p>IV BIS. Comodidad: Garantizar que los componentes del sistema de movilidad cuenten, por lo menos, con aire climatizado, internet gratuito y espacios estratégicos para colocar pertenencias de los usuarios.</p> <p>V. a XVI. ...</p>
<p>Artículo 70. Son derechos de los usuarios del servicio de Transporte Público:</p> <p>I. Recibir un servicio público de transporte de calidad, en forma permanente, regular, continua, uniforme e ininterrumpida y en las mejores condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;</p> <p>II. a X. ...</p>	<p>Artículo 70. Son derechos de los usuarios del servicio de Transporte Público:</p> <p>I. Recibir un servicio público de transporte de calidad, en forma, asequible, permanente, regular, continua, uniforme, puntual e ininterrumpida y en las mejores condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;</p> <p>II. a X. ...</p>

Con la presente iniciativa de reforma se pretende incentivar el uso del transporte público, hacerlo más atractivo para el ciudadano así como beneficiar nuestro medio ambiente y movilidad.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

UNICO: Se reforma por adición de una fracción IV BIS el artículo 6 y por modificación la fracción I del artículo 70 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 6. El Estado y los Municipios al diseñar e implementar sus programas, políticas, acciones de accesibilidad y movilidad, observarán los principios siguientes:

I. a IV. ...

IV BIS. Comodidad: Garantizar que los componentes del sistema de movilidad cuenten, por lo menos, con aire climatizado, internet gratuito y espacios estratégicos para colocar pertenencias de los usuarios.

V. a XVI. ...

Artículo 70. Son derechos de los usuarios del servicio de Transporte Público:

I. Recibir un servicio público de transporte de calidad, en forma, **asequible**, permanente, regular, continua, uniforme, **puntual** e ininterrumpida y en las mejores condiciones de accesibilidad, seguridad, comodidad, higiene y eficiencia;

II. a X. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. Las Autoridades responsables emitirán el ordenamiento correspondiente para la aplicación del presente Decreto.

TERCERO. Las erogaciones en que se incurra por la implementación de lo previsto en el presente Decreto correrán a costa de la disponibilidad presupuestal asignado a las autoridades responsables.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 19 de julio de 2023


**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Viriginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

**Dip. Héctor García García
Contreras**

Dip. María Del Consuelo Gálvez

Dip. Roberto Carlos Farias García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por adición de una fracción IV BIS el artículo 6 y por modificación la fracción I del artículo 70 de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León.



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 452 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

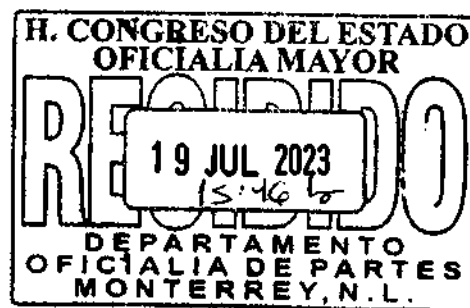
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por modificación el artículo 452 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cuando una persona cuenta con una duplicidad de registro respecto a su nacimiento, es decir, cuando posee dos actas de nacimiento, le ocasiona incertidumbre e inseguridad jurídicas, y para contrarrestarlo debe de realizar la cancelación de una de ellas, lo cual solo puede hacerse mediante resolución pronunciada por el Poder Judicial, tal y como lo asienta el numeral 134 del Código Civil para el Estado de Nuevo León que a la letra dice:

"Art. 134. La cancelación, la rectificación o la modificación de un acta del estado civil, no puede hacerse sino en virtud de resolución pronunciada por el Poder Judicial en el procedimiento que para ello esté establecido. Lo dispuesto en éste artículo no es aplicable a los casos de reconocimiento voluntario de una hija o hijo, el cual se sujetará a las prescripciones de este Código"

En base a lo anterior, y aunado a lo establecido en el artículo 135 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y el numeral 956 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, el procedimiento a seguir es el Ordinario Civil.

El mencionado juicio conlleva dentro de sus etapas procesales, entre otros, la contestación, la réplica y la dúplica, la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, lo que se traduce a un juicio extenso.

Una vez que se agotan todas las instancias del juicio ordinario civil y se dicta la sentencia correspondiente de primera instancia se tiene que abrir de oficio la segunda instancia, acatando a lo contemplado en el artículo 452 del Código de Código de Procedimientos Civiles.

Lo anterior, alarga aún más el tiempo para que la persona pueda llegar al fin deseado, que es la cancelación del acta del registro civil, además, a todo lo mencionado se le debe de adicionar el tiempo que le ha llevado

realizar otros procedimientos tales como rectificación o Diligencias de Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad-Perpetuam.

Lo tedioso que resulta el realizar todo lo anteriormente mencionado propicia que muchas personas decidan por abandonar sus juicios o inclusive, no empezarlos, ocasionando un severo daño a su seguridad jurídica.

Y aunque si bien cancelar un acta no resulta ser un hecho sencillo en virtud de lo que representa, se considera que con la finalidad de acortar los tiempos del mencionado juicio se puede evitar la segunda instancia oficiosa tomando como base los elementos y/o herramientas que los códigos adjetivos en la materia proporcionan.

Bajo esta tesitura, el artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León asienta lo siguiente:

"Artículo 239.- La ley reconoce como medios de prueba:

I.- Confesión y declaración de parte;

II.- Documentos públicos;

III.- Documentos privados;

IV.- Dictámenes periciales;

V.- Reconocimiento o inspección judicial;

VI.- Testigos;

VII.- Fotografías, copias fotostáticas, cintas de vídeo, dispositivos de archivos electrónicos o magnéticos, registros dactiloscópicos, electrónicos y, en general, todos aquellos elementos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología;

VIII.- Presunciones."

En relación a la fracción II, el mismo ordenamiento en arábigo 287 refiere:

"Artículo 287.- Son documentos públicos:

I.- Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las escrituras originales mismas;

II.- Los documentos auténticos expedidos por servidores públicos en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;

III.- Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastros que se hallen en los archivos públicos, o dependientes del Gobierno Federal o de los Estados, de los Ayuntamientos y delegaciones del Distrito Federal.

IV.- Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del registro civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes;

V.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos, expedidos por servidores públicos a quienes compete;

VI.- Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se refieran a actos pasados antes del establecimiento del registro civil, siempre que fueren cotejadas por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;

VII.- Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobadas por el Gobierno Federal o de los Estados y las copias certificadas que de ellas se expidieren;

VIII.- Las actuaciones judiciales de toda especie;

IX.- Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de Comercio;

X.- Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la ley."

Además de lo señalado con anterioridad, los instrumentos públicos hacen prueba plena, lo anterior de conformidad con el artículo 369 del multicitado ordenamiento.

Ahora bien, en relación a la fracción VIII del artículo 239 del Código de Procedimientos Civiles, sus homónimos 355 y 356 instauran respectivamente:

"Artículo 355.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez, deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido; la primera se llama legal y la segunda humana.

Artículo 356.- Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuenica (sic) nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél."

Por lo que del análisis de los mencionados numerales, se desprende que las pruebas documentales públicas consistentes en las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del registro civil hacen prueba plena, y sumado con la prueba presuncional legal y humana, las actuaciones judiciales, las demás etapas del procedimiento, y la obligación a suplir la deficiencia de la queja en los planteamientos de hecho y de

derecho, se cuenta con los elementos suficientes para determinar si la sentencia correspondiente al juicio ordinario civil sobre cancelación de acta del Registro Civil es procedente o no, pudiéndose evitar la segunda instancia oficiosa.

Contar con dos registros de nacimiento normalmente sucede por un error involuntario, la mayoría de las veces los padres por desconocimiento registran por segunda ocasión a sus hijos cuando en realidad lo que querían obtener era un duplicado de un acta de nacimiento, lo cual ocasiona múltiples problemas jurídicos ya que se cuenta, entre otras cosas, con dos CURP y dos Números de Seguridad Social, y en ocasiones no se dan cuenta de que los tienen hasta que se encuentran en trámites como el de pensión, y llevar a cabo un proceso tan largo solo contribuye a la falta de certeza jurídica.

Agregando el siguiente cuadro comparativo para mejor entendimiento de la reforma propuesta:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Artículo 452.- La revisión de las sentencias recaídas en los casos y procedimientos señalados en el artículo 956 de este Código y sobre nulidad de matrimonio por las causas expresadas en los artículos 241, 242 y 248 a 251 del Código Civil, abre de oficio la segunda instancia con intervención del Ministerio Público. Y	Artículo 452.- La revisión de las sentencias recaídas sobre nulidad de matrimonio por las causas expresadas en los artículos 241, 242 y 248 a 251 del Código Civil, abre de oficio la segunda instancia con intervención del Ministerio Público. Y aunque las partes no expresaren agravios, la Sala de lo Familiar examinará la legalidad de la

aunque las partes no expresaren agravios, la Sala de lo Familiar examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, observándose en lo conducente las formalidades previstas por el artículo 446 de este Código, quedando entre tanto sin ejecutarse aquélla.	sentencia de primera instancia, observándose en lo conducente las formalidades previstas por el artículo 446 de este Código, quedando entre tanto sin ejecutarse aquélla.
---	---

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por modificación el artículo 452 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 452.- La revisión de las sentencias recaídas sobre nulidad de matrimonio por las causas expresadas en los artículos 241, 242 y 248 a 251 del Código Civil, abre de oficio la segunda instancia con intervención del Ministerio Público. Y aunque las partes no expresaren agravios, la Sala de lo Familiar examinará la legalidad de la sentencia de primera instancia, observándose en lo conducente las formalidades previstas por el artículo 446 de este Código, quedando entre tanto sin ejecutarse aquélla.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 19 de julio de 2023


Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Héctor García García
Contreras

Dip. María Del Consuelo Gálvez

Dip. Roberto Carlos Farias García



Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por modificación el artículo 452 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León.

Año: 2023

Expediente: 17270/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1524 Y 1526 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por modificación los artículos 1524 y 1526 del Código Civil para el Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Civil para el Estado de Nuevo León nos dice que herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte y que la misma se defiende por la voluntad del testador o por disposición de la ley. Llamándole a la primera testamentaria, y la segunda legítima.

Respecto a la sucesión legítima, el capítulo IV del título cuarto del ordenamiento en mención nos señala lo referente a la sucesión del cónyuge, y particularmente el numeral 1524 del Código Civil establece que concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos.

En el mismo orden de ideas, el artículo 1526 dispone que a falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes, así mismo, el numeral 1501 señala que los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 1506 y 1529.

De conformidad con el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad; ésta puede ser catalogada como nuclear o extensa. La primera es la conviviente formada por los miembros de un único núcleo familiar, el grupo formado por los padres y sus hijos. Mientras que la extensa se define como aquella estructura de parentesco que habita en un mismo hogar y está conformada por parientes pertenecientes a distintas generaciones, puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes, tíos, abuelos, bisabuelos, entre otros.¹

¹ <https://sif2.scin.gob.mx/detalle/tesis/2019473>

El hecho de que al concurrir el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tenga derecho solo a dos tercios de la herencia, evidentemente desfavorece al cónyuge supérstite, al no brindar una protección al núcleo familiar que se formó entre los esposos, ocasionándole un perjuicio irreparable en el patrimonio que formó conjuntamente con el autor de la sucesión, por medio del vínculo matrimonial que los unía, brindándole acceso al haber hereditario a personas que no pertenecen a la familia nuclear, es decir, a los hermanos.

Poniendo como ejemplo el supuesto de bienes inmuebles, la cónyuge pasa a tener derecho solo sobre dos tercios de la herencia, siendo ahora copropietaria con el resto de los herederos, poniendo en riesgo su patrimonio, ya que estos últimos pudieran solicitar la venta, obligando a la cónyuge supérstite a erogar de nueva cuenta por el mismo patrimonio al tener que comprarles el tercio restante para adquirir la totalidad del inmueble, o en su caso al tener que adquirir otra propiedad.

Sin mencionar los contratiempos a que se puede enfrentar, como lo son, si están o no de acuerdo, notificarles del procedimiento, si cuentan con domicilio conocido, si aún están vivos o fallecidos, por mencionar solo algunos, lo que en ocasiones conlleva a no querer realizar el juicio sucesorio por miedo a poner en riesgo el patrimonio, o a dejar muchos juicios inconclusos.

Ahora bien, diversas legislaciones de la República Mexicana contemplan que cuando concurre el cónyuge con los hermanos del autor de la sucesión, estos últimos no lo hacen como herederos, tal y como se muestra a continuación:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO	Artículo 1533.- Los hermanos del autor de la herencia sólo tienen derecho a alimentos cuando concurren con el cónyuge que sobrevive.
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO	Artículo 2933.- Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, estos últimos sólo tendrán derecho a alimentos si ordinariamente tuvieran derecho a recibirlos.
CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE MEXICO	Artículo 6.157.- A falta de descendientes, sólo el cónyuge hereda.
CÓDIGO DE FAMILIA PARA EL ESTADO DE YUCATÁN	Artículo 789. A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge, concubina o concubinario hereda todos los bienes
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Artículo 1506. Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, los segundos tendrán sólo derecho a alimentos, si los necesitaren

Cabe destacar que en el apartado de criterios relevantes de la página de internet del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, se puede encontrar una sentencia emitida por el Juzgado Segundo de lo Familiar referente a lo mencionado en la presente iniciativa, permitiéndome transcribir el criterio en mención:²

² <https://www.pjenl.gob.mx/CriteriosRelevantes/index.html?id=JF02020079>

Registro No.	Instancia	Tesis	Materia
JF02020079	JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR	Relevante	Familiar

JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO. LA CÓNYUGE SUPÉRSTITE TIENE DERECHO PREFERENTE A HEREDAR RESPECTO DE LOS HERMANOS DEL DE CUJUS (INAPLICABILIDAD DE LOS ARTÍCULOS 1524 Y 1526 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

Si de las constancias que integran un juicio sucesorio de intestado se desprende que al de cujus le sobreviven su cónyuge y hermanos, conforme a lo establecido en los artículos 1524 y 1526 del *Código Civil para el Estado de Nuevo León*, se podría establecer que la cónyuge supérstite tendría derecho a dos tercios de la herencia, y que el tercio restante de esta se debe dividir, en partes iguales, entre los hermanos del de cujus. Sin embargo, partiendo de la protección que las leyes internacionales y nacionales otorgan a la familia nuclear, particularmente, los preceptos 16 de la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, publicada y promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, 17 de la *Convención Americana sobre Derechos Humanos* y 4 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; y después de efectuar una interpretación conforme de los numerales 1524 y 1526 del ordenamiento sustantivo de materia civil citados en líneas precedentes, resulta inconcuso que estos ordinales deben ser inaplicados para efecto de otorgar una protección más amplia a los integrantes de la familia nuclear, en este caso, la cónyuge supérstite. Lo anterior considerando que dichos artículos no se ajustan a los parámetros de legalidad, desfavorecen a la citada cónyuge supérstite y le ocasionan un daño en su patrimonio, toda vez que brindan a miembros de la familia extensa, como son ascendientes y hermanos del de cujus, la oportunidad de aprovechar el haber hereditario y, en el supuesto de que la masa hereditaria recaiga sobre bienes inmuebles, posibilita que dichos bienes también puedan verse afectados ya que podrían ser objeto de una transmisión por venta, misma que a su vez propiciaría la erogación de un gasto a cargo de una de las personas que formó parte de la sociedad conyugal.

Juicio sucesorio de intestado a bienes (sentencia de primera sección). Expediente judicial 934/2016. 21 de junio de 2019. Juez: María Guadalupe Balderas Alanís. Secretario: Luis Fernando Sánchez Martínez.

Por lo que de conformidad con todo lo anteriormente expuesto, y con lo establecido en el primer párrafo del artículo 4º Constitucional que a la letra establece:

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.”

Y con la finalidad de brindar una protección a la familia nuclear, se propone que cuando concorra el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, estos últimos tengan sólo derecho a alimentos, si los necesitaren, y no a un tercio de la herencia como actualmente se estipula.

Agregando el siguiente cuadro comparativo para mayor entendimiento de las reformas propuestas:

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
Art. 1524.- Concurriendo el cónyuge con uno o mas hermanos del autor de la sucesión, tendrá dos tercios de la herencia, y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá (sic) por partes iguales entre los hermanos.	Art. 1524.- Los hermanos del autor de la herencia sólo tienen derecho a alimentos cuando concurren con el cónyuge que sobrevive, si los necesitaren.
Art. 1526.- A falta de descendientes, y hermanos , el cónyuge sucederá en todos los bienes.	Art. 1526.- A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge sucederá en todos los bienes.

Por lo anteriormente expuesto, atenta y respetuosamente me permito someter a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforman por modificación los artículos 1524 y 1526 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 1524.- Los hermanos del autor de la herencia sólo tienen derecho a alimentos cuando concurren con el cónyuge que sobrevive, si los necesitaren.

Art. 1526.- A falta de descendientes y ascendientes, el cónyuge sucederá en todos los bienes.

TRANSITORIOS

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, 19 de julio de 2023




**Dip. Denisse Daniela Fuente
Montemayor**

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

**Dip. Héctor García García
Contreras**

Dip. María Del Consuelo Gálvez

Dip. Roberto Carlos Farias García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por modificación los artículos 1524 y 1526 del Código Civil para el Estado de Nuevo León.

Año: 2023

Expediente: 17271/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 68 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Los suscritos, Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Tabita Ortiz Hernández, Norma Edith Benítez Rivera, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Galvez Contreras y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano perteneciente a la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por modificación el artículo 68 del Código de Procedimientos del Estado de Nuevo León**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El primer párrafo del numeral 129 de nuestra Carta Magna establece que: *"El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores, y se expresará a través de funcionarias, funcionarios y auxiliares en los términos que establezcan esta Constitución y las leyes."*

Así mismo, el segundo párrafo del citado numeral nos dice que: *"En el Poder Judicial habrá un Consejo de la Judicatura del Estado, el cual tendrá las atribuciones que le señalen esta Constitución y las leyes."*

Tomando como base que el derecho y el acceso a la justicia es versátil, y se debe de adaptar ante las necesidades surgidas por la ciudadanía así como a los cambios presentados por el mero paso del tiempo, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta del Tribunal Superior de justicia, emitió el acuerdo 5/12¹, mediante el cual se modificó la distribución judicial en lo que respecta a las materias familiar y de menor cuantía, con la finalidad de lograr un más eficiente acceso a la justicia de la siguiente manera:

- a) En materia familiar, desconcentrar el Primer distrito Judicial, con el fin de acercar la justicia a la población más alejada de la capital del estado y, al mismo tiempo, coadyuvar a reducir en un cincuenta por ciento aproximadamente, el volumen total de asuntos que deben atender los juzgados-orales y escritos- especializados en la materia en beneficio de la pronta impartición de justicia y, así, lograr un más eficiente acceso a la justicia.
- b) Por su parte, en los juzgados de menor cuantía ampliar su ámbito de competencia territorial, adecuándolo al de primera instancia en esas materias, con la finalidad de agilizar los trámites legales, en beneficio de la pronta impartición de justicia.

¹ <https://www.pjenl.gob.mx/poderjudicial/cj/pleno/Acuerdos/2012/Acuerdo05.pdf>

Por lo que el Estado se dividió en quince Distritos Judiciales, quedando de la siguiente manera:

PRIMER DISTRITO.- Con cabecera en la ciudad de Monterrey:

APARTADO A.- En las materias Civil y de Jurisdicción Concurrente comprende a los municipios de Monterrey, Abasolo, Apodaca, El Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo, General Zuazua, Guadalupe, Hidalgo, Mina, Pesquería, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y Santiago, Nuevo León.

APARTADO B.- En las materias Penal y Familiar comprende a los municipios de Monterrey y Santiago, Nuevo León.

SEGUNDO DISTRITO.- En las materias Penal y Familiar comprende al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

TERCER DISTRITO.- En las materias Penal y Familiar comprende al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

QUINTO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Cadereyta Jiménez, Juárez y Los Ramones, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

SEXTO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Hualahuisés y Linares, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Linares, Nuevo León.

SÉPTIMO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo, General Zaragoza, y Mier y Noriega, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

OCTAVO DISTRITO.- Con cabecera en el municipio de Cerralvo.

APARTADO A.- En las materias Civil y de Jurisdicción Concurrente comprende a los municipios de Agualeguas, Cerralvo, Doctor González, General Treviño, Higuera, Marín, Melchor Ocampo y Parás, Nuevo León.

APARTADO B.- En las materias Penal y Familiar comprende a los municipios de Agualeguas, Cerralvo, General Treviño, Melchor Ocampo y Parás, Nuevo León.

NOVENO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Sabinas Hidalgo, Vallecillo y Villalón, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Villalón, Nuevo León.

DÉCIMO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Allende, General Terán, Montemorelos y Los Rayones, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Montemorelos, Nuevo León.

DÉCIMO PRIMER DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de Galeana e Iturbide, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Galeana, Nuevo León.

DÉCIMO SEGUNDO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende a los municipios de China, Doctor Coss, General Bravo, Los Aldamas y

Los Herreras, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de China, Nuevo León.

DÉCIMO TERCER DISTRITO.- En las materias Penal y Familiar comprende a los municipios de Apodaca, Doctor González, Higuera, Marín y Pesquería, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

DÉCIMO CUARTO DISTRITO.- En las materias Penal y Familiar comprende a los municipios de Abasolo, El Carmen, Ciénega de Flores, General Escobedo, General Zuazua, Hidalgo, Mina y Salinas Victoria, Nuevo León. La cabecera estará en el municipio de General Escobedo, Nuevo León.

DÉCIMO QUINTO DISTRITO.- Será de jurisdicción mixta y comprende al municipio de García, Nuevo León.

Ahora bien, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León establece en su arábigo 68 lo siguiente:

"Artículo 68.- Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Tratándose de procedimientos instaurados ante los juzgados de primera instancia del Primer Distrito Judicial, el domicilio que se designe para oír notificaciones debe estar ubicado en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.

También harán esa designación al notificárseles la determinación relativa, para el nuevo lugar a donde por cualquier motivo se mande pasar el negocio. Si durante el Juicio varían de domicilio deberán dar aviso al Juzgado o Tribunal. Igualmente deben designar el domicilio en que haya de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan."

Haciendo notorio que la redacción del mismo no se encuentra adaptada al acuerdo emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y al proceder actual de los litigios, debido a que hace referencia únicamente a "procedimientos instaurados ante los juzgados de primera instancia del Primer Distrito Judicial" cuando en la actualidad existen quince distritos judiciales.

Además, establece que el domicilio que se designe para oír notificaciones debe estar ubicado solo en los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina, dejando a lado municipios como General Escobedo, Santa

Catarina, García y Juárez, los cuales ya pertenecen al área metropolitana, al mismo tiempo en que se ignora a los demás Distritos Judiciales existentes.

Lo anterior, obliga a los litigantes a tener que señalar un domicilio para oír notificaciones en algún municipio de los considerados en el mencionado numeral, aún y cuando su procedimiento se esté llevando en una municipalidad diferente e inclusive en un distrito distinto al de la competencia del juicio, lo que también conlleva complicaciones a la carga de trabajo del mismo Poder Judicial, por las distancias recorridas para realizar las notificaciones, perjudicando así el derecho humano a una pronta expedición de justicia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se propone aprovechar la evolución que se ha tenido en el Poder Judicial del Estado, y las herramientas existentes con la finalidad de actualizar nuestra legislación a la realidad que enfrentamos en pro de la justicia, de los litigantes y justiciados.

Lo anterior mediante una modificación al artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León que contemple que el domicilio que se señale para oír notificaciones debe estar ubicado en cualquiera de los municipios comprendidos en el Distrito Judicial del lugar del juicio.

Allegando un cuadro comparativo para su mejor entendimiento:

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	
TEXTO VIGENTE	TEXTO PROPUESTO
<p>Artículo 68.- Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Tratándose de procedimientos instaurados ante los juzgados de primera instancia del Primer Distrito Judicial, el domicilio que se designe para oír notificaciones debe estar ubicado en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y Santa Catarina.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 68.- Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Tratándose de procedimientos instaurados ante los juzgados de primera instancia el domicilio que se señale para oír notificaciones debe estar ubicado en cualquiera de los municipios comprendidos en el Distrito Judicial del lugar del juicio.</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>...</p>

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO: Se reforma por modificación el artículo 68 del Código de Procedimientos del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 68.- Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia judicial en que intervengan, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Tratándose de procedimientos instaurados ante los juzgados de primera instancia **el domicilio que se señale para oír notificaciones debe estar ubicado en cualquiera de los municipios comprendidos en el Distrito Judicial del lugar del juicio.**

...

...

...

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a 19 de julio de 2023




**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Héctor García García

Dip. María Del Consuelo Gálvez Contreras

Dip. Roberto Carlos Farias García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa por la que se reforma por modificación el artículo 68 del Código de Procedimientos del Estado de Nuevo León.

Año: 2023

Expediente: 17277/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN RELACIÓN A LA TUTELA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, **Diputada Norma Edith Benítez Rivera**, e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, las Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas, María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La familia es la célula del progreso de la sociedad. Cada uno de los integrantes que conforma una familia es parte del crecimiento recíproco que necesitan cada uno de ellos para desarrollarse de la manera más integral posible. Uno sin el otro, no podría construir la perfección de su susceptibilidad como seres humanos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, expresa que la ley protegerá la organización y el desarrollo de la familia para garantizar el disfrute al derecho de la vivienda digna y decorosa; sentando así las bases jurídicas

que disponen el crecimiento integral y goce de vivir dentro una familia dentro de la República Mexicana.

También, en este mismo artículo, se menciona que *toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos*; determinando de esta manera la capacidad de los ciudadanos para formar la familia que desea.

Aunado a esta disposición, la Constitución Política y Soberana del Estado de Nuevo León, en su artículo 39, empata este derecho fundamental para los neoloneses, dejando al pleno albedrío responsable la decisión de criar a los hijos que desee de forma segura e informada. Reconociendo que la familia es la base fundamental de la sociedad y el Estado, y obedeciendo la obligación de protegerla y procurar su desarrollo.

La familia es el pilar fundamental del desarrollo integral de todos y cada uno de los integrantes que la componen; valiéndose siempre, y para efectos de la presente iniciativa, en el interés superior de la niñez. Por ello es que la Ley General de los Derechos de las Niña, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, se plasman como los derechos más representativos la vida, la paz, la supervivencia y al desarrollo, la prioridad, la identidad, vivencia en familia, la igualdad sustantiva, no ser discriminado.

La adopción es una capacidad de los ciudadanos neoloneses que recaba diversos requisitos para que este proceso civil pueda ser concretado legal y avalado jurídicamente por el estado. Entre ellos se encuentran ser mayor de 25 años, estar o no casado, la estabilidad laboral e independencia y suficiencia económica de la persona, evaluaciones psicológicas y económicas, certificado de salud, que tenga buenas costumbres, identidad familiar, razones por las cuales se desea adoptar, identificar su entorno cultural, causas de infertilidad.

Este proceso de adopción consta en la petición de la información por parte de los interesados adoptantes, se imparte una plática de inducción, la evaluación en donde

el psicólogo considera los puntos antes mencionados para determinar la *solicitud para trámite de adopción*, se genera un expediente, se aplica un examen psico-diagnóstico, Trabajo Social los analiza y finalmente se delega si es apto o no para adoptar.

El compromiso de las instituciones dentro del estado de Nuevo León para otorgar y satisfacer este derecho a que todas las niñas, niños y adolescentes deben tener acceso, lo comprenden el DIF, la Casa Cuna Conchita, Casa Paterna la Gran Familia, y Vida y Familia Monterrey, AC.

El DIF es el organismo público descentralizado que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que en coordinación con organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas ayudan a construir una calidad de vida a niñas, niños y adolescentes vulnerados por la violencia multidimensional que han sufrido.

Este necesario proceso, sin intención alguna, sobrepasa principios jurídicos que llevan consigo una consecuente violación a los derechos humanos de los neoloneses. Además, congestionan con requisitos que deben ser pensados y valorados de una forma más progresista para asegurar y ampliar la unión de todas a aquellas personas que tengan la voluntad de crear a su familia.

Si bien, encontrarse en la figura jurídica de matrimonio no es una obligación para que las personas interesadas tengan la libertad de adoptar, sí es un requisito que toma un peso preponderante para identificar una característica de estabilidad familiar en la unión del marido y la mujer.

En el artículo 391 del Código Civil del Estado de Nuevo León, se contempla que el marido y la mujer pueden adoptar cuando se lleven al menos dos años de casados; estableciendo implícitamente que todas las personas que no estén unidas bajo la figura jurídica civil de matrimonio, no tienen el derecho y libertad de poder adoptar.

Bajo esta misma línea de impedimentos violatorios, y considerando la reciente aprobación del matrimonio igualitario en el Estado de Nuevo León, los derechos humanos deben ser materializados tanto en los ordenamientos jurídicos, como en

la garantía de su ejercicio en sociedad; otorgados por las autoridades con base en los principios universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Estas disposiciones se contraponen directamente con el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que éste manifiesta que ninguna persona puede ser discriminada ni se puede atentar contra su dignidad que tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y sus libertades.

Otra contraposición existente de ordenamientos jurídicos corresponde a la disposición de la susceptibilidad de los concubinos de poder adoptar (establecido en las Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, artículo 30 Bis 3, fracción IX); contradictorio a lo que el Código Civil del estado inexpressa.

Resultando así un desfase, primero, por el hecho de que las personas que se encuentran en la figura civil de concubinato, no está explícito el derecho adjetivo para adoptar; y segundo, porque no se considera este derecho para personas del mismo sexo.

De igual forma, una incoherencia que se presenta en el Código Civil respecto a la consideración del proceso de adopción, es visible cuando se lee que los cónyuges podrán adoptar cuando los dos estén conformes en *considerar al adoptado* como hija o hijo. Cuando una niña, niño o adolescente es adoptado, no es posible (jurídicamente hablando) tener la opción de considerarlo como adoptado o no; el proceso para adoptar, cuando es concretado, automáticamente "se adopta" al infante.

Dicho esto, tanto la vulnerabilidad de las parejas que deseen adoptar, como todos aquellos niños, niñas y adolescentes que pudieran ser adoptados, está presente en la fractura de una posible unión familiar perdurable y armoniosa; violentado la voluntad de las personas para desarrollar su propia familia y la destitución del derecho a la familia del infante.

De acuerdo con el Inegi, con datos del 2020, 18.4 millones de mexicanos tienen una relación de unión libre, un aumento de 6.2 millones de personas en comparación con hace 10 años. Del año 2000 al año 2020, aumentó un 8 por ciento la cantidad de parejas que prefieren la unión libre, según datos de los Censos de Población y Vivienda.

El Panorama Sociodemográfico de Nuevo León 2020, en el apartado de "situación conyugal", muestra el panorama de personas que optan por mantener una unión libre entre las parejas.

Por ejemplo, algunas de las estadísticas en los municipios vislumbran la afinidad a la unión libre; General Escobedo, el 16.7% de la población de 481,213; San Nicolás de los Garza, el 7.3% de la población de 412,199; Monterrey, el 10.1% de la población de 1,142,994; San Pedro Garza García, el 5.7% de la población de 132,196; Santiago, el 10.1% de la población de 46,784; Santa Catarina, el 12.4% de la población de 306,322.

Traducido de otra forma, el total de las parejas que se encuentran unidas libremente en cada uno de los municipios ordenadamente mencionados, se expresa de la siguiente forma: General Escobedo, 80,362 personas; San Nicolás de los Garza, 30,090 personas, Monterrey, 115,442 personas; San Pedro Garza García, 7,535 personas; Santa Catarina, 37,984 personas.

El porcentaje total de las personas que se encuentran en unión libre en el estado de Nuevo León es del 14.8% de 5,784,442, lo que es igual a 856,097.

Respecto a la comunidad Gay, Lesbiana Bisexual o de otra orientación sexual (LGBT+), la cantidad aproximada a las que se les quebranta el derecho a adoptar consta 286,490 personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) 2021.

Estos datos demuestran la cantidad de las personas, que por la actual redacción del Código Civil del estado, no permite adjetivamente la adopción de niñas, niños y

adolescentes; invalidando no solamente el derecho de crear un familia, ni el de ser discriminados por la condición de una figura jurídica, sino también el del derecho a ser adoptado y a tener una familia.

Éstas son violaciones directas contra la voluntad de las personas para proliferar su familia de la manera en que desee; coactando su libertad de hacer valer su capacidad de goce que el Estado de Derecho del estado de Nuevo León promueve y garantiza.

El actual ordenamiento jurídico neoleonés no se encuentra alineado con el desarrollo sustentable familiar. Esta aseveración se evidencia tanto en la incapacidad de las parejas que se encuentran en concubinato, como en requisitos que atentan contra la discriminación causada hacia cualquier neoleonés.

Por último, el Código Civil, siendo un ordenamiento jurídico adjetivo que encamina el actuar de las personas en sociedad, se considera el cambio del término "menores" en este cuerpo jurídico, ya que esto refleja en sí mismo un retroceso dentro de la teoría de la Protección Integral, la cual supone la visibilización de la infancia en su integralidad.

Aunado a lo anterior, los actuales cambios de paradigmas que está presenciando el estado de Nuevo León en múltiples reconocimientos de derechos humanos que años atrás eran inconcebibles, específicamente hablando de la prohibición del matrimonio entre niñas, niños y adolescentes, se considera necesaria otra modificación a este Código para clarificar que la capacidad jurídica de este grupo poblacional, respecto a la emancipación, solo debe estar sujeta jurídicamente respecto a la administración de sus bienes.

La familia es una institución cambiante y adaptativa a las realidades económicas, sociales, políticas y culturales en las cuales se encuentra inmersa. Parte de la construcción de un futuro sustentable (desde la perspectiva familiar) consiste en pensarla como una célula que se reproduce de diversas formas, constituida y unida

por los vínculos familiares que concretarán la integralidad de cada uno de sus integrantes.

Por la anterior exposición de motivos, se presenta la iniciativa de ley:

DECRETO

ÚNICO. – Se **modifica** el artículo 391 del Código Civil para el Estado de Nuevo León y los artículos fracción III del 28 Bis IV, 30 Bis I, 165, la fracción III del 270, 277, 280, 282, 283, 306, 308, 321 bis, 390, 410-Bis, 411, 414 Bis, 415 Bis, 418, 420, 423, 424 Bis, las fracciones II y III del 444, 447 Bis, 449, la fracción I del 450, 451, 464, 474, 479, la denominación del Capítulo III y V, 492, 493, 500, la fracción I del 503, 583, la fracción III del 606, la fracción II del 632, 636, 639, 640, la fracción IV del 728, el inciso c) de la fracción V del 739, 1135, la fracción I del 1203, la fracción I del 1265, la fracción II del 1399, 1551, 1579, 1623, la fracción IV del 1642, 1666, 1673, 1816, 1817, la fracción III del 2827, 2829, 2930 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Art. 391.- Las personas que se encuentren en matrimonio o concubinato, podrán adoptar cuando **ambas personas estén conformes en iniciar el procedimiento de adopción del adoptado** como hija o hijo y aunque solo una de las personas cumpla en requisito de la edad a que se refiere el artículo anterior, pero siempre y cuando la diferencia de edad entre cualquiera de los adoptantes y el adoptado sea de quince años cuando menos. También podrán adoptar aun cuando tengan descendientes, en ciertos casos en que el Juez lo estime benéfico y circunstancias especiales lo aconsejen, oyéndose al Ministerio Público sobre el particular.

Art. 28 Bis IV.- En caso de **niñas, niños y adolescentes** o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en los artículos correspondientes del presente Código.

Art. 30 Bis I.- Capacidad de ejercicio es la aptitud para ejercitar derechos y cumplir obligaciones por sí mismo, la tienen los mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, y **las niñas, niños y adolescentes según lo dispuesto en el artículo 643 de este Código.**

Art. 165. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios o emolumentos, por las cantidades que correspondan para la alimentación de ella y de sus **niñas, niños y adolescentes...**

Art. 270.-....:

I.- a II.-;

III.- La exposición clara, sucinta, en párrafos numerados, de la situación que guarda en relación a su cónyuge y sus **niñas, niños y adolescentes** o incapaces, debiendo indicar edad, grado escolar y el lugar en que estos últimos residen; y... .

Art. 277.- En la sentencia de divorcio incausado el juez declarará que, de no existir convenio entre los progenitores ni sentencia firme que defina respecto de la custodia y convivencia en relación a **niñas, niños y adolescentes** o incapaces... .

Art. 280.- Para la definición del derecho... si tiene o no **niñas, niños y adolescentes** a su cuidado, así como la oferta de trabajo existente en el lugar de su residencia.

Art. 282.- En el caso de que las partes lleguen a un convenio después de haberse resuelto el divorcio incausado...previa la intervención del Ministerio Público si involucra derechos de **niñas, niños y adolescentes** o incapaces.

Art. 283.- ...

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

En caso de existir **niñas, niños y adolescentes**, el juez escuchará su opinión conforme a su edad y madurez.

Art. 306.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a **las niñas, niños y adolescentes**

Art. 308.- Los alimentos comprenden la manutención en general que incluye entre otros, la comida, el vestido, la habitación y la salud. Respecto **las niñas, niños y adolescentes**,

Art. 321 bis.- La mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad de su hija o hijo, **niñas, niños y adolescentes**,

Art bis1 a Art bis 3.

Art. 390.- El mayor de veinticinco años, aún libre de matrimonio, en pleno ejercicio de sus derechos, puede adoptar **una o más niñas, niños y adolescentes**... :

I a VIII.

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, el Juez puede autorizar la adopción de dos o más **niñas, niños y adolescentes** simultáneamente... .

Art. 410-Bis.- **Las niñas, niños y adolescentes** podrán ser adoptados mediante el sistema de adopción plena, aplicándose al efecto las disposiciones de este capítulo.

Art. 411.-... Quien ejerza la custodia, debe procurar el respeto y el acercamiento constante de **las niñas, niños y adolescentes**... .

Art. 414 BIS.- La madre tendrá en todos los casos en que no viva con el padre de sus hijas o hijos, el derecho preferente de mantener a su cuidado a los que fueren **niñas, niños y adolescentes** de doce años... Debiendo en todo caso el Juez, escuchar la opinión de los **niñas, niños y adolescentes** las... En todos los casos, el Juez deberá garantizar y facilitar la convivencia de **las niñas, niños y adolescentes** con su padre o madre y cuando sea necesario supervisarla.

Art. 415 Bis.- ... Corresponde a los abuelos asumir las expensas del goce y disfrute de su derecho para convivir con sus nietos **niñas, niños y adolescentes**...

Art. 418.- En todos los casos en que se requiera la intervención judicial para decidir sobre la patria potestad, la custodia y la convivencia de los menores sujetos a ellas...
. Lo mismo se observará en los asuntos relativos a la formación y educación de **las niñas, niños y adolescentes**.

Art. 420.- ...de común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la formación y educación de **las niñas, niños y adolescentes** y a la administración de los bienes que a éstos pertenezcan. ... previa audiencia de los interesados, lo que fuere más conveniente al bienestar de **las niñas, niños y adolescentes**.

Art. 423.- Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan **niñas, niños y adolescentes** bajo su custodia...

Art. 424 Bis.- Por causas supervinientes que afecten al bienestar **de las niñas, niños y adolescentes**, el Juez, a petición de parte interesada, o del Ministerio Público podrá en todo tiempo resolver o modificar las resoluciones respecto a la patria potestad o custodia de **las niñas, niños y adolescentes** sujetos a ellas.

Art. 444.- ...

I.-...

II.- Cuando el que la ejerza es condenado por un delito intencional en contra de la persona o bienes **de las niñas, niños y adolescentes**. En este supuesto, el juez, en vista de las circunstancias, podrá decretar la pérdida de la patria potestad sobre los demás **niñas, niños y adolescentes** respecto de quienes la ejerzan;

III.- Cuando por las costumbres depravadas, violencia familiar, explotación o abandono de los deberes de quien la ejerza, pudiera comprometerse la salud, la seguridad, la dignidad, la integridad o la moralidad de **las niñas, niños y adolescentes**, aún cuando estos hechos no sean penalmente punibles;

Art. 447 Bis.- La patria potestad se limitará cuando por resolución judicial, cautelar o definitiva, se restrinja alguno o algunos de los derechos que la integran o se impongan modalidades al ejercicio de éstos. El juez podrá imponer las limitaciones que procedan a la patria potestad a fin de proteger la integridad física y psicológica de **las niñas, niños y adolescentes**...

Art. 449.- ... En la tutela se cuidará preferentemente de la persona de los incapacitados. Su ejercicio queda sujeto en cuanto a la guarda y educación de **las niñas, niños y adolescentes** a las modalidades de que habla la parte final del artículo 413.

Art. 450.- Tienen incapacidad natural y legal:

I.- **Las niñas, niños y adolescentes**;

II.- a IV.-...

Art. 451.- **Las niñas, niños y adolescentes** tienen incapacidad legal para los actos que se mencionen en el Artículo 643 del presente Código.

Art. 464.- **La niña, niño y adolescente** discapacitado con ausencia de capacidad mental, con ausencia de capacidad auditiva y del habla, ebrio consuetudinario o que habitualmente abuse de las drogas enervantes, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue a la mayoría de edad.

Art. 474.- Si fueren varios **las niñas, niños y adolescentes** nombrárseles un tutor común, o conferirse a persona diferente la tutela de cada uno de ellos, observándose, en su caso, lo dispuesto en el artículo 457.

Art. 479.- Deben observarse todas las reglas, limitaciones y condiciones puestas por el testador para la administración de la tutela, que no sean contrarias a las leyes, a no ser que el juez, oyendo al tutor y al curador, las estime dañosas a **las niñas, niños y adolescentes**, en cuyo caso podrá dispensarlas o modificarlas.

CAPITULO III

DE LA TUTELA LEGITIMA DE **LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

...

CAPITULO V

DE LA TUTELA LEGITIMA DE **LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES** ABANDONADOS Y DE LOS ACOGIDOS POR ALGUNA PERSONA, O DEPOSITADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA

Art. 492.- La Ley coloca a los expósitos y a **las niñas, niños y adolescentes**...

Art. 493.- Los directores de las instituciones de beneficencia o asistencia social donde se reciban expósitos, **niñas, niños y adolescentes** abandonados o que hayan acogido **niñas, niños y adolescentes**...

Art. 500.- A **las niñas, niños y adolescentes** que no estén sujetos a patria potestad, ni a tutela testamentaria o legítima...

Art. 503.- No pueden ser tutores, aunque estén anuentes en recibir el cargo:

I.- **Los niñas, niños y adolescentes**;

II.- a XIII.-...

Art. 583.- Cuando la tutela recaiga en cualquiera otra persona, se ejercerá conforme a las reglas establecidas para la tutela de **las niñas, niños y adolescentes**.

Art. 606.- La tutela se extingue:

I.- a II.-;

III.- Por maltrato inferido a **las niñas, niños y adolescentes** incapacitados...

Art. 632.- ...

I.-...;

II.- Velar porque los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación de **las niñas, niños y adolescentes**; dando aviso al juez de las faltas u omisiones que notare;

III.- a IV.-... .

Art. 636.- Son también nulos los actos de administración y los contratos celebrados por **las niñas, niños y adolescentes** emancipados, si son contrarios a las restricciones establecidas por el artículo 643.

Art. 639.- **Los niñas, niños y adolescentes** no pueden alegar la nulidad de que hablan los artículos 635 y 636... .

Art. 640.- Tampoco pueden alegarla **las niñas, niños y adolescentes**... .

Art. 728.-

I.- a III.-;

IV.- Por el tutor, cuando administre bienes pertenecientes a **niñas, niños y adolescentes**.

Art. 739.-

I.- a V.-;

a) a b); o

c) En los casos establecidos por el artículo 880 fracción VI y VII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, salvo que existan hijas o hijos que sean **niñas, niños y adolescentes** o incapaces;

IV.- a X.... .

Art. 1135.- Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por cualquiera otro título; **las niñas, niños y adolescentes** y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos representantes.

Art. 1203.-... :

I.- **Las niñas, niños y adolescentes** que no han cumplido dieciséis años de edad, ya sean hombres o mujeres;

II.-

Art. 1265.- ... :

I.- A los descendientes **niñas, niños y adolescentes**;

II.- a IV.-

Art. 1399.- ... :

I.-

II.- **Las niñas, niños y adolescentes** de dieciséis años;

III.- a VII.-

Art. 1551.- La herencia dejada a **las niñas, niños y adolescentes** y demás incapacitados, será aceptada por sus tutores, quienes podrán repudiarla con autorización judicial, previa audiencia del Ministerio Público.

Art. 1579.- Cuando el testador no hubiere designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos. Por los herederos **niñas, niños y adolescentes** votarán sus legítimos representantes.

Art. 1623.- Cuando fuere heredera la Hacienda Pública del Estado o los herederos fueren **niñas, niños y adolescentes**, intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de las cuentas.

Art. 1642.- ... :

I.- a III.-...

IV.- Por excusa que el juez califique de legítima, con audiencia de los interesados y del Ministerio Público, cuando se interesen **niñas, niños y adolescentes** o el fisco del Estado;

V.- a VII.- ...

Art. 1666.- ... Habiendo **niñas, niños y adolescentes** entre ellos, deberá oírse al tutor y al Ministerio Público, y el auto en que se apruebe el convenio, determinará el tiempo que debe durar la indivisión.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Art. 1673.- ... Cuando haya **niñas, niños y adolescentes**, podrán separarse, si están debidamente representados y el Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que se tomen se denunciarán al Juez, y éste, oyendo al Ministerio Público, dará su aprobación, si no se lesionan los derechos de **las niñas, niños y adolescentes**.

Art. 1816.- Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de **las niñas, niños y adolescentes** que estén bajo su poder y que habiten con ellos.

Art. 1817.- Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando **las niñas, niños y adolescentes** ejecuten los actos que dan origen a ella... .

Art. 2827.-... :

I.- a II.-;

III.- **Las niñas, niños y adolescentes** y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los que éstos administren;

IV.- a V.-... .

Art. 2829.- La constitución de la hipoteca por los bienes de hijas o de hijos de familia, de **las niñas, niños y adolescentes** y de los demás incapacitados se registrará por las disposiciones contenidas en el título VIII, capítulo II; título IX, capítulo IX y título XI, capítulos I y III del Libro Primero.

Art. 2930.- Los padres, como administradores de los bienes de sus hijas o hijos; los tutores de **niñas, niños y adolescentes** o incapacitados... .

TRANSITORTIOS

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

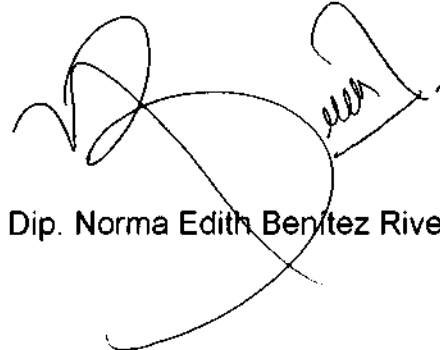
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera



Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, **Diputada Norma Edith Benítez Rivera**, e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, las Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Irais Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas, María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

La protección, cuidado y el aseguramiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, se ha convertido en una prioridad desde inicios del siglo presente. La imperiosa necesidad de proliferar y crear un Estado de Derecho más amplio, que se adapte a las exigencias sociales y al acceso a la justicia, corresponde a la presente iniciativa vislumbrar y modificar determinados ordenamientos jurídicos.

La familia es el principal organismo que compone a la sociedad. Cada uno de sus miembros juega un rol de suma importancia para el desarrollo conjunto e integral de sus integrantes. Es por ello que la garantía de su conformación, su aseguración, integración y continuidad, son claves para que en las leyes sean claros y certeros los efectos y atribuciones que cada organismo del estado le compete realizar.

Por desgracia, son diversas las causas por las cuales la familia se deteriora y se fractura; llámese violencia física, sexual, psicológica, económica, de género, abandono, alcoholismo, drogadicción, favoritismos, negligencia y todas aquellas que introduzcan a la niña, niño o adolescente en un contexto de vulnerabilidad.

En Nuevo León, con base en las estadísticas del DIF estatal, en el periodo enero 2020- abril 2021, se brindó atención a mil 079 niños, niñas y adolescentes por causas directas de violencia, de los cuales 544 casos fueron por negligencia; 256 debido a riesgo y 94 a consecuencia de abuso sexual. Asimismo, por abandono hubo 78; maltrato físico, 54; psicológico, 26; abandono parcial, 25 y por explotación laboral, 2.

La Organización Mundial de la Salud, explica que la violencia de pareja y la violencia sexual son el resultado de factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social que interactúan entre sí y aumentan o reducen el riesgo de que se produzca. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento, y otros a ambos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Estos factores asociados con la violencia de pareja, como con la violencia sexual, son causados por un bajo nivel de instrucción, exposición al maltrato infantil, haber presenciado escenas de violencia familiar, trastorno de la personalidad antisocial, uso nocivo del alcohol, comportamientos masculinos dañinos, normas comunitarias que otorgan privilegios o una condición superior a los hombres y una condición inferior a las mujeres, entre otros.

Bajo esta tesitura, la obra de Álvarez y Hargot, titulada “Manual de Prevención de Violencia Intrafamiliar”, expone que las causas frecuentes que generan la violencia intrafamiliar son el estrés insostenible, falta de recursos personales, problemas de comunicación, falta de control de las emociones, falta de tolerancia, creencia de la superioridad del hombre ante la mujer, normalizar la violencia, etc.

Esta concordancia entre los efectos y causas que provocan la violencia familiar, predominantemente del hombre hacia la mujer, se encuentra presente alrededor de la república mexicana y por ende, en el estado de Nuevo León; corroborando esto por las presentes estadísticas aportadas por el DIF estatal.

En el informe del 2021 del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, con información del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, se tiene que en el año 2019, se registraron 1760 personas enfermas por trastornos mentales y del comportamiento; en el año 2020, 201.9 personas con esquizofrenia; 568.5 con depresión mayor; 93.2 con distimia; trastorno bipolar con 216 y 351.1 con ansiedad.

Descrita esta realidad que arremete en la sociedad neolonesa, los diversos tipos de violencia que son detonados por las causas anteriormente descritas, explican el padecimiento, desarticulación y la separación de las familias. Aún más importante

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

que esto, tratándose el interés superior de la niñez, las niñas, niños y adolescentes son víctimas de estos escenarios de injusticia sin culpa alguna.

Aunado a esto, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, históricamente han aumentado los casos de violencia familiar denunciados, ya que en el año 2019, se registró un total de 16 mil 339 casos, en el 2020 la Fiscalía recibió 17 mil 940 denuncias y el 2021 cerró con 21 mil 029.

Este panorama de denuncias, también denota el uso de los recursos jurídicos por parte de los integrantes violentados en la familias y representa los síntomas de las actitudes agresivas a las que se encuentran expuestas por las acciones violentas cotidianas que viven día con día.

Las niñas, niños y adolescentes, a raíz de las problemáticas generadas por los padres de la familia, son quienes padecen en el presente y quienes padecerán el futuro; donde les son vulnerados los derechos de autonomía progresiva, a una vida libre de violencia, a la prioridad, a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo integral.

Como medias preventivas a los escenarios violentos en los que están inmersas las niñas, niños y adolescentes, se contemplan dos modalidades por el Sistema Estatal DIF y por las instituciones asistenciales; el acogimiento residencial y la familia de acogida, cuya función radica en construir una calidad de vida factible y provisional a vulnerados por la violencia multidimensional a la que están expuesta.

Según el Sistema Nacional DIF, la adopción es el medio por el cual aquellas niñas, niños y adolescentes que han terminado el vínculo con su familia biológica tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico, bajo la protección y el cariño de una familia; siendo otra de las medidas (de forma definitiva) que se toman para darle una vida digna a la niña, niño o adolescente.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

El artículo 13 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, establece el derecho a vivir en familia, el cual conforma la garantía que asegura el progreso y su desarrollo continuo con los integrantes nucleares de esta institución social.

La materialización de los efectos de esta disposición se conjuga a través de las autoridades que tienen el cometido de asegurar la prolongación de la familia, descritas en el artículo 27 de la misma ley:

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieren por su situación de desamparo familiar, privilegiando el derecho a vivir en su familia de origen, considerando en su caso, el acogimiento familiar a efecto de que la adopción sea el último recurso.

El deber ser de este principio y norma jurídica es el de conservar la integración de la familia biológica, otorgando la prioridad a los padres de familia para cumplir tanto con sus obligaciones jurídicas y disfrutar de sus derechos, como la de crecer con la identidad y amor que todas las partes de una familia crean para sí.

Sin embargo, la existencia de casos particulares que suceden dentro del estado, como lo son la negligencia de actuación, el abuso sexual, abandono, maltrato físico y psicológico, y explotación laboral, pone en duda y tela de juico una posible reinserción con su familia de origen.

La prioridad, como derecho de la niña, niño o adolescente, debe ser vista como un eje rector que deber guiar el cuidado y protección de la niñez. Repensar los lazos biológicos que enlazan jurídicamente a los infantes de sus padres, considerando el grado de vulnerabilidad al que está expuesto, es una manera de terminar con un círculo de violencia y abrir nuevas oportunidades de iniciar una vida plena.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Abrir la oportunidad tanto a familiares aptos y posibles adoptantes con la voluntad de otorgar el cuidado y el amor que merece una niña, niño o adolescente, como brindar una nueva oportunidad de cambiar totalmente su vida, es extender aún más el derecho a una vida digna y sana a estos grupos vulnerables

Aunque la decisión del término de la patria potestad está jurídicamente sujeta a un juicio valorado por un juez con base en causas establecidas, la modificación de ordenamientos jurídicos podrá conformar un criterio más para analizar y decidir de una forma panorámica frente a casos en los que el interés superior la niñez sea provisto por familias adoptivas.

Bajo el mismo reforzamiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el artículo 27 también determina que:

El Sistema Estatal DIF y la Procuraduría de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo de la autonomía evolutiva de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

La Procuraduría, teniendo funciones específicas de investigación, validación y vigilancia, se contemplan registros de las Instituciones Asistenciales que operan en el estado y registros de niñas, niños y adolescentes que ingresaron y egresaron de estas instituciones, según el artículo 13 de la Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León

Con objeto de complementariedad y un seguimiento eficiente del proceso de la identificación de las problemáticas de violencia que padecieron las niñas, niños y adolescentes, se ha considerado necesario contar con instrumentos que constituyan funciones de localización de familiares que busquen y deseen continuar

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

su cuidado, y con la identificación de los casos, causas y tipo de violencia a las que se enfrentaron.

Estas bases de datos tienen una doble función. La primera es la de hacer valer el derecho a la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; dando así la oportunidad, respecto a la voluntad y trabajo conjunto entre los familiares y las autoridades, la reunificación con otros familiares que no sean los nucleares. Por otro lado, el derecho a la accesibilidad que debe procurarse para integrarse con familiares que ellos valoren.

La segunda función, acorde con otras de las funciones de la Procuraduría de dar vista al Ministerio Público de inmediato por las conductas que puedan ser constitutivas de delito, se cree dicho listado de las casos y causas de violencia específicas que llevaron a la niñas, niños o adolescentes al DIF estatal o la Institución Asistencial.

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna persona puede ser discriminada ni se puede atentar contra su dignidad; asimismo, en ningún caso se podrán menoscabar sus derechos humanos y libertades.

Muchas son las condiciones y hechos de violencias a las que se pueden enfrentar personas al desear adoptar a una niña, niño o adolescente; desde la justificación y comprobación de causas de infertilidad por parte de la Institución Asistencial privada Casa Cuna Conchita, hasta la laguna jurídica dispuesta en el Código Civil que no expresa la adopción por parte de la concubina y concubinario, ni la adopción por parte del concubinato del mismo sexo y orientación sexual.

Otra señal de discriminación hacia la persona que está presente al momento de introducirse al proceso de adopción por parte del interesado o interesada, es el de

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

la justificación y comprobación de las causas de infertilidad., pide como requisito una carta que compruebe esto.

Con esto, se pretende crear un dispositivo entre las autoridades competentes que investigue, evalúe y flexibilice nuevas formas de otorgarle una mejor y próspera calidad de vida a la niña, niño o adolescente.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la iniciativa de ley:

DECRETO

ÚNICO. – Se **Adiciona** la fracción XI al artículo 13 de la Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León, la fracción V al artículo 30 y la fracción III al artículo 30 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León; se **modifica** el artículo 27 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o Ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León

Artículo 13.-...

I a X.;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

XI. Investigar, identificar y contactar a los familiares de los padres y madres de las niñas, niños y adolescentes institucionalizados que hayan sufrido de violencia y/o abandono;

XII; y

XIII.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León

Artículo 30. ...

I a IV.;

V. Elaborar, operar y actualizar una base de datos, en coordinación con las Instituciones Asistenciales, que enliste a las niñas, niños y adolescentes institucionalizados víctimas de violencia, descuido y abandono, así como sus causas;

VI.

Artículo 30 Bis.

I a II.;

III. Asegurar que cualquier persona pueda adoptar sin ser sujeto de cualquier tipo de discriminación, salvo por los casos que estrictamente señale la ley o que sean contrarios al interés superior de la niñez;

IV;

V;

VI;

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

VII; y

VIII.

Artículo 27. ...

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieren por su situación de desamparo familiar, privilegiando el derecho a vivir en su familia de origen, considerando en su caso, el acogimiento familiar **y la adopción con base en la medida que mayor protección, seguridad y conveniencia le provea, priorizando el interés superior de la niñez.** En estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Estatal DIF, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurará de que niñas, niños y adolescentes:

I a IV. ...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - La Procuraduría de Protección de la Niña, Niño o Adolescente, junto con los Sistemas DIF Municipales e Instituciones Asistenciales, contará con 120 días para comenzar a operar y a actualizar las bases de datos.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TERCERO. - Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del presente Decreto, éstas se realizarán atendiendo a la suficiencia presupuestal del Gobierno del Estado.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE INSTITUCIONES ASISTENCIALES QUE TIENEN BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O AMBAS A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y A LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz


Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

Año: 2023

Expediente: 17279/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN AL ARTÍCULO 934 BIS I DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EN MATERIA DE ADOPCIÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, **Diputada Norma Edith Benítez Rivera**, e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, las Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas, María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Eduardo Gaona Domínguez, Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las niñas, niños y adolescentes del Estado de Nuevo León, son y siempre serán la prioridad superior para asegurar sus derechos integra y eficazmente. Diversas son las disposiciones que las leyes en la materia disponen las formas y procesos para concretar una vida próspera y plena al infante.

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en el artículo 6, menciona que uno de los derechos más representativos son la igualdad, no discriminación, inclusión, derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia

y al desarrollo, a la participación, a la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, el principio pro persona.

Asimismo, el artículo 27 también determina que:

El Sistema Estatal DIF y la Procuraduría de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo de la autonomía evolutiva de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

La Procuraduría, teniendo funciones específicas de investigación, validación y vigilancia, se contemplan registros de las Instituciones Asistenciales que operan en el estado y registros de niñas, niños y adolescentes que ingresaron y egresaron de estas instituciones, según el artículo 13 de la Ley de Instituciones Asistenciales que tienen bajo su Guarda, Custodia o ambas a Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Nuevo León

Con objeto de complementariedad y un seguimiento eficiente del proceso de la identificación de las problemáticas de violencia que padecieron las niñas, niños y adolescentes, se ha considerado necesario contar con instrumentos que constituyan funciones de localización de familiares que busquen y deseen continuar su cuidado, y con la identificación de los casos, causas y tipo de violencia a las que se enfrentaron.

Al mismo tiempo, dichos instrumentos deben plasmarse en el Código Civil del estado para mantener una lógica entre las disposiciones adjetivas jurídicas que dan pie a la construcción de los derechos que se circunscriben en las leyes de la materia de niñas, niños y adolescentes.

Estas bases de datos tienen una doble función. La primera es la de hacer valer el derecho a la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; dando así la oportunidad, respecto a la voluntad y trabajo conjunto entre los familiares y las autoridades, la reunificación con otros familiares que no

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

sean los nucleares. Por otro lado, el derecho a la accesibilidad que debe procurarse para integrarse con familiares que ellos valoren.

La segunda función, acorde con otras de las funciones de la Procuraduría de dar vista al Ministerio Público de inmediato por las conductas que puedan ser constitutivas de delito, se cree dicho listado de las casos y causas de violencia específicas que llevaron a la niñas, niños o adolescentes al DIF estatal o la Institución Asistencial.

Por la anterior exposición de motivos, se presenta la iniciativa de ley:

DECRETO

ÚNICO. - Se adiciona el artículo 934 Bis I al Código Civil para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 394 Bis I.- Las instituciones públicas y privadas deberán operar y actualizar trimestralmente una base de datos confiable, confidencial y certera que permita disponer de la información, localización y cantidad de niñas, niños y adolescentes que sean susceptibles al procedimiento de adopción, la cual deberá allegarse a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

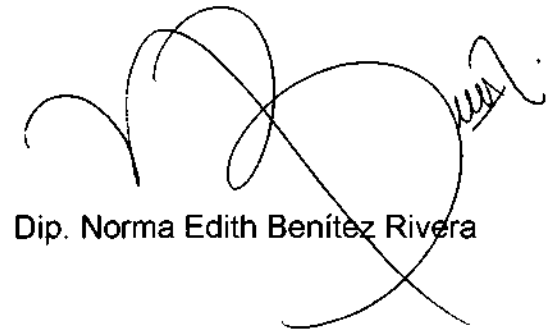
TRANSITORIOS

UNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz



Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

Año: 2023

Expediente: 17282/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. GABRIELA GOVEA LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN MATERIA MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .



El Diputada **Gabriela Govea López** y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en sus artículos 68 y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía, iniciativa en materia de manejo de residuos peligrosos biológico-infecciosos, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La pandemia de SARS-COV2 (COVID 19) ha transformado las condiciones sanitarias en los últimos años, evidenciando la importancia de mantener una higiene adecuada para prevenir el contagio. Antes de esta crisis, muchas personas no tenían conciencia de los riesgos sanitarios que implicaban sus hábitos cotidianos, lo que facilitó la propagación de la enfermedad a nivel mundial.

Como sabemos, la dimensión en la que se propago el COVID 19, fue a tal grado de colapsar el sistema hospitalario, lo que propicio a la generación en grandes cantidades de residuos biológico-infecciosos, que son aquellos que podrían contener patógenos (bacterias, virus, parásitos u hongos) en una concentración o cantidad suficiente como para causar enfermedades.

La situación epidemiológica de la COVID 19 ha mejorado notablemente, pero no podemos descartar la aparición de nuevas variantes o patógenos que supongan un riesgo sanitario global. Ante este escenario, es fundamental mantener la vigilancia y la prevención, así como aprovechar las lecciones aprendidas durante la pandemia para fortalecer nuestra capacidad de respuesta y mitigar los impactos negativos.

Aunado a lo anterior, debemos señalar que existen hoy en día diferentes agentes patógenos que acechan a la humanidad que poco a poco van teniendo presencia a nivel mundial, tales como la hepatitis en infantes, la viruela del mono, virus de Marburg y el Ébola, si bien, estas enfermedades mantienen en diferentes medidas tanto la tasa de mortandad como de factor de riesgo asociados a la infección, mantienen las alarmas de la autoridades mundiales en materia de salud.

El presente documento, atiende a una preocupación justificada, tomando en cuenta la experiencia del COVID 19, donde se comprobó que la dinámica social y su movilidad a nivel mundial fue uno de los principales factores para que se propague en todo el mundo, por lo que, el no contar con medidas más estrictas, sería un factor para que nuevas enfermedades puedan asentarse y generar una nueva pandemia.

Si bien la pandemia de COVID 19 trajo consigo muchos desafíos y dificultades, también impulsó el fortalecimiento de las medidas de higiene personal y colectiva, los protocolos sanitarios, las campañas de vacunación, la infraestructura hospitalaria y otros aspectos que podrían contribuir a prevenir o mitigar futuras crisis. Sin embargo, aún queda pendiente un aspecto fundamental para la salud pública y el medio ambiente: el manejo adecuado de los residuos peligrosos biológico-infecciosos a nivel nacional.

Es importante señalar que el manejo adecuado de este tipo de residuos es una actividad muy delicada, donde las autoridades de los tres ámbitos de gobierno deben de tomar parte en sus respectivas responsabilidades, ya que el manejo incorrecto del volumen de residuos puede poner en peligro tanto la salud de las personas como al medio ambiente.

Por tal motivo, es que el presente documento pretende ayudar a que se mantenga en el radar el manejo adecuado de los Residuos peligrosos biológico-infecciosos por parte de las autoridades sanitarias del estado, atendiendo en todo momento las normas oficiales mexicanas en la materia.

A continuación, con fines de ilustrar la propuesta de reforma se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Ley Estatal de Salud	
ARTICULO 4o.- EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DE LA PRESENTE LEY, CORRESPONDE AL ESTADO:	ARTICULO 4o.- ...
A.- EN MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL.	A.- ...
I.- a XXIII.- ...	I.- a XXIII.- ...
B.- EN MATERIA DE SALUBRIDAD LOCAL, NORMAR Y CONTROLAR LOS ASPECTOS SANITARIOS RELATIVOS A:	B.- ...
I. ... XXIV.	I. ... XXIV.

<p>XXV. MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA O ALTERNATIVA, ACORDE A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 45, 48 Y 78 DE LA LEY GENERAL DE SALUD; Y</p> <p>XXVI. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES.</p>	<p>XXV. MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA O ALTERNATIVA, ACORDE A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 45, 48 Y 78 DE LA LEY GENERAL DE SALUD;</p> <p>XXVI. VIGILAR QUE EL ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS EN CLÍNICAS Y HOSPITALES, ASÍ COMO LABORATORIOS CLÍNICOS Y LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS SE REALICE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA, ASÍ COMO EN Estricto APEGO A LAS NORMAS OFICIALES; Y</p> <p>XXVII. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES.</p>
	<p>ARTICULO 98 BIS 3.- LOS ESTABLECIMIENTOS ESTATALES, MUNICIPALES Y PRIVADOS QUE PRESTEN ATENCIÓN MÉDICA, COMO CLÍNICAS Y HOSPITALES, ASÍ COMO LABORATORIOS CLÍNICOS Y LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS, SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:</p> <p>I.- LOS RESPONSABLES ESTAN OBLIGADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS</p>

	<p>RESIDUOS, ASI COMO DE SU ENVASADO ADECUADO.</p> <p>II.- DEBERÁN DESTINAR LUGARES APROPIADOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS QUE SEAN ACCESIBLES PARA SU FÁCIL RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO; Y</p> <p>III.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN LOS ESTABLECIMIENTOS Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEBERÁN OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES.</p>
--	--

Como observamos la propuesta plantea la obligación, por un lado, para los establecimientos estatales, municipales y privados que presten atención médica, como clínicas y hospitales, así como laboratorios clínicos y laboratorios de producción de agentes biológicos, y por otro lado para las autoridades sanitarias, para que el envasado y almacenamiento sea de la forma más segura posible.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el siguiente:

DECRETO

Primero. Se reforma la fracción XXVI y se adiciona una fracción XXVII al apartado B del artículo 4, y se adiciona un artículo 98 Bis 3, todos de la Ley Estatal de Salud:

ARTICULO 4o.- ...

A.- ...

I.- a XXIII.- ...

B.- ...

I. ... XXIV.

XXV. MEDICINA TRADICIONAL, COMPLEMENTARIA O ALTERNATIVA, ACORDE A LO INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 45, 48 Y 78 DE LA LEY GENERAL DE SALUD;

XXVI. VIGILAR QUE EL ENVASADO, ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS EN CLÍNICAS Y HOSPITALES, ASÍ COMO LABORATORIOS CLÍNICOS Y LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS SE REALICE CONFORME A LAS LEYES APLICABLES EN LA MATERIA, ASÍ COMO EN ESTRICTO APEGO A LAS NORMAS OFICIALES; Y

XXVII. LAS DEMÁS QUE CORRESPONDAN EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY Y OTRAS DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES.

ARTICULO 98 BIS 3.- LOS ESTABLECIMIENTOS ESTATALES, MUNICIPALES Y PRIVADOS QUE PRESTEN ATENCIÓN MÉDICA, COMO CLÍNICAS Y HOSPITALES, ASÍ COMO LABORATORIOS CLÍNICOS Y LABORATORIOS DE PRODUCCIÓN DE AGENTES BIOLÓGICOS, SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

I.- LOS RESPONSABLES ESTAN OBLIGADOS A LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, ASI COMO DE SU ENVASADO ADECUADO.

II.- DEBERÁN DESTINAR LUGARES APROPIADOS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS RESIDUOS QUE SEAN ACCESIBLES PARA SU FÁCIL RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE EXTERNO; Y

III.- PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN LOS ESTABLECIMIENTOS Y LAS AUTORIDADES SANITARIAS DEBERÁN OBSERVAR EN TODO MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS APLICABLES.

TRANSITORIO:

Único: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L., julio de 2023

Diputada Gabriela Govea López
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

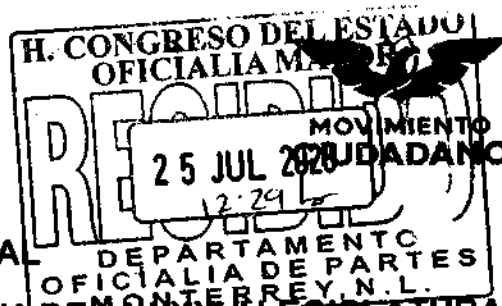
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 2 Y 10 DE LA LEY PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Y REFORMA POR ADICIÓN DE UNA FRACCIÓN XVII AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GOMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARIÁS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por modificación al artículo 2 y al artículo 10 de la Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, y por adición de una fracción XVII del artículo 169 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al revisar el sexto informe ejecutivo de Naciones Unidas respecto al cambio climático, emitido en marzo del 2023, son para destacar entre otros los siguientes elementos: ¹

- La temperatura global se ha incrementado más rápido desde 1970 a la fecha en comparación con los últimos 2000 años.
- La actividad humana ha causado un incremento de temperatura global de 1.07 grados, encontrándose en tierra aumentos de 1.5 grados y .88 grados en el océano.

¹ <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>

- Las emisiones globales ya están causando graves cambios de los patrones climáticos en todo el mundo.
- Se han observado cambios al alza en la magnitud y frecuencia de fenómenos climáticos como lo son las ondas de calor, las lluvias torrenciales, sequías y tormentas tropicales.
- La mortalidad por fenómenos climáticos extremos se ha incrementado a lo largo y ancho del planeta.
- En las áreas urbanas, el cambio climático observado ha causado impactos adversos en la salud humana, los medios de subsistencia e infraestructura clave. Los extremos de fenómenos de calor se han intensificado en las ciudades, afectando infraestructura urbana, incluyendo la de transporte y agua, los sistemas de saneamiento y energía se han visto comprometidos por eventos extremos y de evolución lenta.
- Se registran pérdidas económicas, interrupciones de los servicios básicos como luz y agua e impactos negativos en el bienestar. Los impactos adversos observados se agravan entre los residentes urbanos económica y socialmente marginados.

De todo lo anteriormente mencionado se puede notar que el ser humano tiene una influencia directa sobre el clima, y que uno de los fenómenos más complejos es el de las **ondas de calor en áreas urbanas**.

Una onda de calor es un periodo anormalmente caliente, que generalmente dura dos días o más, estas ondas pueden ocurrir con o sin humedad y tienen el potencial para abarcar enormes superficies.²

Las ondas de calor tienen impactos significativos en el cuerpo humanos, y de acuerdo a la OMS, al menos 166 mil personas han muerto por temperaturas elevadas de 1998 al 2017.³

Además, cuando la temperatura se eleva de manera considerable la infraestructura urbana también se ve comprometida, toda vez que los niveles de consumo energético aumentan drásticamente, lo cual se suma a un entorno en el que por el calor la transmisión energética en el sistema eléctrico se dificulta, tiende a provocar fallas en el suministro de energía. Además el

² <https://www.weather.gov/safety/heat-during#:~:text=What%20is%20a%20heat%20wave,of%20people%20to%20hazardous%20heat.>

³ https://www.who.int/health-topics/heatwaves#tab=tab_1

consumo de agua se incrementa ya sea para la refrigeración de sistemas esenciales o para el consumo humano.⁴

En pocas palabras, los fenómenos de olas de calor son bastante dañinos para los humanos y para las ciudades. Como bien sabemos estos fenómenos están relacionados a la actividad humana, elementos como la deforestación, el incremento de emisiones de GEI, la eliminación de la capa vegetal entre muchas otras acciones forman parte de la problemática.

Para los efectos de esta iniciativa, nos enfocaremos en lo que refiere a las ondas de calor en áreas urbanas, y en un abanico de posibles soluciones relacionadas a las carpetas asfálticas.

Para ello es preciso explicar el significado de “albedo” el cual se refiere al porcentaje de energía solar reflejado por una superficie, esto se traduce para los pavimentos, en que mientras más albedo tengan, más energía (calor) reflejan o dejan de absorber.⁵

Tradicionalmente el asfalto que se utiliza en la ciudad tiene una tasa de reflexión del 5 al 40%, lo cual quiere decir que absorben entre el 95 y el 60% de la energía que recibe⁶.

Esta baja tasa de reflexión energética, provoca que el pavimento absorba una cantidad importante de calor, lo cual incrementara la temperatura del mismo, pero eso no es todo el problema, al absorber en lugar de reflejar, la liberación de calor ocurre al caer la noche y de manera lenta, lo que imposibilita que las temperaturas bajen al caer el sol, toda vez que el pavimento sigue liberando energía absorbida poco a poco durante todo el tiempo de oscuridad, finalmente al salir el sol nuevamente, se reinicia la absorción energética y eso hace más largo el momento de calor en las metrópolis.

Para combatir este fenómeno, en diferentes latitudes del globo se ha empezado a desarrollar un concepto denominado “pavimentos fríos”, el cual hace referencia a un rango establecido de materiales emergentes que tienden a almacenar menos calor y que tienen temperaturas menores que el pavimento convencional.⁷

⁴ <https://www.weather.gov/safety/heat-during#:~:text=What%20is%20a%20heat%20wave,of%20people%20to%20hazardous%20heat.>

⁵ <https://mydasdata.larc.nasa.gov/mini-lessonactivity/what-albedo>

⁶ <https://www.heat.gov/pages/urban-heat-islands>

⁷ <https://www.epa.gov/heatislands/heat-island-compendium>

Es importante mencionar que el pavimento convencional puede alcanzar temperaturas que van desde los 48 hasta los 70 grados centígrados⁸, lo cual en un entorno de onda de calor puede causar severos riesgos para la salud humana por deshidratación o golpes de calor, los cuales pueden llegar a causar la muerte.

Ahora bien, para entender mejor cómo funcionan los pavimentos fríos. En primera instancia hay que entender la energía solar, la cual se compone de rayos ultravioleta, luz visible y energía infrarroja, el 5% de esta energía es ultra violeta, el 43% es de luz visible y el 52% es infrarroja la cual se siente como calor.

En ese sentido, cualquier superficie expuesta a energía infrarroja se va a calentar hasta alcanzar el equilibrio térmico, una superficie con alta radiación térmica como lo es el cemento, comenzara a emitir calor mucho más rápido que una superficie con baja radiación térmica.

Si contrario a tener pavimentos convencionales, tenemos pavimentos fríos, podemos tener una tasa de albedo de hasta el 70%, es decir el pavimento solo estaría absorbiendo solo un 30% de la energía que recibe, lo cual ayudaría significativamente a reducir el calor en las manchas urbanas.

Ahora bien, ¿en qué consisten estos pavimentos?, es necesario mencionar que existen diferentes tipos de pavimentos fríos, algunos se basan en la capacidad de ser permeables, otros en la mezcla de sus materiales, otros en recibir un acabado o sellado con un material especial, es por ello que a continuación se enlistaran los más comunes.

Asfaltos y concretos modificados: son considerados estándar, pero mezclados durante su elaboración con materiales con alto índice de albedo.

Asfaltos y pavimentos pigmentados: son considerados estándar pero reciben una pigmentación que ayuda a que absorban menos energía.

Pavimentos permeables: son aquellos que permiten absorción de agua y por su composición absorben menos calor.

Ahora bien, es importante mencionar que los avances en esta materia son aun relativamente recientes, sin embargo, ya existen acciones a lo largo de diferentes lugares, que desarrollan investigación y uso de los pavimentos fríos

⁸ reducing_urban_heat_islands_ch_5_230619_121443.pdf

En Houston ya existe el “Urban Heat Island Pilot Project” el cual aplica varias medidas para reducir las islas de calor, entre las que se incluyen el uso de pavimentos fríos.⁹

En Chicago existe el “Green Alley Program” que busca utilizar técnicas de construcción verde para repavimentar más de 1,900 millas de callejones, y ofrecer un manual para la instalación de pavimentos permeables para la reducción del calor.¹⁰

En Toronto hay un plan en marcha para que todos los estacionamientos tengan pavimentos fríos, además de dar guías y directrices para ello.¹¹

La unión Europea ya tiene una comisión que trabaja en el desarrollo de pavimentos fríos para mitigar el fenómeno de las islas de calor¹²

Como ya se ha visto aunque esto es relativamente nuevo, en distintas partes del mundo ya se trabaja en el tema, Nuevo León al ser un estado con una importante mancha urbana, y sobre todo una entidad con calores extremos debería estar trabajando para contribuir a la mitigación del calor a través de cambio en el paradigma del pavimento y el asfalto.

La presente iniciativa propone dos cosas, en primer lugar una reforma a la Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, en el que se le otorgue al consejo técnico la atribución para mantener y desarrollar investigación y lineamientos para la utilización de pavimentos fríos.

Y en segunda instancia, para agregar un artículo 169 Bis a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, para que las nuevas vialidades tengan que usar tecnología de pavimentos fríos, y que se reconvierta poco a poco a pavimento frío el pavimento convencional con base a los lineamientos que determine el consejo técnico en materia de pavimentos.

De esta manera, nuestros académicos estarían investigando y desarrollando esquemas de pavimentos fríos y nuestras vialidades poco a poco empezarían a estar compuestos de los mismos.

⁹ <https://19january2017snapshot.epa.gov/sites/production/files/2014-08/documents/houston.pdf>

¹⁰ https://environment.transportation.org/case_study/chicagos-green-alley-program/

¹¹ [‘Greening’ Surface Parking Lots – City of Toronto](#)

¹² <https://innovation-radar.ec.europa.eu/innovation/47715>

Esto sin duda junto con una buena política de arbolado urbano, podría ayudar a reducir considerablemente el fenómeno de las islas de calor.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por modificación el artículo 2 y el artículo 10 de la Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

ARTICULO 2 Glosario.

Además de las definiciones contenidas en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León y la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I al XXX...

XXXI. Pavimento frío: rango establecido de materiales emergentes de pavimentación, que tienden a almacenar menos calor y que tienen temperaturas menores que el pavimento convencional.

XXXII. RAP: es el material producto de la disgregación de mezclas asfálticas antiguas con el fin de ser reutilizado en una capa del pavimento;

XXXIII. Regularidad superficial: son los niveles de deformaciones de la capa superficial de un pavimento, medida en un plano vertical mediante el IRI;

XXXIV. Rehabilitación estructural: son los procedimientos constructivos que tienen el fin de aumentar la capacidad estructural del pavimento, para que resista adecuadamente la previsión del tráfico de vehículos durante el período de diseño, elevando el nivel de servicio;

XXXV. Rehabilitación funcional: son los procedimientos constructivos que tienen el fin de restablecer, conservar o mejorar las características funcionales de la superficie de rodamiento de un pavimento, para aumentar la comodidad y seguridad de los vehículos al transitar;

XXXVI. Riego de impregnación: es la aplicación de un material asfáltico sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta asfáltica;

XXXVII. Riego de liga: película de cemento asfáltico aplicada a una capa tratada con material asfáltico o mezcla asfáltica, previa a la colocación de una capa asfáltica;

XXXVIII. Roderas: son depresiones longitudinales canalizadas en pavimentos de concreto asfáltico, generadas por el paso de camiones;

XXXIX. SCT: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal;

XL. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Nuevo León;

XLI. Sobrecarpeta: una o más capas delgadas de concreto asfáltico o concreto hidráulico, tendidas sobre un pavimento existente;

XLII. Subbase: es la capa compuesta por materiales granulares, de granulometría continua, con un alto contenido de material triturado o cien por ciento triturado, con el cual se forma la capa inmediata superior a la capa de subrasante y sirve como soporte de la capa de base en un pavimento flexible o como base para un pavimento rígido;

XLIII. Subrasante: es la capa formada por material seleccionado producto de los cortes realizados a lo largo del camino o de los préstamos de bancos existentes para este fin. Con esta capa se forma el nivel terminado de la capa de subrasante y de desplante de las capas del pavimento;

XLIV. Superficie de rodamiento: es la cara expuesta del pavimento que está en contacto directo con los neumáticos; en general, debe cumplir con las siguientes características: presentar una irregularidad baja para las velocidades de operación, proporcionar comodidad al usuario, presentar una textura tal que incremente la resistencia al deslizamiento, tener un color que evite los reflejos de sol o luces artificiales durante la noche, plana para permitir el desalojo rápido del agua de lluvia;

XLV. TDPA: Tránsito Diario Promedio Anual;

XLVI. Terracerías: la sección de proyecto hasta su nivel de subrasante;

XLVII. Textura superficial: terminación que presenta la superficie un pavimento, la cual puede ser cerrada, abierta o semiabierta;

XLVIII. TFOT: ensayo para evaluar la durabilidad del cemento asfáltico;

XLIX. Tramos homogéneos: segmentos de vialidad con características geométricas, geotécnicas y de drenaje semejantes;

L. Vida remanente: es el tiempo durante el cual se acumularon las aplicaciones de los ejes equivalentes que el pavimento resistirá, funcionando adecuadamente después de la evaluación realizada;

LI. Valor soporte de California o VRS: propiedad mecánica de un suelo que representa la resistencia a corte, bajo la acción de cargas; y

LII. Vida útil: número de años desde la apertura de un camino al tránsito hasta el final de la vida funcional de un pavimento.

ARTÍCULO 10. Atribuciones del Consejo Técnico.

El Consejo Técnico tendrá las atribuciones siguientes:

I al III...

IV. Crear y mantener pautas para la utilización de pavimentos fríos, los cuales, deberán usarse en los distintos tipos de vialidades de la entidad.

V. Las demás que se señalen en el presente Ley.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma por adición de una fracción XVII del artículo 169 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 169. Las vías públicas que integran la infraestructura para la movilidad deberán cumplir con las siguientes especificaciones:

I al XVI...

XVII. Con la finalidad de reducir las islas de calor, todas las vialidades descritas en las fracciones anteriores, deberán apegarse al uso de pavimento frío, conforme a lo determinado por el Consejo Técnico de la Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

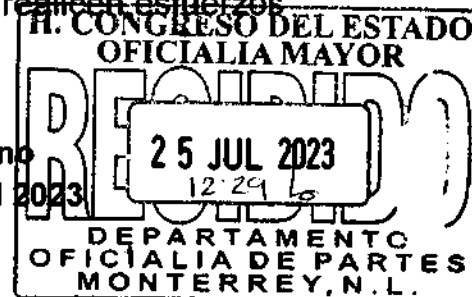
SEGUNDO.- El Consejo Técnico de la Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, dispondrá de 9

meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para generar los lineamientos establecidos en la fracción IV del artículo 10 de dicha ley.

TERCERO.- Todas las vialidades nuevas posteriores a la emisión de los lineamientos de pavimentos fríos establecidos en el artículo 10 de Ley Para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, deberán construirse en apego al uso de dicha tecnología, mientras que las ya construidas deberán ir transitando el cambio conforme se realicen esfuerzos de mantenimiento o recarpeteo sobre las mismas.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 de julio del 2023




Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Año: 2023

Expediente: 17287/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

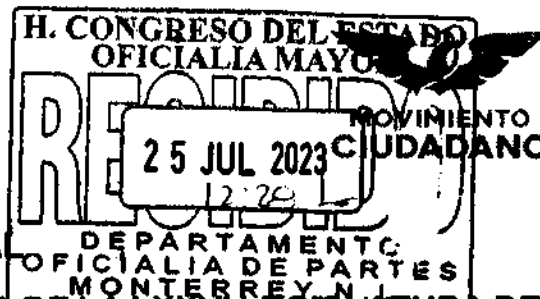
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 11 Y 101 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL PARA LA SUSTENTABILIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GOMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por modificación de la fracción V del artículo 11 y por adición de una fracción VI, VII y VIII del artículo 11 y por adición de un párrafo al artículo 101 de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La venta ilegal de especies es una problemática grave para el equilibrio de la biodiversidad, además representa uno de los mercados ilícitos más robustos del mundo con existencia a nivel global.¹

Para entender la magnitud de esta problemática es importante mencionar que de acuerdo a la INTERPOL, el comercio ilegal de flora y fauna, constituye el tercer mayor tráfico del planeta, solo superado por las drogas y las armas, se

¹ Trejo, M. (2011). *Tráfico ilegal de especies protegidas. criminalidad medioambiental organizada*. III Jornadas de Estudios de Seguridad. Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez-Mellado, UNED. 1511 Pp.

estima que mueve alrededor de 17 mil millones de dólares por año a nivel global.²

Este fenómeno se ha transformado con la llegada de la tecnología y hoy en día este ilícito se ve potenciado por el uso de herramientas como lo es el internet y las redes sociales, las cuales son usadas para ofertar de manera descarada especies de evidente dudosa procedencia, y para concretar la venta de las mismas. Es por ello que para atender esta transformación, las leyes también deben modernizarse.

En ese sentido, es importante hacer un análisis de lo que establecen las leyes federales y estatales respecto a la venta ilegal de especies.

En primer lugar, se puede observar que en el Código Penal Federal, el artículo 420 sanciona el asunto del tráfico de animales estableciendo 5 fracciones al respecto, dichas fracciones incluyen una pena de 1 a 9 años de prisión a quienes entre otras cosas, realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado internacional del que México sea parte.

Por su parte, el artículo 79 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente, establece que se considerará como criterio para la protección de la flora y fauna el combate al tráfico o apropiación ilegal de especies.

La ley General de Vida Silvestre establece también en su artículo 7, que las entidades federativas y los municipios, podrán desarrollar las actividades de la federación en lo que respecta a **coordinar la definición, regulación, y supervisión de las acciones de conservación y de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad que compone la vida silvestre y su hábitat.**

Por otro lado, en el artículo 11 se establece que la federación podrá llevar a cabo convenios con los estados para llevar a cabo la inspección y vigilancia del cumplimiento de las leyes federales en materia de vida silvestre.

² INTERPOL, Policía Internacional (2008). *Environmental Crime: Wildlife*. International Police: <http://www.interpol.int/Public/Environmental/crime/Wildlife/Default.asp>.

De los cuatro párrafos anteriores se entiende que el combate al tráfico ilegal es un criterio de protección a la flora y la fauna, y que la comisión del delito de tráfico está sancionado en el código penal, además que las entidades federativas pueden tener participación en el combate al delito del tráfico de especies.

En lo que respecta a las leyes estatales el artículo 231 de la Ley Ambiental para el Estado de Nuevo León, refiere que cuando exista riesgo de daño inminente al medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente podrá realizar un aseguramiento precautorio de especies o ejemplares de vida silvestre.

También tenemos que la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León, la cual en su artículo 1° sostiene que el objeto de la misma es proteger a los animales, brindarles alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento y la zoofilia.

El artículo 2° establece que dicha ley fomentará las acciones de protección, conservación y respeto a la biodiversidad de los animales y sus hábitats, además de prohibir actos de crueldad en contra de los mismos.

También procurará justicia para los animales y salvaguardar los derechos de los denunciantes del maltrato o crueldad contra los animales en el acceso a la justicia, en la transparencia de los procedimientos administrativos y penales y en el conocimiento de las resoluciones, acuerdos y recomendaciones que dicten al respecto las autoridades.

El artículo 3 define lo que es considerado como crueldad y maltrato animal, los cuales son definidos como:

Crueldad animal: la conducta de maltrato animal o violencia ejercida en contra de los animales que implique la mutilación parcial o total de su cuerpo, la alteración de su integridad física con el objeto de transformar su apariencia o conseguir un fin estético, tortura, envenenamiento, tormentos, privación habitual o continua del sustento necesario para el animal, tal como el agua, alimento, atención médica o refugio, dar muerte por métodos no previstos en esta ley, que los cause o promueva que se trate de esta manera a cualquier animal.

Maltrato Animal: todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo, someterlos a carga excesiva, ya sea sobre el

propio animal o en vehículos tirados por los mismos, así como cualquier otra conducta que ocasione lesiones, enfermedades, deterioro a la salud, afectaciones psicológicas, o que ponga en peligro su vida.

De lo anterior se puede entender que la ley busca fomentar la protección y respeto a la biodiversidad y que busca evitar cualquier acto de crueldad en contra de los animales. Para ello crea la figura de la denuncia ciudadana, la cual es un mecanismo que permite denunciar ante la Secretaría de Medio Ambiente, cualquier cosa que atente contra lo dispuesto en la Ley de Bienestar animal.

Si bien la ley de bienestar animal es un importante avance en la materia, es importante analizar algunos eventos que han ocurrido en México y que pueden indicar algunas áreas de oportunidad para la citada ley.

1. En el año 2016, se detectó la venta de un cachorro de león africano en el estado de Sonora, a través de una página de Facebook en donde se vendían automóviles con registro de la ciudad de Mexicali, Baja California. La publicación fue dada a conocer a través del periódico “La Crónica”.³
2. En el estado de Tamaulipas, en 2016, por medio del periódico expreso express, se denunció la venta de animales en Facebook.⁴
3. En ese mismo año, en el estado de Querétaro, a través de la página perrocontento.com, se identificó un grupo de Facebook con más de 29, 000 miembros, en donde se comercializaba con animales de manera no regulada, puesto que el Reglamento de Control Animal de ese estado y la Ley de Protección a los Animales del Estado de Querétaro, establecen que esta actividad sólo puede realizarse en establecimientos que cuenten con autorización legal.⁵
4. El 28 de marzo del 2021 se reportó la venta de animales evidentemente exóticos en redes sociales.
5. El 21 de marzo del 2023 autoridades del estado de México rescataron a varios animales que se pretendían vender en redes sociales sin acreditar la debida procedencia.⁶

³ <https://www.redalyc.org/journal/4419/441958284002/html/#B31>

⁴ IDEM

⁵ IDEM

⁶ https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/rescatan-a-animales-exoticos-y-detienen-a-2-personas/ar2573612?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a--

6. El 25 de mayo del 2023 autoridades de la CDMX rescataron a un cachorro de león al que intentaban vender por medio de las redes sociales en 100 mil pesos.⁷

De lo anterior, se puede ver que existe una constante actividad de venta ilegal de animales en redes sociales, además al revisar un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se puede observar una serie de datos importantes en materia de venta ilegal de animales en redes los cuales se enumeran a continuación.⁸

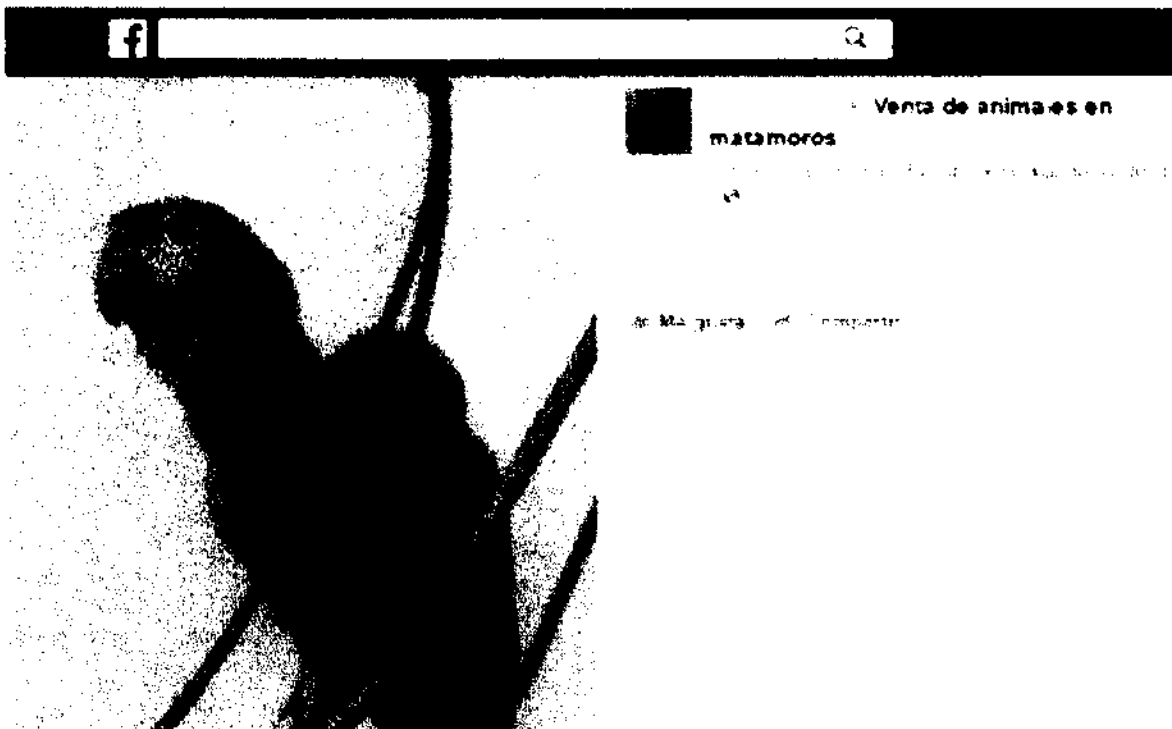
- El estudio fue realizado a través de una búsqueda digital de páginas de Facebook, en las que se venden animales y plantas de manera presuntamente ilegal en los 43 municipios del estado de Tamaulipas, en el periodo de enero a noviembre de 2016, por medio de un estudio mixto de corte retrospectivo. Se dividió el estado en tres zonas geográficas estratégicas, zona norte, zona centro y zona sur, con el fin de facilitar el estudio y la interpretación de los resultados a través de un análisis deductivo en dos etapas.
- La primera, inició por medio de la búsqueda de páginas de Facebook, en las que se venden animales, ya sean exóticos, de granja, tiendas de mascotas o de venta en general; ya localizadas, se buscaron anuncios de venta, intercambio o compra de plantas y animales. Luego, se identificaron aquellas que comercian con animales y plantas contempla das dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, o que bien no acrediten la legal procedencia.
- En la segunda etapa, se consideraron datos activos como precio, especies, derivados, y la accesibilidad de las páginas a la población.
- En 18 páginas se encontraron publicaciones para comprar y vender animales y plantas en alguna categoría de la NOM-059-SEMARNAT-2010, o que no acreditaban en el portal la procedencia legal de los ejemplares.
- En las 18 páginas con comercio ilegal, se identificaron 50 ejemplares de animales y plantas, en un total de 22 anuncios. El 74 % de estas páginas tenían acceso libre a los grupos de compra y venta para usuarios de Facebook, y en el 26 % se solicitaba acceso a través de otros miembros del grupo. De acuerdo con los precios mostrados en las páginas de Facebook analizadas durante el

⁷ <https://www.telediario.mx/policia/leon-vendido-100-mil-pesos-redes-policia-cdmx-nterviene#:~:text=De%20acuerdo%20con%20el%20periodista,en%20la%20colonia%20Merced%20Balbuena>

⁸ <https://www.redalyc.org/journal/4419/441958284002/html/#B31>

periodo estudiado, se estimaron 176 260 pesos mexicanos (9 211 dólares americanos: 18.99 pesos un dólar) por la venta ilegal de los ejemplares en sólo 7 municipios: la zona norte (Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso y Matamoros) representó un 96 % de la participación económica, con 169 210 pesos mexicanos (8 910 dólares americanos), seguida por la zona sur (Tampico y Xicoténcatl) que representó un 3 % del total, con 4 800 pesos mexicanos (252 dólares americanos), y por último la zona centro (Ciudad Victoria) que representó el 1 % con 2 250 pesos mexicanos (118 dólares americanos).

- Es común observar anuncios de compra y venta de plantas y animales sin documentos de procedencia legal o enlistados en la NOM-059-SEMARNAT-2010, o bien, se comercializan productos y sus derivados, ya sea para fines de medicina tradicional, como souvenir para turistas y locales; así como para la posesión de ejemplares en casa como mascotas.
- En cuanto a las especies, los animales superaban la venta de plantas y predominaba la oferta de compra y venta de aves.
- Los loros (*Erythrogenys* spp., *Amazona* spp.) y tortugas del desierto (*Gopherus* spp.) eran los más ofertados. De hecho, también eran los más demandados por los usuarios de Facebook.





Me gusta Mensaje Compartir Mas



Jaguar de casi 9 meses de edad, 105.000 00 pesos (mexicanos) Sin papeles se puede entregar a cualquier estado de Mexico

Me gusta Comentar Compartir

Lamentablemente este fenómeno también ocurre en Nuevo León, donde al ingresar a Facebook es fácil hallar publicaciones como esta:

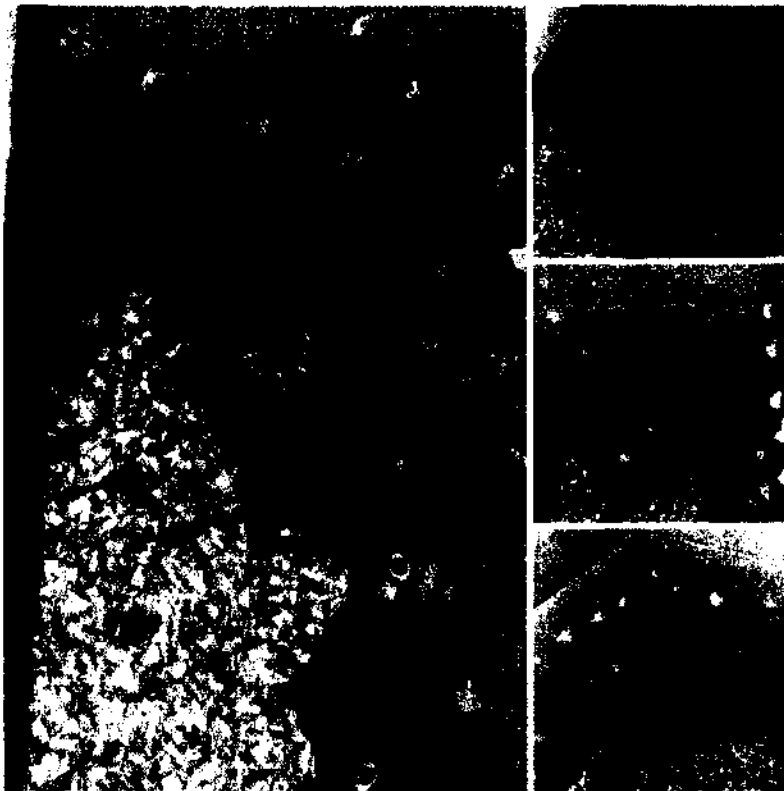


**Ventas Col. Mitras Poniente -
Garcia, N.L.**

Unirte ...

Coronado Salvador · 9 may ·

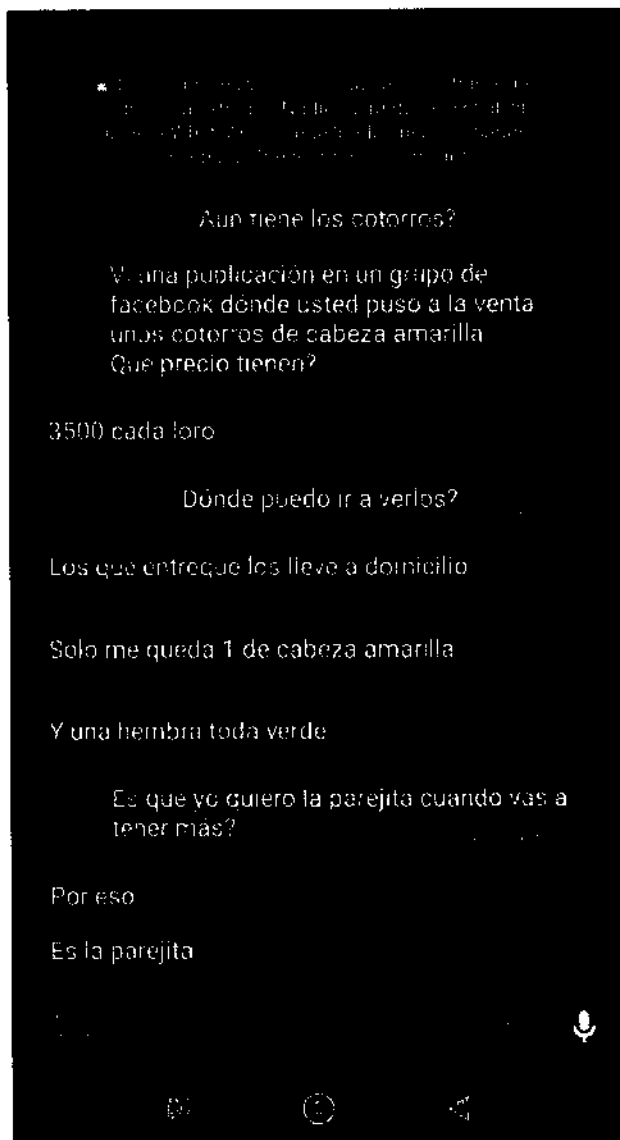
Loros bebés para criar y enseñar a hablar
8127308853 llamar



Únete al grupo para agregar tus comentarios y publicaciones.

UNIRTE

El vendedor incluso se oferta a llevar a domicilio los animales, a pesar de que la venta de este tipo de aves bajo ninguna excepción de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre.



Se intentó fingir una compra y fue muy evidente el delito, sin embargo, al realizar la denuncia, se nos refiere que no pueden actuar sobre delitos cibernéticos, que solo pueden actuar acudiendo a un domicilio confirmado.

En ese sentido lo que pretende esta reforma es facultar a la Secretaría de Medio Ambiente, para que mediante apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Cibernética se pueda actuar sobre venta en redes de animales con sospecha de ser de procedencia ilícita.

Hay que recordar que el comercio ilegal de especies no sólo viola las leyes de fauna y flora, sino que vulnera las poblaciones de especies endémicas que se encuentran amenazadas, y otras, que aunque se encuentren en alguna categoría de preocupación menor, se afecta la posibilidad de ser aprovechadas de manera sostenible. De igual manera, estas actividades desprestigian al Estado y al país, al evadir impuestos, y expone la escasa importancia y pobres recursos (humanos y presupuestarios), que las autoridades de aplicación de las normas ambientales dan al problema y la excepcional resolución judicial de los casos. Todo ello, desemboca en un conocimiento precario, resultados anecdóticos y una impunidad creciente.

La reforma actúa en concordancia con lo que establecen las leyes federales respecto a la concurrencia de las entidades federativas, además, de que busca aprovechar a la policía cibernética que ya existe en Nuevo León.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma por modificación de la fracción V del artículo 11 y por adición de una fracción VI, VII y VIII del artículo 11 y por adición de un párrafo al artículo 101 de la Ley de Protección y Bienestar Animal para la Sustentabilidad del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 11. Son facultades y atribuciones de la Secretaría, en relación a la presente Ley, las siguientes:

I al IV...

V. Investigar en conjunto con la Unidad de Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad, las denuncias que señalen actos de posible venta ilegal de especies en redes sociales o medios digitales.

VI. Mantener vigilancia en redes sociales e internet para detectar posible venta ilegal de especies por medios digitales.

VII. Denunciar ante las empresas correspondientes para solicitar la remoción de publicaciones, cuando se encuentre venta ilegal de especies en redes sociales o internet.

VIII. Las demás atribuciones que le otorgue esta Ley, su Reglamento y las normas jurídicas aplicables

Artículo 101.- La denuncia se realizará mediante escrito libre o por vía telefónica o electrónica, utilizando preferentemente los formatos que para tal efecto estipule la Secretaría, y deberá contener la siguiente información:

I al IV...

...

...

...

Cuando se realice una denuncia sobre la posible venta ilegal de cualquier especie a través de medios digitales, la Secretaría en conjunto con la Unidad de Policía Cibernética y la Secretaría de Seguridad, tendrán la obligación de revisarla y en su caso, simular una compra que permita capturar a los posibles infractores.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - La Secretaría dispondrá de 90 días para establecer los mecanismos de coordinación y actuación cuando se presenten denuncias por venta ilegal de especies a través de medios digitales.

A T E N T A M E N T E

**Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE JULIO DEL 2023**




Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 4 Y POR ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 101 BIS 5 DE LA LEY DE SALUD MENTAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



C. DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXXVI LEGISLATURA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

P R E S E N T E.-

Los suscritos Diputados, **TABITA ORTIZ HERNÁNDEZ, SANDRA ELIZABETH PÁMANES ORTÍZ, IRAIS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, DENISSE DANIELA PUENTE MONTEMAYOR, NORMA EDITH BENÍTEZ RIVERA, MARÍA GUADALUPE GUIDI KAWAS, CARLOS RAFAEL RODRÍGUEZ GÓMEZ, EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, MARÍA DEL CONSUELO GÁLVEZ CONTRERAS, ROBERTO CARLOS FARÍAS GARCÍA y HÉCTOR GARCÍA GARCÍA**, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano pertenecientes a la LXXVI Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, con fundamento además en los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos **iniciativa de reforma por adición de una fracción XX al artículo 4 recorriéndose las subsecuentes, y por adición de un artículo 101 bis 5 la Ley De Salud Mental Para el Estado de Nuevo León** al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los suicidios experimentaron un incremento en muchas partes del mundo a raíz de la pandemia¹, lamentablemente México no fue la excepción, nuestro país se sumó a esta tendencia negativa.

En el caso de Nuevo León, los registros muestran una realidad alarmante, al analizar cifras oficiales se puede ver que del 2019 a la fecha ha habido un aumento permanente en los casos de suicidios pues los casos pasaron de 298, a 339, luego a 380, hasta llegar a 385.²

¹ <https://espanol.nichd.nih.gov/noticias/prensa/042722-COVID-suicidios-jovenes>

² <https://lostubos.com/2022/03/07/nuevo-leon-rompe-record-de-suicidios-durante-pandemia/>

Además, de los suicidios consumados, también hay que considerar los intentos de suicidio, que representan una antesala al fatal desenlace, y que dejan en evidencia la importante necesidad de fortalecer la salud mental de las personas para evitar este tipo de tragedias.

En ese sentido, si bien no hay una estadística actualizada, el INEGI reportaba hasta el 2004 que, del número total de suicidios consumados, se daban al menos un 20% de personas que lo intentaban, pero no lo lograban. Esta situación nos deja con una importante área de oportunidad en materia de prevención del suicidio³.

Ahora bien, en relación a los intentos de suicidio, es preciso revisar que es lo que indica la legislación en materia de salud mental en la entidad. Primero hemos de remitirnos a la Ley Estatal de Salud.

En la Ley la palabra “salud mental” aparece 12 veces, la primera indica que al estado le corresponde el cuidado de la salud mental, la segunda refiere que la atención médica debe incluir el tema de la salud mental, la tercera y la cuarta hablan de la necesidad de conocer los factores que afectan la salud mental.

De la quinta a la octava habla de acciones para la promoción de la salud mental, las cuales son el desarrollo de actividades educativas, la difusión de criterios orientadores y la “realización de acciones” que directa o indirectamente contribuyan a la salud mental.

La novena habla de capacitaciones a la población en diversos rubros incluido la salud mental, la décima y la décimo primera hablan sobre una línea de atención a la salud mental, y la última, sobre pautas para la rehabilitación de personas adictas que incluyan el apartado de salud mental.

En lo que refiere a la palabra policía solo se menciona una vez referente a que se les debe brindar atención de emergencia a los elementos heridos.

La palabra protocolos no aparece y la palabra suicidio aparece solo dos veces, una para aplicar programas de prevención en niños, niñas y adolescentes y la segunda sobre la promoción de “acciones” que combatan indirecta o directamente el suicidio.

Por otra parte, en la Ley de Salud Mental Para el Estado de Nuevo León, la palabra “salud mental” aparece 234 veces, esto en un contexto donde la mayoría de las veces la aparición de la palabra rige principios o valores en la aplicación de la ley.

La palabra suicidio aparece 14 veces una en el glosario, la siguiente en temas materiales de elementos de prevención del suicidio, la siguiente en el nombre de un capítulo de prevención, derechos de personas que hayan intentado un suicidio, como complemento a la definición de posvención.

Después habla de elementos que le corresponde hacer a la Secretaría de Salud, los cuales son:

Inducir la disminución en la incidencia del suicidio, así como su erradicación, mediante la prevención, atención y posvención.

Elaborar estrategias integrales con enfoque coordinado, interdisciplinario y multisectorial para combatir la problemática del suicidio.

Implementar acciones, considerando la participación interinstitucional con enfoque interdisciplinario, orientados a la prevención, atención, posvención y erradicación del suicidio

Apoyar, asesorar, llevar registro, así como vigilancia de las instituciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y profesionales del sector público y privado, para que cumplan con los estándares establecidos por la autoridad de aplicación para la prevención, atención y posvención del suicidio;

Implementar un sistema de información estadística que contenga datos de los intentos, así como de suicidios cometidos en la entidad.

Le corresponde al instituto elaborar conforme a las políticas dictadas por la Secretaría de Salud, y dentro del marco de los sistemas nacional y estatal de salud, un programa anual de trabajo, en el que se refleje como mínimo, las bases para la atención del paciente con riesgo suicida o intento de suicidio, y sus familiares, así como el apoyo de un equipo interdisciplinario que asegure el acompañamiento durante su tratamiento y recuperación.

Por su parte la palabra protocolo aparece 5 veces, en ninguna de ellas haciendo referencia a esquemas o pautas de actuación de los cuerpos de seguridad para su accionar como primeros respondientes a un intento de suicidio.

Finalmente el concepto de primeros auxilios psicológicos solo se menciona dos veces en lo que refiere a una línea de atención telefónica.

Habiendo revisado todo lo anterior es para destacar que no existe ningún artículo o elemento en la ley de salud mental o en la ley estatal de salud, que indique que la Secretaría de Salud deba elaborar o realizar capacitaciones en materia de primeros auxilios psicológicos a los cuerpos de seguridad como lo son la policía o protección civil, quienes usualmente son los primeros respondientes.

Esto quiere decir que no hay certeza de que todos estos elementos tengan las herramientas necesarias para poder tener un mejor accionar en su intervención ante los intentos de suicidio. Esto no significa que los elementos no intervengan al máximo de sus capacidades, pero sin la capacitación adecuada sus posibilidades de éxito en detener un intento de suicidio disminuyen.

Ahora bien, es preciso definir lo que son los primeros auxilios psicológicos (definición que no aparece en la ley, aunque la palabra si aparece).

De acuerdo con la OMS, los primeros auxilios psicológicos son la intervención de atención psicológica en el transcurso de una crisis, accidente o acontecimiento traumático.⁴

Estos primeros auxilios tienen como finalidad la de aliviar el dolor emocional y el sufrimiento por el que las personas puedan estar pasando, esto se hace a través de brindar ayuda y apoyo de manera no invasiva, evaluar las necesidades y preocupaciones, escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse con calma.

En otras palabras, el conocimiento de este tipo de técnicas puede ayudar a reducir el riesgo de que la persona que está a punto de atentar contra su vida, lleve a cabo su cometido, mientras que, por el contrario, una nula preparación y un enfoque sin empatía, puede terminar por detonar el intento, lo cual puede llevar a una lamentable pérdida de una vida humana.

Es por ello que si la Ley Estatal de salud mental reconoce la importancia de proteger la psique de los individuos y entre sus pautas establece que, “se

⁴ https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=7900:2012-guide-psychological-first-aid-disasters&Itemid=0&lang=es#gsc.tab=0

deben de implementar acciones directas e indirectas para ello”, es fundamental que se establezca de manera específica que los cuerpos policiacos y de seguridad reciban capacitaciones en la materia, las cuales deberán estar a cargo de la Secretaría de Salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito proponer a esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma por adición de una fracción XX al artículo 4, recorriéndose las subsecuentes, y por adición de un artículo 101 bis 5 de la Ley De Salud Mental Para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 4.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I al XIX...

XX. Primeros Auxilios Psicológicos: intervención de atención psicológica en el transcurso de una crisis, accidente o acontecimiento traumático.

XXI. Profesional de salud mental: se entenderá un médico, un psicólogo clínico, un profesional de enfermería, un trabajador social u otra persona debidamente capacitada y calificada en una especialidad relacionada con la atención de la salud mental;

XXII. Promoción de la salud mental: a la estrategia concreta, concebida como la suma de las acciones de los distintos sectores de la población, principalmente las autoridades sanitarias, sociales y de prestación de servicios de salud; el objetivo principal es el de sensibilizar a la población en general, respecto de los trastornos mentales y del comportamiento, su tratamiento y las instituciones que ofrecen estos servicios;

XXIII. Psicoterapia: conjunto de métodos y recursos utilizados para el tratamiento psicológico de las personas, mediante los cuales interacciona la persona usuaria y el psicoterapeuta con el propósito de promover la adaptación al entorno, la salud física o psíquica, la integridad de la identidad

psicológica, el bienestar de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida;

XXIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley de Salud Mental para el Estado de Nuevo León;

XXV. Rehabilitación psicosocial: al conjunto de acciones y programas dirigidos a la utilización del potencial máximo de crecimiento personal de mujeres y hombres que les permitan superar o disminuir desventajas adquiridas a causa de un trastorno mental y del comportamiento en los principales aspectos de su vida diaria; tiene como objetivo promover en las personas usuarias, el aprendizaje o el re-aprendizaje de habilidades para la vida cotidiana que favorezcan la obtención y conservación de un ambiente de vida satisfactorio, así como la participación en actividades productivas en la vida socio-cultural. Para la rehabilitación psicosocial de las personas usuarias, las unidades podrán apoyarse en estructuras extra-hospitalarias con enfoque comunitario como: los talleres protegidos, las casas de medio camino, las residencias comunitarias, o cualesquiera otras que sean útiles para estos propósitos y que, para lograrlo, no recurran a la aplicación de tratamientos que vayan en contra de los derechos humanos;

XXVI Salud Mental: como el bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, así como por el buen funcionamiento de los aspectos cognoscitivos, afectivos, conductuales, que permiten afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad;

XXVII. Secretaría: Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León;

XXVIII. Servicios de asistencia social en materia de salud mental: al conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo que presenta un trastorno mental o del comportamiento su desarrollo integral, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. Las actividades básicas de Asistencia Social, tendrán como objetivos: a) Satisfacer los requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo de las personas; b) La creación de establecimientos específicos para personas que no puedan atenderse por sí mismas o que no cuenten con el apoyo de familiares, procurando la reinserción social del usuario en lo más posible; c) La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social y; d) La promoción de la participación consciente y organizada de la población, asociaciones e instituciones públicas y privadas en las acciones

de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo beneficio de personas que presenten algún trastorno mental o del comportamiento.

XXIX. Servicios de salud pública en el área de atención de salud mental: al conjunto de acciones que tienen por objeto promover, proteger, fomentar y restablecer la salud mental de la comunidad, elevar el nivel de bienestar y prolongar la vida humana, mismas que complementan a los servicios de atención médica y asistencia social. Comprende entre otras la prevención y control de enfermedades, la promoción de la salud, la organización y vigilancia del ejercicio de las actividades profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, la investigación para la salud, la información relativa a las condiciones, recursos y servicios de salud de la entidad y la conformación de un esquema de coordinación en donde participen los distintos niveles de gobierno incluyendo a sectores públicos y sociales para el diseño y puesta en marcha políticas públicas en materia de salud mental.

XXX. Sistema Estatal de Salud Mental: conjunto de instituciones públicas y privadas, en cuya misión, objetivo o rectoría se contemplen acciones directas o indirectas, en el contexto de la salud mental. Regulando las bases y modalidades, para garantizar el acceso a los servicios de salud mental en el Estado de Nuevo León, con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género;

XXXI. Talleres Protegidos: a los espacios en donde las personas con algún trastorno mental y del comportamiento, adquieren y utilizan aquellas habilidades y competencias necesarias para vivir, relacionarse con otros e integrarse en la comunidad, conociendo sus derechos, para lograr el mayor grado de autonomía. Estos establecimientos tienen como característica que el ingreso a estos espacios es a petición de la persona que padece un trastorno mental y del comportamiento, no se hará a través de intermediarios/as, familiares, autoridades de las instituciones de salud, etc., solamente a petición de la persona interesada;

XXXII. Terapia Ocupacional: al conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la función, suple las deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social;

XXXIII. Trastorno mental y del comportamiento: conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles con una evolución específica,

asociados la mayoría de los casos con el malestar y la interferencia con el funcionamiento personal, alteración de la cognición, regulación emocional o el comportamiento del individuo. Sus manifestaciones reflejan una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo;

XXXIV. Tratamiento: diseño, planeación, instrumentación y conducción de estrategias médicas, farmacológicas y psicológicas encaminadas a restaurar, mejorar o mantener la calidad de vida de la persona que presenta algún trastorno mental;

XXXV. Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica: a los establecimientos públicos, sociales y privados que prestan servicios de atención médica especializada a personas que padecen un trastorno mental; y

XXXVI. Unidades Residenciales Protegidas: a las áreas de estancia hospitalaria con la estructura de una casa común, donde las usuarias/os reciben atención integral médico-psiquiátrica las veinticuatro horas del día. Cuentan con área de talleres de rehabilitación, banco de reforzadores, salón de usos múltiples para las personas usuarias, espacios de atención médica de cuidados especiales, oficinas administrativas, áreas de urgencias y consulta externa.

Capítulo XI Bis

De la detección, prevención y atención al suicidio

Artículos 101 bis al 101 Bis 4...

Artículo 101 bis 5.- Con la finalidad de mejorar la respuesta del estado en lo relativo a la atención de intentos de suicidio, la Secretaría tendrá la obligación de capacitar en materia de primeros auxilios psicológicos, orientados especialmente a la prevención del suicidio, a todo el personal de campo de los cuerpos de seguridad y de protección civil estatales y municipales.

La Secretaría deberá, además, dejar las pautas de capacitación a los diversos cuerpos de seguridad y de protección civil referidos en el párrafo anterior, para que dichos organismos puedan continuar capacitando al nuevo personal que se integre a sus filas.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. - La Secretaría de Salud en conjunto con los cuerpos de seguridad y protecciones civiles estatales y municipales dispondrán de 24 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto para concluir con las capacitaciones al personal referido.

ATENTAMENTE

Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 25 DE JULIO DEL 2023




Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. Iraís Virginia Reyes de la Torre

Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 40 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): DESARROLLO SOCIAL, DERECHOS HUMANOS Y ASUNTOS INDÍGENAS.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Dip. Mauro Guerra Villarreal
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Nuevo León.
Presente



El suscrito, Diputado Waldo Fernández González, integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Regeneración Nacional perteneciente a la LXXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, de conformidad con lo establecido en los artículos 87, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como, lo dispuesto en los numerales 102, 103 y 104 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, someto a consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de **Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 40 y se adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León**, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La población adulta, mayor diariamente se enfrenta a grandes desafíos para poder realizar sus actividades, uno que ha cobrado relevancia en los últimos tiempos es su dificultad para la realización de ciertos trámites públicos y privados que han migrado al uso de tecnologías de la información y comunicación.

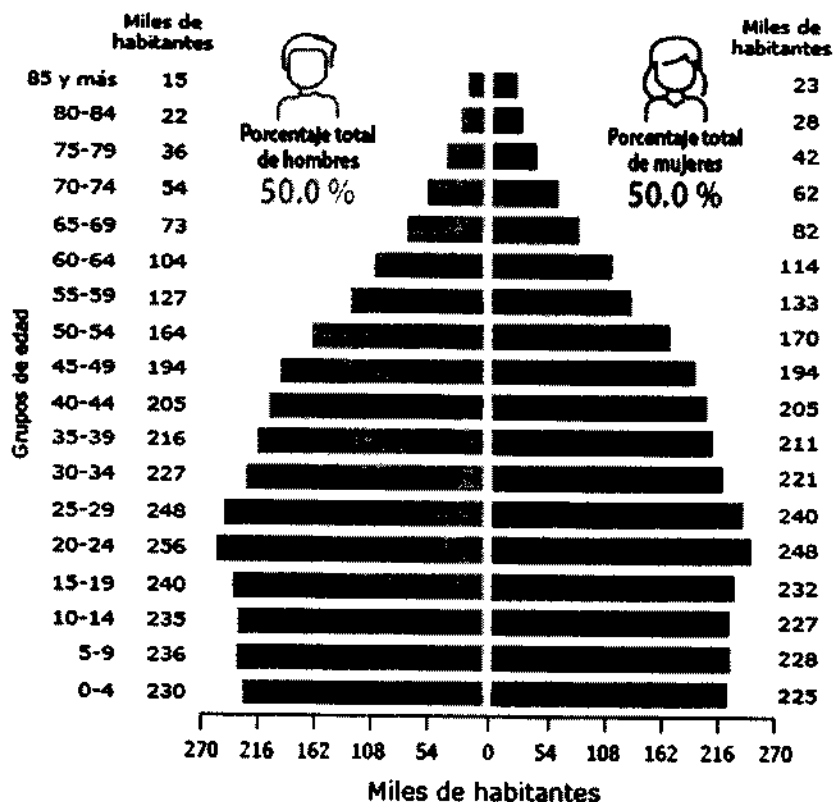
Gran parte de los adultos mayores se declaran analfabetas digitales, esto al no saber utilizar las computadoras, tabletas, software, aplicaciones móviles, aparatos de telefonía móvil, entre muchos otros dispositivos y programas que se han vuelto de uso común en estos días.

Resulta relevante para la presente iniciativa conocer las estadísticas demográficas de este grupo etario, al respecto, el Censo de Población y Vivienda 2020, informó que en México habitaban 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan 12% de la población total. En el país, por cada 100 niños o niñas con menos de 15 años hay 48 adultos mayores.¹

¹ https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2021/EAP_ADULMAYOR_21.pdf

Para Nuevo León, el Censo de Población y Vivienda 2020 arrojó que la población de 60 años y más asciende a 655 mil personas, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Habitantes por edad y sexo



FUENTE: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020.

Asimismo, en México existen 88 millones de usuarios de internet, al año 2021, en la población de seis años o más, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Nuevo León, fue la entidad donde en promedio el 84.2% de los hogares tuvieron acceso al internet, de los cuales solo el 13%, son usuarios adultos mayores.² (Énfasis propio)

² Datos obtenidos de <https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2021/>

Un impedimento al que se pueden enfrentar los adultos mayores, es la adaptación a nuevas tecnologías, lo cual resulta ser un obstáculo al momento de tener que realizar trámites digitales, ya que muchos de ellos no tienen conocimiento de cómo usar los dispositivos tecnológicos, o simplemente por no saber encontrar los trámites en la Internet.

A diferencia de las personas consideradas nativos digitales, que crecieron con la tecnología, solo un pequeño porcentaje de las personas adultas mayores dominan las tecnologías de la información en virtud de haber adquirido las habilidades de poder utilizar una computadora o teléfono celular, por citar solo un ejemplo.

La investigadora Verónica Montes de Oca del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, consideró que empresas y gobierno, en un acto autoritario y prepotente, realizaron la migración digital en una gran cantidad de trámites y servicios, sin considerar la vulnerabilidad de las personas mayores, suponiendo que todas tendrían acceso inmediato a las plataformas digitales o que siempre contarían con el apoyo de gente solidaria a su alrededor. No se tuvo tampoco la sensibilidad de pensar en las personas que viven solas y mucho menos se pensó en alguna estrategia para apoyarlos en la realización de trámites elementales y cotidianos, como depósitos y retiros bancarios, pagos de servicios o la inscripción a programas sociales.

“Las personas mayores ya se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y todavía las estamos poniendo en una situación de desventaja mayor. Hay adultos que tienen desigualdades históricas múltiples: campesinos que no saben leer ni escribir, mujeres de comunidades rurales marginadas, trabajadoras domésticas con antecedentes indígenas, y ahora les pedimos comprarse un teléfono inteligente o una computadora con conectividad para sobrevivir al mundo digital, lo cual no es un asunto menor”³

³ Datos obtenidos de Se profundiza la brecha digital en la tercera edad - Gaceta UNAM

En octubre de 2022, se publicaron en el Periódico Oficial reformas a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para establecer la facultad del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores, para que sea la instancia encargada de impulsar y promover la capacitación dirigida a este sector de la sociedad en materia de uso de las nuevas tecnologías de la información, para tal efecto, la fracción XVIII del artículo 24, cita lo siguiente:

Artículo 24.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes facultades:

(...)

XVIII. Impulsar y promover la capacitación necesaria sobre el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Para lo anterior, el Instituto podrá crear la Academia Digital para el Adulto Mayor, así como la realización de convenios con otras secretarías e instituciones para que dicha capacitación tenga validez oficial;

(...)

Asimismo, se estableció en el inciso h) de la fracción IV del artículo 5 de la citada Ley, el derecho de las personas adultas mayores al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como la capacitación para su uso.

No obstante, este importante avance legislativo, queda pendiente garantizar a los adultos mayores el acceso a todos los trámites que han migrado a la modalidad digital, para que en caso de que estos no puedan realizarlo por no tener el conocimiento necesario para hacerlos, puedan recibir la orientación y apoyo necesarios para su realización.

Nuestro estado tiene una plataforma para la realización de trámites digitales "AccesoNL" se define como "la forma más sencilla y rápida de realizar y solicitar trámites y servicios estatales desde cualquier dispositivo con conexión a internet" señala este portal que los beneficios son: acceder desde tu casa u oficina; evita largas filas, gastos de traslado y gasolina, se paga de manera segura y en línea, se ahorra papel y medio ambiente, hay disponibilidad las 24 horas del día los 7 días de

la semana y se puede acceder a un buzón ciudadano para monitorear los avances del trámite.⁴ Sin embargo, es una política pública que no está por Ley, es decir, puede cambiar cada sexenio, por lo que resulta importante dejarlo plasmado en la norma.

Sin duda alguna los avances tecnológicos han venido a facilitar la vida de muchas personas y son una gran herramienta para la realización de trámites sin necesidad de trasladarse para hacerlos, disminuye el tiempo de respuesta, agiliza el proceso, se evitan largas filas y además también es un factor que coadyuva a disminuir la corrupción.

Sin embargo, tener poco o nulo conocimiento de las nuevas tecnologías de la información o simplemente no contar con los dispositivos necesarios o acceso a internet, limitan el derecho de las personas adultas mayores a la realización de estos trámites y por tanto al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea el siguiente proyecto de

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 40 y se adiciona el artículo 40 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 40.- (...)

Para tal efecto la iniciativa privada deberá implementar las acciones pertinentes para garantizar la orientación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación a fin de que las personas adultas mayores puedan realizar trámites digitales.

⁴ <https://www.nl.gob.mx/campanas/conoce-nuestra-plataforma-para-tramites-digitales>

Artículo 40 Bis.- La atención preferencial de las personas adultas mayores también debe incluir la orientación en el uso de las tecnologías de la información y comunicación para la realización de trámites.

En caso de que las personas adultas mayores se encuentren limitados para la realización de algún trámite digital, se deberá contar con un módulo de apoyo presencial para que puedan realizarlo.

TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los veintiséis días del mes de julio de 2023.

Atentamente,



Dip. Waldo Fernández González



Año: 2023

Expediente: 17291/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. CRISTIAN VIERI GARCÍA GONZÁLEZ Y UN GRUPO DE ESTUDIANTES Y PROFESORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PARLAMENTARIOS DE LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MONTERREY.

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTAN INICIATIVA DE REFORMA POR ADICIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD POLICIAL Y FEMINICIDIO.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

**INICIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
POLICIAL Y FEMINICIDIO**

**DIPUTADAS Y DIPUTADOS
DE LA LXXVI LEGISLATURA AL**

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**



Los suscritos estudiantes de Criminología y profesores académicos del Centro de Estudios Legislativos y Parlamentarios CELYP, de esta querida Universidad al final firmantes, todas y todos mexicanos, mayores de edad, y

, ante ustedes y con el debido respeto comparezco a exponer:

Que en nuestra calidad ya mencionada, y de conformidad con lo preceptuado en los diversos artículos 8º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, los correlativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Nuevo León, y 102 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, comparecemos

ejerciendo el derecho de petición e iniciativa ciudadana, a fin de contribuir como ciudadano al mejoramiento de las instituciones jurídicas de nuestro Estado, presentando formalmente ante ese Honorable Congreso del Estado:

**INICIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN AL CÓDIGO PENAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD
POLICIAL Y FEMINICIDIO**

Conforme a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestra Universidad y sus estudiantes, siempre hemos estado preocupados por los problemas de México y de Nuevo León. Siempre hemos estado presente en la vida del Estado de Derecho en México, siempre procurando participar en el análisis y propuesta de solución en los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad, esencialmente en cuanto a la cultura de la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos. Los temas de la inseguridad y la violencia, así como los aspectos de la corrupción e impunidad, no son la excepción a esos ideales por la búsqueda y logro de la paz y la armonización social.

Hoy nuestro Nuevo León, vive y experimenta una crisis de credibilidad en nuestras instituciones policiales y de justicia penal, no solo en su naturaleza institucional sino en virtud del servicio público ejercido por sus funcionarios y agentes. Muchas veces los ciudadanos, nos habíamos preguntado, ¿Que pasaría en Nuevo León, si existieran instituciones de Seguridad y Justicia, que fueran realmente capaces de combatir la corrupción y la impunidad? Como ciudadanos nos encantaría sin duda alguna, que en nuestro país,

ciertamente existieran instituciones, que trabajaran inteligente e integralmente con una capacidad de honestidad totalmente probada, para poder lograr, - si no erradicar la corrupción e impunidad en el país - tener mejores resultados en su lucha.

Nuestro gran Estado de Nuevo León, desafortunadamente, se ha mantenido en los no muy agradables primeros lugares en materia de corrupción, propiciada por los servidores públicos vinculados al sistema policial y de justicia penal. Por eso, es muy importante empezar a contar para su éxito, *teniendo a las mejores y más capaces mujeres honestas, y a los mejores y más capaces hombres honestos para operar dicho sistema policial*, con el fin de prevenir los delitos, y particularmente el feminicidio.

Así mismo los policías preventivos o de proximidad, tanto de los municipios como de la fuerza civil – con el apoyo de sus jefes y gobernantes - *deben trabajar más en la prevención del delito*, a través del uso de la tecnología, y de la inteligencia y planeación estratégica, para crear nuevos mecanismos que funcionen en materia de investigación para la prevención, para hacer valer el espíritu del artículo 21 constitucional. Incluso, debe exponenciarse la creación de una policía cibernética y telemática especializada en campo de la prevención.

La *atención temprana y científica* de los factores precursores de la inseguridad, violencia y la delincuencia, es fundamental para lograr la reducción de la incidencia delictiva y generar un auténtico entorno de paz. Actualmente diversas instancias del gobierno estatal y de los municipios realmente no operan programas sistemáticos que busquen atender dicha problemática, particularmente orientados estos programas en los grupos

más vulnerables, como son los jóvenes y menores en conflicto con la ley, *las víctimas de violencia familiar, la violencia a las mujeres*, entre otros más.

En materia de prevención, se requiere poner especial atención al aumento sustancial que se ha visto reflejado en el delito de violencia familiar (y otros muchos delitos más) toda vez que en los últimos cinco años se ha incrementado en un 95 %. Y desde luego la debida atención temprana y eficaz al tema de la prevención en el delito de Narcomenudeo (de alguna manera vinculado al de Violencia Familiar). *Un tema que debe ser tratado por una policía especializada del Estado, en éste caso y en muchos otros delitos contra la integridad de las personas y su libertad sexual, como lo es el feminicidio, la violación, el secuestro, la trata de personas, el tráfico de órganos, la desaparición forzada de personas, etc.*

En razón de ello, debe darse un paso gigantesco para dar vigencia plena a las garantías individuales y los derechos humanos que detenta nuestra carta magna y así potenciar en favor del gobernado, *todo el máximo proteccionismo y seguridad que hoy más que nunca se exige y se debe cumplir eficazmente por nuestras autoridades de seguridad y justicia, especialmente las instituciones policiales en materia de prevención del delito en todo el Estado.*

Toda vez que al desfasarse la inseguridad familiar y otros tipos de inseguridad en las comunidades urbanas y no urbanas, puede generar otras alternativas delictivas para sus miembros, en razón de la desintegración de la familia y el alejamiento de sus miembros hacia otras personas o grupos con ideas negativas o delictivas, porque esa desintegración familiar muchas

veces hacen más vulnerables a sus miembros y genera caldo de cultivo para la delincuencia organizada (y esto ocurren todos los estratos sociales).

Por esto, es muy importante que se adentre ese H. Congreso en el estudio, análisis, revisión y en su caso CONVOCATORIA A DEBATE, (participando los expertos en éste tema, las organizaciones no gubernamentales, los organismos intermedios, los universitarios, los trabajadores, etcétera) de ésta INICIATIVA, esencialmente porque ésta, propone preceptos o normas, *que coadyuvan a una mejor integración para el cumplimiento de una verdadera política estatal de prevención del delito, y no simples programas temporales o de simple ocurrencia.* Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, desde 2019, las denuncias por Violencia Familiar han ido al alza en los primeros trimestres. En 2019, fueron 3,339, en 2020, fueron 4,240, y en 2021, fueron 4,336, en hechos descritos utilizando múltiples e imaginables formas de violencia, hasta la muerte (esto sin contar con las CIFRAS NEGRAS).

El problema es recurrente, sistemático y grave, esencialmente en la *omisión de actuación de la primera autoridad de Seguridad de contacto con el ciudadano*, que lo es precisamente la policía "Preventiva o de Proximidad". Esta, ante quién el ciudadano acude por ser el primer contacto de apoyo o auxilio, y que sin embargo, muchas de las veces el policía preventivo o de proximidad o sus operadores, NO responden de manera inmediata, oportuna y temprana, en el auxilio o llamado de apoyo de los ciudadanos en riesgo o amenaza.

Por ello H. Congreso del Estado, es necesario realizar reformas en materia de responsabilidad penal para que todo servidor público de instituciones policiales en prevención del delito, sean objeto de sanciones penales por omitir, retardar o entorpecer dolosa o negligentemente el cumplir con su función de responsabilidad para prevenir el delito.

Esta reforma sustancial para adicionar con una fracción V, en el artículo 226 Bis, del Código Penal del Estado, hará que el actuar de los policías en prevención del delito y sus operadores, sean más responsables en su conducta, que su desempeño policial sea más eficaz, y que finalmente quien pide apoyo o auxilio por estar en riesgo su seguridad, No sea víctima de delito alguno, ni de violación, secuestro, homicidio o cualquier otro. Como lo es en los casos en donde los policías actúan negligentemente o con dolo, ya que no actúan tempranamente, o lo hacen inadecuadamente o de forma muy discrecional, en los llamados de auxilio del ciudadano. (Ejemplos: La mujer que pidió auxilio en la vía pública al policía, porque alguien la seguía y el policía ignora su llamado, y esta omisión propicia o favorece la violación y muerte de esa mujer: o cuando una mujer pide auxilio al 911, y la policía llega en retardo una hora después, para solo encontrar el cadáver de esa mujer, etc., etc.).

Además deberá reformarse el artículo 226 Bis II, del Código Penal del Estado para incluir el artículo 226 bis, para que se aumenten las sanciones para esta hipótesis.

Por tanto la reforma quedaría de la siguiente manera:

TÍTULO OCTAVO
DELITOS CONTRA EL SISTEMA DE JUSTICIA

CAPITULO II
REGLAS COMUNES PARA ESTE TITULO Y EL PRECEDENTE

ARTÍCULO 226 BIS. -SE SANCIONARÁ CON OCHO A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN Y MULTA DE TRESCIENTAS A QUINIENTAS CUOTAS, A LA PERSONA QUE TENGA O HUBIERE TENIDO, EL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL, DE PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA O DE EJECUCIÓN DE SANCIONES, Y QUE:

- I.
- II.
- III.

V. OMITA, RETARDE, O ENTORPEZCA DOLOSA O NEGLIGENTEMENTE CUMPLIR CON SU RESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, Y QUE ESTAS CONDUCTAS, PROPICIEN O FAVOREZCAN LA COMISIÓN DE DELITOS PREVISTOS EN ÉSTE CÓDIGO.

ARTICULO 226 BIS II.- CUANDO LOS DELITOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 209, 213, 214 BIS, 215, y 226 BIS DEL PRESENTE CÓDIGO, SEAN COMETIDOS POR MIEMBROS DE ALGUNA CORPORACIÓN POLICIACA, LAS PENAS PREVISTAS SERÁN AUMENTADAS HASTA EN UNA MITAD.

OTRA INICIATIVA de reforma legislativa al Código Penal del Estado, es la relacionada a modificar el artículo 331 Bis 6, *para incluir como sujetos de responsabilidad penal en el delito de FEMINICIDIO a los servidores públicos*

que tengan a su cargo la responsabilidad de la Prevención del Delito, y que OMITAN, retarden o entorpezcan dolosa o negligentemente cumplir con su responsabilidad en la Prevención del Delito. Máxime que esta reforma se trata precisamente de que la POLICÍA PREVENTIVA (Municipal y del Estado) y sus responsables actúen profesional y eficazmente de manera oportuna, y temprana en el auxilio o apoyo de las mujeres que necesitan o requieren de su asistencia y protección frente a los riesgos representados por mensajes, comentarios o conductas previas que pudieren tener una intención de causarles daño, o hasta su muerte. Por eso también es importante esta reforma legislativa, porque potenciará más rigurosamente el cabal e íntegro cumplimiento del ejercicio policial en la prevención del delito.

Además en éste mismo precepto 331 Bis 6, **se propone modificar** la parte en donde se establece la inhabilitación de cargo de hasta diez años, para que ser eliminada y quedar en su lugar, que el servidor público quede inhabilitado "DE POR VIDA". Ya que es inadmisibile darle nuevamente confianza a quién se le encomendó proteger nuestra vida, y en lugar de esto, *traiciona los ideales, la doctrina y el deber policial.*

Por tanto, la reforma legislativa quedaría de la siguiente manera:

TÍTULO DÉCIMO QUINTO BIS

DELITOS CONTRA LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DIGNIDAD DE LA MUJER

CAPÍTULO PRIMERO

FEMINICIDIO

ARTÍCULO 331 BIS 6.- AL SERVIDOR PÚBLICO QUE OMITA, RETARDE O ENTORPEZCA DOLOSAMENTE O POR NEGLIGENCIA CUMPLIR CON

SU RESPONSABILIDAD EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, LA PROCURACIÓN O ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA RESPECTO DE LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO, SE LE IMPONDRÁ PENA DE PRISIÓN DE CINCO A DIEZ AÑOS Y MULTA DE QUINIENTAS A MIL QUINIENTAS CUOTAS, ADEMÁS SERÁ DESTITUIDO E INHABILITADO (DE POR VIDA) DE TRES A DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑAR OTRO EMPLEO, CARGO O COMISIÓN PÚBLICOS.

Señoras y señores legisladores de Nuevo León, este es la oportunidad y el momento histórico que tienen, para aprovechar y lograr una enorme y trascendental transformación de la **JUSTICIA PENAL**, institución jurídica en el Estado, que impactara en *las instituciones de seguridad pública* y por tanto en el **Cambio Verdadero** en materia de **PREVENCIÓN DEL DELITO**.

Avancemos con la transformación de Nuevo León, innovando y desarrollando acciones que solo nos permitan un mejor nivel de vida para los nuevoleonenses y desde luego, solicitarles apreciadas Diputadas y Diputados que estas propuestas de reforma penal, sean **REPLICADAS A NIVEL NACIONAL**, para hacer más sólido y eficaz el Estado de Derecho.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a ese H. Congreso del Estado, atentamente solicitamos:

PRIMERO: Se nos tenga como estudiantes de Criminología y académicos universitarios por presentando FORMALMENTE esta **INICIATIVA DE REFORMAS POR ADICIÓN Y MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN**, en materia de **Responsabilidad Policial y Femicidio**.

Por lo que en su oportunidad se remita de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 fracción III, y 107 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, a la Comisión de Seguridad y Justicia.

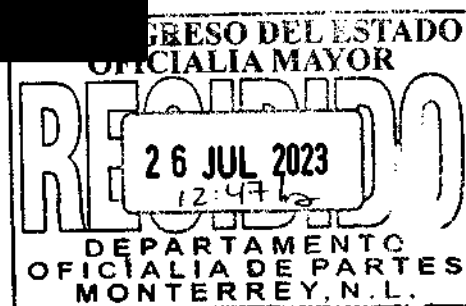
SEGUNDO: De ser necesario se solicita de antemano, se proceda a lanzar una **CONVOCATORIA PÚBLICA**, en la que se debatan éstas ideas y en su caso se procuren mejores aportaciones a la presente, por las autoridades, organismos ciudadanos y público en general.

Desahogados los procedimientos respectivos, se proceda a la **APROBACION Y PUBLICACIÓN** de dichas reformas, en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, N.L. Junio de 2023

FIRMAS



NOMBRE
 GARCIA
 GONZALEZ
 CRISTIAN V.

SEXO: H

DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR

CLUB

FECHA DE NACIMIENTO

SECCION

VIGENCIA

2023 JUN



INE

[Redacted Area]

[Redacted Area]



H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXVI LEGISLATURA
OFICIALÍA DE PARTES



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El H. Congreso del Estado de Nuevo León, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Finalidades para las cuales serán tratados sus Datos Personales

Sus datos personales serán utilizados para: a) Registro de Iniciativas; b) Registro de Convocatorias. (Otros documentos o información que consideren se presentan); y c) Trámites, asuntos administrativos. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en la Oficialía de Partes, adscrita a la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado.

Transferencia de Datos

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

Mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO

Se informa que podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO) de sus datos personales de forma presencial ante la Unidad de Transparencia del H. Congreso del Estado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>), o al correo electrónico enlace.transparencia@hcnl.gob.mx. Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia a la dirección antes señalada, enviar un correo electrónico a enlace.transparencia@hcnl.gob.mx o bien, comunicarse al Tel: 81815-095000 ext. 1065.



Sitio dónde consultar el Aviso de Privacidad Integral

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: <https://www.hcnl.gob.mx/privacidad/> o bien, de manera presencial en las instalaciones del Congreso del Estado, directamente en la Unidad de Transparencia.

Última actualización: Abril 2023

Consiento y autorizo que mis datos personales y datos sensibles (si se presenta el caso) sean tratados conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad.

Si autorizo ☒
No autorizo ☐

Domicilio para recibir las notificaciones que correspondan:

Calle: [Redacted] Núm. Ext. [Redacted] Núm. Int. [Redacted]
Colonia: [Redacted] Municipio: [Redacted]
Teléfono(s): [Redacted] Estado: [Redacted] C.P. [Redacted]

Consiento y autorizo el recibir las notificaciones a través de medios electrónicos; y en su caso señalo el siguiente correo electrónico.

Si autorizo ☒
No autorizo ☐

Correo: [Redacted]

[Redacted Signature]

Cristian Vieri Garcia Gcc

NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL INTERESADO

Año: 2023

Expediente: 17293/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 110 A LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE LA CREACIÓN DE UNA POLICÍA DE MONTAÑA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

**PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN**

PRESENTE. –



El suscrito Diputado **Luis Alberto Susarrey Flores** y los Diputados y Diputadas del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionado con los artículos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a presentar iniciativa de **reforma a la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León**; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las características principales y más representativas de Nuevo León son nuestras montañas, tanto es así, que el cerro de la silla, icono de la entidad, está representado en el escudo de Nuevo León y varias montañas se encuentran representadas en los escudos de diversos municipios. De ese tamaño es la importancia que tienen las zonas montañosas en nuestra sociedad, no por nada en el país y en el mundo se nos conoce como "la ciudad de las montañas".

Nuevo León tiene muchas montañas, pero sin duda unas de las más conocidas y que rodean la metrópoli regia son:

- El Cerro de la Silla en Monterrey, reconocida mundialmente por su forma tan peculiar que semeja a una silla ecuestre o silla de montar.
- La Sierra Madre Oriental el cual además de atravesar 10 estados, en Nuevo León tenemos el pico más alto llamado Cerro del Potosí ubicado en el municipio de Galeana y dentro de esta cordillera se encuentra Chipinque, siendo un emblemático parque ecológico que diariamente se encuentra lleno de turistas.
- El Cerro del Obispado, ubicado en el centro de Monterrey, antes llamado Loma de Chepevera.

- El Cerro de las Mitras, que por la forma de su cima se asemeja a una mitra.
- El Cerro del Topo Chico en Monterrey, Escobedo y San Nicolás, con una altitud de 1,178 metros sobre el nivel del mar.

Entre otras montañas fuera del área metropolitana como: el Cerro el Barbero en Lampazos, Cerro de Chiquihuitillos en Mina, Sierra Papagayos en Dr. González y los Ramones, Cerro el Pilón en Santiago, Cadereyta y Allende, Cerro Gordo en Linares, Sierra de Picachos en Cerralvo, entre muchas más.

Muchas de estas montañas, son utilizadas para practicar una actividad deportista llamada Senderismo, que a pesar de ser una actividad que aporta muchos beneficios para el bienestar de las personas, principalmente porque mantienes tu cuerpo en constante actividad física y trae beneficios en temas cardiovasculares, entre otros. Esta actividad también conlleva riesgos por la zona en donde se realiza, pues puedes tener roces, heridas, torceduras, golpes, picaduras, o algún accidente catastrófico.

Reconociendo la riqueza natural que tiene Nuevo León y a pesar de estar conscientes de la importancia que tiene la preservación de nuestra flora y fauna que se encuentra en nuestras montañas y el cuidado en general del medio ambiente para el presente y futuro de todos los seres humanos, al día de hoy, los municipios que en su territorio tienen montañas, no cuentan con un cuerpo certificado y especializado en zonas de montaña, que por un lado cuiden el medio ambiente y todo lo que esto conlleva y por otro lado protejan y salvaguarden la integridad física de las personas que realizan actividades como el Senderismo.

En perspectiva comparada, otras entidades como el Estado de México, si cuenta con un cuerpo llamado: Policía de Alta Montaña y Agreste. Este cuerpo policial, pertenece a la Secretaría de Seguridad mantiene labores de vigilancia en las reservas naturales de la entidad mexiquense y salvaguardan la integridad de las y los visitantes.

En este sentido, resulta increíble que Nuevo León, y específicamente los municipios que en su territorio cuentan con montañas, no tengan un cuerpo de policía de montaña debidamente entrenado y certificado para realizar estas labores antes mencionadas y que estén coordinados con la Secretaría de Medio Ambiente del estado para que en los ámbitos de sus competencias vigilen la preservación de las montañas y con la Dirección de

Protección Civil del Estado para coadyuvar en tareas de auxilio y rescate en zonas montañosas.

Es por lo anteriormente expuesto que nos permitimos presentar ante esta soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. – Se **ADICIONA** el artículo 110 Bis a la **Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León**, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 110 Bis. - En los Municipios que dentro de su territorio cuenten con una zona de montaña podrán formar un cuerpo de Policía de Montaña debidamente entrenado y certificado que será el responsable de proteger la flora y fauna que se encuentran en las zonas montañosas, así como de vigilar y salvaguardar la seguridad e integridad física de todos los visitantes que acuden a las montañas a realizar actividades de sano esparcimiento.

La Policía de Montaña será un área perteneciente a la secretaría de seguridad de cada municipio y su actuar será con estricto apego a Derecho y a lo establecido en las leyes federales, estatales y reglamentos aplicables.

La Policía de Montaña deberá estar debidamente coordinada con la Secretaría de Medio Ambiente del estado para que en los ámbitos de sus competencias vigilen la preservación de las montañas y con la Dirección de Protección Civil del Estado para coadyuvar en tareas de auxilio y rescate en zonas montañosas.

MONTERREY, NUEVO LEÓN A JULIO DE 2023

A T E N T A M E N T E

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

CARLOS ALBERTO DE LA FUENTE FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

POLÍCIA DE MONTAÑA

MAURO GUERRA VILLARREAL
C. DIPUTADO LOCAL


LUIS ALBERTO SUSARREY FLORES
C. DIPUTADO LOCAL

MAURO ALBERTO MOLANO NORIEGA
C. DIPUTADO LOCAL

NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ
C. DIPUTADA LOCAL

ITZEL SOLEDAD CASTILLO ALMANZA
C. DIPUTADA LOCAL

FÉLIX ROCHA ESQUIVEL
C. DIPUTADO LOCAL

EDUARDO LEAL BUENFIL
C. DIPUTADO LOCAL

MYRNA ISELA GRIMALDO IRACHETA
C. DIPUTADA LOCAL

DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA
C. DIPUTADO LOCAL

GILBERTO DE JESÚS GÓMEZ REYES
C. DIPUTADO LOCAL

FERNANDO ADAME DORIA
C. DIPUTADO LOCAL

ADRIANA PAOLA CORONADO RAMIREZ
C. DIPUTADA LOCAL

AMPARO LILIA OLIVARES CASTAÑEDA
C. DIPUTADA LOCAL



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIPUTADO MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .

El suscrito **Diputado Héctor García García** e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano perteneciente a la Septuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, en uso de las atribuciones conferidas en los artículos 88 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, ocurrimos ante esta Soberanía a **presentar iniciativa en donde se reforman las fracciones XXIII y XXIV; se adiciona la fracción XXV del artículo 7 de la Ley de Educación**, al tenor de la siguiente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La educación vial en las escuelas es fundamental para la formación de buenos ciudadanos, ya que promueve el aprendizaje y cumplimiento de las normas y reglamentos creados con el fin de preservar la seguridad y la vida de las personas que vivimos en sociedad a través de la prevención de accidentes de tránsito.

La educación vial se define como instrucción cuyo aprendizaje y práctica no solo permite prevenir accidentes en la vía pública, sino también concientizar por igual a automovilistas, ciclistas, pasajeros y peatones sobre sus responsabilidades y derechos.

Es importante precisar que la educación vial trata de un conjunto de normas que buscan prevenir los accidentes de tránsito y minimizar sus consecuencias. Estas normas establecen tanto las condiciones de tránsito como las responsabilidades de conductores y peatones que circulan por la vía pública. Además, en la seguridad vial también se incluyen todas las tecnologías que utilizan los vehículos con la finalidad de que se reflejen en la seguridad.

Entre las medidas preventivas para mejorar la educación vial podemos citar:

- Respeto por las señales de tránsito.

- Usar el cinturón de seguridad.
- Evita usar el celular.
- Respeta los límites de velocidad.
- Cuidar a los peatones.
- Maneja siempre alerta.
- Sin agresiones verbales
- **En zona escolar respetar al auxiliar vial**
- Evitar vueltas en “u” donde no hay señalamiento permisible

Por ejemplo, en las escuelas los estudiantes gozarán de derecho de preferencia de paso en todas las intersecciones y zonas señaladas al efecto, así como para el ascenso y descenso de vehículos, y el acceso o salida de los planteles educativos. El ascenso y descenso de escolares de los vehículos utilizados para trasladarse, deberán realizarse en la orilla de las banquetas, en las inmediaciones del plantel.

Para efectos de lo anterior, se establece que la Secretaría deberá diseñar, fomentar y promover en los planes de estudio la educación vial a través de actividades extracurriculares, acciones específicas que involucren a la comunidad escolar, y difusión de materiales, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad.

Para mayor comprensión de la propuesta es que agregamos el siguiente cuadro comparativo de la reforma propuesta:

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO	
TEXTO VIGENTE	PROPUESTA
Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del	Artículo 7.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del

<p>artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente sus capacidades;</p> <p>II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica;</p> <p>III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales; sus tradiciones, el patrimonio de la cultura del Estado de Nuevo León conquistado por las generaciones pasadas, su riqueza artística y el papel que la entidad federativa ha representado en la configuración y desarrollo de la identidad de la nación mexicana;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 14 DE MARZO DE 2014)</p> <p>IV.-Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional -el Español- un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger, promover y respetar el desarrollo de las lenguas indígenas;</p> <p>V.- Fomentar la cultura democrática en todos los niveles educativos, dando a conocer los principios fundamentales del Estado de Derecho, e impulsar a los educandos a participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad;</p>	<p>artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:</p> <p>I.- al XXII (...)</p>
---	--

(REFORMADA, P.O. 14 DE MARZO DE 2014)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VII.- Respetar y difundir los Derechos de las niñas y de los niños;

VIII.- Promover la educación para la paz, la tolerancia y el respeto a la diversidad humana;

IX.- Fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y las actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tecnológica;

X.- Impulsar la creación artística, la adquisición, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores universales, en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación, y particularmente, de Nuevo León;

(REFORMADA, P.O. 31 DE MARZO DE 2021)

XI. Inculcar el respeto al medio ambiente, así como los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el fomento de hábitos dirigidos a un estilo de vida sustentable, la sensibilización y prevención sobre las causas y efectos del cambio climático, de igual manera la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la

sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales y en particular, desarrollar una cultura del agua;

(REFORMADA, P.O. 24 DE JULIO DE 2020)

XII.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana;

XIII.- Contribuir a la construcción de una cultura de la salud promoviendo la educación física, la práctica del deporte, los hábitos de higiene y sana alimentación, así como la educación sexual, la prevención de adicciones y la erradicación de la violencia familiar;

(REFORMADO, P.O. 19 DE DICIEMBRE DE 2008)

XIV. Fomentar los valores de: respeto, libertad, justicia, democracia, transparencia en el ejercicio de la función pública, igualdad, solidaridad, tolerancia, equidad y las características que han identificado a la población del Estado de Nuevo León: el trabajo, el ahorro, la capacidad emprendedora, la responsabilidad, la creatividad, la honestidad, la voluntad para enfrentar retos y adversidades y una visión del futuro de sí mismo y de la sociedad;

(REFORMADA, P.O. 14 DE MARZO DE 2014)

XV.- Establecer la mejora continua en la calidad de los procesos académicos y administrativos del sistema educativo, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás normativa aplicable;

XVI.- Desarrollar armónicamente la formación humanista, científica y tecnológica del educando;

(REFORMADA P.O. 20 DE JUNIO DE 2008) [F. DE E. P.O. 02 DE JULIO DE 2008]

XVII.- Preparar para la vida acorde a las necesidades actuales y futuras, impulsando y facilitando la adquisición de la cultura informática y las variadas formas de los lenguajes matemático, simbólico y artístico, incluyendo los idiomas extranjeros más usuales que demanda el entorno social, cultural y laboral de la entidad;

(REFORMADA P.O. 14 DE ENERO DE 2011)

XVIII.- Promover además del conocimiento acerca de la Entidad y el País, la adquisición de una visión global del mundo;

(REFORMADA P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2011)

XIX.- Contribuir a la información, prevención, combate y erradicación sobre los efectos nocivos del tabaquismo, drogadicción, alcoholismo y otras enfermedades y adicciones de impacto sociocultural; a fin de que tomen conciencia de los daños que causan a la salud, al bienestar social, moral y económico de las personas;

<p>(REFORMADA P.O. 31 DE MARZO DE 2021)</p> <p>XX.- Los contenidos de los planes y programas de estudio que contemplen el aprendizaje de las lenguas extranjeras para el nivel de Educación Básica;</p> <p>(REFORMADA P.O. 22 DE FEBRERO DE 2012)</p> <p>XXI.- Promover en forma permanente el hábito a la lectura y del libro;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 24 DE JULIO DE 2020)</p> <p>XXII.- Fomentar la convivencia pacífica y respetuosa entre las personas y la inclusión mediante el desarrollo de programas especiales de fomento y capacitación para el empleo de personas con algún tipo de discapacidad;</p> <p>(REFORMADA, P.O. 05 DE JUNIO DE 2019)</p> <p>XXIII.- Implementar programas de orientación vocacional y promover el establecimiento de acuerdos entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas profesionales que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, reforzar el aprendizaje del aula, identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional; y</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 05 DE JUNIO DE 2019)</p> <p>XXIV.- Fomentar en todos los niveles educativos la cultura tributaria.</p>	<p>(REFORMADA, P.O. 05 DE JUNIO DE 2019)</p> <p>XXIII.- Implementar programas de orientación vocacional y promover el establecimiento de acuerdos entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas profesionales que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, reforzar el aprendizaje del aula, identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional;</p> <p>(ADICIONADA, P.O. 05 DE JUNIO DE 2019)</p> <p>XXIV.- Fomentar en todos los niveles educativos la cultura tributaria; y</p>
---	--

<p>SIN CORRELATIVO</p>	<p>XXV.-Fomentar la educación vial a través de actividades extracurriculares y acciones específicas que involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad.</p>
-------------------------------	---

En el entendido de que la educación vial es además un tema de educación cívica, debe fomentarse sobre el civismo, ya que es el primer agente educador en el sistema de acción, la familia y posteriormente la escuela y la comunidad.

Así pues, si respetamos reglas, se aprende a vivir en comunidad, desarrollar hábitos de convivencia ciudadana, de autonomía y de respeto a las normas básicas de convivencia, así como el desarrollo del sentido de la responsabilidad son las bases fundamentales sobre las que debe asentarse la educación vial.

En este sentido, la educación vial, como tema transversal es un contenido que ha de desarrollarse dentro de las áreas curriculares, dándole una dimensión desde una doble perspectiva.

Integrar la seguridad vial en la educación responden a un proyecto válido de sociedad y de educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social en que ha de desarrollarse toda la educación, principalmente la educación obligatoria.

Las enseñanzas transversales constituyen una responsabilidad de toda la comunidad educativa, puesto que han de impregnar toda la acción educativa. En particular, han de estar presentes en el proyecto educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa, y en las programaciones que realiza el profesorado.

La educación vial pues, tiene un valor importante no sólo para el desarrollo personal e integral de los alumnos, sino también para un proyecto de sociedad más cívica, respetuosa, libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y la propia naturaleza que constituye el entorno de la sociedad humana.

Así pues, la Educación Vial debe dirigirse al conjunto de personas implicadas en el proceso educativo, ya que las actitudes de los alumnos, los padres y los profesores hacia la misma constituyen un factor determinante de su éxito.

En Nuevo León se sigue un calendario escolar y los alumnos y alumnas hacen uso de las vías públicas como peatón o viajero acompañado. Por ello, se debe pretender, en esta etapa, fomentar actitudes de conciencia ciudadana y desarrollar en el niño/a hábitos encaminados a la creación del sentido vial.

Es por lo anteriormente expuesto que ponemos a consideración el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XXIII y XXIV; se adiciona la fracción XXV del artículo 7 de la Ley de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7.-

I.- a XXII (...)

XXIII.- Implementar programas de orientación vocacional y promover el establecimiento de acuerdos entre instituciones educativas y el sector productivo para impulsar las prácticas profesionales que permitan a los alumnos adquirir aptitudes, capacidades y experiencia de calidad, reforzar el aprendizaje del aula, identificar los intereses de especialización para el efecto de mejorar sus oportunidades de desarrollo profesional;

XXIV.- Fomentar en todos los niveles educativos la cultura tributaria; y

XXV.-Fomentar la educación vial a través de actividades extracurriculares y acciones específicas que involucren a la comunidad escolar, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, así como la adopción de nuevos hábitos de movilidad.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente

Monterrey, NL., a Julio de 2023


DIP. HÉCTOR GARCÍA GARCÍA
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO



Año: 2023

Expediente: 17295/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE ADICIÓN A UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 143 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

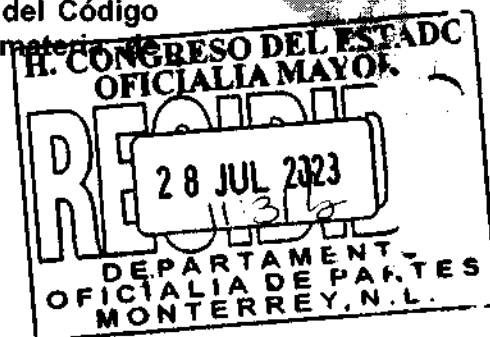
INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo y tercer párrafos al artículo 143 del Código Penal para el Estado de Nuevo León en materia de reparación del daño subsidiario.



**DIP. MAURO GUERRA VILLAREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-**

La que suscribe **Diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, las **Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor**, **Dip. Norma Edith Benítez Rivera**, **Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, **Dip. Tabita Ortiz Hernández**, **Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas**, **Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras**, **Dip. Eduardo Gaona Domínguez**, **Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez**, **Dip. Roberto Carlos Farías García** y **Dip. Héctor García, García**, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar **Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 143 del Código Penal para el Estado de Nuevo León** lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La reparación del daño en materia penal nace bajo el supuesto de que cuando se le causa daño a alguna otra persona, o personas, ya sea en sus bienes, en su integridad física o por la vulneración de alguno de sus derechos, el responsable está obligado a reparar las consecuencias ocasionadas por las afectaciones de los daños patrimoniales, materiales o morales de la víctima.

Este concepto ha cobrado relevancia después de la gran reforma en materia de Derechos Humanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Dicha reforma incorporó de conceptos como la *integridad humana* para concientizar sobre la importancia del valor propio de la vida humana y lo que le es relativo, tal como su estado de salud y bienestar.

Tal es así, que la Corte Interamericana ha establecido los Principios u Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones manifiestas de Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario.

El impacto de estas disposiciones no se limita solo al ámbito internacional, el artículo 20 apartado C fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre los derechos de las víctimas o del ofendido estipula lo siguiente:

IV.- que se repare el daño. En los casos, en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima y ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación, absolver al sentenciado de dicha reparación, si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijara procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación de daño.

A nivel nacional, resulta aplicable la Ley General de Víctimas y a nivel local la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León.

Por otra parte, diversos ordenamientos penales establecen la reparación del daño como pena pública para la persona responsable de un delito, con resultado material lesivo de bienes jurídicos, quede obligada a efectuar una compensación económica en favor de la víctima.

Lo anterior, bajo la inteligencia que la imposición de una pena corporal no basta para restaurar a la víctima a las condiciones en las que se encontraba previamente a la vulneración de sus derechos.

En ese sentido, la implementación de un mecanismo que permita a la víctima lograr la reparación del daño en los procesos penal es una medida de pacificación social, por lo que debe fomentarse su regulación en las legislaciones penales, así como su aplicación por parte de las autoridades competentes¹.

De esta forma, diversos códigos penales en distintos estados de la federación han regulado el mecanismo de reparación del daño para garantizar este derecho a las personas víctimas de algún daño causado por un tercero.

¹ Vázquez, E. (2010) La víctima y la reparación del daño. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26927.pdf>

Ejemplo de ello son el Código Penal de la Ciudad de México, Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, Código Penal del Estado de Querétaro, el Código Penal para el Estado de Nuevo León, entre otros.

No obstante, la normativa en la materia no establece la forma en que habrá de cumplirse con dicha obligación cuando existan dos o más sujetos condenados a dicha pena pública cuando existen dos o más imputados.

Para resolver esta cuestión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la tesis aislada I.7o.P. p (10ª.) con registro digital 2018202 rescata del derecho civil el concepto de la obligación solidaria cuando dos o más personas tienen el deber de cubrir, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida; y lo es mancomunada, cuando el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores haya, y cada parte constituye una deuda distinta².

A este respecto, el Civil Federal en su artículo 1917 establece a la letra³:

Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas...

Ello implica que, ante la incapacidad o insolvencia de alguna de las partes responsables que hubieran realizado el daño, serán las demás responsables quienes tendrán la responsabilidad de cubrir con la deuda que le correspondía a la primera.

Del mismo modo, el citado ordenamiento en su artículo 1984 menciona que:

Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad

Igualmente, en su numeral 1985 estipula:

... el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito distintos unos de otros.

² Suprema Corte de Justicia (2018) Tesis Aislada I. 7o.P.105 P (10ª). Disponible en: <https://sjfsemanal.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2018202>

³ Estados Unidos Mexicanos (2021) Código Civil Federal. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_110121.pdf



En otras palabras: cuando se presentan múltiples deudores con una misma obligación, cada uno de ellos deberá cumplir con su parte de la obligación a la que hayan sido acreedores.

Bajo ese tenor, la ley en materia Civil es clara al establecer la concepción de la responsabilidad solidaria y responsabilidad mancomunada, así como del proceso por el cual las partes deberán cumplir con su obligación.

Así pues, resulta irrefutable el vacío legal en el Código Penal para el Estado de Nuevo León identificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la ausencia de una operatividad de la reparación del daño cuando se presenta una pluralidad de personas responsables.

En ese sentido, si se condena al sentenciado a la reparación del daño por haber cometido algún delito el cual fue cometido en conjunto a otras personas activas no implica que al pasivo del delito se le repare dos veces el daño material dado que debe aplicar el principio de subsidiariedad.

Lo anterior, porque el concepto de reparación del daño no puede quedar supeditado a la conclusión de diverso procedimiento pues de demostrarse que los demás involucrados resultaron penalmente responsables y tienen obligación de reparar ese daño, el quejoso puede exigirles la parte que les corresponda como obligados solidarios y mancomunados.

En estas condiciones, proponemos reformar el Código Penal para el Estado de Nuevo León, por adición de un último párrafo al artículo 143, para solucionar la problemática que nos ocupa.

La reforma que proponemos se visualiza en el siguiente cuadro comparativo:

Dice	Debe decir
ARTÍCULO 143: LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMPRENDE:	
I a V...	
...	

	CUANDO DOS O MÁS PERSONAS TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR LA TOTALIDAD DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, ESTA DEBERÁ SER CUBIERTA POR LAS PARTES COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS Y MANCOMUNADOS
--	---

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que sometemos a la consideración de este H. Congreso el siguiente proyecto de:

DECRETO:

ÚNICO: Se reforma por adición de un ultimo párrafo el artículo 143 del Código Penal para el Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

ARTÍCULO 143: LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMPRENDE:

I a V...

...

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS TENGAN LA OBLIGACIÓN DE CUBRIR LA TOTALIDAD DEL MONTO CORRESPONDIENTE A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, ESTA DEBERÁ SER CUBIERTA POR LAS PARTES COMO OBLIGADOS SOLIDARIOS Y MANCOMUNADOS.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Irais Virginia Reyes de la Torre



Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz

Dip. Tabita Ortiz Hernández

**Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor**

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

**Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras**

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. IRAÍS VIRGINIA REYES DE LA TORRE, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIÉNDOSE LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): LEGISLACIÓN

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DIP. MAURO GUERRA VILLAREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



La que suscribe **Diputada Irais Virginia Reyes de la Torre**, y demás integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, las **Diputadas Denisse Daniela Puente Montemayor**, **Dip. Norma Edith Benítez Rivera**, **Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz**, **Dip. Tabita Ortiz Hernández**, **Dip. Ma. Guadalupe Guidi Kawas**, **Dip. María del Consuelo Gálvez Conteras**, **Dip. Eduardo Gaona Domínguez**, **Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez**, **Dip. Roberto Carlos Farías García** y **Dip. Héctor García, García**, con fundamento en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, correlacionados con los diversos 102, 103 y 104, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ocurrimos a presentar **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIENDO LOS SUBSECUENTES, AL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En agosto del 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Tesis Aislada VIII.1º.P.A.1 p (11ª.). Dicha tesis versa sobre la presentación de pruebas durante el proceso de un juicio de amparo indirecto.

El juicio de amparo es una instancia jurídica con el objetivo de proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por la ley reglamentaria.

Este juicio puede tramitarse de vía directa o indirecta. El primero es competencia por los tribunales colegiados de circuito, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio.

El segundo, se promueve en a juzgados y tribunales colegiados de apelación cuando, por la entrada en vigor de una ley resulte algún en perjuicio a la parte quejosa; contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales; contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo; contra actos de tribunales judiciales, administrativos,

agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido, contra actos de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; contra las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos; contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto y contra normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por otra parte, el artículo 75 primer párrafo de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que en los juicios de amparo directo no se admitirán las pruebas que no se hubieran rendido ante la autoridad responsable.

No obstante, este mismo artículo menciona en su segundo párrafo que al tratarse de un amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; y que en materia penal el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento de pruebas no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.

A su vez, en la Tesis aislada 1. XCII/2019 (10ª.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se menciona que cuando el quejoso ofrezca pruebas encaminadas a demostrar la posibilidad de que se ejercieron actos de tortura en su contra, la persona juzgadora no debe desecharlas de plano. En lugar de ello, acordar de conformidad la petición de requerir los documentos respectivos y en el momento procesal oportuno, evaluar su *idoneidad*, para decidir respecto de la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Lo anterior, en cumplimiento de lo preceptuado por el tercer párrafo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de que:

“Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley”

Por ello, tratándose de casos de tortura, en cualquier asunto de orden jurisdiccional, la persona juzgadora deberá ampliar el ofrecimiento de pruebas que tengan como finalidad demostrar la violación grave de los derechos humanos, de la persona quejosa.

En estas condiciones, las reglas relativas a su desahogo se dispensan, por la naturaleza de los actos reclamados. Por tanto, con el objeto de presentar el derecho de defensa, consideramos que debe aplicarse la teleología del Alto Tribunal al interpretar el artículo 75 de la Ley de Amparo vigente y dispensar las formalidades procesales previstas en el artículo 121 de la citada ley. Ello en virtud del derecho al acceso a la información y la dignidad humana de la persona quejosa.

Si bien es cierto rar que la Constitución federal, así como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, prevén la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información por motivos de seguridad nacional, defensa nacional o por motivos de seguridad pública, también lo es que el Juez de Distrito carece de la competencia suficiente para negar la admisión de la prueba con el propósito de comprobar un acto de tortura.

Ante esta situación, se crea una colisión entre el derecho a la seguridad pública y el derecho de acceso a la información de la persona quejosa. Dicho conflicto fue resuelto en la tesis aislada 1ª. XCII/2019 (10ª.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En dicha tesis, el Poder Judicial Federal determinó que, para la presentación de las pruebas que constituyan información reservada o en posesión de un sujeto obligado, deberá seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito.

Sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes de un juicio de amparo, la persona Juzgadora previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado por la autoridad demandada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la información que considere esencial para su defensa.

Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad para efecto de evitar que se utilice de manera inadecuada, así como ponderar los derechos implicados y las especificaciones del caso concreto, para decidir si es indispensable o relevante

al acceso a una parte o en su caso a toda la información con el fin de resolver el problema de constitucionalidad planteado.

En estas condiciones, durante un Juicio de amparo indirecto, tratándose de violaciones a la integridad humana, las pruebas aportadas deberán someterse a un análisis de ponderación, con el fin de garantizar que ninguna de las partes del juicio resulte en estado de indefensión.

Consideramos que, ante la posible indefensión de alguna de las partes del juicio, la persona juzgadora deberá permitir el más estricto acceso a las información reservada o confidencial con el objetivo de corroborar la existencia de un delito que atente contra la dignidad humana.

Finalmente, acorde con los argumentos anteriores, proponemos reformar el artículo 75 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política del o Estados Unidos Mexicanos mediante la adición de un párrafo tercero recorriéndose los restantes, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo:

Dice	Debe decir
Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.	Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.	No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Adicionalmente, en materia penal, el juez de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio.



<p>El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.</p>	<p>En los casos que el asunto se tratase de actos de tortura o que lesionen gravemente la dignidad humana, las pruebas que se ofrezcan para demostrar dichos actos deberán admitirse en atención al respeto y protección de los derechos humanos.</p>
<p>Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.</p>	<p>El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.</p>
<p><i>Sin correlativo</i></p>	<p>Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias</p>

	para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.
--	--

Es por lo aquí expuesto, con fundamento en el Artículo 96 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, solicitamos de la manera más atenta, al Pleno de este H. Congreso, su aprobación a efecto de que se remita a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión el siguiente:

DECRETO:

UNICO: Se adiciona un párrafo tercero, recorriendo los subsecuentes, al artículo 75 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue:

Artículo 75. ...

...

En los casos que el asunto se tratase de actos de tortura o que lesionen gravemente la dignidad humana, las pruebas que se ofrezcan para demostrar dichos actos deberán admitirse en atención al respeto y protección de los derechos humanos.

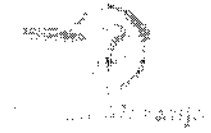
El Órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior.

Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados.

TRANSITORIOS

UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Monterrey, Nuevo León, a fecha de su entrega


Dip. Iris Virginia Reyes de la Torre

Dip. Eduardo Gaona Domínguez

Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz

Dip. Tabita Ortiz Hernández

Dip. Denisse Daniela Puente
Montemayor

Dip. Norma Edith Benítez Rivera

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. María del Consuelo Gálvez
Contreras

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Fariás García

Dip. Héctor García García

**Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
LXXVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León**

La presente foja forma parte de la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, recorriendo la subsecuente, al artículo 75 de la Ley de Amparo



Año: 2023

Expediente: 17297/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. PERLA DE LOS ÁNGELES VILLARREAL VALDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA ADICIONAR EL ARTÍCULO 44 BIS 2, DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, RELATIVO A LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .

La Diputada **PERLA DE LOS ÁNGELES VILLARREAL VALDEZ** y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 87 y 88, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía,, iniciativa con proyecto de Decreto por el que se Reforman la Ley Estatal de Salud, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La enfermedad renal crónica del riñón, consiste en la pérdida gradual de la función renal, pues los riñones son los que se encargan de filtrar los desechos y el exceso de líquidos de la sangre, que despues son excretados en la orina. Cuando esta enfermedad alcanza una etapa avanzada, niveles de líquidos, electrolitos y los desechos pueden acumularse en el cuerpo, lo que pueden resultar peligroso para la salud del ser humano.

Según estudios realizados por la Secretaría de Salud de nuestro país, se ha estimado una prevalencia de enfermedad renal de 12.2 por ciento y una tasa de 51 defunciones por cada 100 mil habitantes. Esto con ayuda de la prevención, se pueden reducir los casos ya que esta endermdad se da a consecuencia de la hipertensión y la diabetes mal controladas. También puede ser causada por la obesidad u otros padecimientos crónicos.

**INICIATIVA EN MATERIA DE ACCIONES Y PROGRAMAS PARA TRATAR Y PREVENIR
LA INSUFICIENCIA RENAL**

Esta enfermedad no se presente por edad, género, ideología o estrato social, ya que puede afectar a cualquiera y las consecuencias de padecerla pueden resultar devastadoras para pacientes, familias y el sistema de salud del Estado.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud señala que en la actualidad existe una estimación de un 10 por ciento de la prevalencia a nivel mundial de la enfermedad renal; además indica existen otras causas de esta enfermedad, como es el uso de diversos agroquímicos, la falta de acceso al agua potable, una mala automedicación, tomar diversos suplementos, la disfunción renal secundaria a enfermedades autoinmunes o de igual forma por el fallo de algún otro órgano en el cuerpo, como en el caso de los síndromes cardiorrenal o hepatorrenal.

Según datos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, indica que la población económicamente activa, de entre los 20 y 60 años de edad, es quien tiene más riesgo de padecer enfermedad renal crónica (ERC)¹.

E indica cuáles son algunos de los principales factores de riesgo para desarrollar enfermedad renal crónica:

- Diabetes
- Hipertensión arterial
- Enfermedad Cardiovascular
- Obesidad
- Enfermedades autoinmunes

¹ Página WEB Oficial de la UANL: <https://www.uanl.mx/noticias/enfermedad-renal-cronica-erc-un-asesino-silencioso/>

- Antecedentes familiares
- Tabaquismo
- Consumo excesivo de medicamentos

Y en el caso de las mujeres:

- Infección en la orina
- Lupus
- Cáncer cervicouterino
- Artritis reumatoide

Ante estos datos, es necesario que se adopten estilos de vida saludable, como es consumir diariamente agua simple, realizar ejercicio, evitar el sobrepeso y la obesidad, reducir el consumo de sales, evitar el consumo de alimentos con aditivos de fosfato o ultraprocesados, así como de bebidas gaseosas y azucaradas, tabaco y en su caso de ser posible, evitar el uso asiduo de antiinflamatorios.

En Nuevo León, no existen campañas que busquen prevenir a la población sobre la insuficiencia renal, una enfermedad silenciosa y que puede ser causada por muchos malestares que hoy en día se presentan en un alto índice en la población, las cuales son necesarias para promover el diagnóstico oportuno para incidir en la modificación de hábitos y estilos de vida; además la Secretaría de Salud del Estado debe garantizar que el personal de salud debe contar con las herramientas clínicas y de laboratorio, para poder realizar los estudios correspondientes y así lograr detectar en etapa temprana a las personas en riesgo, para efecto de brindar el tratamiento apropiado y evitar que la enfermedad evolucione.

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que requiere la integración, articulación y actuación de parte de todas las instituciones sanitarias, para que se establezca un modelo de atención que incluya las intervenciones de prevención y de promoción de la salud.

Por tales motivos, la presente iniciativa tiene como fin que en la Ley Estatal de Salud se establezca que la Secretaría de Salud del Estado, deberá desarrollar programas permanentes para que se incorpore la prevención, la detección oportuna y atención integral de la insuficiencia renal, para lo cual deberán desarrollarse campañas enfocadas a este rubro, así como realizar diversas actividades que coadyuven alertar a la ciudadanía respecto a la insuficiencia renal; pero de igual forma resulta importante que se establezca un sistema de comunicación constante y de seguimiento médico a quienes padecen de esta enfermedad.

Al tratarse de una enfermedad que puede presentarse en cualquier momento, es necesario que por medio de dicha Secretaría se establezcan estas acciones que proponemos, pues la detección oportuna puede traer grandes beneficios en la población en el Sistema de Salud de nuestro Estado; esto en razón de las consecuencias para el paciente, puede derivar en que se vea en la necesidad de que se le trasplante un riñón, lo cual resulta muy complicado pues algunos pacientes entran en una lista de espera que no garantiza que logren dicho trasplante, pues en casos extremos el paciente muere antes de que encuentre un donador, por eso mismo la importancia de la presente iniciativa.

A continuación, con fines de ilustrar la propuesta de reforma se presenta el siguiente cuadro comparativo:

**INICIATIVA EN MATERIA DE ACCIONES Y PROGRAMAS PARA TRATAR Y PREVENIR
LA INSUFICIENCIA RENAL**

LEY ESTATAL DE SALUD	
Texto Actual	Texto Propuesto
SIN CORRELATIVO.	<p>ARTÍCULO 44 BIS 2.- LA SECRETARÍA ESTATAL DE SALUD, DESARROLLARÁ PROGRAMAS PERMANENTES EN LOS QUE SE INCORPORARÁN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL. PARA TALES EFECTOS ESTA AUTORIDAD SANITARIA SE ENCARGARÁ DE:</p> <p>I.- DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL;</p> <p>II.- DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN MÉDICA DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN SUS DOS VARIEDADES, AGUDA Y CRÓNICA, CONFORME LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES;</p> <p>III. NORMAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENCAMINADOS A LA ADVERTENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD POR LA INSUFICIENCIA RENAL;</p> <p>IV.- ESTABLECER UN SISTEMA DE</p>

	COMUNICACIÓN CONSTANTE Y SEGUIMIENTO MÉDICO DE LOS DERECHOHABIENTES DETECTADOS CON INSUFICIENCIA RENAL.
--	--

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el siguiente:

DECRETO

ÚNICO. Se adiciona una artículo 44 Bis 2, de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 44 BIS 2.- LA SECRETARÍA ESTATAL DE SALUD, DESARROLLARÁ PROGRAMAS PERMANENTES EN LOS QUE SE INCORPORARÁN ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL. PARA TALES EFECTOS ESTA AUTORIDAD SANITARIA SE ENCARGARÁ DE:

I.- DESARROLLAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA INSUFICIENCIA RENAL;

II.- DESARROLLAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y ATENCIÓN MEDICA DE LA INSUFICIENCIA RENAL EN SUS DOS VARIEDADES, AGUDA Y CRÓNICA, CONFORME LAS NORMAS MEXICANAS VIGENTES;

III. NORMAR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENCAMINADOS A LA ADVERTENCIA DE PROBLEMAS DE SALUD POR LA INSUFICIENCIA RENAL;

INICIATIVA EN MATERIA DE ACCIONES Y PROGRAMAS PARA TRATAR Y PREVENIR LA INSUFICIENCIA RENAL

IV.- ESTABLECER UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN CONSTANTE Y SEGUIMIENTO MÉDICO DE LOS DERECHOHABIENTES DETECTADOS CON INSUFICIENCIA RENAL.

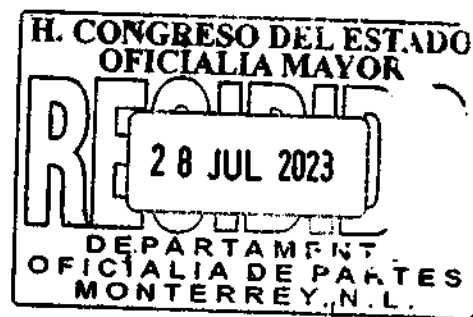
TRANSITORIO:

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Monterrey, N.L., julio de 2023

**GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL**

DIP. PERLA DE LOS ANGELES VILLARREAL VALDEZ



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. RICARDO CANAVATI HDJÓPULOS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA,

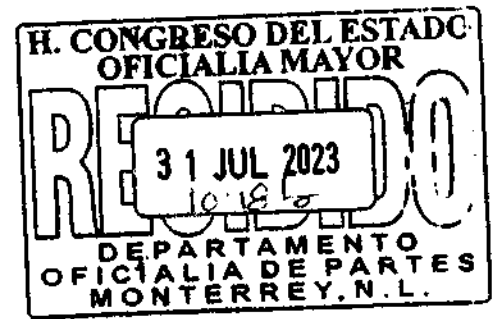
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A LA DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DE LA PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

PRESENTE.

Quien suscribe el **Dip. Ricardo Canavati Hadjópulos** y los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los términos de los artículos 102, 103, 104 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos ante esta Soberanía a promover **iniciativa de Reforma por adición al artículo 2 las fracciones XIII bis 2, XIX, XXIV, XXV, XXVI y al artículo 6, fracción V, todas de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León, en relación a la discapacidad neurológica** lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los principales retos de todo gobierno es adaptar acciones que se traduzcan en el bienestar social. En este sentido la salud de las personas juega un papel prioritario que debe ser atendido a la brevedad para elevar su calidad de vida y atención para su desenvolverse día con día.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad se **define como toda limitación o restricción que origina en una deficiencia temporaria o permanente de una persona, al interactuar con diversas barreras que le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social en igualdad con los demás.**

Así mismo la OMS nos menciona que los trastornos neurológicos son enfermedades del sistema nervioso central y periférico del cerebro a la medula espinal los nervios craneales, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. También se cuenta la epilepsia, las enfermedades de Alzheimer y otras demencias de enfermedades cerebrovasculares.

Las enfermedades más frecuentes en las personas son la Epilepsia, Parkinson, migraña, ictus, esclerosis múltiple, cefaleas, etc. Éstas son consideradas enfermedades y son atendidas como tal, pero es importante señalar que las personas que las padecen requieren de cuidados y atención especial, además de que provocan una angustia significativa o problemas para desenvolverse en la vida.

Estos trastornos afectan los pensamientos, las emociones, los comportamientos y las relaciones, estos incluyen una alta carga de enfermedad como la depresión, el trastorno afectivo bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, la demencia, los trastornos por uso de sustancias, entre muchos otros.

Es importante mencionar que en Nuevo León el INEGI en el 2021 registro una cifra de 1.6 millones de personas que padecen algún problema o condición mental.

Así mismo según estadísticas de la ENADIS 2022, 65.8% de la población de 12 años y más con discapacidad estuvo de acuerdo en que las personas con discapacidad son rechazadas por la mayoría de la gente. Mientras que, 59.9% estuvo de acuerdo en que la mayoría de la gente considera que las personas con discapacidad mental e intelectual son incapaces de tomar sus propias decisiones.¹

¹https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf

Uno de los casos más recientes en este presente año que ha pasado en el Estado de Nuevo León, que fue en el mes de Marzo, donde se registró un trágico accidente automovilístico en cual una persona de 39 años perdió la vida a causa de un ataque epiléptico.²

En el año 2022 reportaron la desaparición de una joven de 19 años en el estado de Nuevo León, su familia comentaba a los medios que estaban preocupados porque la joven sufría de severos ataques epilépticos y necesitaba tomar su medicamento para poder controlarse ya que sufría de convulsiones severas y achaques.³

Vemos como día a día existen habiendo casos de personas que presentan diferentes trastornos neurológicos, y es muy lamentable que a estas personas aun no se les considere como personas con discapacidad, es importante mencionar que, así como existen esos casos hay muchos que no se les presenta la seriedad adecuada.

Es muy importante que **las personas que presentan alguna dificultad mental sean consideradas como una persona con discapacidad** y tengan las mismas oportunidades y derechos que las personas que presentan otros tipos de minusvalía puesto que muchas veces, aunque su enfermedad o trastornos puedan automedicarse no pueden controlar sus acciones y por ende no pueden ser capaces de una vida ordinaria por que al momento que se les presente un ataque no podrán controlar sus impulsos.

²<https://www.telediario.mx/policia/monterrey-conductor-sufre-ataque-epilepsia-avenida-madero>

³<https://www.milenio.com/policia/reportan-desaparicion-de-joven-con-epilepsia-en-monterrey>

Así mismo a pesar de que su discapacidad no sea física, visual o comunicativa al tener esta condición mental la mayoría de las veces se les impide su inclusión plena y efectiva en la sociedad.

Hay que mencionar que las organizaciones o las personas que apoyan a las personas con discapacidad tengan el otorgamiento de estímulos fiscales, pero algo importante de eso es que tengan aptas sus instalaciones para ellos y que realicen algunas acciones que colaboren con políticas públicas que estén realizando tanto legalmente como socialmente.

Con base en los razonamientos expuestos con anterioridad, es que presentamos ante esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. - Adición al artículo 2, fracción XIII Bis 2 y fracciones XIX, XXIV, XXV, XXVI, el Artículo 6, fracción V, todas de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación a la discapacidad neurológica para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entiende por:

I a XIII ...

XIII Bis 2.- Discapacidad neurológica. Aquellas enfermedades, trastornos o alteraciones del sistema nervioso central y periférico que afectan actividades mentales, motoras y sensoriales, las cuales, a pesar de ser controladas, pueden impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

XIV a XVIII...

XIX. Estimulación Temprana: Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales, sensoriales, **neurologicas** y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su maduración;

XX a XXIII...

XXIV. Persona con Discapacidad: Toda persona que presenta una deficiencia física, mental, **enfermedad neurológica**, o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social;

XXV. Prevención: La adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, intelectuales, **neurológicas**, mentales y sensoriales en el individuo;

XXVI. Rehabilitación: Proceso de duración limitada y con un objetivo definido, de orden médico, social y educativo entre otros, encaminado a facilitar que una persona con discapacidad alcance un nivel físico, **neurologico** y sensorial óptimo, que permita compensar la pérdida o recuperar total o parcialmente una función, así como proporcionarle una mejor inclusión social;

XXVII. a XXX...

Artículo 6.- Son facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado en materia de esta Ley, las siguientes:

I. a IV...

V. Promover el otorgamiento de estímulos fiscales a personas físicas o morales que realicen acciones en favor de las personas con discapacidad, **adecuen sus instalaciones en términos de accesibilidad, o de cualquier otra forma se adhieran a las políticas públicas en materia, y estímulos fiscales para las personas con discapacidad, incluyendo las que padecen enfermedades neurológicas en terminos de la legislación aplicable;**

VI. a XII...

...

...

Transitorios

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.



DIP. RICARDO CANAVATI HADJÓPULOS



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. RICARDO CANAVATI HDJÓPULOS, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA,

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN RELACIÓN A ADICIONAR DERECHOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL

PRESIDENTE DE LA PERMANENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

P R E S E N T E .

Quien suscribe el **Dip. Ricardo Canavati Hadjópulos** y los diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LXXVI Legislatura al Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 86 y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como en los términos de los artículos 102, 103, 104 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, acudimos ante esta Soberanía a promover **iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma por adición al artículo 14 las fracciones IV, V, VI y VII de la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Nuevo León, en relación adicionar derechos a las personas con discapacidad** lo anterior bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las personas con discapacidad en México luchan por acceder a mejores condiciones de vida y derechos como la salud, educación, en su vida diaria así como el entorno físico, el transporte y servicios públicos. Es por esto que es muy importante y fundamental los derechos de las personas con discapacidad.

Antes bien no deberíamos cansarnos nunca de reivindicar los derechos de todas las personas, pero especialmente de aquellas que tienen más dificultades, ya que es la sociedad en su conjunto la que debe luchar por los derechos y por la dignidad de las personas, buscando que se cumplan con sus derechos para todos y por

todos, de tal manera que las distintas carencias de cada uno o de algún colectivo queden apoyadas ya que cada vez podamos decir que nuestra sociedad es más inclusiva y que nadie quede marginado por una discapacidad o por otro motivo que pudiera llevar a la discriminación.

Ahora bien hablar de discapacidad es presentar un tema muy amplio que implica abordar varios aspectos alrededor de este término, ¿a qué se refiere la palabra discapacidad? Cuando hablamos de discapacidad nos referimos a las limitaciones o dificultades que tiene una persona para llevar a cabo acciones o tareas en situaciones cotidianas y vitales debido a una condición física o mental.

De igual modo dichas dificultades impactan en la persona puesto que su interacción se ve limitada por la forma en que se organiza la sociedad y el mundo, lo cual impide que logre desarrollarse plenamente. Por ejemplo, una persona que tiene una condición física que le dificulta desplazarse en el espacio y requiere utilizar una silla de ruedas, puede verse aún más limitada si el camino que necesita recorrer no es el adecuado para poder moverse.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, “las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales (como de audición o visión) a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás

En constancia con el último informe realizado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, en todo el mundo existen más de mil millones de personas con discapacidad, lo que representa aproximadamente 15% de la población mundial. Esta cifra sigue aumentando debido al envejecimiento de la población y a las enfermedades crónico-degenerativas

La **ENADIS 2022** da continuidad al ejercicio realizado en **2017** por el INEGI, en colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que profundizó en las causas y los efectos de la discriminación.

Acorde con los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2022 (ENADIS). Entre este grupo de población, **33.5%** de la población de 12 años y más con discapacidad opinó que en el país sus derechos se respetan *poco*. Por otro lado, **25.1%** opinó que sus derechos se respetan *mucho*. También nos menciona que en ese mismo años el **31.9%** de la población con discapacidad declaró como la principal problemática a la que se enfrentan es que las *calles, instalaciones y transportes son inadecuados a sus condiciones*, seguido de los *costos en cuidados, terapias y tratamientos* con **21.7** por ciento.¹

Un factor muy importante en esto es que nos menciona la encuesta que se les ha negado injustificadamente alguno de sus derechos en los últimos 5 años esto se refirió la *negación de recibir apoyos de programas sociales (becas, BIENESTAR, etcétera)*, seguido de la *atención médica o medicamentos*. Así mismo la discapacidad, además de ser un problema físico, es un problema económico y social, pues el entorno y los estereotipos pueden contribuir a su desarrollo y a la desigualdad de oportunidades de quienes la padecen.

Es necesario cambiar el paradigma que entiende la discapacidad como un problema que debe ser atendido por las instituciones de salud, a uno en que también los responsables de la educación, el trabajo, el acceso a servicios y la justicia deben atender a esta minoría.

¹ https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2022/doc/enadis2022_resultados.pdf

Que se pueda ver en la sociedad la integración real de las personas con discapacidad, formando parte como uno más de la sociedad, en donde se procuren los apoyos necesarios y que para ello se elabore un proceso que cambie la mentalidad de las personas y se rompa los prejuicios.

Por ello, es una necesidad que la sociedad reconozca la urgencia de proporcionarles a todas las personas la oportunidad de una vida plena y armónica.

CAPÍTULO III	
DE LA ACCESIBILIDAD	DE LA ACCESIBILIDAD
<p>Artículo 14.- Los derechos de las personas con discapacidad se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos de las personas con discapacidad los siguientes:</p> <p>I a III...</p> <p>...</p> <p>...</p>	<p>Artículo 14.- Los derechos de las personas con discapacidad se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos de las personas con discapacidad los siguientes:</p> <p>I a III...</p> <p>...</p> <p>...</p> <p>IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite,</p>

	<p>solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.</p> <p>V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud, habilitación y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización, género y en su caso, precio asequible, que busquen en todo momento su bienestar físico y mental.</p> <p>VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma gratuita por los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad, en los términos de esta Ley y las que resulten aplicables.</p> <p>VII. El derecho a que se implementen los ajustes razonables en áreas y espacios públicos que les permitan el goce y disfrute de la infraestructura urbana y de servicios.</p>

Con base en los razonamientos expuestos con anterioridad, es que presentamos ante esta Soberanía el siguiente proyecto de:

DECRETO

PRIMERO: SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 14 , LAS FRACCIONES IV, V, VI Y VII LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CAPÍTULO III DE LA ACCESIBILIDAD

Artículo 14.- Los derechos de las personas con discapacidad se consagran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y los Tratados Internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano.

Sin perjuicio de lo anterior, para efectos de la presente Ley se entenderán por derechos de las personas con discapacidad los siguientes:

I a III...

IV. El derecho de facilidad para su plena incorporación a las actividades cotidianas: para contar con una atención preferente, ágil, pronta y expedita cuando se encuentran realizando algún trámite, solicitando algún servicio o participando de algún procedimiento ante cualquier autoridad local; así como ser atendidos por particulares que brinden algún servicio público.

V. El derecho a gozar del nivel más alto de salud: para contar con servicios de salud, habilitación y rehabilitación, bajo criterios de calidad, especialización,

género y, en su caso, precio asequible, que busquen en todo momento su bienestar físico y mental.

VI. El derecho a recibir orientación jurídica oportuna: para ser asesorado en forma gratuita por los entes públicos y en condiciones adecuadas para cada tipo de discapacidad, en los términos de esta Ley y las que resulten aplicables.

VII. El derecho a que se implementen los ajustes razonables en áreas y espacios públicos que les permitan el goce y disfrute de la infraestructura urbana y de servicios.

Transitorios

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

R. Cant.

DIP. RICARDO CANAVATI HADJÓPULOS



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. LORENA DE LA GARZA VENECIA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 111 BIS DE LA LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO POR RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHÍCULOS.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): MOVILIDAD

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E .



La Diputada **LORENA DE LA GARZA VENEZIA** y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Septuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 87 y 88, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, presentamos ante esta Soberanía, **iniciativa en materia de aseguramiento por responsabilidad civil de vehículos**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desafortunadamente la cultura del seguro en nuestro país es muy poca, a pesar de los esfuerzos que se han realizado para que las personas hagan uso de estas herramientas y puedan contar con un respaldo al momento de imprevistos del día a día, que no solamente ponga en peligro su integridad sino también su patrimonio.

En este caso en específico nos referiremos especialmente a lo importante que representa que los automovilistas cuenten con un seguro de responsabilidad civil, que cubra daños ocasionados a personas y al patrimonio, debido a que se tiene registrado un alto índice de accidentes.

A nivel nacional, de acuerdo con el Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial México 2020, del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, de la Secretaría de Salud, las personas con una edad de 20 a 39 tienen

el 46.7 % del total de los egresos hospitalarios causado por un accidente vial, le siguen niñas, niños y adolescentes de 10 a 19 años, con un 22.6 %, y las personas adultas de 40 a 59, con un 18.5 %.

Siguiendo con el informe anteriormente mencionado, en el Estado de Nuevo León en el año 2019 se mantiene se registraron 10,221 accidentes, siendo los municipios con un mayor registro el de Monterrey, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, San Pedro Garza García y Gral. Escobedo.

Ahora bien, a nivel nacional, del total de accidentes se desprende que hubo 14,673, siendo las y los peatones quienes concentran el mayor porcentaje de fallecimientos: 3,120 atropellamientos fatales (21.3 %), le siguen las y los ocupantes de vehículo con 2,283 fallecimientos (15.6 %), las y los motociclistas con 1,952 (13.3 %), las y los ciclistas con 128 (0.9 %) y otras con 33 (0.2 %).

Continuando con el Informe del Secretariado, las cinco entidades federativas que presentaron el mayor porcentaje de defunciones por accidentes de tránsito en 2019 fueron el Estado de México con un 8 %, Jalisco un 7.2 %, Guanajuato un 7 %, Puebla un 4.7 % y Nuevo León un 4.6 %.

A menudo no se piensa en la importancia que significa contar con un seguro para vehículo, hasta que se tiene un percance, o víctimas de la delincuencia y es robado; siendo la desinformación uno de los principales motivos por los cuales se desisten para adquirir una póliza que cubra tales siniestros, otros motivos sería la percepción de que no sirven para nada, y de que son costosos.

Un accidente vehicular, en particular, puede poner en menoscabo el patrimonio de una familia, tanto por los daños que se cause a uno mismo como los daños a un

tercero, por tal motivo, es primordial que la sociedad nuevoleonense entienda la importancia de tener un seguro y respaldarse con mecanismos financieros para proteger su patrimonio.

Volviendo al tema de la cultura del seguro, encontramos que se tiene una relación directa con la oferta que las aseguradoras le hacen a la población; por supuesto que hay que incluir las condiciones y variables económicas, sin embargo, hoy en día se cuenta con una amplia oferta de instituciones que prestan el servicio de aseguradoras, dando la posibilidad de que se pueda contratar e que mejor se ajuste a las necesidades del automovilista.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México existen 54 millones de personas económicamente activas y, de éstas, según confirma la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), tan sólo el 22% cuenta con algún tipo de seguro.

Por tales razones, es que se debe cambiar el paradigma que se tiene en nuestro estado respecto a la contratación de los seguros de responsabilidad civil, es decir los seguros que cubren daños ocasionados por automóviles

En este sentido, es necesario buscar que las y los nuevoleonenses adquieran mayor responsabilidad, respecto a la protección de su integridad física y de su patrimonio, mediante el acercamiento con las aseguradoras.

Por lo anteriormente expuesto es que me dirijo a esta Soberanía para presentar el siguiente:

DECRETO

Primero. Se adiciona un artículo 111 Bis a la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 111 Bis. Los vehículos motorizados particulares deberán contar con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente, para responder del pago de la indemnización por los daños ocasionados en cualquier siniestro de tránsito en donde resulte involucrado un tercer, y cuya contratación será responsabilidad de la persona propietaria del Vehículo.

Dicha póliza de seguro deberá ser expedida por una institución de seguros debidamente autorizada según las leyes aplicables en la materia; y deberá ampare cuando menos la responsabilidad civil por daños a terceros, tanto en su persona como en su patrimonio.

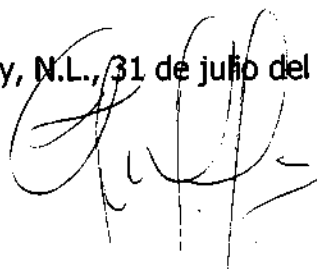
TRANSITORIO:

Primero: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo: Los Municipios contarán con 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto para que adecuen sus Reglamentos Municipales para vigilar el cumplimiento para que los vehículos particulares cuenten con póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros vigente, expedida por una institución de seguros debidamente autorizada según las leyes aplicables en la materia; que ampare al menos la responsabilidad civil por daños a terceros en su persona y en su patrimonio.

Tercero: Para los efectos señalados en el artículo 111 Bis, se tendrá un periodo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para que las autoridades Municipales, puedan modificar los reglamentos internos a fin de establecer las sanciones correspondientes derivadas del incumplimiento de lo establecido en la presente reforma.

Monterrey, N.L., 31 de julio del año 2023



LORENA DE LA GARZA VENECIA
GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL



Año: 2023

Expediente: 17301/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA,

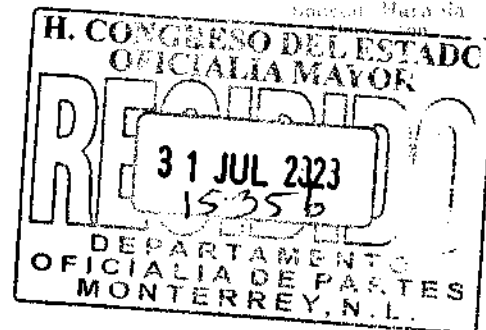
ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-

Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Iraís Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas, María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que lamentablemente ha ido en aumento a nivel mundial, en nuestro país se estima que en lo que va de este año las denuncias de violencia y maltrato al interior del núcleo familiar ascienden

aproximadamente a 92, 228 casos, siendo Nuevo León la entidad que ocupa el tercer lugar con 10, 474 casos denunciados.^{1,2}

En el caso de la violencia familiar contra las personas adultas mayores, se estima que en México la prevalencia es del 32.1 %, siendo diversos los tipos de violencia o maltrato que sufren por parte de familiares, gente cercana a su entorno o incluso en instituciones, entre estos tipos de violencia podemos mencionar el maltrato psicológico, las agresiones físicas o verbales, la violencia económica y el abandono.³

Las personas adultas mayores que viven con familiares o cuidadores de confianza pueden ser vulnerables con mayor facilidad debido a que al realizar sus actividades cotidianas como comer, vestirse, bañarse o trasladarse de un lugar a otro dependen de la ayuda de otros miembros de la familia o personas que los cuidan, además, las personas adultas mayores que han sufrido violencia intrafamiliar tienen impactos negativos en su salud mental y física que los pone en riesgo de adquirir otras enfermedades como la depresión o ansiedad.⁴

Según las cifras proporcionadas por el INEGI, en nuestro estado habitan aproximadamente 655 mil personas de 60 años y más, esto pone en relevancia la importancia que tiene este sector de la población en nuestra sociedad.⁵

¹ <https://www.milenio.com/politica/van-281-feminicidios-hasta-abril-de-2023-sesnsp>

² <https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadisticas-por-tipo-de-delito>

³ <https://www.gaceta.unam.mx/en-mexico-casi-un-tercio-de-adultos-mayores-sufre-maltrato/>

⁴ https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-8610-7_5

⁵ <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=19#collapse-Resumen>

Según la Encuesta Nacional Sobre Discriminación (ENADIS) 2017 realizada por parte del INEGI, se mostraron los siguientes resultados: el 16.1% de las personas mayores declaró haber sido discriminada en el último año, al menos en un ámbito social (calle, transporte público, trabajo o escuela, familia, entre otros); mientras, en esta misma encuesta se observó que el 24.8% de las personas mayores declaró que al menos presentó un incidente de negación de derechos en los últimos cinco años; cabe destacar que el 61.1% de las personas adultas mayores consideró que fueron discriminados en los últimos cinco años solamente por su condición de ser un adulto mayor; asimismo, el 44.9% de las personas mayores opinó que en el país se respetan poco o nada sus derechos.⁶

La Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, de la cual México es parte, ha reconocido la necesidad de contar con todos los mecanismos estatales que protejan y garanticen los derechos humanos y libertades fundamentales de este sector poblacional.

Entre las directrices que los organismos internacionales destacan para el pleno aseguramiento de los derechos de las personas adultas mayores, se destacan una vida basada en el respeto y la no violencia tomando en cuenta los principios de autonomía e independencia de las personas mayores⁷; en este sentido,

⁶ Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. ENADIS 2017. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis2017_resultados.pdf

⁷ http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

consideramos que es de suma importancia que las personas mayores tengan herramientas para la prevención de la violencia en todos sus tipos, tanto en su entorno familiar como social o institucional.

En cuanto a la violencia insitucional contra las personas adultas mayores es igual de alarmante, este tipo de violencia se refiere a cualquier forma de abuso que ocurre en servicios dirigidos a este grupo poblacional como pueden ser los servicios gubernamentales, financieros, de salud, etcétera.⁸

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufre malos tratos en instituciones de salud, financieras o gubernamentales. No obstante, de acuerdo con este organismo el maltrato de las personas mayores sigue siendo una prioridad mundial de muy poca importancia⁹.

El acceso de las personas adultas mayores a los servicios gubernamentales y de salud debe estar priorizada por estados democráticos como el nuestro donde se debe velar por la tutela efectiva de los derechos de todas y todos los ciudadanos.

El incremento de delitos y vulneración a los adultos menores es una realidad lamentable en nuestro estado, según datos de la procuraduría del adulto mayor, en el contexto de la post pandemia, los casos de quejas y denuncias aumentaron entre

⁸ Yongjie Yon and others, The prevalence of elder abuse in institutional settings: a systematic review and meta-analysis, *European Journal of Public Health*, Volume 29, Issue 1, February 2019, Pages 58–67, <https://doi.org/10.1093/eurpub/cky093>.

⁹ <https://academic.oup.com/eurpub/article/29/1/58/5033581?guestAccessKey=482da8b7-f9f4-4205-811d-0dd9788cddb1&login=false>

40 y 50 reportes por diversas situaciones que ponen en riesgo a los adultos como lo son la violencia y el abandono.¹⁰

En virtud de lo anterior, consideramos que es necesario que nuestro marco jurídico se actualice para fortalecer y garantizar los derechos humanos de las personas adultas mayores en el tema de la prevención de todo tipo de violencia y crear entornos familiares seguros así como servicios institucionales que garanticen el trato digno y respetuoso a las personas adultas mayores.

A través de la concientización, divulgación y capacitación de los servidores públicos, profesionales de servicios sociales y todas aquellas personas que tengan un trato con las personas adultas mayores con el propósito de que se conozca acerca de las distintas manifestaciones de la violencia, con el objetivo de garantizar un trato respetuoso y prevenir situaciones de negligencia, violencia y maltrato contra este sector poblacional.

En mérito de lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. – Se Reforma la Fracción XX del Artículo 24 y se Adicionan las Fracciones XXI y XXII al Artículo 24, recorriéndose la subsecuente, a la Ley de los Derechos de

¹⁰ <https://www.posta.com.mx/nuevo-leon/persiste-el-maltrato-a-los-adultos-mayores-en-nuevo-leon/588769>

las Personas Adultas Mayores en el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 24.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes facultades:

I. a XIX. ...

XX. Promover e impulsar en las personas Adultas Mayores el interés por la investigación e innovación en la ciencia y la tecnología;

XXI. Fomentar el establecimiento y fortalecimiento de herramientas para prevenir la violencia, en todas sus formas, abarcando la familia, el hogar, los lugares de cuidado a largo plazo y en la sociedad, para asegurar la protección efectiva de los derechos de las Personas Adultas Mayores;

XXII. Impulsar campañas de concientización y formación encaminadas a los funcionarios públicos, profesionales de servicios sociales y del ámbito de la salud, así como personal encargado del cuidado y atención a las personas adultas mayores, acerca de las distintas manifestaciones de la violencia, con el objetivo de garantizar un trato respetuoso y prevenir situaciones de negligencia, violencia y maltrato; y

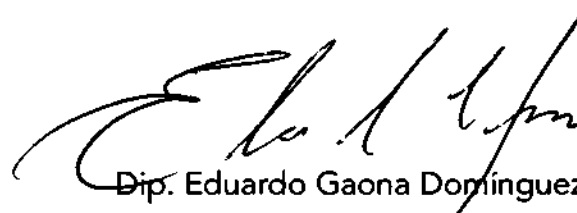
XXIII. Las demás que establezca esta Ley o que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Instituto, y las que establezcan otros ordenamientos jurídicos.

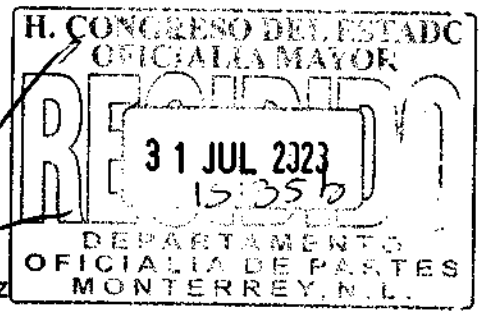
TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del presente Decreto, estas se realizarán atendiendo a la suficiencia presupuestal.

Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 31 días del mes de Julio de 2023.


Dip. Eduardo Gaona Domínguez



Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortíz


Dip. Norma Edith Benítez Rivera


Dip. Iris Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández


Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES
EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. EDUARDO GAONA DOMÍNGUEZ, COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO MOVIMIENTO CIUDADANO DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA Y ADICIÓN A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

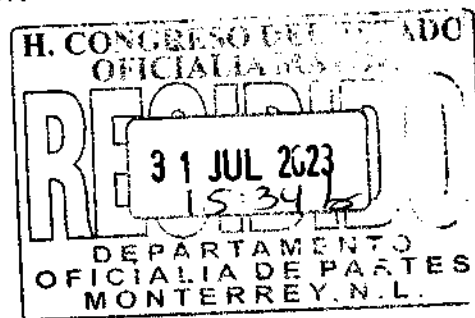
SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): SALUD Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor



DIP. MAURO GUERRA VILLARREAL
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
P R E S E N T E.-



Quienes suscriben, Diputado Eduardo Gaona Domínguez e integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano de la LXXVI Legislatura de este H. Congreso, Diputadas Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz, Norma Edith Benítez Rivera, Irais Virginia Reyes de la Torre, Tabita Ortiz Hernández, Denisse Daniela Puente Montemayor, María Guadalupe Guidi Kawas y María del Consuelo Gálvez Contreras; y Diputados Carlos Rafael Rodríguez Gómez, Roberto Carlos Farías García y Héctor García García, con fundamento en lo establecido por los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La migración es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años, a nivel mundial se estima que existen alrededor de 184 millones de personas, es decir, el 2,3 por ciento de la población mundial viven fuera de su país de nacionalidad y casi la mitad de ellos se encuentran en países de ingresos bajos y medianos, esto

según el último informe de migración, refugiados y sociedad que elabora el Banco Mundial.¹

Entre los grupos de mayor vulnerabilidad al fenómeno migratorio o al desplazamiento forzado encontramos un gran número de mujeres (incluidas mujeres embarazadas y lactantes), niñas, niños, y adolescentes (NNA), incluidos NNAs separados/as y no acompañados/as, lamentablemente existen muchos factores que los ponen en una situación de riesgo, desprotección a sus derechos humanos y muchas veces la falta de identidad en el caso de las infancias.

Actualmente en México, el fenómeno migratorio se ha ido acrecentando y se estima que a partir del 2022 esta dinámica migratoria en México adquirió una rápida evolución, según los informes de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) a partir de ese año se sumaron niveles sin precedentes de personas migrantes que llegan por tierra a México cruzando a través de Centroamérica desde la República Bolivariana de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Haití, o incluso desde países de África, Asia, y Europa (incluyendo Rusia y Ucrania).²

En cuanto a niñas y niños nacidos en un país extranjero de padres migrantes la mayoría no cuenta con una identidad legal, esto sucede porque en la mayoría de los casos los padres y madres extranjeros no cuentan con un documento de identidad oficial, además de la falta de información y otras limitantes en el acceso

¹ <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2023>

² <https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2023-03/Perfil%20Migratorio-%20Boletin%20Anual%202022%20%283%29.pdf>

a servicios de registro civil ha provocado un rezago en el registro de niñas y niños mexicanos de padres extranjeros.

Una niña o niño que no es registrado y no cuenta con un acta de nacimiento, no tiene identidad legal, esto representa una gran limitante para acceder a otros derechos a lo largo de su vida, como son el derecho a la salud y a la educación principalmente, impidiendo además su pleno desarrollo y su inclusión en la vida económica, política y cultural del país.

El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) como por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de los diversos tratados e instrumentos internacionales ratificados por México; al no tener un acta de nacimiento, los niños y niñas sufren exclusión y discriminación y el no reconocimiento a sus derechos humanos.

Cada vez son más las niñas y niños que nacen en el territorio mexicano de padres extranjeros y es necesario que se establezcan directrices claras y políticas públicas que garanticen los derechos humanos en favor de las infancias, esencialmente que se protega su derecho a la identidad como un derecho básico para tener acceso a otros derechos como lo son la salud, la educación, etcétera.

Según datos de la UNICEF, en México existen aproximadamente 1 millón de personas de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento, de ellas, más de 600 mil son niñas, niños o adolescentes.³

En el programa para la universalización de la identidad civil en las Américas, la Organización de Estados Americanos ha establecido un modelo para la legislación de registros civiles en donde se garantice de manera plena el derecho a la identidad; en este sentido, consideramos necesario que el Registro Civil de nuestra entidad priorice el derecho a la identidad de niñas y niños nacidos en México de padres migrantes a través de módulos de atención en puntos estratégicos como lo son albergues, estaciones migratorias y refugios de personas migrantes con el propósito de facilitar el registro de niñas y niños y adolescentes de forma inmediata y gratuita.

Así mismo, se considera de suma relevancia la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, referente al interés superior de las niñas, niños y adolescentes:

"DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE.

³ <https://www.unicef.org/mexico/informes/derecho-la-identidad>

El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y

tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate.”⁴

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. - Se Adicionan los Párrafos Segundo y Tercero al Artículo 19 y un Párrafo Tercero al Artículo 22 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

Con la finalidad de posibilitar la inscripción de niñas, niños y adolescentes en el Registro Civil del estado de forma gratuita e inmediata, se implementarán campañas de manera mensual a través de módulos de registro en establecimientos como albergues, centros de detención, estaciones migratorias y refugios de personas migrantes y solicitantes de asilo.

No se podrá realizar ningún tipo de acto administrativo migratorio, detención o retención en perjuicio de las madres o padres de las niñas, niños o adolescentes tendientes a ser inscritos en el registro civil, ya sea en las instalaciones de dicha dependencia o en los módulos a los que hace referencia el párrafo anterior.

Artículo 22. ...

⁴ <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2020401>

...

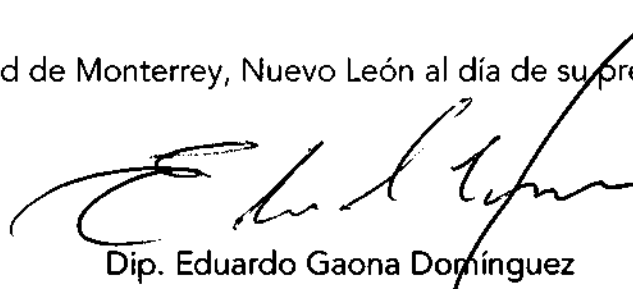
Con la finalidad de que niñas, niños y adolescentes puedan cumplir con los requisitos para la obtención de la nacionalidad mexicana, se implementarán directrices simplificadas y diferenciadas por parte de la autoridad competente en la tramitación, por lo tanto, se prohibirá exigirles documentos de complicado acceso de su país de origen, al existir controversia, se considerara a favor priorizando el interés superior del menor.

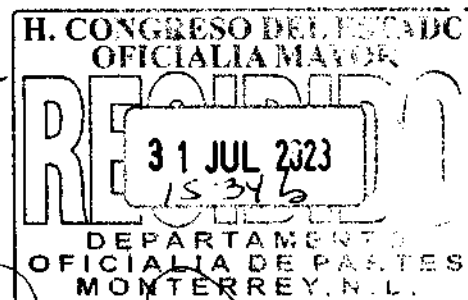
TRANSITORIOS

PRIMERO. – El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO. - Para dar cumplimiento a las obligaciones emanadas del presente Decreto, estas se realizarán atendiendo a la suficiencia presupuestal del Gobierno del Estado.

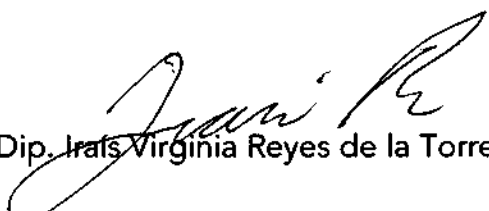
Dado en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León al día de su presentación.


Dip. Eduardo Gaona Domínguez




Dip. Sandra Elizabeth Pámanes Ortiz


Dip. Norma Edith Benítez Rivera


Dip. Iratze Virginia Reyes de la Torre

Dip. Tabita Ortiz Hernández


Dip. Denisse Daniela Puente Montemayor

Dip. María Guadalupe Guidi Kawas

Dip. Carlos Rafael Rodríguez Gómez

Dip. Roberto Carlos Farías García

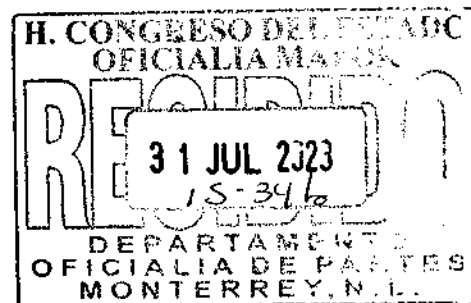
Dip. Héctor García García

Dip. María del Consuelo Gálvez Contreras

Integrantes del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano

H. Congreso del Estado de Nuevo León

LA PRESENTE FOJA FORMA PARTE DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.



Año: 2023

Expediente: 17303/LXXVI

H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 1 DE LA LEY QUE CREA LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Grupo Legislativo MORENA



Diputado Mauro Guerra Villarreal

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León. LXXVI Legislatura.

P r e s e n t e.

Diputada Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, integrante del Grupo Legislativo del partido MORENA en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, con base en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía iniciativa de reforma por adición al artículo 1 de la Ley que crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Hoy día y derivado de los altos índices de violencia contra la mujer, resulta de suma importancia el actuar policial con una visión de género, por lo que este principio debe ser imperativo para cualquier elemento policiaco en el cumplimiento de sus funciones.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4° el principio de igualdad entre el hombre y la mujer, mismo que se encuentra reglamentado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dentro de la cual se prevé la obligación del Gobierno Federal de emitir una política nacional en materia de igualdad.

Ahora bien, la perspectiva de género se entiende como una herramienta que visibiliza y analiza las condiciones culturales, económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación basada en el sexo, por ello, es pertinente que la formación de los cuerpos policiacos permita dar cuenta de cómo la violencia contra las niñas y las mujeres representa una vulneración de sus derechos, ya que su labor es indispensable en la tarea de la eliminación de todas las formas de violencia que se ejercen hacia las mujeres.

Adicionalmente el género debe sustentarse en el artículo 1° constitucional párrafo V, donde se fundamenta la discriminación, ya que muchas de las transgresiones de género se derivan de actos discriminatorios, el cual debe evitarse y erradicarse en las funciones del Policía.

Así las cosas, la perspectiva de género implica la responsabilidad del Policía para reconocer que la diferencia sexual conlleva atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual y que no tienen fundamento, ya que se utiliza como una herramienta de análisis que permite identificar las diferencias entre mujeres y hombres y cómo éstas se traducen en desigualdad y discriminación. Su propósito es conocer las raíces y consecuencias de dicha desigualdad en la vida de mujeres y hombres y cómo esto afecta el quehacer policial.

En virtud de lo anterior, el objetivo en la función policial es hacer visible las inequidades y proponer mecanismos de intervención pública para lograr la igualdad de oportunidades y de atención.

Aunado a lo anterior, es importante que reconozcamos las situaciones de vulnerabilidad que contribuyen a que las

mujeres sean víctimas de delitos, con la intención de allegarse de la información necesaria para su actuación y no reproducir o revictimizarlas, así como poder brindar la atención que se requiera.

Por ello, considero pertinente que dentro de la prestación de servicios de educación continua y de educación formal en los niveles medio superior y superior que realiza la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León y que tiene como objeto incidir en el mejoramiento de la prestación de la función del Sistema Integral de Seguridad Pública, se incluya dentro de sus principios el de la **perspectiva de género** para que la formación de los elementos de seguridad sea bajo esta visión y poder otorgar herramientas para que puedan desarrollar conocimientos sobre la perspectiva de género que coadyuven a la prevención, atención, sanción y eliminación de todas las formas de violencia que viven las mujeres en nuestra entidad.

Por los anteriores argumentos, es que considero pertinente la presente iniciativa de reforma a la **Ley que crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León**, en los términos siguientes:

DECRETO

Artículo único: Se reforma por adición el artículo 1 de la Ley que crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León para quedar como sigue:

Artículo 1. Se crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Nuevo León, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será responsable de la profesionalización de las instituciones que conforman el Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, mediante la prestación de servicios de educación continua y de educación formal en los niveles medio superior y superior, con el objeto de incidir en el mejoramiento de la prestación de la función del Sistema Integral de Seguridad Pública, bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, **perspectiva de género** y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León, agosto 01 de 2023


Dip. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda
Coordinadora de la Bancada 4T



H. Congreso del Estado de Nuevo León



LXXVI Legislatura

PROMOVENTE: C. DIP. ANYLÚ BENDICIÓN HERNÁNDEZ SEPÚLVEDA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL DE LA LXXVI LEGISLATURA

ASUNTO RELACIONADO: MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 271 BIS 2 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN MATERIA DE CIBERACOSO.

INICIADO EN SESIÓN: 02 DE AGOSTO DEL 2023

SE TURNÓ A LA (S) COMISION (ES): JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

Mtra. Armida Serrato Flores

Oficial Mayor

Grupo Legislativo Morena



Diputado Mauro Guerra Villarreal

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León. LXXVI Legislatura.

P r e s e n t e.

Diputada **Anylú Bendición Hernández Sepúlveda**, Diputada Local perteneciente al **Grupo Legislativo Movimiento de Regeneración Nacional MORENA** en la LXXVI Legislatura del Congreso del Estado, con base en los artículos 87 y 88 de la Constitución Política del Estado, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía **iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Nuevo León en materia de ciberacoso**, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En épocas recientes y, particularmente con la llegada del nuevo milenio, se han visto muchos avances tecnológicos a nivel mundial, tal como fue, por ejemplo, la llegada del internet a nuestras vidas.

Este fenómeno tecnológico hizo lo que muchos pensaban que jamás iba a suceder: estar conectados en tiempo real desde diversas partes del mundo a través de distintas aplicaciones tecnológicas, lo que permitió que las brechas de la comunicación se acortaran.

Hoy día podemos estar comunicados a través de muchas maneras y desde distintos lugares del mundo, al aprovechar las facilidades y herramientas que el mundo global nos ofrece.

Las llamadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación son, principalmente, herramientas al alcance de todos para hacer más eficientes los procesos comunicativos entre personas y organizaciones, así como también para ayudar en la formación académica y profesional de las y los estudiantes a nivel mundial.

En meses recientes, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación cobraron especial relevancia debido a la pandemia de Covid-19, ya que fueron utilizadas como herramientas educativas y laborales en prácticamente todo el mundo.

Sin embargo, cuando estas tecnologías se emplean de diversa manera para las que fueron creadas o por los grandes volúmenes de información que en ellas se manejan, surgen problemáticas que, incluso, pueden dañar la vida de la persona o personas con las que se tiene comunicación o se pueden llegar a cometer ilícitos a través de estas.

Un claro ejemplo de las actividades ilícitas que se cometen mediante estas herramientas es el ciberacoso, el cual puede presentarse de diferentes formas.

De acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), existen cinco maneras en que el ciberacoso se manifiesta actualmente, a saber:

- a) Ciberbullying.
- b) Sextorsión.
- c) Grooming.
- d) Ciberviolencia de género.
- e) Sexting.

Es preciso señalar que este tipo de conductas de violencia se presenta entre las y los jóvenes en la mayoría de sus casos, afectando considerablemente la salud de la víctima en el aspecto psicológico, causándole un desequilibrio emocional que se manifiesta a través de distintas formas como el aislamiento social, la depresión o el desánimo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 21% de la población de 12 años o más y que son usuarios de internet han sido víctima de acoso, siendo el género femenino las que experimentaron el mayor número de insinuaciones o propuestas sexuales con un 35%.

Cabe destacar que, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) levantada durante el año 2020, en México 75% de la población de 12 años y más utilizó Internet en cualquier dispositivo en el periodo comprendido entre julio y noviembre de 2020.

Del 75% de la población antes mencionada, el 21% declaró haber vivido alguna situación de acoso cibernético entre los meses de octubre de 2019 y noviembre de 2020, siendo las mujeres las que mayor sufrieron acoso; es decir, con un 22.5% y los hombres con 19.3%.

Ahora bien, el ciberacoso se encuentra tipificado como delito en diversas entidades de nuestro país. Sin embargo, el Código Penal para el Estado de Nuevo León tipifica el delito de acoso sexual en su Artículo 271 Bis 2 y establece que quien por cualquier medio asedie, acose, se exprese de manera verbal o física de términos, conceptos, señas, imágenes que tengan connotación sexual, lasciva o de exhibicionismo corporal o se aproveche de cualquier circunstancia de necesidad o de desventaja de la víctima a una o más personas de cualquier sexo, sin que la víctima haya otorgado su consentimiento se le impondrá una pena de dos a cuatro años de prisión y multa hasta de cincuenta cuotas.

Por eso la pertinencia de la presente iniciativa, ya que cuando las víctimas de acoso sexual acuden ante la Fiscalía General de Justicia, al momento de presentar la denuncia se encuentran con el obstáculo de que los Agentes del Ministerio Público no logran encuadrar el tipo penal del acoso sexual con la conducta denunciada, que es, particularmente,

el envío de imágenes con contenido sexual sin que la víctima haya manifestado su consentimiento.

Lo anterior, provoca que quienes son objeto de esta conducta no logren presentar su denuncia y, por ende, la autoridad investigadora no realice su trabajo, poniendo en riesgo el estado de salud e, incluso, en muchas ocasiones, la integridad física de la víctima.

Por lo anteriormente expuesto, Diputada Presidente le solicito turnar a la Comisión competente, para que dictamine con carácter urgente y obvia resolución y el Pleno de este Congreso del Estado de Nuevo León apruebe el siguiente proyecto de:

DECRETO

Único.- Se adicionan los párrafos sexto y séptimo al Artículo 271 Bis 2 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Artículo 271 Bis 2.- *(Comete el delito de acoso sexual...)*

...

...

...

...

Si el acoso sexual se realiza con fines lascivos y utilizando la coacción, intimidación, inducción, seducción o engaño, entablando comunicación a través de cualquier

Tecnología de la información y de la comunicación, con una persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho aún con su consentimiento y le requiera y/o envíe imágenes, audio o video d actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual se le denominará ciberacoso.

La sanción para esta conducta será de dos a seis años de prisión y de 400 a 600 días de multa con base al valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA).

TRANSITORIO

ÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

ATENTAMENTE

Monterrey, Nuevo León, agosto 02 de 2023

C. Anylú Bendición Hernández Sepúlveda
Diputada Local perteneciente al Grupo Legislativo Movimiento de
Regeneración Nacional MORENA

